REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CINCUENTA Y DOS PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO

Bogotá, D.C., diciembre dieciocho de dos mil quince

Concluida la audiencia pública de juzgamiento sin que se evidencie causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el Despacho a dictar la sentencia que en derecho corresponde dentro de la causa adelantada en contra de los ex miembros del Ejército Nacional Coronel® EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, Mayor® OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ y Sargentos® LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, acusados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables del delito de desaparición forzada agravada, en concurso homogéneo y sucesivo.

HECHOS

Los acontecimientos materia de juzgamiento en este proceso han sido ampliamente difundidos y conocidos en el ámbito nacional como “la toma” y la consecuente “retoma” del Palacio de Justicia,

correspondiendo a este Despacho ocuparse de examinar la real ocurrencia de la conducta punible de desaparición forzada de personas que se dice se dio en desarrollo de la acción desplegada por la fuerza pública para la recuperación de la edificación, en tanto a ello se limita la acusación formalmente dictada por la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, aun cuando no es en sí mismo materia de este pronunciamiento, consideramos valioso, para un mejor entendimiento de lo sucedido, contextualizar el momento histórico en medio del cual se desarrollaron los hechos.

El Movimiento Subversivo 19 de Abril (M-19), surgido como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales de 1970, se caracterizó por llevar a cabo acciones de alto impacto publicitario como el hurto de la espada del Libertador en 1974; el hurto en 1978 de alrededor de 5.000 armas guardadas en el Cantón Norte, de la Brigada de Institutos Militares, para ese entonces comandada por quien para cuando se dieron los acontecimientos del Palacio de Justicia era el Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe; la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980; el apoderamiento en 1981 de un avión de la empresa Aeropesca que se utilizó para el transporte de armas y que acuatizó en el río Orteguaza; el secuestro en 1982 de un avión de la empresa Aerotal que fue desviado a La Habana (Cuba); el ataque al Batallón de Ingenieros Cisneros Número 8 de la III División del Ejército, con sede en Armenia, ocurrido el 19 de octubre de 1985, y cuatro días después el atentado contra el general Rafael Samudio Molina, a la sazón comandante del Ejército.

En 1982 asumió la Presidencia el Dr. Belisario Betancur y en su gobierno se intentó cambiar la forma de ver y de enfrentar el

conflicto armado colombiano, acudiendo al diálogo como principal herramienta para buscar la paz.

Sin embargo, el cambio de actitud (política) del gobierno chocó abierta y frontalmente con el modo de operar y la mentalidad de las Fuerzas Militares que seguían atadas a los lineamientos y políticas del gobierno anterior, caracterizado por el tratamiento militar de los movimientos subversivos, la vigencia del Estado de Sitio, el Estatuto de Seguridad y la doctrina de seguridad nacional, lo cual creó una creciente resistencia del estamento militar hacia la nueva política gubernamental.

El 24 de agosto de 1984 se firmó entre el gobierno nacional y el M-19 un pacto de cese al fuego, renovado el 7 de enero de 1985; tregua marcada por constantes violaciones tanto de parte del M-19 como de las Fuerzas Armadas, hasta cuando el M-19, el 20 de junio de 1985, declaró definitivamente rota la tregua, con lo que el movimiento subversivo volvió a la clandestinidad y se intensificaron los enfrentamientos con el Ejército, produciéndose en uno de ellos la baja del jefe máximo del M-19 en ese momento, Iván Marino Ospina, arreciando el M-19 sus acciones violentas.

En ese contexto, el 6 de noviembre de 1985 el grupo insurgente, con su Comando “Iván Marino Ospina”, en el marco de la autodenominada operación “Antonio Nariño por los Derechos Humanos”, incursionó violentamente, a sangre y fuego, en el Palacio de Justicia, ubicado al costado norte de la Plaza de Bolívar en el corazón de la capital colombiana.

La facción guerrillera, comandada por LUIS FRANCISCO OTERO CIFUENTES, inició el asalto el 6 de noviembre de 1985 a las 11:25 a.m., aproximadamente, cuando veintiocho (28) subversivos

irrumpieron a la fuerza en vehículos por el sótano del edificio, mientras adentro los esperaban siete guerrilleros que previamente habían ingresado vestidos de civil, aparentando ser abogados, estudiantes o visitantes de la sede judicial, quedando afuera otro grupo de insurgentes que no alcanzó a llegar a tiempo.

Los primeros resultados de la violenta incursión fueron la muerte a manos del grupo de asaltantes del administrador del edificio y de dos celadores, y la toma como rehenes de cientos de personas, entre quienes se encontraban Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Magistrados Auxiliares de ambas Corporaciones, abogados litigantes, visitantes y trabajadores del recinto judicial.

Según lo anunciaron, el M-19 pretendía juzgar al Presidente de la República, Dr. BELISARIO BETANCUR CUARTAS, toda vez que consideraban había traicionado el acuerdo de cese al fuego y de diálogo firmado por ambas partes en agosto de 1984 y renovado en enero de 1985.

La Fuerza Pública respondió con una operación de recuperación de la edificación, activando el llamado “Plan Tricolor/83”, bajo el mando operativo del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, comandante en Jefe de la Brigada de Institutos Militares – BIM, actual Brigada XIII, quien tomó el control de la operación con el apoyo de unidades de la Escuela de Caballería, de Artillería, del Batallón de Policía Militar N° 1, del Grupo Mecanizado Rincón Quiñónez, del Batallón Guardia Presidencial y las agregaciones de la BR-1 y BR-7. También tomaron parte activa unidades de la Policía Nacional con el Grupo de Operaciones Especiales, GOES, y el Curso de Operaciones Especiales, COPES, además de miembros

del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de la DIJIN y el F2.

Se ordenó a las unidades operacionales la recuperación del edificio y el rescate de los rehenes, tarea principalmente desarrollada por las unidades de la Escuela de Caballería y la Escuela de Artillería, quienes ingresaron a la edificación con tanques de combate derribando su puerta principal, mientras por la azotea incursionaron fuerzas especiales de la Policía Nacional.

Como consecuencia del cruento combate desatado entre las fuerzas regulares del Estado y el grupo insurgente, tanto en la operación de asalto como en la de recuperación o "retoma" del Palacio de Justicia, noventa y cuatro (94) personas perdieron la vida, entre ellas once (11) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres (3) Magistrados Auxiliares y diecinueve (19) Jueces; varios miembros de la fuerza pública, trabajadores del Palacio de Justicia, conductores y escoltas de los Magistrados y la casi totalidad del grupo de asaltantes. La sede del Palacio de Justicia quedó destruida a causa de las detonaciones de cargas explosivas utilizadas en el operativo, de impactos de disparos realizados con cañones de tanque de combate y de un voraz incendio desatado desde el primer día y que destruyó parcialmente la edificación calcinando en su interior un gran número de cuerpos.

La operación de recuperación o "Retoma" del Palacio logró la evacuación o el rescate de más de doscientas cuarenta y cuatro (244) personas, la mayoría de las cuales fueron trasladadas a la "Casa del Florero" para su identificación, control y registro.

Las labores de inteligencia estuvieron a cargo del B-2 de la Brigada, al mando del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, asistido por personal subalterno de su unidad y por efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE, del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, COICI, y por personal del DAS, del F-2 y de la DIJIN de la Policía Nacional, quienes tomaron posición en el "puesto de mando avanzado" que se instaló desde el mismo 6 de noviembre en la "Casa Museo del 20 de julio" o "Casa del Florero", ubicada en la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar, teniendo como misión primordial recibir a las personas que eran sacadas del Palacio de Justicia con el fin de identificarlas, establecer la razón de su presencia en el lugar o su eventual participación en los hechos y, en general, producir inteligencia de combate.

Una vez las personas evacuadas de la sede judicial eran trasladadas a la Casa del Florero, se realizaba su registro en diferentes listados en los que se consignaba su información personal y se trataba de verificar su plena identidad.

Algunas personas fueron separadas y conducidas al segundo piso de la casa museo, catalogadas como sospechosos, "*s*", y/o "*especiales*". Allí, a través de entrevistas y/o interrogatorios se buscaba establecer su identidad y/o su eventual vinculación al grupo guerrillero. Luego de realizar ciertas verificaciones, unos fueron regresados al grupo de liberados y otros fueron conducidos a instalaciones militares y de policía donde continuaron las indagaciones para esclarecer su posible participación en el asalto.

El 7 de noviembre, aproximadamente a las 2:30 p.m., los enfrentamientos cesaron, cuando después de 27 horas de combate

las tropas oficiales lograron el control del edificio y la neutralización total de los subversivos, reduciendo el último reducto de resistencia guerrillera al mando de ANDRES ALMARALES, que al interior de uno de los baños del costado noroccidental de la edificación mantuvo hasta el final a un grupo de cerca de setenta rehenes.

Al final de la operación doce (12) personas que se encontraban en el Palacio de Justicia no aparecieron ni vivas ni muertas. Ese grupo de personas está conformado por ocho (8) trabajadores del restaurante-cafetería que operaba en el primer piso del complejo judicial (CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, DAVID SUSPES CELIS, ANA ROSA CASTIBLANCO y LUZ MARY PORTELA), tres (3) visitantes ocasionales (NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ANZOLA DE LANAO y LUCY AMPARO OVIEDO) y una guerrillera que participó en la toma (IRMA FRANCO PINEDA).

Algunos familiares del personal del restaurante-cafetería han manifestado reconocer en video la salida de varios de ellos, cuando se observa la conducción de liberados a la Casa del Florero, y refirieron haber recibido llamadas donde se les manifestó que sus familiares se encontraban en guarniciones militares, lugares a los cuales se desplazaron y en donde se les informó que en dichas instalaciones no habían rehenes y/o retenidos del Palacio de Justicia.

En cuanto a IRMA FRANCO, varios testigos, rehenes liberados e incluso un soldado, señalaron haberla visto viva por última vez en el segundo piso de la Casa del Florero luego de terminada la operación de recuperación del Palacio de Justicia.

De las mencionadas doce personas solo se ha podido establecer el paradero de ANA ROSA CASTIBLANCO, de acuerdo al estudio de tipificación molecular de ADN realizado a los restos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur por el Laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General de la Nación del 17 de Julio de 2001, y sus restos fueron finalmente entregados a sus familiares el 2 de Noviembre de 2001.

Por los anteriores hechos fueron vinculados mediante indagatoria, entre otras personas, los siguientes ex miembros de las Fuerzas Militares:

Coronel® EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, identificado con la c. de c. N° 17.066.822, nacido el 25 de diciembre de 1941 en Bogotá; hijo de Juan Nepomuceno Sánchez Maldonado (fallecido) y Ana María Rubiano Rubiano. Casado con Leyla Santamaría Sánchez con quien tiene tres hijas. Del primer matrimonio, del cual enviudó, tuvo una hija.

Mayor® OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, identificado con la c. de c. N° 19.378.273 de Bogotá. Nació el 8 de abril de 1957 en San José de Pare (Boyacá). Hijo de Sigifredo Vásquez González y Beatriz Rodríguez de Vásquez. Divorciado de Gloria Elisa Romero Rodríguez con quien tuvo dos hijos: William Noel y Diana Carolina Vásquez Romero. Actualmente casado con Sandra Patricia López López.

Sargento® ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, identificado con la c. de c. N° 9.652.162 de Yopal. Nació el 20 de julio de 1954 en Vega (Cauca). Hijo de Alejandro Jiménez y Florentina Gómez (ambos

fallecidos). Casado con María Versaida Anacona Palechor, con quien tiene cinco hijos: Sonia Janeth, Leider Albeiro, Yezid, Sergio y Felipe Jiménez Anacona.

Sargento® LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, identificado con la c. de c. N° 9.517.438 de Sogamoso. Natural de Arbeláez (Cundinamarca) donde nació el 17 de febrero de 1952. Hijo de Luis Ignacio Nieto (fallecido) y María Belén Velandia. Casado con Odalilda Correa León y padre de dos hijos matrimoniales: María Fernanda y Luis Ferney Nieto Correa, y de un hijo extramatrimonial.

Sargento® FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, identificado con la c. de c. N° 12.958.536 de Pasto. Nacido el 27 de mayo de 1950 en Piendamo (Cauca). Hijo de Germán Causaya (fallecido). Casado con Maria Argidia Ortega, con quien tiene cuatro hijos: Jhon Jairo, Sandra, Claudia y Elkin Causaya Ortega.

RESUMEN DE LA ACTUACION PROCESAL

El 29 de junio de 2001 los señores ENRIQUE RODRÍGUEZ, ELSA MARÍA OSORIO, BERNARDO BELTRÁN, HÉCTOR JAIME BELTRÁN, CARMEN CELIS y MARÍA DEL PILAR NAVARRETE presentaron ante la Fiscalía General de la Nación "*Denuncia por la desaparición de los empleados de la cafetería del palacio de justicia […] con el fin de solicitarle abrir investigación de carácter judicial para establecer tanto los autores materiales como intelectuales de la desaparición de nuestros familiares*"[1].

[1] C.O. 1 Instrucción Fl 1.

El 22 de agosto de 2001 se ordenó la apertura de Investigación Previa[2], bajo el radicado N° 54.315.

El 16 de agosto de 2006 la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió apertura formal de instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria al Cr. ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO[3], y el 4 de octubre siguiente dispuso la vinculación mediante indagatoria del My. ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y de los sargentos FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ[4].

El 14 de noviembre de 2006 la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la Situación Jurídica del Cr. ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO imponiendo en su contra medida de aseguramiento por el punible de desaparición forzada[5].

El 8 de febrero de 2007 se resolvió la situación jurídica del My. ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y del sargento LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, imponiéndoles medida de aseguramiento por el punible de desaparición forzada[6].

El 28 de mayo de 2007 la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de los sargentos FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ con medida de aseguramiento por los punibles de secuestro agravado en concurso con desaparición forzada[7].

---

[2] C.O. 1 Instrucción Fl 142.
[3] C.O. 6 Instrucción Fl 91.
[4] C.O. 7ª Instrucción Fl 1.
[5] C.O. 8 Instrucción Fl 221 y ss.
[6] C.O. 11 Instrucción Fls 1 y ss y 106 y ss, respectivamente.
[7] C.O. 16 Instrucción Fl 57 y ss.

El 7 de junio de 2007 la Fiscalía complementa la resolución de situación jurídica del Cr. ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, el My. ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y del sargento LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA por el punible de secuestro agravado[8].

El 18 de julio de 2007 la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso el cierre parcial de la investigación respecto del Cr. ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, el My. ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ y los sargentos LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ[9].

El 28 de septiembre de 2007 la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO como presunto coautor de los punibles de secuestro agravado y desaparición forzada agravada en las personas de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNADO BELTRAN HERNANDEZ, DAVID SUSPES CELIS, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA DE LEON, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ANZOLA DE LANAO, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES y LUCY AMPARO OVIEDO, y acusó a OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ como presuntos coautores de los punibles de secuestro agravado y desaparición forzada en las mismas personas al igual que en la persona de IRMA FRANCO PINEDA[10].

---

[8] C.O. 17 Instrucción Fl 101 y ss.
[9] C.O. 19 Instrucción Fl 97.
[10] C.O. 22 y 22 A.

El 25 de marzo de 2008 el Despacho del Vicefiscal General de la Nación desató los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de acusación, resolviendo "*Confirmar la resolución de Acusación formulada contra Edilberto Sánchez Rubiano, Oscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardin Causaya Peña, con la aclaración de que únicamente se procede por el delito de desaparición forzada agravada, respecto de las personas desaparecidas que se relacionan en la resolución de acusación*"[11].

El 9 de junio de 2008 el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Bogotá avocó conocimiento de la acusación y dispuso el traslado de que trata el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal[12]; sin embargo, el 26 de agosto del mismo año, al advertir falta de competencia, dispuso la remisión del proceso ante los Juzgados Penales del Circuito, por competencia residual, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, numeral 1°, literal b, de la ley 600 de 2000[13].

El 1° de octubre de 2008, bajo radicado 2008-00710, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá aceptó el conflicto de competencia planteado por el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado, y en consecuencia remitió el proceso a la Corte Suprema de Justicia[14], Corporación que el 8 de octubre siguiente, con ponencia del Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, resolvió la colisión declarando que la competencia para conocer del presente asunto correspondía al Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá[15].

---

[11] C.O. Segunda Instancia Resolución de Acusación Fl 219 y ss.
[12] C.O. 1 Causa Fl 20.
[13] C.O. 1 Causa Fl 258 y ss.
[14] C.O. 2 Causa Fl 12 y ss.
[15] C.O. Colisión Competencia Fl 43 y ss.

El 16 de octubre de 2008 el Juzgado 51 Penal del Circuito avocó conocimiento de la causa y fijó como fechas para adelantar audiencia preparatoria los días 9 y 10 de diciembre de 2008[16].

Concluida la audiencia preparatoria se fijó el 2 de marzo de 2009 para el inicio de la audiencia pública[17], adelantándose ese acto procesal hasta cuando el 27 de mayo de 2011 el Juzgado 51 Penal del Circuito se declaró impedido para continuar conociendo del juicio contra los aquí procesados y en consecuencia remitió el proceso al Juzgado 55 Penal del Circuito[18].

El 7 de junio de 2011 este Despacho no aceptó el impedimento manifestado por el Juzgado 51 Penal del Circuito y en consecuencia remitió las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá[19], quien mediante providencia del 11 de julio de 2011, con ponencia del Dr. Hermes Darío Lara Acuña, resolvió declarar fundado el impedimento de la señora Juez 51 Penal del Circuito y en consecuencia asignó el conocimiento del proceso al Juzgado 55 Penal del Circuito[20].

El 19 de julio de 2011 este Despacho avocó conocimiento del proceso y fijó fecha para la continuación de la audiencia pública[21], la cual se adelantó hasta su finalización el 25 de febrero de 2013, entrando el expediente al Despacho para emitir el fallo que en derecho corresponde.

---

[16] C.O. 2 Causa Fl 59.
[17] C.O. 3 Causa Fl 1.
[18] C.O 8 Causa Fl 114 y ss.
[19] C.O. 9 Causa Fl 28 y ss.
[20] C.O. Impedimento Tribunal Fl 18 y ss.
[21] C.O. 9 Causa Fl 44.

LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

Como se anticipó, de conformidad con las resoluciones de primera y segunda instancia, dictadas el 28 de septiembre de 2007 por la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el 25 de marzo de 2008 por la Oficina del Vicefiscal Generala de la Nación, la acusación formal en contra de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO es la de ser presunto coautor de los punibles de desaparición forzada, agravada por tener autoridad, de conformidad con los artículos 165 y 166 de la ley 599 del 2000, en las personas de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNADO BELTRAN HERNANDEZ, DAVID SUSPES CELIS, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA DE LEON, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ANZOLA DE LANAO, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES y LUCY AMPARO OVIEDO; y la acusación en contra de OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ es por ser presuntos coautores de los mismos delitos, respecto de las mismas personas y adicionalmente respecto de IRMA FRANCO PINEDA.

La Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia en su resolución de acusación inicia señalando algunos antecedentes que asegura sirven para contextualizar la conducta desplegada por los investigados, haciendo referencia a algunas acciones desplegadas por el M-19. Precisa la jurisdicción y competencia de la Brigada XIII para asumir el control de la operación de restablecimiento del orden público en la capital de la República a raíz de la toma guerrillera, y hace referencia al conocimiento que de los planes de toma del Palacio de Justicia tenía el Ejército, concluyendo que "*la estructura y el*

manejo que se le dio a la toma del M-19 obedecía a la dinámica misma que se venía desarrollando desde tiempo atrás y que estaba soportada sobre el 'plan de operaciones No. 002' de inteligencia contra el autodenominado M-19 […]."[22].

Señala que CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, DAVID SUSPES CELIS y LUZ MARY PORTELA eran empleados del Restaurante – Cafetería y por lo tanto, tratándose de un día laboral normal, todos se encontraban en el Palacio de Justicia en momentos en que el M-19 incursionó en la edificación; afirmación que sustenta con el dicho de diferentes testigos que así lo señalan.

En cuanto a las tres visitantes ocasionales, para la Fiscalía se establece su ingreso y permanencia en las instalaciones del Palacio de Justicia a través de la prueba testimonial e indiciaria que así lo determina.

En el caso de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, dice, se logra determinar su presencia en el lugar toda vez que, como proveedora de pasteles del restaurante – cafetería, ingresa al edificio hacia las 11:00 de la mañana, mientras su medio hermana la espera en el carro que deja parqueado sobre la carrera séptima.

De GLORIA ANZOLA DE LANAO hace referencia que se encontró en el sótano del Palacio de Justicia el vehículo de su propiedad, con la silla en la que transportaba a su hijo, a quien había dejado en la mañana en el jardín.

[22] C.O. 22 Instrucción Fl 12 – 13.

Y en cuanto a LUCY AMPARO OVIEDO, asegura que luego de asistir a una entrevista de trabajo con un Magistrado del Tribunal Superior decidió visitar a la secretaria del Dr. REYES ECHANDIA, siendo esa la razón por la que ingresó al Palacio de Justicia.

En lo referente a IRMA FRANCO PINEDA, integrante del M-19, indica que ingresó a las instalaciones del Palacio de Justicia, específicamente a la secretaria del Consejo de Estado, con el objeto de participar en la toma de la edificación y la retención de Magistrados y empleados.

Establecido el ingreso y permanencia de las referidas personas en el Palacio de Justicia durante la incursión guerrillera y el operativo de recuperación del edificio desarrollado por la fuerza pública, manifiesta que el personal liberado era direccionado a la Casa del Florero, lugar del cual tenía el control el Coronel SANCHEZ RUBIANO en desarrollo de sus funciones de inteligencia.

El ente acusador encuentra que CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN e IRMA FRANCO PINEDA salieron vivos del Palacio de Justicia en horas de la tarde del 7 de noviembre de 1985 y son conducidos por soldados. Al primero lo mantienen fuertemente asido de sus brazos, a la segunda la llevan a hombros y a la tercera la custodian permanentemente en el segundo piso de la Casa Museo del 20 de Julio, tal y como lo atestigua, entre otros, el soldado EDGAR MORENO[23].

Frente a las desapariciones de GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ y DAVID SUSPEZ CELIS indica que, como quiera al igual que en los casos de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y CRISTINA DEL

[23] C.O. 22 Instrucción Fl 120 -121.

PILAR GUARIN existe prueba de que eran empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, que el día 6 de noviembre de 1985 fueron a laborar como de costumbre, hicieron parte del grupo de rehenes liberados en la operación final llevada a cabo en el baño del tercer piso del Palacio de Justicia, fueron sacados con dirección a la Casa del Florero y hasta la fecha no se sabe cuál es su paradero[24].

De otra parte señala que si estuvieron GLORIA ANZOLA DE LANAO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, LUZ MARY PORTELA, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES y LUCY AMPARO OVIEDO en el Palacio de Justicia y no aparecieron sus cadáveres, tuvieron que haber salido con vida, indicando "*[…] Que las personas que no murieron en Palacio de Justicia, fueron llevadas al Museo y desaparecidas*"[25].

Señala la Fiscalía acusadora que de acuerdo con la prueba recaudad se puede afirmar que*:*

"*a. los señores mencionados, realizaron una operación de control en el Museo del 20 de Julio, tendiente a establecer, "tiempo, terreno y enemigo", en cumplimiento de la labor de inteligencia que adelantaba el B-2 del cual era jefe el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, quien se apoyó en sus hombres VASQUEZ RODRIGUEZ, NIETO VELANDIA, CAUSAYA PEÑA, RUBAY JIMENEZ, para que cumplieran la misión asignada que era "colaborar en la recepción e identificación del personal liberado de Palacio de Justicia".*
b. que el control operativo implicaba el manejo centralizado en cabeza del Ejército.
c. que el sitio donde eran llevadas las personas que salieron vivas, era la Casa del Museo del Florero.
d. que CARLOS RODRIGUEZ VERA (administrador de la cafetería), CRISTINA DEL PILAR GUARIN (cajera temporal) e IRMA FRANCO PINEDA salieron vivos

[24] C.O 22A Instrucción Fl 107 (Resolución de Acusación pág. 346).
[25] C.O. 22A Instrucción Fl 115 – 116 (Resolución de Acusación pág. 354 - 355).

de Palacio de Justicia, ingresaron a la Casa del Museo del 20 de Julio y hoy no aparecen.

e. que puede construirse probatoriamente que fueron sometidos al mismo interrogatorio al que se le sometió a los demás liberados, pero además, que fueron especialmente manejados por lo menos CARLOS RODRIGUEZ e IRMA FRANCO PINEDA, tanto así que ameritó un escolta especial.

f. que no aparecen vivos ni muertos. Que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en los sitios donde se han practicado las prospecciones y de acuerdo con toda la prueba que se ha recaudado en las exhumaciones:

La conducta que se le imputa a los aquí vinculados, no es el haber pertenecido al B-2, como lo afirma uno de los defensores, sino precisamente haber tenido contacto con las personas desaparecidas, que ingresaron a la Casa del Museo del Florero que permanecieron en las instalaciones de la misma. Y el contacto era consecuencia directa de la función que tenían que cumplir. […] no quedan dudas a la Fiscalía que EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, el CAPITAN VASQUEZ RODRIGUEZ, NIETO VELANDIA, CAUSAYA PEÑA Y RUBAY GOMEZ, estaban allí para cumplir la labor que les encomendó su Jefe directo el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, y este a su vez, para cumplir con la función asignada por el Plan Tricolor, la orden impartida por el General ARIAS CABRALES, respecto al cumplimiento de las labores de inteligencia, que no son otras que encontrar las presuntas personas que pudieron haber participado en la toma del Palacio de Justicia, […]

(….)

Si se observa el documento firmado por EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO sobre la forma de interrogar al "enemigo" para el año de 1985, indicaba claramente cuál era el procedimiento. Se puede decir que es una verdadera división del trabajo, pues a unos les corresponde la parte operativa, y a otros la parte de inteligencia, […] El grupo de inteligencia y en particular los integrantes del B-2, tenían asignado desde el comienzo una función perfectamente establecida. Identificar al "s" "enemigo" "subversivo", para obtener información que procesada, permitiera controlar, conjurar o evitar más acciones terroristas o desmantelar la existente y al grupo que estaba actuando."[26].

Así las cosas, el Despacho Fiscal afirma en su acusación que EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO era el Comandante del B-2 de la

[26] C.O. 22 Instrucción Fl 140 – 142.

Brigada Trece, tenía el control y mando en la Casa del Florero y como tal ordenó a sus subalternos, en particular al entonces capitán OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ y a los sargentos LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, ANTONIO RUBAY JIMENES y FERNEY CAUSAYA, encargarse del manejo de los rehenes liberados de Palacio.

Para la Fiscalía es razonable concluir que el B-2, que se encargaba de la obtención, procesamiento y análisis de la información, de la realización de interrogatorios, debía obtener la información que podían entregar los sobrevivientes, rescatados y liberados de Palacio de Justicia, y quienes se encontraban cumpliendo esa misión eran principalmente el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y sus hombres[27].

De manera, refiere en conclusión que "*Las personas que están siendo llamadas a responder en juicio, fueron las que según señala la prueba, realizaron el manejo del personal que salió vivo del Palacio de Justicia; son las personas que tenían que asumir con su división de trabajo los aspectos inherentes a la labor de inteligencia; las que necesariamente "controlaban" al personal liberado y las que sin discusión recibieron a las personas que hoy son objeto de investigación de "desaparición" y de las que no se tiene noticia alguna. Pero además, las que sabían los nombres y conocían las personas que estaban siendo objeto de investigación, y que fueron trasladadas para verificación. De manera voluntaria y conociendo la antijuridicidad de sus actos, ordenaron, dispusieron y realizaron actividades sobre estas personas, que finalmente llevaron a su desaparición*"[28].

[27] C.O. 22A Instrucción Fl 92 – 93 y 95 (Resolución de Acusación págs. 331- 332 y 334).
[28] C.O. 22A Instrucción Fl 117 y 118. (Resolución de Acusación págs. 356 y 357).

ALEGATOS EN AUDIENCIA PÚBLICA

En su intervención final en audiencia pública, el **Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia**, haciendo un recuento detallado de los hechos que originaron la presente actuación, indica que las apreciaciones consignadas por la Fiscalía en la acusación siguen siendo válidas en este momento procesal, toda vez que la situación probatoria no varió sustancialmente durante la fase del juicio, solicitando se profiera sentencia condenatoria en contra de todos y cada uno de los procesados por el delito de desaparición forzada agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, por el cual fueron acusados como coautores, teniendo en cuenta que el análisis de las pruebas en conjunto así permiten sostenerlo.

A su juicio existen pruebas de la materialidad del hecho constitutivo de la desaparición forzada de las once personas que sobrevivieron a la toma del Palacio de Justicia y a la operación militar de recuperación del mismo.

Indica que está fehacientemente demostrada la presencia y presanidad de IRMA FRANCO PINEDA el día de los hechos, así como su salida con vida y su conducción a la Casa del Florero, en donde fue separada del resto de los liberados, llevada al segundo piso, donde fue sometida a un agresivo interrogatorio, así como su posterior salida hacia una dependencia militar o policial, donde se perdió su rastro.

Aduce que en punto a lo anterior se cuenta, entre otras, con la declaración del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia HERNANDO TAPIAS ROCHA, quien manifestó que la vio en el

baño en el cual se encontraba, conociendo su nombre posteriormente.

IRMA FRANCO fue custodiada e identificada por el entonces soldado ÉDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA, quien sobre dicha situación declaró ante la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que además de que estuvo encargado de su custodia durante una hora el día 7 de noviembre de 1985, obtuvo de ella un número telefónico al cual se comunicó para informar acerca de su salida con vida del Palacio de Justicia.

De la misma manera se contó con la declaración que rindió el hermano de la desaparecida ante la Fiscalía, quien dio a conocer sobre una conversación en donde IRMA FRANCO PINEDA le hablaba con nostalgia de una actividad que podía acarrearle molestias, que luego interpretó como su participación en los hechos del Palacio de Justicia; igualmente manifestó que los periodistas de la cadena Todelar le dieron referencias sobre la salida de su hermana con vida del Palacio de Justicia, afirmando que posteriormente la vio en una fila de personas que fue conducida de la puerta del Palacio de Justicia hacia la carrera séptima, la cual se encontraba vestida con una falda escocesa a cuadros y unas botas.

Indicó que el actual Brigadier General en retiro FÉLIX GALLARDO ANGARITA le relató las circunstancias en que su hermana había salido con vida del Palacio de Justicia y que la vio detenida en el segundo piso de la Casa del Florero.

La Fiscalía considera que la prueba testimonial ubica a IRMA FRANCO no sólo en el baño del Palacio de Justicia donde estaban los rehenes, sino también cuando fue conducida con vida a la Casa del Florero y llevada al segundo piso, donde fue sometida a

interrogatorio luego de identificársele como militante del M-19, pues además se contó con la declaración de HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO, citador de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para la época de los hechos, quien también fue conducido al segundo piso bajo la sospecha de ser un guerrillero, aun cuando finalmente fue dejado en libertad cuando tales sospechas se disiparon.

Refiere que el testigo BERNARDO GARZÓN GARZÓN, suboficial que formaba parte de las redes de inteligencia del COICI, indicó que IRMA FRANCO PINEDA fue sometida a un violento interrogatorio, producto del cual se obtuvo información que permitió ubicar y allanar la casa donde se preparó la toma del Palacio de Justicia.

De otra parte, se cuenta con la comunicación sostenida entre EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, jefe del B-2, y LUIS CARLOS SADOVNIK, comandante de la Brigada XIII, en la cual se refieren en clave a FRANCO PINEDA señalando que "*ya fue reconocida por todo el personal. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco*…", expresión que, como lo determinó el perito de la Policía Nacional, se refiere a la desaparición de esa persona.

Resalta que obran declaraciones que afirman que IRMA FRANCO salió de la Casa del Florero custodiada por militares en las horas de la noche del 7 de noviembre de 1985, en un vehículo tipo campero ubicado sobre la puerta principal del inmueble, sin que al día de hoy se conozca su paradero.

En cuanto a la presencia, presanidad y hechos relativos a la desaparición de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, comienza por indicar cómo el padre de éste dio a conocer que su "*… hijo trabajaba*

en esos días en la cafetería. El no trabajaba, estaba estudiando derecho en la Universidad Libre y quiero agregarle y estaba atendiendo la cafetería por cuanto la esposa había tenido la niña hacía cerca de un mes y por eso tuvo él que irse a atender directamente la cafetería. Quien atendía la cafetería con anterioridad era Cecilia Cabrera, esposa de mi hijo, pero a ella le llegó en los primeros días del mes de octubre su primogénita y por eso no podía asistir a la cafetería y la estaba atendiendo mi hijo y por esa misma razón trabajaba allí Cristina del Pilar Guarín, una doctora que acababa de graduarse y fue a remplazar a Cecilia mientras estaba ella en su licencia de maternidad".

Refiere que se cuenta con un video donde se registra el momento de la salida por la puerta principal del Palacio de Justicia de RODRÍGUEZ VERA, escoltado por miembros del Ejército Nacional con rumbo hacia la Casa del Florero, a quien se le enfoca de cuerpo entero por varios segundos, permitiendo apreciar claramente sus rasgos característicos para lograr una identificación positiva.

Precisa que de la declaración de CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, esposa de RODRÍGUEZ VERA, se logró determinar la presencia del mismo en el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, así como su salida con vida hacia la Casa del Florero.

Aunado a lo anterior se obtuvo el reconocimiento del mismo por su padre, esposa y hermano saliendo del Palacio de Justicia, así como el testimonio rendido por ÉDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, Suboficial del Ejército Nacional, quien se refirió a una persona cuyas características corresponden a las de RODRÍGUEZ VERA, que fue conducido a la Escuela de Caballería, sometida a torturas y en medio de los tormentos se identificó como trabajador de la cafetería.

En cuanto a CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, cajera temporal de la cafetería en reemplazo de CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, precisa que su presencia en las instalaciones

del Palacio de Justicia está demostrada con la declaración rendida por su hermano y su progenitora, quienes afirmaron que efectivamente laboraba en ese lugar y que el día de los hechos iba *"vestida como una falda como a cuadros con unos colores más bien claritos, una chaqueta clara y una blusa clara, como color guayaba, por encima que le acompañaba su vestuario. Llevaba un paraguas que posteriormente se encontró dentro de los escombros del Palacio".*

Indica que además de lo anterior se contó con declaraciones de ELSA MARÍA OSORIO DE ACOSTA y su padre JOSÉ MARÍA GUARÍN ORTÍZ, así como los reconocimientos a través de videos, el acta de reconocimiento a través de exhibición de fotos remitidas por los diferentes periódicos y revistas de circulación Nacional que hacen parte de los anexos del proceso.

Si bien MARÍA NELFY DÍAZ DE VALENCIA, quien para la época de los hechos laboraba como ascensorista en el Palacio de Justicia, manifestó en varias oportunidades ser quien aparece reconocida en el video como CRISTINA DEL PILAR GUARÍN, lo cual ratificó en la etapa del juicio, la Fiscalía le otorga mayor credibilidad a las declaraciones de los familiares de CRISTINA DEL PILAR, en primer lugar porque su hermano la reconoce por la indumentaria, en razón a que se la habían traído de Europa, situación que comporta un hecho de especial connotación para determinadas personas, y en segundo lugar porque del registro fílmico se puede advertir que la mujer cargada en hombros por un soldado lleva una falda de color rojo con habano, y MARÍA NELFI afirmó que la falda era café con cuadros habanitos.

De BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, indica que en declaración su tía OMAIRA BELTRÁN DE BOHÓRQUEZ manifestó que habló con él por última

vez "*el 5 de octubre de 1985*" pero que al día siguiente, antes de irse a trabajar, pasó a su casa observando que ese día iba con "*un pantalón de pana abanito y una camisa a cuadritos también abanita"* (sic).

Igualmente su hermana, SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ, rindió declaración en la que manifestó que su señora madre recibió una llamada en la que se le informaba que se le había visto salir sobre las 3 de la tarde el día de los hechos del Palacio de Justicia, y que ella escuchó cuando YAMID AMAT lo registró por su nombre como uno de los evacuados del Palacio de Justicia.

Además de lo anterior indica que BERNARDO BELTRÁN fue reconocido por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA en declaración del 16 de agosto del 2007, en la que manifestó que "*… reconozco a BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ (el despacho deja constancia que la declarante afirma que lo ve hasta 00:35:44). Lo veo cogido por el brazo derecho por un soldado, se desplaza por sus propios medios, lo identifico porque él trabajó el mismo tiempo que llevábamos nosotros trabajando en la Cafetería, de 4 a 5 meses...Lo más característico que tengo de él es su forma de andar y de correr…lo veo con un pantalón oscuro, una camisa de cuello para corbata, me parece que llevara un buso de cuello redondo, no podría identificar claramente si es un buso o una camisa, negra no es, verde tampoco me parece, es un color como gris…No identifico más facciones".*

A su vez SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ, en declaración del 26 de agosto de 2007, lo identificó de la siguiente manera: "*… Ese es Bernardo, Bernardo. Se le ven los pantalones a BERNARDO BELTRÁN HERNANDEZ en el segmento 00:35:38. la toma sigue hasta el punto 00:35:41 y la señora Beltrán Hernández afirma: Digo que veo a una persona de la contextura física de mi hermano y que al ver la toma del tronco hacia arriba por la forma de su pelo, la "carrera" es decir como se peinaba, las entradas, lo lleva un soldado tomado por el brazo derecho, el soldado va armado, BERNARDO va con pantalón negro, una camisa blanca que se ve como grisácea, no se ve más, no se le ven los pies…*".

Respecto de HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, aduce que su padre HÉCTOR JAIME BELTRÁN, en declaración rendida el 20 de febrero del 2006, indicó que supo que a su hijo lo tenían en la Casa del Florero, que recorrió los hospitales, el anfiteatro de Medicina Legal pero nunca lo volvió a ver, señaló que un año después de ocurrida la toma recibía llamadas en donde los insultaban para que cesaran en las labores de búsqueda de su hijo.

Igualmente MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, empleado del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en declaración del 10 de abril del 2006 manifestó que permaneció los dos días frente a la Casa del Florero preguntando por la suerte de su hermano, y que posteriormente comenzaron a hacer llamadas a la casa indicándole que iban a dejar un casete "*en donde había constancia o estaba la voz de mi hermano en el interrogatorio que le estaban haciendo los del ejército*", y sostuvo que en uno de los baños del Palacio de Justicia halló el documento de identificación de su hermano.

En cuanto a GLORIA STELLA LIZARAZO aduce que ella laboraba en el autoservicio de la cafetería del Palacio de Justicia, esposa de LUIS CARLOS OSPINA, quien afirmó que fue a laborar el día de los hechos y que la misma fue sacada con vida del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero.

Así mismo CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA en declaración del 16 de agosto del 2007 hizo el siguiente reconocimiento: *"En el punto 00:35:20 veo a GLORIA ESTELA LIZARAZO quien se dedicaba en la cafetería al Autoservicio, a ella la veo con una camiseta negra de manga corta, falda color verde o Gris, falda hasta las rodillas, cabello negro, tez blanca, cabello corto, como peinada por la mitad, gorda y gorda de piernas, descalza y*

me parece que lleva medias veladas. También puedo decir que las identifico, porque compartí con estas personas, a Gloria, como cuatro o cinco meses. Ella trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde el mismo horario en el que yo estaba trabajando, entonces por eso tengo la certeza de que es Gloria, me acuerdo de su cuerpo que era la característica esencial, gordita caderona y CRISTINA también".

De DAVID SUSPEZ CELIS, chef de la cafetería del Palacio de Justicia, precisa que igualmente fue reconocido saliendo del lugar de los hechos por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, en declaración rendida el 16 de agosto del 2007, refiriéndose a que "*… Este se me parece un poco a David Suspez Celis, mientras que frente a los demás no tengo duda, lo veo que lleva camisa de color camel y pantalón color camel, lleva corbata café, lleva un reloj en la muñeca izquierda, me parece que sale fuertemente vigilado por los soldados, con los dos brazos en alto y parece ser que lo suben a un vehículo como rojo, porque abren la puerta en ese momento. La secuencia aparece desde el punto indicado, se pierde por unos instantes la imagen y se recobra en 00:36:21 y se pierde en la pantalla en 00:36:27. David Suspez era el chef, se caracterizaba porque siempre vestía elegante, y también sale en el mismo grupo de rehenes".*

Indica que en este juicio declaró HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO, citador de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esa época, quien se reconoció en un video en la imagen de quien se decía correspondía a DAVID SUSPEZ, por lo que argumenta que si bien es cierto la falta de nitidez de la imagen impide concluir de manera segura si esa persona corresponde a DAVID SUSPEZ o a HÉCTOR CORREA TAMAYO, también lo es que por vía indiciaria es posible establecer en todo caso que SUSPEZ CELIS salió con vida del Palacio de Justicia y se encuentra entre los desaparecidos, situación que igualmente se predica de otros desaparecidos que no fueron reconocidos con certeza en las imágenes de video saliendo del Palacio de Justicia.

Respecto de LUZ MARY PORTELA LEÓN, empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, precisa que salió a trabajar desde las seis de la mañana el día de los hechos, como lo aseguró su madre ROSALBINA LEÓN en declaración del 25 de noviembre de 1985, indicando que ese día usó "*… un vestido de fondo azul con rayas negras anchas pero como allí tenía uno que cambiarse para trabajar…un delantal color habano que es como hasta la cintura y amarrado por detrás con un cordón…*".

Respecto de la presencia, presanidad y hechos relativos a la desaparición de las visitantes ocasionales GLORIA ANZOLA DE LANAO, LUCY AMPARO OVIEDO y NORMA CONSTANZA ESGUERRA, aduce que GLORIA ANZOLA DE LANAO dejaba su automóvil en el sótano de la edificación, en donde laboraba como Consejera de Estado su tía AYDEE ANZOLA LINARES.

Refiere que RÓMULO ANZOLA LINARES, padre de GLORIA, según declaración rendida el 5 de febrero de 1986 ante la Procuraduría General de la Nación, relató que ese día su hija acudió a dicho lugar porque allí fue encontrado con posterioridad su vehículo, sin que hubieran podido dar con su paradero.

Por su parte su hermano OSCAR ENRIQUE señaló que haciendo averiguaciones sobre el paradero de GLORIA obtuvo como respuesta por parte de personal militar que ella no hacía parte de las personas detenidas y que, como todos habían sido dejados en libertad, sólo podría existir la posibilidad de que hubiera muerto o hubiera sido llevada como rehén por "*los guerrilleros de la cafetería, que lograron escapar*". Así mismo afirmó tener certeza de que su hermana no se encontraba dentro de los cadáveres calcinados.

De NORMA CONSTANZA ESGUERRA refiere que era la que proveía de pasteles la cafetería del Palacio de Justicia, y en declaración del 16 de enero de 1986 su progenitora, ELVIRA FORERO DE ESGUERRA, dio a conocer que con posterioridad a los hechos del Palacio de Justicia estuvo en instalaciones de la Brigada, hablando con un comandante que se sorprendió cuando escuchó el nombre de su hija, precisando que ese día "*iba vestida de buso (sic) vino tinto, una chaqueta americana en gamuza color caqui o amarillo quemado, acolchonada, bluyines, zapatos vinotinto con las medias del mismo color, se fue así de abrigada porque esta con fiebre, ella llevaba un peinado con el pelo cortico y recortado, ella entregó su pastelería al Senado y de ahí salió para el Palacio de Justicia a las once y media de la mañana, ella dejaba de último esa cafetería porque ahí salía directamente a la calle 19 a coger la carrera 30 hacia la casa*". Adujo que al salir de la unidad un soldado le comentó que allí había personas detenidas.

En cuanto a LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, dice, se sabe que estuvo en el lugar de los hechos por cuanto asistió a una entrevista de trabajo con RAÚL TRUJILLO; igualmente su hermana, DAMARIS OVIEDO BONILLA, declaró el 25 de julio de 2006 en donde suministró datos morfológicos, entre ellos que como señal particular tenía "*ojitos de pescado*" alrededor de sus ojos, "*es decir, como pedazos de "teticas" que le salen a uno*", cabello largo, castaño oscuro, casi negro, se maquillaba bastante los labios que eran semigruesos y había sido operada de rinitis. Sostuvo que el día de los hechos recibió una llamada en donde se le informaba que su hermana permanecía retenida en la Casa del Florero y que en la tarde la entregaban.

Precisa que existen pruebas suficientes con las que se logra establecer la materialidad del hecho constitutivo de la desaparición forzada, pues la prueba testimonial como documental permite establecer que IRMA FRANCO PINEDA y CARLOS AUGUSTO

RODRÍGUEZ, así como CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN HERNADEZ, GLORIA STELLA LIZARAZO y DAVID SUSPEZ CELIS salieron con vida del Palacio de Justicia.

Aduce que está demostrado que en las operaciones de recuperación se estableció un cerco o cordón de protección para conducir a los liberados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, pues de ello da cuenta no solo la prueba testimonial sino las numerosas imágenes incorporadas a la actuación, donde se aprecia que algunas personas hoy desaparecidas salieron con vida de la edificación y son llevadas al museo.

Respecto de HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, LUZ MARY PORTELA LEÓN, GLORIA ANZOLA DE LANAO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA y LUCY AMPARO OVIEDO, indica que igualmente está probado que el día de la toma del Palacio de Justicia acudieron efectivamente a la sede judicial y dado que sus cuerpos no aparecen entre los calcinados, ni en la fosa común, se infiere que corrieron la misma suerte de aquéllos, esto es, que sobrevivieron a la toma, quedaron en poder de la fuerza pública, fueron conducidos a la Casa del Florero y posteriormente desaparecieron.

Refiere que si bien es cierto no existen reconocimientos ni testimonios que afirmen haber visto salir con vida del Palacio de Justicia a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, LUZ MARY PORTELA LEÓN, GLORIA ANZOLA DE LANAO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA y LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, y que se planteen contradicciones respecto de los reconocimientos en imágenes de DAVID SUSPEZ CELIS y CRISTINA DEL PILAR GUARÍN, también lo es que la presencia de todos ellos en ese lugar

el día de los hechos está acreditada, sumado a que no se encontraron sus cuerpos calcinados en la fosa común.

Insiste en que las declaraciones de los familiares, fotografías, documentos escaneados, así como experticias realizadas sobre los cadáveres encontrados en la fosa común, permiten concluir que ningún dato cierto se conoce sobre el paradero de estas personas, como no sea el que estaban dentro del Palacio de Justicia cuando se produjo la toma por el grupo subversivo, pues aunque algunas personas salieron por el sótano de la edificación, como se indicó en la acusación, está probado que éstas igualmente fueron conducidas a la Casa del Florero, en donde se ejercía el control sobre los rehenes liberados por parte del B-2, como ocurrió con MARÍA DEL CARMEN CASTRO, WILLINTON IVAN PUERTAS y ARISTOBULO ROZO.

De ahí que los testimonios y diversos videos acopiados muestran que desde los primeros momentos la Fuerza Pública tomó el control sobre las carreras séptima y octava, colindantes con el Palacio de Justicia, de manera que los liberados siempre estuvieron bajo su tutela.

Remarca que de las necropsias practicadas en su momento por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los cuerpos de las víctimas fatales del Palacio de Justicia, obtenidas por la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia durante la instrucción, no surge la posibilidad que correspondan a las personas cuyo paradero aún es desconocido.

Además de lo anterior, con los análisis de tipificación molecular y cotejo de ADN realizados por la División de Criminalística del CTI sobre los restos óseos y estructuras dentales no identificados,

exhumados de la fosa común del cementerio del sur de Bogotá, y las muestras obtenidas de familiares de los desaparecidos, todos los cuales arrojaron resultados de exclusión, se contribuye a afianzar la postura de la Fiscalía en el sentido de que los desaparecidos no corresponden a quienes fueron sepultados en la fosa común.

Igualmente, el testimonio del Doctor CARLOS VALDEZ, Director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien en su condición de Jefe de la División Criminalística del CTI dirigió el proceso de exhumación de cadáveres sepultados en la fosa común del cementerio del sur, explicó en detalle el riguroso procedimiento realizado durante los años 1996 a 1998, que incluyó desde la identificación y aseguramiento del área de la excavación hasta la recuperación e individualización de los restos óseos y la toma de muestras para la práctica de estudios genéticos, trabajo desarrollado por un equipo científico interdisciplinario conformado por arqueólogos, antropólogos, médicos, odontólogos y genetistas, entre otros profesionales, y contó con la asesoría de la Universidad Nacional, Universidad del país Vasco y con la auditoria del equipo Argentino de antropología forense.

A partir de 27 restos recuperados e individualizados se hizo la selección de muestras para estudios de ADN. Para el año 2001 ya se había identificado entre los restos humanos el cuerpo de ANA ROSA CASTIBLANCO, auxiliar del chef de la cafetería del Palacio de Justicia. En la actuación está claro el procedimiento adelantado por el Laboratorio de Genética del CTI en febrero del año 2010, complementario a las actividades realizadas por el mismo laboratorio en 1999, cuyos resultados reposan también dentro de este proceso. El manejo y cadena de custodia que se le dio a las muestras objeto de estudio, todas aptas para cotejo; los procedimientos técnicos empleados para evitar su contaminación y

la comparación que se realizó con los perfiles existentes de los familiares de los desaparecidos y las conclusiones obtenidas por el Grupo Forense.

A partir de lo anterior, para la Fiscalía es dable inferir que los restos óseos objeto de estudio no corresponden a ninguno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pues al realizar una valoración sobre las exhumaciones y las pruebas de ADN no se ha hallado evidencia que puedan corresponder a las personas desaparecidas.

Las pruebas arrimadas al plenario conducen a demostrar la materialidad del hecho constitutivo del delito de desaparición forzada, por cuanto se encuentra establecido que las víctimas, es decir, las 11 personas enunciadas, salieron con vida del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, bajo el control de la fuerza pública, y después se perdió su rastro.

Respecto de la responsabilidad de los procesados, señala que del material probatorio se establece como primera medida que eran miembros del B-2 de la Brigada XIII del Ejército Nacional, organismo de inteligencia militar, quienes participaron en la recuperación del Palacio de Justicia con la específica misión de recibir e identificar a los rehenes liberados que eran conducidos a la Casa del Florero y tenían asignada una labor de inteligencia consistente en identificar al “*s*”, enemigo subversivo para obtener información que permitiera controlar y evitar más acciones terroristas y desmantelar al grupo que estaba actuando.

En demostración de lo señalado indica que obran las versiones suministradas por los ex oficiales EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, quienes después de

la toma del Palacio, por instrucciones que recibieron de sus superiores jerárquicos, hicieron presencia en el lugar, mas no para desarrollar actividades militares propiamente dichas, sino para el manejo de los rehenes liberados en la Casa del Florero. Declaraciones que aparecen corroboradas por el Coronel retirado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, quien afirmó que los días de la operación el B-2 "*manejaba el esquema de la Casa del Florero*" y que esa fue una instrucción impartida por el comandante de la Brigada, General ARIAS CABRALES, al jefe del B-2, Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, y se trataba de una misión legítima de inteligencia, pero en su desarrollo se cometieron reprobables excesos.

En segundo lugar precisa que, de acuerdo con su especialidad, los procesados adelantaron en la Casa del Florero labores de individualización e interrogatorio a los rehenes recatados, pues es un hecho cierto e irrebatible que los miembros del B-2 de la Brigada XIII tenían a su cargo el ejercicio de funciones relacionadas con el acopio y análisis de información de inteligencia, tal como se extrae de sus propias versiones, esto es, que EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO era el oficial de inteligencia al mando de ese grupo; ÓSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ pertenecían a esa sección y se desempeñaban como analistas de los blancos FARC, M-19, ELN y EPL, respectivamente.

Refiere que como prueba de la presencia de estos activos del B-2 en la Casa del Florero el día de los acontecimientos, así como la realización de actividades, obra el oficio 0027 del 27 de enero de 1986 que el comandante del B-2 de la Brigada XIII, Teniente Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, remitió al Juez 30 de Instrucción Criminal Ambulante, en el cual se relacionó a los

procesados como el personal que colaboró en las actividades de recepción e identificación de las personas rescatadas del Palacio de Justicia en la Casa del Florero los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Información que no ofrece duda alguna en razón a que se suministró una vez acaecieron los hechos, pues no resultaría lógico que quien estuvo al mando de esa operación incluyera personal ajeno a tales actividades o a quienes realizaron tareas de soporte meramente logístico. Aunado a ello, dicho oficio es un documento público que goza de presunción de autenticidad y fue EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO quien lo suscribió, sin que en momento alguno haya desconocido su contenido.

Aduce que si bien es cierto algunos de los procesados niegan haber realizado las actividades que se les atribuye, pretendiendo excusarse en que estuvieron en el lugar cumpliendo únicamente labores de apoyo logístico, como transporte de radios, comestibles y otro tipo de elementos, es difícil creer que personal militar dedicado al análisis de información de inteligencia, que podía ser de utilidad en la operación militar, hubiera sido desperdiciado en labores como las mencionadas.

Para la Fiscalía no existe duda que el objetivo principal y preponderante que perseguían las autoridades militares al disponer el traslado de los rehenes liberados al cuartel o puesto de mando en la Casa del Florero, no era otro distinto a obtener datos que le posibilitaran a la Fuerza Pública conocer al enemigo, sus posiciones, sus jefes, los proyectos, las pretensiones, sus capacidades, la actitud que tenían, cantidad de retenidos y toda la información sobre el lugar de los hechos, la cual debía transmitirse a sus superiores.

En tercer lugar, aduce que existe prueba de que algunas personas catalogadas como "*sospechosas*" fueron ubicadas en el segundo piso de la Casa del Florero, algunas conducidas a la Brigada XIII y a otras dependencias militares y de policía, en donde se les sometió a agresivos interrogatorios bajo la sindicación de pertenecer al grupo del M-19 que se tomó violentamente el Palacio de Justicia.

La actuación revela la intervención directa del B-2 de la Brigada XIII en el manejo de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, lo cual se funda no sólo en el oficio 027 de 1986, sino también en la prueba documental obrante en la actuación, esto es, el oficio 0640 del 7 de noviembre de 1985, por medio del cual el capitán MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS OBANDO puso a disposición de la XI Estación de Policía unos retenidos en las operaciones que se desplegaron el día anterior en las inmediaciones del Palacio.

En su sentir, se obtuvo cabal demostración de que rehenes liberados fueron sometidos a un procedimiento especial que implicó su segregación del grueso de personas, primero mediante su desplazamiento al segundo piso de la Casa del Florero y después ordenando su conducción a la Brigada XIII y a otras dependencias militares y de policía, en procura de lograr establecer su individualización, antecedentes y eventual participación en la toma.

Exalta que en este sentido resulta elocuente lo ocurrido con la guerrillera del M-19, IRMA FRANCO PINEDA, de quien se ha señalado salió con vida del Palacio de Justicia y fue conducida por miembros de la Fuerza Pública a la Casa del Florero y por la fuerza se le sometió a interrogatorios con el fin de extraer datos, hechos y circunstancias sobre actividades guerrilleras adelantadas y previstas por el M-19, para luego conducirla en un vehículo militar a un destino que hasta ahora se desconoce.

En cuarto lugar, refiere que existe prueba de que en la Brigada XIII se practicaron interrogatorios a presuntos miembros de los grupos subversivos, puesto que el proceso arroja claridad en el sentido de que algunas personas que salieron con vida del Palacio de Justicia fueron conducidas a la Escuela de Caballería de la Brigada XIII, sin que exista registro fehaciente de su ingreso y salida de las instalaciones, pero sí de que fueron víctimas de interrogatorios forzados.

Así surge del testimonio de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, suboficial del Ejército Nacional que participó en las operaciones militares llevadas a cabo con ocasión de la toma del Palacio de Justicia, quien dio cuenta de las torturas a las cuales fueron sometidas cinco personas rescatadas del Palacio de Justicia en las instalaciones de la Escuela de Caballería, entre las cuales se menciona un hombre cuyas características corresponden a las de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ, quien en medio de los tormentos se identificó como empleado de la cafetería del Palacio de Justicia.

Señala que se ha puesto en duda la autenticidad y la validez de este testimonio, practicado por la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la Escuela de Caballería, teniendo en cuenta que en el acta de la diligencia aparece como si la declaración hubiera sido rendida por EDGAR VILLARREAL y no por EDGAR VILLAMIZAR; el acta no tiene fecha; la fiscal se limitó a formularle una pregunta y la firma allí impuesta por el testigo en apariencia no corresponde a la que utiliza en sus actos, y por ello el representante del Ministerio Público ha cuestionado la real presencia de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL en la práctica de la referida declaración, al punto de sostener que el testigo fue suplantado.

VILLAMIZAR ESPINEL acudió ante la Procuraduría General de la Nación el 23 de mayo de 2011 y rindió un testimonio negando haber rendido la referida declaración en la Escuela de Caballería y haber participado en los hechos relacionados con la recuperación del Palacio de Justicia. Similar posición asumió al declarar dentro de esta causa.

No obstante, precisa el señor Fiscal, el estudio grafológico de abril 10 de 2012 obtuvo como resultado que la firma manuscrita dubitada, que en original se observa en la declaración que rinde EDGAR VILLARREAL ante el Despacho Cuarto de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del Radicado P19755 Palacio de Justicia, a folio 251, presentó características gráficas que se identifican con las muestras de referencia indubitadas que de ÉDGAR VILLAMIZAR ESPINEL se aportaron, es decir, son uniprocedentes manuscrituralmente.

Refiere que en nuevo informe complementario y aclaratorio del anterior, de julio 31 de 2012, se advirtió como una constante que el amanuense introduce variantes de forma en los signos que componen sus distintas firmas, sin embargo se encontraron también constantes de forma, dinámica, disposición, inclinación, así como movimientos empleados por VILLAMIZAR ESPINEL en la elaboración de las grafías, lo cual condujo al experto a reafirmar su conclusión en el sentido que entre la firma de duda y las muestras patrones existen concordancias que permiten afirmar la uniprocedencia manuscritural.

Considera que si bien en el trámite de la objeción al anterior dictamen se practicó por Medicina Legal el dictamen 280355 del 17 de noviembre de 2012, que arrojó como resultado que “*Dada la*

construcción de la firma de duda obrante en parte inferior, lado izquierdo de la cuarta hoja de 'DECLARACION QUE RINDE EL SEÑOR EDGAR VILLARREAL, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 13452268 DE CÚCUTA', folio 251 y la condición del material indubitado remitido para estudio, la confrontación de una (dubitada) y otras (patrón), no permiten emitir un pronunciamiento técnicamente fundamentado (…)", la apreciación de este dictamen en conjunto con el rendido por el CTI permite encontrar similitudes porque en los dos se advierte que el testigo ÉDGAR VILLAMIZAR ESPINEL presenta distintas maneras de ejecutar las firmas, lo cual se encuentra acreditado en el proceso con distintos documentos suscritos por él y en ambos dictámenes se identifican las variantes que se advierten en las distintas firmas.

Advierte que aunque la conclusión del dictamen de Medicina Legal no coincidió con el rendido por el grafólogo del CTI, ello encuentra explicación en que el primero no tuvo en cuenta para su estudio la totalidad de documentos indubitados de carácter extraprocesal que el funcionario del CTI analizó para realizar la experticia y que identificó como parecidas a la firma de duda, como ocurre con el que contiene de manera clara una firma original de EDGAR VILLAMIZAR, correspondiente a un ejemplar de su declaración rendida en agosto de 2007 ante la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, aportado a la indagación seguida contra la doctora ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ, el cual contiene una de las muestras más sobresalientes y representativas de todo el conjunto documental.

El estudio pericial realizado por el grafólogo del CTI demostró, contrariamente a lo señalado por la perito de Medicina Legal, que sí era posible emitir un pronunciamiento técnicamente fundamentado acerca de la uniprocedencia manuscritural entre la firma dubitada y

las muestras de referencia indubitadas que de ÉDGAR VILLAMIZAR se aportaron, lo que se refuerza con la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada durante el presente juicio, donde VILLAMIZAR ESPINEL fue reconocido por el investigador del CTI PABLO ENRIQUE VÁSQUEZ como quien estuvo presente en la diligencia de declaración llevada a cabo en la Escuela de Caballería en agosto de 2007.

Frente a las irregularidades que se predican de dicho testimonio precisa que fue practicado válidamente por la instructora en desarrollo de una diligencia de inspección. Aunque al testigo solo se le formuló una pregunta ello se explica por lo avanzado de la hora en que se tomó la diligencia y porque con base en sus informaciones se haría una prospección en el lugar. Además en el acta consta que se dispuso continuar la declaración en una nueva oportunidad, lo cual no fue posible porque VILLAMIZAR ESPINEL no pudo ubicarse nuevamente.

Señala que el yerro cometido al identificar al declarante como EDGAR VILLARREAL no impide determinar que quien rindió la declaración fue el mismo que compareció en este juicio a negarlo, faltando con ello a la verdad, pese a que ante la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte en la Escuela de Caballería se hizo presente voluntariamente.

Considera que dicho testimonio puede ser apreciado por el Despacho y valorado en toda su dimensión probatoria, puesto que resulta relevante para demostrar la forma como varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, entre quienes se menciona a alguien que por su descripción física corresponde a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, empleado de la cafetería que figura entre los desaparecidos, fueron trasladadas a la Escuela de

Caballería. Aunque la declaración rendida en agosto de 2007 es incompleta, muestra detalles de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos; como también la participación de personas en los mismos, el rol que cumplieron y la suerte que corrieron.

En su sentir, dicho relato resulta creíble puesto que declaró espontáneamente a pesar que los hechos narrados lo comprometían penalmente, si se tiene en cuenta que se ubica en la Escuela de Caballería prestando guardia en actitud pasiva mientras sus compañeros sometían a torturas a algunos de los rehenes liberados del Palacio de Justicia.

A su juicio, el acervo probatorio conduce a demostrar la responsabilidad de los procesados como coautores del concurso de delitos de desaparición forzada agravada que se les atribuye, por cuanto en su condición de miembros del B-2 participaron activa y conscientemente en el proceso de individualización, registro e interrogatorio que condujo a la privación de la libertad de las personas mencionadas como desaparecidas y su consiguiente sustracción del amparo de la ley.

Resume lo dicho en que a lo largo del proceso se demostró que los procesados eran miembros de uno de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares, el B-2, al que de antemano se había asignado la individualización e interrogatorio de los miembros de grupos subversivos en caso de un ataque a los centros del poder civil, como lo es el Palacio de Justicia. Por ello concluye que su presencia en la Casa del Florero obedeció precisamente a ese propósito, esto es, establecer cuáles de las personas rescatadas podían hacer parte o ser colaboradoras del M-19, resultando ilógico considerar que los miembros de inteligencia militar se dedicaran a

labores logísticas en el lugar y al tiempo en el que se adelantaba la identificación de los liberados.

Todos los liberados fueron conducidos a la Casa del Florero donde se realizaba la labor de identificación. Quienes no fueron entregados a los organismos humanitarios y respecto de los cuales se desconoce su paradero, fueron considerados sospechosos por los miembros del Ejército que adelantaban las referidas tareas, hallándose por tanto bajo custodia de las Fuerzas Militares.

Reitera que existen pruebas de que algunos de los liberados recibieron un tratamiento diferente de los otros y que algunos fueron trasladados a la sede de la Brigada XIII, al Charry Solano y a la Dijin, lugares donde se les sometió a interrogatorios, infiriéndose que las personas desaparecidas siguieron el mismo trayecto sin que de ellas después se obtuviera noticia alguna.

Señala que el procedimiento de interrogatorio violento implicaba riesgos para la salud y la vida de los interrogados, por lo que había un móvil para desaparecerlos. Tal procedimiento irregular constituía la antesala de la desaparición forzada de los previamente identificados como sospechosos en la Casa del Florero, lo cual se realizó con la intervención de los miembros del B-2 hoy procesados, quienes tenían bajo su control dicho lugar, especialmente destinado para el manejo de los rehenes liberados del Palacio de Justicia.

Afirma que en el caso de IRMA FRANCO PINEDA está demostrado hasta la saciedad lo ocurrido cuando se encontraba bajo el control del B-2 en la Casa del Florero y lo acontecido a otras personas que fueron conducidas para ser interrogadas bajo tortura al batallón Charry Solano, sede del organismo de inteligencia, para después ser dejadas en libertad como EDUARDO MATSON y YOLANDA

SANTODOMINGO, lo cual indica que una situación similar se presentó con los demás liberados del Palacio de Justicia, es decir, que en los procedimientos previos a su desaparición participaron miembros del B-2, puesto que este organismo, al mando del Teniente Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, tuvo bajo su coordinación y control cuanto ocurría con los rehenes en la Casa del Florero. Así mismo fue quien coordinó el recibo, identificación, registro y entrevista de los rehenes liberados que fueron trasladados a la Casa del Florero y los funcionarios del B-2 tenían que ejecutar la "*Fase II*" del procedimiento de recuperación del Palacio de Justicia, consistente en interrogar a los subversivos capturados, conocer "*al enemigo*", de acuerdo con el Plan Tricolor.

Por último, indica que en esta clase de coautoría impera el principio de la imputación recíproca, como lo ha señalado la jurisprudencia, pues cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores es extensible a todos los demás sin perjuicio de que las otras contribuciones individualmente consideradas sean o no por sí solas constitutivas de delito, por lo que para la Fiscalía es claro que cada uno de los procesados cumplió un rol importante en el proceso de ejecución de la conducta, cuyo resultado final fue la desaparición forzada de las 11 personas aquí mencionadas.

La existencia del acuerdo común, propio de la coautoría, surge de las circunstancias precedentes y concomitantes al hecho. Las primeras relacionadas con la función asignada al B-2 en lo atinente al proceso de identificación e interrogatorio de los presuntos miembros del grupo subversivo M-19 que se tomaron por asalto el Palacio de Justicia, en cuyo desarrollo hubo excesos; y las segundas, con el control que ejerció este organismo en la Casa del

Florero, en cuanto se refiere a la identificación y registro de rehenes liberados.

Las normas de Derecho Internacional Humanitario, y en particular el artículo 3° Común a los Convenios de Ginebra, impone a los miembros de la fuerza pública tratar humanamente, en toda circunstancia, a las personas que se encuentren bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que hubieran participado o no en las hostilidades.

IRMA FRANCO PINEDA, guerrillera del M-19 que participó en la toma del Palacio de Justicia, sobrevivió a estos hechos y al ser puesta fuera de combate quedó bajo el control de la fuerza pública y por tanto se infiere que los miembros del B-2 aquí procesados no cumplieron con dicha obligación, al intervenir o consentir en la práctica de un procedimiento violento que culminó con la desaparición forzada de la subversiva.

Con ello no sólo incurrieron en la conducta punible que hoy se les reprocha, sino también desconocieron la obligación de respetar normas imperativas de derecho internacional humanitario.

De esta manera solicita se profiera sentencia condenatoria en contra del Teniente Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, el Mayor OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, el Sargento Viceprimero LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, el Sargento Viceprimero FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA y el Sargento Segundo ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ, todos en retiro, por el delito de desaparición forzada agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, por el cual fueron acusados como coautores.

En relación con el Teniente Coronel en retiro EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO no se solicita condena en cuanto se refiere a la desaparición forzada de IRMA FRANCO PINEDA, pues por este delito no se le acusó dado que la Justicia Penal Militar profirió en relación con el mismo una decisión de cesación de procedimiento que se encuentra ejecutoriada.

El **Representante del Ministerio Público**, aun cuando estuvo presente en la audiencia de juzgamiento, no realizó intervención de fondo, en razón a que, por renuncia al cargo de quien venía ejerciendo dicha representación, el designado en su reemplazo no alcanzó a estudiar el voluminoso expediente, por lo que se declara atento al fallo que en derecho se dicte para ejercer los derechos y deberes que en defensa del interés público le competen.

En representación de la **PARTE CIVIL** actuaron para la alegación final en la audiencia pública los Doctores Jorge Eliecer Molano Rodríguez, Germán Iván Romero Sánchez y Angie Lizeth Fernández Gómez, integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes dividiéndose la exposición realizan un relato de las razones por las cuales consideran que el B-2 tenía conocimiento de la inminente toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, pese a lo cual no se hizo nada para proteger a quienes se encontraban en la sede judicial.

Dan cuenta de las acciones de inteligencia que respecto al M-19 había realizado el Ejército desde antes de la toma, en donde se recopiló información que les permitía conocer de manera detallada información sobre su estructura, el mando que actuó en la operación del Palacio de Justicia, funcionamiento y posibles operaciones del grupo guerrillero del M-19, como lo fue el atentado contra el Comandante del Ejército Rafael Samudio Molina.

Plantean el conocimiento que la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional tenía sobre la posible incursión del M-19 al Palacio de Justicia, pese a lo cual, aseguran, las autoridades estatales decidieron retirar de sus instalaciones la seguridad un día antes de la toma.

Hacen referencia al empleo de la tortura para la época de los hechos, haciendo un recuento histórico de los años setenta y ochenta, cuando se encontraba en plena vigencia el llamado Estatuto de Seguridad, promulgado por el ex presidente Julio César Turbay, en donde eran frecuentes los seguimientos, las retenciones sin orden de autoridad competente, los interrogatorios ilegales e incluso las torturas físicas y psicológicas como métodos empleados por algunos miembros del Ejército para alcanzar resultados, actuando con el conocimiento de altos mandos militares y autoridades civiles de la época.

Sobre este aspecto se destaca la declaración rendida por ANTONIO JOSÉ NAVARRO WOLFF el día 6 de marzo de 2007, en la que afirmó que para en el año 1980, época en la que se encontraba vigente el llamado Estatuto de Seguridad que permitía las detenciones administrativas antes de que hubiera una decisión judicial, fue detenido por miembros de la Policía Nacional y puesto a disposición del Ejército Nacional, quien lo mantuvo retenido por 19 días en la Escuela de Caballería de Usaquén y por una noche en la Unidad Militar de Tolemaida, sometiéndolo a interrogatorios, en los que utilizaron técnicas poco ortodoxas, sufriendo maltrato físico y psicológico, sin que durante esos 19 días tuviera contacto con persona distinta a sus interrogadores, y solo después de transcurrido este tiempo fue conducido ante la autoridad judicial competente.

Así mismo se indica que en la vista pública se estableció que las personas "*especialistas*" encargadas de los interrogatorios tenían la potestad de torturar a quienes eran clasificados como sospechosos; torturas que, afirman, fueron evidenciadas en las grabaciones obtenidas durante la toma de las conversaciones sostenidas entre el comando de la Brigada y el comandante de inteligencia.

Señalan que no hay duda en cuanto a que en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada, pues está probado que ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Afirman que a través de reconocimientos de los familiares, de pruebas documentales, de testimonios y de tomas fílmicas se logró determinar que CARLOS RODRÍGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARÍN, IRMA FRANCO, BERNARDO BELTRÁN, GLORIA ESTELA LISARAZO, DAVID SUSPES CELIS y LUCY AMPARO OVIEDO salieron con vida del Palacio de Justicia y fueron llevados, como todos los rehenes liberados, a la Casa Museo del 20 de Julio o Casa Museo del Florero.

Frente a las otras personas desaparecidas, esto es, GLORIA ANZOLA DE LANAO, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, NORMA CONSTANZA ESGUERRA y LUZ MARY PORTELA LEÓN, consideran que aún cuando no existe evidencia fílmica o testimonios de sobrevivientes que pudieran indicar la hora de su salida del Palacio de Justicia, las circunstancias en que lo hicieron o su desplazamiento durante la toma, en la medida en que a la fecha se desconoce su paradero es evidente que se consideran desaparecidas, hasta tanto se determine su destino.

IRMA FRANCO PINEDA, si bien no ha sido reconocida en los videos por sus familiares, múltiples testimonios afirman haberla visto durante la ocupación en el baño entre el segundo y el tercer piso y saliendo del Palacio camuflada en el grupo de mujeres rehenes, junto con CLARA HELENA ENCISO, la única guerrillera que sobrevivió a la retoma, siendo conducida junto con los rehenes a la Casa del Florero y desde allí transportada por personal militar en un vehículo, en horas de la noche, y posteriormente fue reconocida por algunas personas en el batallón Charry Solano, y desde ese entonces no se tiene conocimiento sobre su paradero.

Al respecto obra la declaración de su hermano JORGE FRANCO, quien relató que recibió una llamada del entonces Mayor de la Policía FÉLIX GALLARDO, amigo de la familia, quien le informó haber visto a su hermana ilesa en el segundo piso de la Casa del Florero y le advirtió que debían prepararse para el proceso jurídico.

Igual se cuenta con el testimonio de FRANCISCO CESAR DE LA CRUZ LARA, persona que vio a IRMA FRANCO PINEDA en la Csa del Museo y relató cómo salió aproximadamente a las 7:30 u 8:00 de la noche bajo fuertes medidas de seguridad.

Agregan que además de los registros visuales y los testimonios de reconocimiento, existen otros elementos probatorios que confirman la salida con vida de las personas desaparecidas y hacen presumir su posterior trasladado a instalaciones militares, citando sobre este último aspecto el testimonio de GARZÓN GARZÓN; las diversas declaraciones que dieron cuenta de la existencia de llamadas a las residencias de los familiares de los desaparecidos los días siguientes a la toma, informando o advirtiendo de la presencia de sus familiares en el Cantón Norte, y la existencia de un casette que

contiene el testimonio de unos soldados que participaron en la operación retoma y dieron cuenta de la presencia de personas que se encontraban en el Palacio de Justicia y estarían siendo sometidas a tortura en la mencionada instalación militar.

Considera que dentro de este contexto es relevante hacer mención a la declaración de CESAR SÁNCHEZ CUESTA, funcionario de la Alcaldía de Bogotá para la época de los hechos, quien, aducen, reconoció a CARLOS RODRÍGUEZ ingresando a la Casa del Florero el 7 de noviembre, y al día siguiente, en compañía del padre y de la esposa del señor RODRÍGUEZ, se desplazaron al Cantón Norte para indagar por la suerte del mencionado, sin obtener resultados positivos.

Para la representación de las víctimas, atendiendo las pruebas testimoniales obrantes en el expediente, se pudo establecer que varias de las personas que salieron del Palacio fueron conducidas al Cantón Norte o al Batallón Charry Solano después de su ingreso como "*especiales*" al Museo y de no registrarse en la lista de personas liberadas, existiendo casos en donde, además de la detención arbitraria, fueron sometidos a malos tratos e incluso a torturas, previo a ser puestas en libertad por la mediación de algún conocido y con influencia para interceder a su favor ante las autoridades militares, citando como muestra los casos de YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON y el grupo de conductores entre quienes se encontraba el señor CANTOR que trabajaba con el entonces Consejero JAIME BETANCUR.

Realizan un recuento de las once personas desaparecidas, de quienes se afirma se encontraban en las instalaciones del Palacio de Justicia y salieron vivas de allí, sin que exista razón para afirmar que fueron alcanzadas por la conflagración.

Frente a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA se hace mención a las declaraciones de WILLINGTON IVÁN PUERTAS CASTRO, rendida el 25 de febrero de 2010, quien afirmó verlo en la cafetería el día 6 de noviembre de 1985; de CESAR SÁNCHEZ CUESTA, empleado de la Alcaldía de Bogotá para la época de los hechos, quien informó que CARLOS estaba en el Palacio de Justicia y que lo vio salir con vida el 7 de noviembre de 1985, siendo además confirmada su presencia en el Palacio de Justicia para el día 6 de noviembre por el señor ENRIQUE RODRÍGUEZ en su declaración del 29 de agosto de 2001.

Además de estas declaraciones hacen alusión a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 24 de julio de 2007, mediante la cual se declaró la responsabilidad del Estado por la desaparición de esta persona.

Resaltan que en los reconocimientos realizados por CECILIA CABRERA GUERRA y RENE GUARÍN CORTÉS fue identificado CARLOS mientras abandonaba vivo el Palacio de Justicia el día 7 de noviembre de 1985 con el grupo de rehenes que fueron liberados cerca de las 2:00 p.m.

Respecto de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS se afirma que fue identificada saliendo con vida antes de la salida de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ, mediante reconocimientos realizados a través de videos por su madre, por su padre y por su hermano RENÉ GUARÍN; sin que se haya podido comprobar por medios técnicos que la imagen registrada en esos reconocimientos sea MARIA NELFI DIAZ, quien afirma ser la persona reconocida como CRISTINA DEL PILAR GUARÍN.

Por su parte, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ fue reconocido en registros fílmicos, saliendo con vida del Palacio de Justicia, por su hermana SANDRA BELTRÁN, por su padre BERNARDO BELTRÁN MONROY y por CECILIA SATURIA CABRERA, quien lo conocía porque compartido con él en la cafetería. Además por su tía OMAIRA BOHÓRQUEZ, quien en diligencia rendida ante la Fiscalía 4ª delegada ante la Corte Suprema de Justicia afirmó ver a su sobrino en un noticiero el 6 de noviembre de 1985.

En cuanto a GLORIA ESTELA LIZARAZO, según las declaraciones rendidas por CECILIA CABRERA GUERRA, su jefe, y por su esposo, LUIS CARLOS OSPINA, se pudo demostrar que también estuvo en el Palacio de Justicia, que trabajaba allí, siendo reconocida por sus familiares y amigos en el video obtenido en inspección judicial al apartamento del coronel ® LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, saliendo del Palacio en hombros de un soldado detrás de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS.

De DAVID SUSPES CELIS también existen reconocimientos y pese a la declaración rendida por HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO, quien afirma ser la persona que se presenta en las imágenes como SUSPES CELIS, sus familiares han señalado desde el año 1985 que éste salió con vida del Palacio de Justicia.

En cuanto a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, quien se desempeñaba como mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, se dice que su preexistencia y presencia en el lugar fue reconocida por su padre, HÉCTOR JAIME BELTRÁN, por su hermano, MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, y por la señora CECILIA SATURIA CABRERA, quien era su jefe en la cafetería.

LUZ MARY PORTELA LEÓN estuvo en Palacio de Justicia remplazando a su madre, quien era la persona encargada de lavar la loza de la cafetería, y nunca apareció

Respecto a LUCY AMPARO OVIEDO se indica que la prueba demuestra que tenía una cita en el Palacio de Justicia, hacia las once de la mañana, porque estaba buscando trabajo, y fue vista en video por una de sus hermanas el día 7 de noviembre al finalizar la toma, saliendo por la puerta principal del Palacio de Justicia.

La presencia de GLORIA ANZOLA DE LANAO en la sede judicial se prueba tanto por las declaraciones como por el hecho de que el carro que parqueaba en el parqueadero de su tía, AYDE ANZOLA, quien era magistrada para ese entonces, apareció en el lugar acostumbrado, y "*los documentos del sótano del Palacio de Justicia, dan fe de que GLORIA ANZOLA salió ese día a las 7 – 8 de la mañana, como era costumbre y llegó al Palacio de Justicia, parqueó su vehículo y no volvió a aparecer*".

Aunado a ello obra declaración de su hermana MARÍA CONSUELO ANZOLA, quien señaló que el 11 de noviembre hubo una llamada anónima en donde decían que a su hermana GLORIA la tenían retenida en el Cantón Norte y que estaba siendo torturada.

De NORMA CONSTANZA ESGUERRA se dice que vendía sus pasteles a la cafetería del Palacio y el día 6 de noviembre entró a las instalaciones como acostumbraba, hecho confirmado por su hermana parapléjica MARTHA AMPARO, que la esperaba en el carro como todos los días, sin que volviera aparecer.

Se insiste en que la certeza sobre la salida con vida de IRMA FRANCO PINEDA se obtiene de la entrevista a su compañera

CLARA HELENA ENCISO, única persona del grupo insurgente que logró escapar; de 64 declaraciones que obran en el expediente, entre las que se encuentra la del soldado EDGAR MORENO que la custodió en la Casa del Florero, y de las grabaciones a las conversaciones militares que señalan que "*se obtuvo inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal*", siendo objeto de custodia y control por parte de los miembros del Ejército que desarrollaban esa actividad en la Casa Museo, y al día de hoy no aparece ni viva ni muerta.

Pero además se escuchó la orden de "*Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco*", en las comunicaciones grabadas entre ARCANO 5 (SADOVNICK) y ARCANO 2 (EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO), lo que ha sido interpretado como una específica orden de desaparecer personas.

De otra parte afirman que los desaparecidos no hacen parte de los inhumados en la fosa común del cementerio sur, pues de los 94 cuerpos reconocidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como de personas fallecidas en los hechos del Palacio de Justicia, entre el 6 y el 15 de noviembre de 1985 se identificaron 53 personas cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares, y 36 que fueron inhumados en la fosa común del cementerio del sur por órdenes de diferentes Juzgados de Instrucción Penal Militar, lo cual quiere decir que restarían 5 cuerpos por establecer el destino que se les dio.

Pero de 5 personas harían parte los cuerpos de los oficiales JAIME ALBERTO PORTILLA FRANCO, HÉCTOR ANIBAL TALERO CRUZ y JAIME BENÍTEZ PRIETO, quienes fueron identificados con los protocolos de necropsia 3743-85, 3786-85 y 3791-85, respectivamente, sin que en estos 3 casos exista prueba alguna que

permita concluir que los cuerpos fueron entregados a sus familiares o que fueron llevados a la fosa común del cementerio del sur; completándose este grupo de 5 personas con 2 sujetos de sexo masculino sin datos adicionales que permitan su identificación.

En el proceso de exhumación en la fosa común del Cementerio del Sur fueron encontrados 261 cadáveres: 149 niños y 112 adultos, de los cuales 36 corresponden a personas fallecidas en los hechos del Palacio de Justicia, y desde el año 1998, cuando fueron exhumados los restos, en cinco momentos se han realizado análisis de ADN con el fin de verificar si los cuerpos de las personas desaparecidas se encontraban en ese lugar: en los años 2001, 2002, 2003, 2010 y 2012, pudiendo concluir para la fecha que los desaparecidos no se encontraban en la fosa común del Cementerio del Sur.

Por manera, se puede inferir que ninguna de las personas desparecidas fue inhumada en la fosa común del Cementerio del Sur y 27 años después de la ocurrencia de los hechos aun se desconoce el paradero de esas 11 personas que no aparecen ni vivas ni muertas.

Para la representación de la parte civil existía una estructura organizada de poder, dentro de la cual, desde antes de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, habían sido expedidos manuales y planes especiales de operaciones en los que se fijaban los criterios, concepciones, estrategias y niveles de coordinación entre las diferentes agencias de inteligencia del Ejército Nacional e inclusive su articulación con otras dependencias de la Fuerza Pública, ceñidas a una estructura de jerarquía y funcionamiento.

Dentro del aparato de inteligencia, una de las estructuras fundamentales es la Sección 2 o B2, como unidad perteneciente al

Estado Mayor de la Brigada, en este caso la XIII, la cual se encontraba bajo el mando del Teniente Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, pues para la conducción de las operaciones tácticas encaminadas a la defensa interna la inteligencia es elemento esencial que requiere el concurso de todas las agencias gubernamentales bajo los principios de permanencia y coordinación.

Para los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la estructura jerárquica estaba debidamente organizada. Cada unidad fundamental actuaba conforme a sus funciones y de acuerdo a los planes y manuales establecidos, en especial los relacionados con la inteligencia militar, que funcionaba como un claro aparato permanente, con estructura propia, con claros niveles de coordinación, asignación de roles y responsabilidades.

De manera, tan pronto la fuerza pública fue informada de la toma, se activó el COB bajo la dirección del coronel LUIS CARLOS SADOVNICK, Jefe del Estado Mayor. Se establecieron puesto de mando avanzado y puesto de mando atrasado, el segundo en la Brigada Trece y el puesto avanzado en el "*teatro de operaciones*", Palacio de Justicia, y en las zonas aledañas como lo fue la Casa Museo 20 de Julio o Casa del Florero, donde desarrollaron papel fundamental y protagónico las unidades adscritas al B2 y al COICI, implementando las órdenes consagradas en el Manual de Inteligencia y el Plan de Operaciones Especiales de Inteligencia N° 002, desplegándose un operativo de inteligencia estructurado, con permanencia en el tiempo, con clara asignación de roles y tareas.

Tal y como se puede apreciar en los RESINES y se desprende de las declaraciones de SADOVNIK y PLAZAS VEGA, el B2 tenía control sobre las actividades adelantadas, inclusive evaluando

recurrentemente la información aportada o existente, siendo claro que evaluaba la información proveniente de la BR13, del COICI, del DAS y la Policía Nacional.

Así las cosas, durante la retoma del Palacio de Justicia la coordinación de las labores de inteligencia, centralizadas en el puesto de mando avanzado, corrió a cargo del B-2, estando dentro de sus tareas la clasificación de los rehenes para su identificación; labor que, aducen, ejecutó el Coronel ® EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y los oficiales y suboficiales del B-2, en coordinación operativa con el Jefe del Estado Mayor del COICI, FERNANDO BLANCO GÓMEZ, teniendo como subordinados a personal de inteligencia de la Policía Nacional y el D.A.S.

Con lo anterior, consideran, se encuentra probado el primer requisito de la autoría mediata, que obedece a la existencia del aparato organizado de poder, siendo claro que de él hacían parte los integrantes del B-2 y del COICI, entre quienes se encuentran EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ y demás integrantes del B-2.

Argumentan que en desarrollo de la operación militar, luego de asumir la Brigada XIII el mando unificado de la operación de retoma del Palacio de Justicia, se implementó el puesto de mando avanzado en la Casa del Florero, articulado con el comando de la Brigada en el Cantón Norte, en donde las órdenes eran impartidas tanto por el comandante de la Brigada, General JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, como por el Jefe del Estado Mayor, Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK, centralizando las labores de inteligencia en la Casa del Florero.

La sección de inteligencia de la Brigada XIII, conocida como B-2, al mando del Teniente Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, fue la responsable durante la operación de hacer las labores de manejo, control, clasificación e interrogatorio de las personas que eran conducidas del Palacio de Justicia hasta la Casa del Florero, a donde eran llevadas custodiadas por efectivos del Ejército.

Aducen que en el desarrollo de las labores de inteligencia en la Casa del Florero se practicaron interrogatorios y no recibimientos o simples entrevistas. Interrogatorios que en el caso de las personas señaladas como "*especiales o sospechosas*" fueron encargados a especialistas en la materia, que no eran otros que los miembros del B-2. Interrogatorios agresivos que implicaban la detención arbitraria e ilegal y el sometimiento a tratos crueles, los cuales se convertían en el primer paso de traslados a instalaciones militares, en donde se usaron álbumes de inteligencia, y para los cuales las órdenes eran terminantes y que en el caso de IRMA FRANCO, los empleados de la cafetería y los visitantes ocasionales, desembocaron finalmente en su desaparición forzada.

Resaltan que respecto de cada uno de los acusados es importante establecer la formación, mando y experiencia que tenían en labores de inteligencia y análisis de blancos subversivos, vistiendo de civil y a cubierta, lo que los ubica en un plano activo en las labores desarrolladas en la Casa del Florero y no simplemente como auxiliadores, vigilantes o socorristas, como se ha pretendido presentar durante el proceso.

Del Mayor OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ se aduce ha reconocido ser quien manipuló y mantuvo en su poder los documentos de identidad de los estudiantes YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON, quienes fueron torturados en la sede del

COICI al sur de Bogotá, e igualmente reconoció que dirigía los interrogatorios que se realizaban en el Cantón Norte, para lo cual citan textualmente la ampliación de la indagatoria rendida el 13 de febrero de 2007 (rad. 9755-4, cuaderno 12 folios 40 al 57), donde el indagado al responder la pregunta sobre quién manejó los retenidos por sospecha, expuso: "*No doctora, no supe quien los manejó pero en este punto si le quiero contar algo: cuando había retenidos de cualquier naturaleza, no estoy hablando del Palacio de Justicia, cuando había retenidos de cualquier naturaleza, se llevaban a la Escuela de Caballería, porque allá existían las celdas o calabozos para tener a esos retenidos, en las instalaciones del Cuartel General, no existía ninguna celda, ni calabozos ni piezas de retenidos, por ejemplo, cuando yo hice una operación que era de mi blanco contra el grupo Ricardo Franco, los retenidos después de los allanamientos se llevaron a la Escuela de Caballería y como eso si era de mi blanco, allí estuve yo, dirigiendo los interrogatorios*".

Para la parte civil, esa labor la desarrolló igualmente OSCAR WILLIAM VASQUEZ cuando regresó el 7 de noviembre a la Brigada, y los días posteriores, dirigiendo los interrogatorios de algunas personas llevadas allí como sospechosas, tal como ocurrió con JOSE VICENTE RUBIANO, quien manifestó que fue trasladado a la Escuela de Caballería y fue torturado durante los interrogatorios, describiendo, entre quienes participaron de sus interrogatorios, a un Capitán "*pastuso*" que era el que mandaba a la gente a que les pegara.

Respecto del Sargento Segundo del Ejército ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ se hace referencia a la diligencia rendida por él el 26 de octubre de 2006, en donde indicó su experiencia y capacidad de presunción de inteligencia, asignado al blanco EPL, y del Sargento Primero del Ejército FERNEY ULMARDÍN CAUSAYA PEÑA se resalta que era analista de blanco ELN, según lo refirió en la indagatoria rendida el 14 diciembre de 2006.

Finalmente, del Sargento LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA se refiere que se desempeñaba como analista principal del blanco M-19 y administrador de la bóveda del B-2, en donde aparecieron los documentos del ejecutado Magistrado CARLOS HORACIO URAN y el informe de la operación del Palacio con antefirma del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA.

Con certeza, para la parte civil, un analista del blanco M-19 era el encargado de coordinar acciones de identificación e "*interrogatorio cerrado*", según ellos, como lo reseñó EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO al preguntársele por este sargento y la relación que tenía con él.

Se afirma que el B-2 operó como seleccionador y clasificador de las personas que salían del Palacio de Justicia, siendo claros los casos de IRMA FRANCO, ORLANDO ARRECHEA OCORO, EDUARDO MATSON, YOLANDA SANTODOMINGO, MAGALYS AREVALO y ORLANDO QUIJANO, quienes, en virtud del señalamiento como especiales del que fueron objeto, recibieron un tratamiento particular y degradante en el segundo piso de la Casa del Florero.

Igualmente se afirma que en el "*procesamiento*" del que eran objeto las personas declaradas como especiales, el ciclo se cerraba con su asilamiento en instalaciones militares, en donde el B-2 tenía un papel preponderante en los interrogatorios; encontrándose en el plenario plenamente establecida la existencia de una zona reservada para interrogatorios en los predios de la Escuela de Caballería, zona a cargo del B-2 de la Brigada XIII, como lo confirman los traslados de los conductores, las retenciones de civiles en Zipaquirá y el mismo comandante de la ESCAB, LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA.

Seguidamente hacen un análisis sobre la legalidad, la tipicidad y la no retroactividad del delito de desaparición forzada, para lo que traen a colación el bloque de constitucionalidad, de donde deducen que al observar el numeral 2° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace parte del bloque de constitucionalidad, se debe concluir que dados los antecedentes existentes para la época en el derecho internacional, la desaparición forzada de personas era ya considerada en los principios de derecho internacional un crimen contra la humanidad.

Se analizan las fuentes de derecho internacional, dado el señalamiento que hace la defensa en cuanto a que el procesamiento y condena de sus defendidos por el delito de desaparición forzada de personas viola el principio de legalidad, en tanto, en su sentir, para la época de los hechos dicha conducta no se encontraba tipificada como delito, para argumentar que, tal y como se refiere en la normatividad por ellos analizada y que es anterior a los hechos del Palacio de Justicia y el concepto autorizado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, necesariamente se descarta la argumentación de la defensa, que, en su sentir, sí desconoce abiertamente el derecho internacional de los derechos humanos, generando sofismas distractores de la realidad jurídica y de la justeza de la imputación y condena penal.

Se realiza un análisis de las resoluciones, informes y jurisprudencia de los órganos de protección, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde concluyen que conforme al derecho internacional de los derechos humanos la desaparición forzada de personas era considerada antes de los hechos del Palacio de

Justicia como un crimen de lesa humanidad, que se encontraba proscrito en numerosos instrumentos internacionales, los cuales hacen parte del ius congens y en cuanto tal no se vulnera el principio de legalidad, dada la existencia de una cláusula explicativa como la contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con fundamento en lo anterior, solicitan que al momento de dictar sentencia se disponga: (i) Condenar a EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMENEZ, como responsables del delito de desaparición forzada agravada, por el cual fueron acusados por parte de la Fiscalía General de la Nación; (ii) Como consecuencia de lo anterior, se les imponga la máxima pena, dada la gravedad del delito, el número de víctimas, el tiempo de ejecución del crimen y su carácter de crimen de lesa humanidad, descartando cualquier favorabilidad para los mismos; (iii) Se ordene a la Procuraduría General de la Nación promover acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia a efectos de que sea nuevamente analizada la responsabilidad de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO en la desaparición de IRMA FRANCO PINEDA y sea removida la impunidad de que se ha visto favorecido por la acción de la Justicia Penal Militar; (iv) Sean compulsadas copias para que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales (eufemísticamente llamados falsos positivos), que de manera sistemática se llevaron a cabo durante la retoma del Palacio de Justicia, especialmente las ejecutadas en las personas de RENE FRANCISCO ACUÑA, trabajador de Valher, DIOGENES BENAVIDES MARTINELLI, ciudadano Panameño, FABIO BECERRA CORREA, ARIEL SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO RUEDA, FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO CARVAJAL y HÉCTOR ARTURO LOZANO, entre otras personas,

respecto de las cuales existen pruebas de haber sido ejecutadas; (v) Sean compulsadas copias para que se investigue a los responsables en la Procuraduría General de la Nación de los actos y acciones de obstrucción a la administración de justicia y de falta de cumplimiento del deber de representar a la sociedad en el presente proceso, al haber afirmado en otros juicios penales por los mismos hechos la responsabilidad de los integrantes del B-2 y llegar a este proceso a guardar silencio; y (vi) Se ordene como reparación medidas de satisfacción a favor de las víctimas y la sociedad, ello en el marco del Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Reparación, así como la ley de víctimas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Concluida la intervención de la representación de la Parte Civil, hicieron uso de la palabra los procesados.

OSCAR WILLIAN VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, luego de hacer un recuento de los cargos ejercidos en el Ejército Nacional así como de las funciones realizadas en los mismos, aduce que efectivamente el 6 de noviembre de 1985, cerca del medio día, recibió la orden del Coronel LUIS CARLOS SADOVICK, Jefe del Estado Mayor, de desplazarse a la Casa del Florero o Museo Veinte de Julio para apoyar a *"mi Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO"* en la actividad que como B-2 estaba realizando.

Precisa que una vez llegó el Coronel le indicó que ayudara a sacar las listas de las personas, lo cual hacia solamente cuando estas llegaban y el resto de tiempo se ocupó de las *"tropas*". Así mismo fue el encargado de recibir los alimentos que llegaron de la brigada y suministrárselo "*a los hombres*", y en horas de la noche cuidó el sueño de los hombres contraguerrilla, quienes descansaron por algunos minutos en el segundo piso en uno de los salones.

Señala que la Fiscalía manifiesta que esas no podían ser las actividades de un capitán, demostrando desconocer la organización y funciones militares, asumiendo que su tarea era la de secuestrar personas para luego desaparecerlas y por éste motivo lo vinculó mediante indagatoria.

Refiere que el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO no le dio órdenes de retener o custodiar, mucho menos de desaparecer, secuestrar, asesinar o torturar a persona alguna dentro de la Casa del Florero, tampoco después de terminada la operación; resaltando que "*nunca recibí la orden de desaparecer a nadie, no me fue entregada la custodia de ninguna persona retenida*", por tanto nunca tuvo bajo su control personas de las llamadas en este proceso "*especiales*", como tampoco observó detenidos aislados en cuartos o salones de la Casa del Florero y menos clasificó a nadie con el rótulo de subversivo o delincuente.

Considera que no existe absolutamente ninguna prueba que demuestre la comisión de "*atropello o acción*" alguna contra las personas que a ese lugar llegaron, precisando que dentro del proceso toda la carga acusatoria va dirigida contra el Ejército Nacional y el B-2 por ser el organismo de inteligencia, también contra el "*señor General ARIAS*", Comandante de la Brigada, por ser quien dirigía la operación, el "*señor Coronel PLAZA*", por haber penetrado con sus tanques la barrera interpuesta por el M-19 y por su frase "*Defendiendo la democracia maestro*", y el "*COICI*" que no tuvo ninguna participación, más que la de llevar un álbum.

Cuestiona el por qué no están siendo procesados también los miembros de la Policía Nacional y los del Das que igual estuvieron sacando listas del personal liberado, o los jefes y agentes del F-2

que todo el tiempo dominaron la calle alrededor del Palacio de Justicia y la Casa del Florero, o por qué no están siendo procesado los Oficiales y agentes que efectuaron el allanamiento a la casa del barrio Calvo Sur en donde el M-19 hizo su preparación, "*si según supuestamente*" la señora Fiscal esta información se obtuvo luego de un interrogatorio a un "*guerrillero*".

Refiere que es muy extraño que después de 23 años se inicie un proceso que debió haberse realizado en el mismo momento en que sucedieron los hechos, si se evidenciaba, como lo dice la Fiscalía, que se habían secuestrado y desaparecido personas.

Considera que son muchas las dudas que surgen, preguntándose cuál es el interés que se persigue realmente. Se busca la reparación y el derecho que tienen las víctimas a conocer toda la verdad, o es un plan "*muy bien diseñado y estudiado*" por los ex miembros del M-19 desde tiempo atrás para tomar retaliación contra el Ejército de Colombia por el hecho de haber frenado su "*alocada carrera delicuencial*" y no permitir el juicio político que pretendía realizarse al entonces señor presidente de la República, Doctor BELISARIO BETANCOURT CUARTAS, para por último acceder a la toma del poder por la vía de las armas.

Precisa que a todas luces dentro del proceso hay "*marcadas intenciones*" en contra de la institución, pretendiendo que la responsabilidad recaiga en quienes nada tienen que ver, construyendo pruebas con base en falsos y mal preparados testigos, haciendo todo lo posible por desprestigiar a la institución y a las persona que en esta ocasión escogieron para que respondan penalmente por lo no sucedido, acusándolos por la desaparición de once personas.

Indica que en los hechos del Palacio de Justicia no hay desaparecidos. Hay una gran cantidad de personas "*tristemente asesinadas por los guerrilleros del M-19*", así como quemados, prácticamente incinerados por el voraz incendio que consumió el piso donde se encontraban, lo que hizo que los cadáveres no pudieran ser identificados, tal y como está plenamente demostrado en el proceso, puesto que si se realiza la suma y resta de las actas de levantamiento y los informes de necropsias practicadas a los cadáveres que si fueron identificados y a los incinerados no identificados, "*vemos que sobran personas*".

La Fiscalía se limita a acusar y "*a decir hay desaparecidos*", con el fin de mostrar a la opinión nacional e internacional unos resultados totalmente falsos, acomodados, contando para ello con el apoyo de los familiares de las supuestas personas desaparecidas que hicieron parte del proceso.

Enfatiza en que elaboró las listas en la Casa del Florero, pero ello no lo convierte automáticamente en un delincuente que desparece personas, pues todos los enlistados salieron con vida, salvo los que con el transcurso del tiempo han fallecido por causas naturales, resaltando que los militares, y específicamente los del B-2, no desaparecieron ni asesinaron, no salieron de ese lugar durante toda la operación, no tuvieron a su cargo el manejo de ningún tipo de detenidos.

Se ha querido "*magnificar*" el hecho de haber sacado las listas como prueba reina de la desaparición de las personas, pero todo es mentira, toda vez que las mismas se obtuvieron para bien de las personas liberadas y de las autoridades, puesto que era la mínima estadística que se debía tener, ya que así lo dispusieron diferentes personas que tenían mando en la operación.

Se declara inocente de los cargos endilgados, resaltando que no cometió delito alguno durante la operación del Palacio de Justicia. Contrario a ello, defendió la Constitución y las leyes en la actividad que le correspondió desarrollar en la Casa del Florero, siendo un militar íntegro, retirado del servicio activo, sin que deba ser juzgado por hechos que a todas luces se ve no sucedieron porque "*no hay desaparecidos*".

LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA en sus alegaciones manifiesta que existió violación a los derechos fundamentales en razón a que la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la resolución de acusación estableció criterios no jurídicos o argumentos claros para la exploración de las pruebas allegadas al expediente.

Aduce que dicha decisión resultó arbitraria, violando el principio de la doble incriminación e inocencia al "*manifestar que hasta la entrada en vigor del delito de desaparición forzada, se había consumado el delito de secuestro y por esta razón se debía acusar por los dos delitos. Este razonamiento hecho por la Fiscalía es contradicho por profesionales (doctrinantes de derecho penal) que se apartan de la teoría creada por la fiscalía, ya que para el momento en que sucedieron los hechos de la desaparición, privación de la libertad, no está tipificada dicha conducta en el Código Penal, solo hasta cuando entró en vigencia la ley 589 de 2000 en la que fue consagrada como delito de desaparición*".

Señala que la Fiscalía únicamente se concentra en el ocultamiento y en la falta de información sobre el paradero de las víctimas, tomando este primer elemento, sin mayor "*rubor*", del delito de secuestro y por ésta razón llega a la conclusión que existe un concurso de conductas punibles, cuando esa institución debe por

mandato constitucional aplicar la ley vigente para el momento de los hechos, con ocasión del principio de favorabilidad.

Precisa que el ente instructor no puede afirmar que el delito de desaparición forzada sea siempre de lesa humanidad, puesto que se habla del mismo cuando se trata de un ataque generalizado y sistemático y este caso no cabe dentro de ese rango.

Igualmente considera que la Fiscalía no puede "*tomar Leyes Colombianas, tratados internacionales y cambiarlas a su gusto o conveniencia profesional*", puesto que no se puede jugar con la inocencia de las personas, tampoco crear teorías convenientes para acusar a alguien por el simple "*capricho institucional y quedar bien con el país*".

En esas condiciones considera que la Fiscalía vulnera sus derechos constitucionales, puesto que es llamado a juicio con argumentos jurídicos no aplicables y sin prueba alguna que lleve a la conclusión de que él cometió algún delito.

Argumenta una equivocada apreciación de la prueba en la resolución de acusación, en cuanto a que en su folio de vida se indica que era un especialista de inteligencia para la fecha de los hechos, resaltando que el 23 de julio de 1986 le dieron el distintivo de Especialista de Inteligencia, el 1° de noviembre de 1988 se certifica que adelantó pruebas teóricas y prácticas en el curso de inteligencia básica y el 4 de noviembre de 1992 fue cambiado al arma de inteligencia, y no como lo quiere hacer creer la Fiscalía, quien ha mirado su hoja de vida de manera "*sesgada y de manera incorrecta no sé si de mala fe o simple capricho, porque la ley obliga mirar la prueba de manera completa sea negativa o positiva para la persona investigada*".

Aduce que la Fiscalía sostiene que solo era el B-2 quien tenía el mando en la Casa Museo del 20 de Julio, afirmación que no tiene fundamento probatorio contundente, puesto que las declaraciones vertidas por los testigos indican que no sólo estaban en el museo miembros del Ejército sino también otras instituciones como la Cruz Roja, Policía, Das, F2, Defensa Civil y Dijin.

Argumenta que no existe prueba contundente indicativa que él haya realizado ilicitud alguna durante los hechos, más aún cuando el 7 de noviembre de 1985 no se encontraba en el lugar de los mismos, en razón a que se hallaba en las instalaciones de la Brigada elaborando un documento relacionado con la incursión al Palacio de Justicia por el M-19.

Cree que es una apreciación egoísta sostener que por el hecho de pertenecer a un grupo del B-2 es un delincuente, cuando la Fiscalía debió demostrar probatoriamente las acciones realizadas por él, estableciendo la fecha, hora y lugar de su acción presuntamente criminal y no acusarlo por el solo hecho de pertenecer al B-2.

En su sentir la Fiscalía no se pronunció sobre las declaraciones de CARLOS ARIEL SERRANO, CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SAENZ, Director del Socorro Nacional de la Cruz Roja, CARLOS RAMOS HERNÁNDEZ, Celador de la Casa Museo del 20 de Julio, EDGAR MORENO FIGUEROA, EDUARDO MATSON OSPINO, FRANCISO DE LA CRUZ LARA, HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, JANET BELTRAN FORERO, JOSE DANIEL MARTÍNEZ QUIJANO, JOSÉ LUIS VARGAS VILLEGAS, Brigadier General Director Operativo de la Policía Nacional, JOSELIN SÁNCHEZ ALVARADO, JULIO ROBERTO CEPEDA, LUIS FRANCISO CAMARGO GONZÁLEZ, ORLANDO ARRECHEA OCORO, CARLOS SADOVNIK, MAGALYS AREVALO, ORLANDO QUIJANO,

RAFAEL HERÁNDEZ LÓPEZ y RAFAEL SAMUDIO, testigos de lo que ocurría en la Casa Museo 20 de Julio; ni a favor ni en contra de éstas que son parte del proceso y en ninguna se le menciona como posible actor de una acción criminal.

Declaraciones que en su sentir van en contravía de la teoría del caso planteada por la Fiscalía al manifestar que NIETO VELANDIA recibió a las personas sacadas del Palacio de Justicia, realizó interrogatorios, listas y luego las desapareció.

Resalta que la actividad cumplida por él fue acompañar al General ARIAS CABRALES al Palacio de Justicia; posteriormente estuvo alrededor de la Casa del Florero con el fin de prestar atención sobre la presencia de elementos del M-19 en algún sector de Bogotá, en apoyo a la incursión, y en horas de la noche del 6 de noviembre de 1985 se dirigió a la Décima Tercera Brigada a elaborar un documento sobre los hechos que estaban sucediendo para presentarlo al Comando Superior.

Lo anterior teniendo en cuenta que para la época en la que sucedieron los hechos se desempeñaba como analista del Blanco M-19, desarrollando esa función durante dos años ocho meses, por lo tanto era la persona idónea para elaborar el documento al que hace mención, el cual debía contener las actuaciones realizadas por el M-19 antes de la incursión al Palacio, proceso que por su conocimiento previo en el tema llevaría corto tiempo, dada la urgencia con la que se le estaba solicitando el mismo, el cual entregó al Capitán CÁRDENAS OBANDO, quien a su vez lo entregó al Suboficial a la Casa del Florero el 7 de noviembre de 1985.

Refiere que se le acusa por dos declaraciones, esto es, la del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y la de su Mayor

WILLIAN VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, sin tener en cuenta los testimonios referidos anteriormente, acusándosele simplemente por ser del B-2 y no por existir prueba contundente de que realizó actividad ilícita alguna, pues se tomó como referencia el oficio N° 0027 del 27 de enero de 1986 para iniciar la investigación y posterior acusación, porque en el mismo se indicia que cumplió actividades con el personal rescatado del Palacio, lo cual es una "*gran mentira*".

Señala que el apoderado de la parte civil hace énfasis en que él manejaba la bóveda del B-2, lo cual es totalmente falso y es "*otra mala interpretación y falta profundizar la realidad, por el afán de obtener resultados a cualquier manera*", pues hasta la intervención del apoderado de la parte civil se entera de lo manifestado por el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO en cuanto a que era él quien manejaba la bóveda, apreciación o confusión de su segundo apellido que lo coloca en una situación que aparentemente confunde.

Realiza un recuento de su hoja de vida, precisando que sus funciones en cuanto al blanco M-19, como sargento segundo, eran las de aprender y llevar documentos con el personal que laboraba allí, mediante la dirección del Mayor FERNANDO AUGUSTO GARCÍA, Jefe de análisis de la sección, otros señores oficiales y suboficiales, todos en comisión de servicio que pertenecían a las Unidades Tácticas de la Décima Tercera Brigada (BR-13). Que por su problema de oídos era la única alternativa que tenia para permanecer en el Ejército y por esa razón salió de las Unidades de la Artillería.

Del recuento que realiza de sus funciones aduce que se puede apreciar claramente que se encontraba como jefe de blanco para

llenar un requisito y en ningún momento como una persona que tuviera la experiencia y la especialidad necesaria, ni tenia mando para tomar alguna decisión en la sección o con las personas del blanco que se encontraban en comisión de servicio de otras unidades, unas por periodos muy cortos y otras permanecían durante un buen lapso como en su caso.

Respecto a los hechos acaecidos el 6 de noviembre de 1985 asegura que cuando se conoció que el M-19 había incursionado en el Palacio de Justicia les ordenaron el desplazamiento. Llegaron a la Plaza de Bolívar y el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO le ordenó que acompañara al General ARIAS CABRALES al Palacio de Justicia y así lo hizo. Aduce que el problema era que no dejaban entrar a la tropa por el fuego de los bandoleros que estaban apostados en el segundo piso. Posteriormente empezó a salir el personal del Palacio desplazándose a la Casa del Florero, donde su Coronel le dijo que ayudara sacar listas, pero esa labor la estaba realizando mucha gente. Entonces le ordenaron que se ubicara alrededor de la Casa del Florero y pusiera atención sobre una información relacionada con vehículos de miembros del M-19 que se desplazaban por algún lugar de Bogotá hacia el Palacio en apoyo a la incursión, lo cual así lo hizo.

Aduce que a media noche el Coronel le manifestó que se trasladara hacia la Décima Tercera Brigada con el Capitán MIGUEL CÁRDENAS OBANDO “*o*” con el Capitán WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, en donde CÁRDENAS le dijo que se pusiera a elaborar un documento sobre lo que estaba sucediendo, plasmando el antes, durante y después de lo ocurrido, documento que le fue enviado al Coronel.

Dice que en el folio de vida le figuran felicitaciones colectivas dadas por el Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército, el Comandante de la Brigada y por el Comando General de las FFMM, por la recuperación del Palacio de Justicia, y no como lo quiere hacer ver la Fiscalía, como una felicitación individual por algún hecho específico, como tampoco fue por realizar actividades ilícitas, sino por la operación donde participaron conjuntamente diferentes organismos de seguridad nacional, quienes deben tener estas felicitaciones por ser colectivas.

Resalta que la Fiscalía lo quiere hacer ver como único miembro del blanco M-19, pero eso no es así porque existían blancos del M-19 en unidades del Ejército, Policía Nacional, en varias unidades a nivel nacional del DAS, y en la jurisdicción de la Decima Tercera Brigada en todas las unidades como Grupo Mecanizado Rincón Quiñones, Escuela de Infantería, Escuela de Caballería, Batallón de Comunicaciones, Batallón Guardia Presidencial, Batallón Policía Militar N° 11, Batallón de Artillería, Escuela de Ingenieros, Escuela de Logística, Das, Policía de Bogotá y de Cundinamarca

Explica que cuando ascendió a cabo segundo salió del arma de artillería. Que durante el tiempo que permaneció en el "*Batallón Artillería Tarqui, Escuela de Artillería y Batallón de Artillería la Popa*", donde participó como comandante de la pieza base de artillería, durante un ejercicio de tiro se "*encrestó*" una granada explotando muy cerca de los integrantes de la pieza y de ahí en adelante quedó con un problema en los oídos, motivo por el que no puede disparar un arma.

Indica que dicho problema de oídos no quedó registrado en el folio de vida, pero por el mismo "*era un problema para las Unidades de*

Artillería" puesto que no podía desempeñarse como integrante de las baterías de fuego y no podía asistir a los polígonos.

Precisa que en el folio de vida se encuentra la anotación del 13 de diciembre de 1978, donde consta la excusa médica para no efectuar los ejercicios de tiro dispuestos en el programa de instrucción. Así mismo obra fotocopia del oficio con el membrete de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad de Bogotá, del 6 de julio de 1983, en el cual se hace constar que de la Brigada de Institutos Militares le practicaron los exámenes de aptitud sicofísica con resultados "*APTO*", lo cual fue para poder ascender a Sargento Viceprimero, teniendo que renunciar a su enfermedad de oídos, pues de lo contrario no lo ascendían.

Lo anterior fue la causa principal para que lo trasladaran a un batallón de policía militar que cumple funciones muy diferentes a un batallón de artillería y posteriormente lo enviaron en comisión de servicio a la Décima Tercera Brigada.

Por todo lo anterior solicita se dicte sentencia absolutoria a su favor.

ANTONIO RUBAY JIMÉNEZ GÓMEZ solicita se dicte sentencia absolutoria a su favor tras alegar que nunca cometió el delito que se le endilga.

Luego de realizar la reseña histórica de su permanencia en la vida militar, aduce sentirse orgulloso de haberle servido a la patria perteneciendo al Ejército de Colombia, en donde ha sacrificado desvelos para resguardar o proteger el personal bajo su mando, y en ningún momento perteneció a una empresa criminal.

Respecto de los hechos indica que ese día el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO les informó que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia, dándole la orden de prestar seguridad de la parte externa de la Casa del Florero y a la vez controlar la entrada del personal de "*la calle sexta*". Luego, al llegar personal de refuerzo, se le encargó tener los radios que iban a utilizar "*q.a.p*", lo que significaba listos para operar.

Aduce que cuando llegó a la Casa del Florero ya estaba ocupada por personal de la PM, Policía o F2, la Cruz Roja, la Defensa Civil y otros organismos del Estado que se encontraban de civil.

Señala que por el grado que tenía en ese momento no podía dar órdenes, puesto que habían 2000 personas con grados superiores que podían tomar decisiones, limitándose a cumplir órdenes del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, dejando claro que éste en ningún momento le dio la orden de realizar listas, de interrogar, ni de llevar gente que salió del Palacio a otro lugar, ni tampoco de desaparecer personas que salieron del Palacio y si se le hubiera dado la orden no la hubiera cumplido.

Precisa que no fue utilizado para estar dentro de la Casa del Florero puesto que nunca hizo curso de inteligencia y había gente idónea con muchos años de experiencia y con cursos de seguridad a nivel internacional.

Indica que el personal que laboraba en el B-2 era agregado de las unidades tácticas por un determinado tiempo, no era personal de planta, solamente eran "*empíricos, desgraciadamente todos le echan la culpa al ejercito principalmente al B-2 de la Brigada 13. Todas acusaciones que se me hacen son falsas, no son verídicas, no tienen razón de ser*".

Aduce que el 7 de noviembre de 1985 continuó con la orden que se le había dado, que era la de tener los radios listos para operar, y cerca de las dos de la tarde el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO le dio la orden de escoltar al General ARIAS CABRALES que iba a ingresar al Palacio de Justicia. Una vez terminado el recorrido se fue para la Brigada y finalmente a su casa a descansar, actividades que continuaron el 8 del mismo mes y año.

Concluye que la Fiscal que llevó el caso de la toma del Palacio de Justicia no tenía conocimiento de la jerarquía de los miembros del Ejército, puesto que cuando rindió las declaraciones ante la Fiscalía se le involucraba en funciones que solamente las podían cumplir y ordenar los oficiales de alto rango como coroneles o generales.

Considera que se dictó medida de aseguramiento en su contra sin hacer una investigación profunda, en donde existieran pruebas suficientes, permaneciendo 18 meses detenido pero "*nunca fuimos llamados para resolver nuestra situación de calidad de detenidos, solamente salimos de haya fue por vencimiento de términos y sino haya estuviera pagando un delito que yo no he cometido*" (sic).

FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, luego de realizar una presentación de su situación familiar, indica que fue vinculado a la investigación por el oficio 027 del 27 de enero de 1986, donde aparece la relación del personal que colaboró en las actividades de recepción e identificación de las personas rescatadas del Palacio de Justica los días 6 y 7 de noviembre de 1985, pero asegura que nunca participó en la recepción, identificación ni realizó el listado de personas que salieron del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero.

Indica que el 6 de noviembre de 1985 no salió con el Coronel ni con ninguno de los miembros del B-2, puesto que se encontraba en el mando atrasado, ubicado en las instalaciones de la Brigada 13 cumpliendo una de las funciones del B-2 como suboficial criptógrafo del COB, servicio que prestó durante 24 horas y cuyas funciones explicó el sargento mayor NIETO VELANDIA. Además no recibió ninguna orden de ir a la Casa del Florero por parte de su coronel o de otro superior.

Aduce que no existe en las diferentes declaraciones obrantes en el proceso nada que indique que lo vieron recibiendo personal, interrogando, realizando listas ni identificación en la Casa del Florero, puesto que el único motivo para estar allí era el de entregar los radios.

Se declara inocente puesto que no tuvo contacto con ninguno de los rehenes liberados, no recibió ninguna orden de sus superiores y especialmente de quien era su comandante, el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, así como tampoco existe en el proceso un solo testimonio que lo señale como que hubiese realizado actividades de tortura y desaparecimiento de personas.

El Coronel ® **EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO** designó vocera, quien en extensa exposición solicitó se dicte sentencia absolutoria a favor de su representado, teniendo en cuenta que el material probatorio obrante en el expediente demuestra su inocencia, pues en estos hechos no hay desaparecidos y por tanto se le está juzgando por un delito que jamás cometió.

Considera que se ha pretendido confundir a la justicia aduciendo que hay 11 desaparecidos, cuando realmente lo que hay son cuerpos sin identificar.

Indica que el manejo deficiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Policía Judicial, responsable de los levantamientos, y la falta de cuidado al momento de enterrar los cuerpos en la fosa común, dificultó su posterior identificación, siendo algunos entregados de manera errónea. Eso, y la negativa de la Fiscalía de reconocer que las necropsias que reposan en el proceso corresponden a los que ha catalogado como desaparecidos, son los elementos que el ente instructor y la parte civil utilizan para asegurar que hay 11 desaparecidos.

Precisa que los hechos no son responsabilidad del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, ni del B-2, ni del Ejercito Nacional o de las Fuerzas Armadas, como se ha pretendido mostrar, considerando absurdo pretender que el Comando General de las Fuerzas Militares acordó un plan criminal, avalado por el Presidente de la República, en contra de los desestabilizadores del país: M-19, FARC, ELN y ERP.

Insiste que ni el Coronel ni sus hombres del B-2 han desaparecido a alguien. No dio en ese sentido órdenes o las recibió. Jamás ejecutó actuaciones que no estuvieran dentro de su marco funcional y por el contrario cumplió fielmente con su condición militar, motivo por el cual es inocente, lo que hasta el momento no se ha podido desvirtuar dentro del proceso.

Presenta un organigrama de las Fuerzas Militares, de la Policía y del DAS, en razón a que, considera, se ha cercenado información con la que quieren señalar al Coronel como responsable de unos hechos que no existieron, además porque se le han adjudicado funciones y responsabilidades que no le competían y menos en las dimensiones afirmadas.

Resalta que después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, de conformidad con lo establecido en el Plan Tricolor, el Presidente de la República ordenó la operación de rescate de los secuestrados, la cual se desarrolló por los diversos organismos de seguridad del Estado en estricto cumplimiento del deber legal, constitucional y funcional de cada uno.

Explica que el Presidente era el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas: Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada, Policía y Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S; en cabeza del Ministerio de Defensa se encontraba el general MIGUEL VEGA URIBE y dicho ministerio tenía adscritas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y la Policía de Bogotá estaba dirigida por el Brigadier General VARGAS VILLEGAS, encargado de la operación de rescate de los secuestrados del Palacio de Justicia.

Precisa que la actitud de satanizar al Ejército Nacional, y en especial a la inteligencia, ha hecho que la Fiscalía, desde que inició la investigación por parte de la justicia ordinaria, ignorara la intervención de la Policía, la SIJIN, el F2 y el DAS, en las labores de rescate e identificación de los secuestrados liberados del Palacio de Justicia y en las mismas acciones de combate, pues a pesar de reposar en el expediente un amplio acervo probatorio que soporta este hecho, siempre se ha querido presentar que todo es responsabilidad del Ejército Nacional, haciendo ver que el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO fungió como comandante de acciones militares y de inteligencia en la operación de rescate, lo cual desconoce la verdad.

Destaca que la seguridad directa del Palacio de Justicia, para la fecha de los hechos, estaba a cargo de la Policía Nacional,

específicamente del Capitán, hoy General retirado, OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO y así consta en el proceso.

Indica que producida la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Nacional y por ello es que el General VARGAS VILLEGAS establece un puesto de mando en la Casa Museo del 20 de Julio-Casa del Florero, dirigiendo las actividades que desarrollaron los mismos, lo que el Coronel ha informado desde sus indagatorias y ha sido corroborado por varios declarantes, entre ellos CARLOS RAMOS HERNANDEZ e ISABEL RAMÍREZ.

Al respecto indica que CARLOS RAMOS HERNÁNDEZ, celador del museo Casa del Florero, en declaración del 9 de diciembre de 1986, sobre las personas que llegaron a ese sitio, manifestó que: "*PREGUNTADO: recuerda usted como vestían las personas que ingresaron inicialmente al museo cuando solicitaron que les prestara el teléfono? CONTESTO: Uniformados sí, pero no me acuerdo el color del uniforme. Al que llamaba si le decía General y estaba escoltado por otros de civil, pero no sé cómo sería el apellido*".

La Señora ISABEL RAMÍREZ, secretaria del museo, en declaración del 9 de diciembre de 1986 manifestó: "*PREGUNTADA: A raíz de la autorización dada por el doctor Hernández Alba de que personal de las Fuerzas Militares podría controlar desde las instalaciones del Museo, díganos si usted vió a ese personal uniformado, de ser así que uniforme vestían? CONTESTO: Pues el General bajito de bigote ya canoso, él estaba atento a todo, él era como el que recibía a todos los oficiales, todos llegaban y le decían: Mi General tal cosa, él era que recibía todas las informaciones…*".

Señala que igual reposan varias declaraciones, entre ellas la de TC. JAIRO ALONSO VELEZ BARRAGAN, de la Policía Nacional, quien indicó que se trasladó con el General JOSE LUIS VARGAS

VILLEGAS a la esquina de la Casa del Florero, en donde a los pocos minutos llegó el Comandante de la Brigada XIII, General ARIAS CABRALES, y se apersonaron de la dirección del operativo, quedando a la espera de recibir órdenes del General VARGAS, aduciendo que dentro de las órdenes recibidas estuvo la de llamar al Jefe de Inteligencia de la SIJIN para que coordinara lo pertinente a la identificación de las personas que sacaban del Palacio de Justicia, lo cual se realizó a través del Jefe de inteligencia de la SIJIN; lo que permite corroborar que el Ejército, en especial el B-2, no fue el único que adelantó actividades de identificación.

AUDIAS SEGUNDO BELTRAN ARGOTY, miembro de la Policía Nacional, F-2, declaró que "*se encontraba con EDGAR TORRES como servicio de inteligencia externa del edificio de la Corte Suprema de Justicia, el día 06 y 07...todo servicio de inteligencia colaborando a sacar a las personas...salían de rehenes del edificio, que salían liberadas y como también...**igualmente identificándolas y tomándoles datos, ya que esto era pa...llevar una relación pormenorizada de las personas que salían del edificio,** las cuales se les iba colocando en la casa del florero, mien...tanto establecer de quienes se trataba y cuando nosotros ya vimos ... llegando patrulla de la Policía y compañeros del servicio de inteligencia a reforzar. Estuvieron hasta el día 07-NOV-85 hasta las cinco de la tarde, en labor de inteligencia, tomando datos a las personas que salían de rehenes y colaborando y colaborando hasta el otros día en...mi capitán BERNAL CARDENAS, nos ordenó que nos fuéramos para la oficina a las cinco de la tarde, pues estábamos cansados y agotados. Tomar datos a las personas, tales como identificación, donde trabaja y de datos personales y esos datos los tomaron casi*" (sic).

A su vez EDGAR TORRES ZETABOBO, miembro igualmente de la Policía Nacional, adujo que "*Posteriormente llegaron refuerzos de la Policía uniformada, del F-2, DAS y Ejército, posteriormente la labor de nosotros fue de inteligencia. Por fuera, nosotros no nos entramos, sino simplemente observamos lo que estaba sucediendo, para hacer cualquier cosa, bueno*

nosotros estuvimos ese día toda la noche hasta el otro día aproximadamente hasta las cuatro de la tarde. ***También ayudamos a sacar los datos o tomar los datos personales a las personas que iban saliendo del Palacio en la casa del Florero.*** *A las cuatro de la tarde nos dijeron que nos fuéramos para la oficina y nos fuimos, la orden nos la dio el Capitán BERNAL, Jefe del Grupo de Inteligencia.* ***Dice que las personas salían de la Casa del Florero, por intermedio de su cédula y un carnet que los acreditaba como funcionario de la Corte o del Palacio de Justicia****, ahí a la mayoría de las personas que yo le tome los datos me presentaron un carnet que los acreditaba como empleados, se constataba con la foto de la persona*" (sic).

JAIME DE JESÙS GAÑAN LÓPEZ, oficial de la Policía Nacional, Sub-jefatura del F-2 de Bogotá, dijo que en síntesis su labor fue hacer inteligencia, puesto que dada la situación que se presentaba al interior del Palacio era casi imposible penetrar, y con posterioridad estuvo en la Casa del Florero coordinando con personal del grupo de inteligencia la identificación de las personas que eran evacuadas del interior del Palacio. En relación a las órdenes adujo que se impartieron en términos generales, afirmando que todas las personas evacuadas del Palacio de Justicia eran conducidas a la Casa del Florero, donde dos Oficiales de la SIJIN se encargaban de sacar las listas de los mismos, establecer la identidad, su vinculación como empleados y funcionarios del Palacio.

En declaración JAIME GALLO ZULETA precisó que el día de los hechos llegó apoyo del F-2, personal uniformado, entre ellos los Tenientes PINZÓN, CAICEDO, FONSECA y el Agente LEÓN, e igualmente vio personal del Ejército, personal de civil "*o sea B-2 o F-2 que tomaban posiciones estratégicas*" (sic).

Precisa de lo anterior la vocera que ni siquiera los mismos que estuvieron en los hechos pueden determinar a qué fuerza

pertenecía el personal civil que se dice estuvo en la Casa del Florero, por lo que mal se puede afirmar que era exclusivamente personal del B-2.

En declaración LUIS MIGUEL MARTÍN JIMÉNEZ afirmó que su actividad el día de los hechos fue trasladarse a la Casa del Florero con el fin de servir como secretario para tomar los datos personales de los que iban siendo rescatados y el 7 nuevamente le ordenaron acudir a la Casa del Florero a continuar con esa misma labor hasta que salió el último de los rehenes. Aseguró que en la Casa del Florero habían otras personas de la Brigada, del DAS y de la SIJIN tomando los nombres de los rehenes, quienes suministraban el nombre, apellidos completos, número del documento de identidad, la dirección de residencia, teléfono, el grado y cargo que desempeñaban en el Palacio de Justicia, pero muy pocos portaban el documento de identidad, resaltando que ninguna de las personas relacionadas en la lista de rehenes rescatados fue privado de la libertad. Aduce que todos los comandantes de Unidad, es decir, del Ejercito, de la Policía y del DAS, estaban al mando de la operación de rescate y cada uno ordenaba a su personal. Igualmente que al llegar a la Casa del Florero ingresó acompañado del señor Capitán BERNAL CÁRDENAS, jefe de inteligencia de la SIJIN, identificándose como personal del F-2.

Diligencia que considera importante puesto que es uno de los que da fe de la salida de las personas de la Casa del Florero, así como que se retiró hasta que salió la última persona, sin que se refiriera a que las mismas se las hubiera llevado el B-2 y en especial el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO.

Resalta que LISANDRO JUNTO ESPINOSA, Capitán de la Policía Nacional, en declaración afirmó que cuando se trasladó al Palacio

de Justicia había personal de la Policía uniformada y del Ejército tomando contacto con otros oficiales del F-2. Al día siguiente el Mayor GAÑAN, Subjefe de la SIJIN, le ordenó trasladarse a la Casa del Florero con el objeto de tomar datos sobre el personal evacuado de dicho lugar, lo cual realizó en compañía de otros oficiales, y a medida que iba llegando el personal rescatado le tomaban los datos con el objeto de informar a los mandos superiores sobre las personas evacuadas. Aduce que ese día recibió alguna orden especial de la estación "*CIEN*"*,* donde le informaban a todas las tripulaciones del F-2 que debían adelantar operaciones de inteligencia alrededor del Palacio para detectar posibles apariciones de otros subversivos.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GUTIÉRREZ, agente de la Policía Nacional, afirmó que se desplazó al Palacio de Justicia donde se puso a órdenes del Capitán JOSÈ MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS, Jefe del Grupo de Inteligencia, observando algunos compañeros y otros grupos de la SIJIN.

En declaración el cabo primero de la Sijin JUAN VICENTE AVILA BENITO aduce que recibió la orden de cumplir misión de inteligencia por los alrededores del Palacio, objetivo que fue cumplido hasta la una de la mañana, regresando al día siguiente, sin que pudiera detectar ningún otro grupo subversivo, puesto que según información radial se movilizaban algunos de ellos por la Primera de Mayo; Y el Teniente Coronel JOSÉ VELANDIA NIÑO, Comandante de la Fuerza, se dirigió al lugar de los hechos observando personal de la Guardia Presidencial y del F-*2.*

Concluye la interviniente que de dichas declaraciones resulta claro que no todas las actividades de identificación de las personas

rescatadas estuvieron a cargo del B-2 o del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, que éste no tenía la responsabilidad funcional sobre todo el personal que participó en esa labor, y por lo tanto no se puede asegurar que el B-2 fue el único encargado de hacer listas y de entrevistar a los liberados, pues dicha labor fue desarrollada por diferente personal.

Refiere que no puede entender cómo, si en la Casa Museo 20 de Julio – Casa del Florero, había una cantidad que no se podía determinar de personal uniformado y de civil recibiendo, entrevistando y sacando listados del personal rescatado, porque la Fiscalía y la parte civil se ha ensañado en contra del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, con verdades a medias que terminan siendo mentiras, poniéndolo como el jefe de una estructura criminal.

Precisa que es una falacia indicar que SÁNCHEZ RUBIANO era quien estaba a cargo de todas las agencias de inteligencia, desconociendo las jerarquías que existen dentro de las Fuerzas Armadas y el DAS, cuando cada una manejaba su propio personal.

Aduce que al lugar de los hechos acudieron muchas agencias de inteligencia, entre ellas Policía, Sijin, F2 y DAS, ya que, dado lo magno del hecho, no era posible que un solo departamento de inteligencia realizara dicha labor y pusiera a salvo los secuestrados, por lo que menos aún se puede decir que el coronel SÁNCHEZ RUBIANO en compañía de un oficial y 3 suboficiales del B-2 pudieran haber tenido el manejo total de la situación, cuando allí también se encontraban aproximadamente 30 y 60 elementos del DAS y de inteligencia de la Policía, respectivamente.

Indica que para la época de los hechos las Unidades Operativas estaban conformadas por un Estado Mayor con las Secciones 1, 2,

3, 4 y 5, establecidas por los reglamentos del Ejército Nacional; aclarando que, contrario a lo señalado por la parte civil, las secciones referidas no son producto de la conformación de un aparato criminal organizado, sino que corresponden a una estructura legalmente establecida de tiempo atrás

Hace referencia a la Sección Segunda de la Brigada (B-2), que para el día de los hechos era comandada por el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, precisando que las funciones básicas eran suministrar información, hacer apreciaciones de situación, dar recomendaciones, elaborar planes, órdenes y supervigilar.

Aduce que la información recaudada por el B-2 debía someterse a un proceso de evaluación, conocido como el ciclo de inteligencia, lo cual no corresponde a la explicación aportada por la parte civil, quien, en su sentir, ha hecho un esfuerzo por confundir dicho ciclo con el procedimiento que se sigue con el personal capturado, lo cual explica más adelante; aclarando que el personal no salía del Palacio de Justicia en condición de capturado, puesto que eran personas que se encontraban secuestradas por el M-19, y las labores desplegadas por la fuerza pública estaban encaminadas a liberarlos para que no fueran asesinadas por los hoy indultados.

Precisa que el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO acudió al Palacio de Justicia por orden y en compañía del General ARIAS CABRALES, comandante de la Brigada, y el oficial B-3, Coronel CARVAJAL NUÑEZ, los cuales se encontraban con el uniforme color verde, el que sobre el bolsillo de la chaqueta tenía un acrílico que decía “***T.C. EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO – Oficial del Ejército”***, lo que considera hacía fácil su identificación, y se cambió hasta el regreso a su casa al día siguiente.

Refiere que lo anterior es con el fin de aclarar que el B-2 no acudió a desarrollar actividades de inteligencia a cubierta sino abierta[29], para cumplir las instrucciones impartidas por el comandante de Brigada, por eso no solo en el material fotográfico sino también en el material fílmico que obra en el proceso consta de la presencia del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO portando el uniforme militar.

Señala que quienes estuvieron en los combates del Palacio de Justicia fueron las Unidades Tácticas de la Brigada XIII, es decir, los batallones que estaban adscritos a la misma, y la sección de inteligencia, B-2, desarrolló actividades logísticas, administrativas, como está probado dentro de este proceso.

Considera que no hay nada que se denomine plan de operaciones contra el M-19. Lo que existe es una directiva de inteligencia, cuestionada en este proceso, y el hecho de que se haya indultado los subversivos del M-19 no significa que dicho grupo no fuera el desestabilizador de la democracia y que al igual que los demás debían ser combatidos.

Resalta que para estos hechos el comandante del Ejército, General RAFAEL SAMUDIO MOLINA, por orden del Presidente de la República, BELISARIO BETANCOURT, dispuso la ejecución del Plan de Defensa Nacional-Plan Tricolor con la Unidad Operativa Brigada XIII, lo cual no corresponde a un acuerdo previo criminal, sino al cumplimiento de un plan elaborado por el Comando General

[29]Precisa que una operación a cubierta es aquella en la cual quienes la desarrollan deben adaptarse y confundirse con el medio ambiente que los rodea; sin que se contemple en ningún momento el empleo de armas, por cuanto se efectúan exclusivamente para obtener información que será evaluada y clasificada para hacerla conocer a las unidades militares correspondientes; y operación abierta es aquella que se desarrolla con el empleo y la identificación plena de los integrantes de las Fuerzas Militares que la realizan.

de las Fuerzas Militares, presentado al Ministerio de Defensa y al Presidente de la Republica para su aval y aprobación.

Afirma que en la operación de defensa nacional participaron muchas unidades para liberar los secuestrados, pero en este caso el elemento de la coautoría se ha pretendido establecer con el hecho de que existió un acuerdo previo que surge "*de las circunstancias precedentes y concomitantes al hecho, relacionadas, las primeras, con la función asignada al B-2, en lo atinente al proceso de identificación e interrogatorio de los presuntos miembros del grupo subversivo M-19 que se tomaron por asalto el Palacio de Justicia, en cuyo desarrollo hubo excesos; y las segundas, con el control que ejerció este organismo en la Casa del Florero, en cuanto se refiere a la identificación y registro de rehenes liberados*" (sic).

Considera que solo se ve a la institucionalidad del Estado y sus fuerzas armadas como un enemigo, lo que no puede ser una razón jurídica para declarar responsable al Coronel SÁNCHEZ RUBIANO por hechos que no han existido, como tampoco se puede desnaturalizar la organización del Ejército, puesto que se estaría desconociendo que está debidamente jerarquizado, organizado y nunca se ha concebido como un aparato organizado criminal.

Argumenta que no es cierto lo que se ha dicho respecto a que el B-2 tenía información sobre la toma del Palacio, puesto que para poder hablar de información "*ese indicio*" debe cumplir con los cuatro pasos del ciclo de inteligencia referido en precedencia, lo que lleva a confirmarlo o desvirtuarlo, por lo que asegurar que había una certeza de la toma del Palacio no es un hecho que corresponda a la verdad.

Explica que el primer paso es el "*Planeamiento del esfuerzo de búsqueda de información, preparación y emisión de órdenes",* el cual se basa

únicamente en la misión que cumpla la unidad, en este caso es la Brigada XIII, planeamiento que se hace teniendo en cuenta el orden de batalla que para el caso es el M-19. El plan de búsqueda es donde el oficial de inteligencia da las órdenes a las demás agencias para que incrementen soluciones o se de respuesta a lo que planteó el B-2, y sobre esto es que las demás agencias de la Policía, el DAS, deben incrementar el esfuerzo de búsqueda de información que ayude a confirmar o desvirtuar el indicio, el control y seguimiento del esfuerzo de la búsqueda.

Paso que en su criterio no se cumplió, toda vez que no se determinó con exactitud la fecha ni la hora en que el grupo subversivo adelantaría la acción delictiva contra la población civil, pues dos días antes a los hechos la policía había disminuido la seguridad en las instalaciones del Palacio de Justicia.

El segundo paso es la "*Búsqueda de la información*", el cual es desarrollado por las agencias de inteligencia, operando de civil mediante la explotación de las fuentes, sin identificarse como de la institución, puesto que ello desnaturalizaría la agencia y las clases de operación a cubierta.

El tercer paso es el "*Proceso de la información obtenida*", consiste en el registro y la evaluación para determinar para quien es útil la misma y así establecer el grado de credibilidad de la fuente o agencia que suministró la información.

El último paso del ciclo es el de "*Difusión y empleo de la inteligencia resultante*" que consiste en la oportuna comunicación de informaciones o de inteligencia a las unidades militares y agencias que puedan hacer un empleo adecuado de los datos.

De acuerdo con lo anterior, precisa que para esa época los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19, esto es, el de atacar el Palacio de Justicia, y para este caso la amenaza que se recibió en una llamada anónima en el Comando General que fue tomado como indicio debió ser manejado, evaluado y procesado a ese nivel estratégico, por lo que no era lógico que el alto mando la dejara en manos de la oficina de inteligencia de una brigada, sin que se pueda predicar que la responsabilidad recaía sobre el B-2, pues todo esto se manejó en instancias superiores.

Insiste en que el problema de fondo es que no se ha hecho entrega de unos cuerpos, indicando que respecto de los cuerpos que fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal obra declaración en inspección judicial del doctor RODRÍGUEZ CUENCA y CARLOS VALDEZ, quienes coinciden en que la cadena de custodia se hizo desde el momento de la inhumación. Es por esta razón que el problema de las personas que se reclaman como desaparecidas inicia cuando en la fosa común se enterraron muchas otras personas que nada tienen que ver con el Palacio de Justicia. Además de ello, otras personas fueron entregadas sin ser plenamente identificadas, como el caso de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, donde la progenitora, hasta que falleció, pidió que se cotejaran los restos del magistrado PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA, en razón a que hasta el último día de su vida estuvo convencida que su hija murió en el Palacio de Justicia pero fue enterrada bajo otro nombre por error.

Precisa que la Fiscalía solo cree en quien pueda ayudar a generar una prueba para endilgar responsabilidad sobre los militares, y aquellos que ayudan a encontrar la verdad son ignorados o denunciados, refiriendo que así le sucedió a MARIA NELFI DÍAZ,

quien fue reconocida desde 1985, pero a pesar de ello se sigue diciendo que la mujer que salió en hombros de un soldado es CRISTINA DEL PILAR GUARIN.

En su opinión la solicitud de condena por coautoría en el delito endilgado tiene un elemento común y es que todos los que dicen salieron con vida y están desaparecidos fueron reconocidos en los videos por la señora SATURIA CABRERA, esposa de CARLOS RODRÍGUEZ. Sin embargo desde el punto de vista técnico no se pudo hacer reconocimiento alguno.

Considera que dentro de este proceso se ha procurado más buscar pruebas que lleven al archivo del proceso seguido en contra de la doctora ANGELA MARÍA BUITRAGO, tanto así que frente al testigo EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL se presentó una gran polémica que fue resuelta directamente por él mismo en cuanto a que nunca asistió a diligencia alguna ante la Fiscalía 4 Delgada ante la Corte, y aunque se practicó prueba grafológica, tal y como lo plasmó la objeción del Procurador, la misma se funda en una prueba ilegal. Pero lo más grave es que se ha hecho un cotejo con un documento que se ha dicho lo tenía la doctora BUITRAGO en su archivo personal, lo que de por si es irregular, y aunque dicha declaración está en el proceso con la firma original, no corresponde puesto que varía en su contenido

Aduce que es extraño que la declaración hubiese sido aportada en original por la citada cuando le pertenece es al proceso, "*pero más allá, este es un original que aunque debería ser exactamente igual al dubitado, NO LO ES*".

Indica que no se discute que las dos firmas sean uniprocedentes, puesto que las dos están aportadas por la misma Fiscal. Lo que sí

se discute y quedó claro en este estrado judicial es que no corresponden a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, pues no puede obviarse que su presencia en este Juzgado y que su declaración bajo juramento zanjó cualquier duda, dando claridad en cuanto a que nunca asistió ante el Despacho de la Doctora BUITRAGO.

Igualmente el Instituto Nacional de Medicina Legal aclaró que no es posible hacer un análisis grafológico al no contar con insumos adecuados, coetáneos, y por tanto la objeción presentada por la Procuraduría General de la Nación está llamada a prosperar, no solo porque desde el punto de vista técnico no era posible llegar a la conclusión a la que llegó el CTI, sino porque además solo hizo cotejo de las muestras aportadas por la doctora ÁNGELA MARÍA BUITRAGO, pues en el dictamen no consta que se haya hecho el cotejo también con la firma tomada en la Procuraduría y menos que se haya acreditado que sean uniprocedentes con la firma cuestionada de EDGAR VILLAMIZAR.

Para la vocera, el investigador PABLO VÁSQUEZ, del Cuerpo Técnico de Investigación, también tiene interés en que a todas luces se diga que dicha firma corresponde a VILLAMIZAR, al punto de aportar unos documentos que debieron ser parte de un proceso pero que tenía escondidos en su poder, pruebas sobre las cuales se desconoce su procedencia, de las que no se puede predicar autenticidad o legalidad, dejando la inquietud ya que él también fue denunciado al igual que la doctora BUITRAGO.

Insiste en que no hay desaparecidos sino cuerpos sin identificar. Aun cuando la Fiscalía y la parte civil aseguran que los cotejos de genética habían salido negativos, la realidad es que hay al menos cinco cadáveres que no pudieron ser cotejados, puesto que estaban carbonizados, y a otros se les hizo mal el cotejo de genética, pues

trajeron restos óseos con dos piezas dentales iguales, al punto que finalmente el Instituto Nacional de Medicina Legal aceptó que había errores en estos dictámenes periciales.

Aunado a ello, asegura, se cuenta con la declaración del Director del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, doctor EGON LICHTEMBERGER, quien manifestó que "*sobre 17 cadáveres no identificados y entregados por orden del Juzgado 78 de I.P.M., pero realmente se sabe a donde fueron a parar y quien fue por ellos: Por información telefónica del patólogo de turno me entere que con la orden mencionada se presentó un furgón de la Policía, pero no conozco el destino o el sitio de inhumación de los cadáveres entregados. Recuerdo que quedaron a lo último aproximadamente 10 cadáveres en avanzado estado de calcinación que no pudieron ser identificados y que fueron remitidos a fosa común*" (sic).

Resalta que igual obra el oficio del 18 de noviembre de 1985 del Instituto Nacional de Medicina Legal donde se relacionan los cadáveres retirados el 9 de ese mismo mes y año por orden del Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar y el Oficio del Juzgado 23 de Instrucción Criminal Ambulante dirigido al señor Juez 78 de Instrucción Penal Militar solicitándole ampliar certificación jurada del por qué, existiendo 94 cadáveres, solo mando retirar 25 de ellos.

Dice que los demás procesados fueron llamados a juicio por el oficio que señala que participaron de las actividades del B-2, firmado por el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, pero el mismo no da fe que estuvieran desapareciendo personas, por lo que no puede tenerse como indicio de responsabilidad, pues de ser así, pregunta, dónde están los procesos de los miembros de la policía que fueron documentados en las mismas circunstancias que los del B-2.

Teniendo los argumentos planteados, considera que lo sucedido el 6 y 7 noviembre de 1985 fue ocasionado por el grupo subversivo indultados M-19, "*perseguidos por un indultado de ese mismo grupo. Alguien no cumplió con su trabajo, para que los familiares de aquellos asesinados por el M-19 en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1986 dieran sepultura a sus cuerpos, lo que se aprovechó para seguir con la indolente persecución al ejército nacional, pues solo son los militares procesados por este hecho, ya que los del M-19 fueron indultados*" (sic).

Concluida la intervención de los procesados, hace uso de la palabra la bancada de la defensa.

El **defensor de ANTONIO RUBAY JIMENEZ** y **LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA** inició su intervención haciendo cuestionamientos puntuales a las conclusiones contenidas en la acusación respecto a los supuestos comportamientos desplegados por los vinculados y en particular por sus prohijados.

Respecto a que "*a. Los señores mencionados realizaron una operación de control en el museo del 20 de Julio tendiente a establecer, "tiempo, terreno y enemigo", en cumplimiento de la labor de inteligencia que adelantaba el B2 del cual era jefe el Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien se apoyó en sus hombres Vasquez Rodriguez, Nieto Velandia, Causaya Peña, RubayJimenez, para que cumplieran la labor asignada que era "colaborar en la recepción e identificación del personal liberado del Palacio de Justicia*", manifiesta que no le asiste razón a la Fiscalía en sus señalamientos, toda vez que los sargentos NIETO VELANDIA y RUBAY JIMENEZ en ningún momento de los días 6 y 7 de noviembre de 1985 colaboraron de manera alguna en la recepción e identificación del personal liberado del Palacio de Justicia.

Considera inexplicable e ilógico que los dos sargentos adscritos al B-2, bajo órdenes del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO,

hubiesen llevado a cabo dicha tarea, cuando fueron muchas las personas que salieron rescatadas del Palacio de Justicia, encontrándose plenamente demostrado que existió un sin número de miembros no identificados ni individualizados de otras autoridades, fuerzas institucionales y organismos de seguridad del Estado como la Policía Nacional, F2, GOES, que sí se encontraban en la Casa Museo del Florero llevando a cabo las mencionadas labores.

En cuanto a "*b. Que el control operativo implicaba el manejo centralizado en cabeza del ejército"*, aduce que es un hecho cierto que no tiene discusión, dado que el control operativo de la situación implicaba el manejo centralizado del ejército, toda vez que se ejecutó una operación militar encaminada a restablecer el orden público en el Palacio de Justicia; siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Nacional - Plan Tricolor 83, diseñado y expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y cada una de las Fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, siendo claro que dicha operación militar se llevó a cabo cumpliendo órdenes superiores dentro de una cadena de mando preestablecida.

Sin embargo no se puede olvidar que participaron activamente miembros de otras fuerzas como la Policía Nacional, Dijin, Sijin, F2, GOES, que incluso estaban de civil, así como personal de la Cruz Roja y la Defensa Civil, todo bajo el marco de legalidad vigente para el año 1985.

En cuanto a *"c. Que el sitio donde eran llevadas las personas que salieron vivas, era la Casa Museo del Florero.*", resalta que ello es cierto, pero no es una verdad absoluta, por cuanto si bien las personas que salieron vivas eran llevadas a la Casa del Florero, también lo es que se condujeron a Hospitales, al Palacio Liévano, a Estaciones de

Policía, y hubo muchos que se desplazaron a sus respectivos domicilios, enfatizando que las personas que salieron con vida no solo salieron por la puerta principal del Palacio, sino también por la Carrera 8ª, toda vez que se evacuaron heridos y personas por parte de la Policía Nacional, y ello a su vez fue registrado por una cámara que los enfocó.

En punto a *"d. Que Carlos Rodríguez Vera (administrador de la cafetería), Cristina del Pilar Guarín (cajera temporal), E Irma Franco Pineda salieron vivos del Palacio de Justicia, ingresaron a la Casa Museo 20 de Julio y hoy no aparecen.*", refiere que no hay prueba de ello, así como tampoco obra prueba que genere certeza de que sus defendidos recibieron a dichas personas, las interrogaron, elaboraron las listas y mucho menos que posteriormente las desaparecieron.

Frente a CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA señala que según afirma la Fiscalía existen "*MULTIPLES*" declaraciones en las que aparece plenamente probado que salió con vida del Palacio de Justicia, sin embargo ese juicio de valor se emite atendiendo las declaraciones de su padre, de su esposa y del entonces Asesor Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, CESAR SANCHEZ CUESTA.

Se refiere a la declaración de fecha 20 de febrero del 2006 rendida por el señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ, padre del presunto desaparecido, especialmente sobre el reconocimiento a través de videos recogidos en inspección a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en donde afirma que le parece reconocer a su hijo pero que no puede asegurarlo.

Señala que posteriormente, en la cinta 291 ¾ exhibida el 15 de mayo de 2006 en instalaciones de TVE, del record 00:10:20 al 00:15:49 el testigo afirma que "*…no podría asegurarlo pero la persona que allí aparece se parece mucho a su hijo…*".

Hace mención a la ampliación de declaración del padre de CARLOS RODRIGUEZ, en donde este testigo afirmó que *"...CARLOS ARIEL SERRANO SANCHEZ, es el abogado del que le estoy hablando, pero no había recordado el nombre... CARLOS SERRANO inmediatamente salió de la casa del florero me llamó y me dio la información de que allá vio a CARLOS que lo habían subido al segundo piso y le habían dicho que lo habían llevado herido y me mencionó una cantidad de cosas...* ".

Sin embargo, frente a esta afirmación trae a colación la declaración rendida por el Doctor CARLOS ARIEL SERRANO SANCHEZ, en la cual manifestó "*…que el señor ENRIQUE debe estar equivocado porque él nunca vio a CARLOS RODRIGUEZ en ningún lado, ni en la cafetería, ni en la biblioteca, ni en la Casa del Florero, y mucho menos que lo hayan subido al segundo piso, que de haberlo visto hubiera sido el primero en avisarle…*".

De lo anterior colige que ENRIQUE RODRIGUEZ no reconoció a su hijo, porque en dos oportunidades manifestó que le parecía que era él, y el testigo que citó para corroborar que su hijo había estado en la Casa del Florero, lo desmintió.

Frente a la otra testigo, esto es, CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, refiere la declaración rendida el 21 de julio de 2006, en la que frente a los videos que le fueron puestos de presente afirmó: *" … la persona de buzo azul que también sale en el centro de la pantalla, dirigiéndose a la Casa del Florero (izquierda a derecha de la pantalla) <u>podría tratarse de su esposo</u>, por el cabello y la fisonomía de la cara (sic) la estatura, el cuerpo, por la forma de correr...la declarante preguntó si la persona con buso (sic) azul tenía bigote (efectivamente lo tiene) y afirma que su esposo Carlos Augusto ese día tenía bigote...*".

Alega que se debe tener en cuenta que la declarante señaló que podría tratarse de su esposo. Además, en su sentir, ese reconocimiento fue inducido, por cuanto la imagen no tenía la suficiente nitidez como para aseverar que la persona que venía con buzo azul tenía bigote o no, aspecto que, aduce, le fue confirmado

por la Fiscalía en el desarrollo de la diligencia.

Considera aún más extraño que en esa declaración solo refirió la posibilidad de reconocer a su esposo, pero nada dijo de los demás supuestos desaparecidos, cuyas imágenes se aprecian en secuencias anteriores y posteriores a la supuesta salida de CARLOS RODRIGUEZ. Sin embargo, cuando se realiza la misma diligencia el 2 de agosto de 2006, pero ya sobre el video marcado como DVD N° 2, recogido en las instalaciones de Caracol Televisión, afirma que sin lugar a dudas reconoce a BERNARDO BELTRAN, HECTOR JAIME BELTRAN, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, a CRISTINA DEL PILAR GUARIN, DAVID SUSPES CELIS, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA LIZARAZO y ANA ROSA CASTIBLANCO.

De manera, aduce que lo señalado por la Fiscalía en cuanto a que la esposa de CARLOS RODRIGUEZ lo reconoció en diligencia del 21 de julio de 2006 no es cierto, por cuanto lo señalado por ella fue que podría tratarse de él pero no estaba segura.

Ahora, en diligencia del 16 de agosto de 2007 la testigo afirma que "*… en el punto 00:36:04 continúan saliendo rehenes,* ***veo a CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, mi esposo. Se deja constancia por el despacho que la secuencia va hasta el 00:36:14. Veo a CARLOS con la misma ropa que salió ese día para el PALACIO, su cabello, la forma como él se peinaba, él se peinaba hacia atrás y se la caía así, hacia los lados, lo identifico por su bigote, poblado, por sus cejas, el lóbulo de la cara, su porte, su estatura y su cuerpo, veo que va asido de los dos brazos, agarrado por dos soldados .... lo identifico por su forma de correr.***" (Negrillas del texto). Sin embargo, señala el defensor, se debe tener en cuenta lo manifestado por ella misma en una declaración rendida 22 años antes, esto es, el 25 de noviembre de 1985, recién ocurridos los hechos del Palacio de Justicia, en donde respecto a la manera como estaba vestido su esposo ese día manifestó:

"*PREGUNTADA: Sírvase hacer una descripción precisa de la forma como vestía su esposo el día de los hechos. CONTESTO: Estaba vestido pantalón de paño gris medio, camisa en tela gris oscuro marca Roland, Buso gris claro en algodón por fuera y el interior en lanilla blanca; botas de cuero gris cortas con ojal esta en argolla, medias grises. Estatura 1.78 edad 29 años, nacimiento julio 26 de 1956, nariz recta, boca pequeña, cabellos castaños obscuros (sic) frente amplia, tez blanca, usaba bigotes gafas con aro metálico dorado, presenta amputación de los dedos pulgar, índice y medio del pié izquierdo, perdidos en un accidente, tiene espigo en oro en el diente contiguo al canino derecho.*".

A partir de lo anterior refuta que al observarse las imágenes de las secuencias de video en las que CECILIA CABRERA manifiesta reconocer a su esposo, es evidente que las prendas que porta el individuo que sale del Palacio de Justicia no se ajustan de ninguna manera al vestido que a solo 12 días de los hechos describió la declarante y que corresponde a la misma descripción que ha hecho en todas las declaraciones que obran en el expediente.

Considera que los reconocimientos realizados por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA no ofrecen ninguna credibilidad, por la incongruencia de que se afirme que el día 6 de noviembre de 1985 CARLOS RODRIGUEZ portaba un tipo y color de prendas determinado y se le reconozca saliendo con otras diferentes, aunado ello a que en una de las diligencias de reconocimiento, al observar la misma secuencia, la testigo dijo que podría ser su esposo pero no estaba segura.

En el mismo sentido señala que en "*sombra de duda*" se encuentran los reconocimientos hechos por CECILIA CABRERA GUERRA respecto de las demás personas que laboraban en la cafetería.

Lo anterior por cuanto a CRISTINA DEL PILAR GUARIN no la conocía sino hacía poco tiempo y solo había compartido con ella dos o tres días, y frente a BERNARDO BELTRAN primero dijo que no había compartido con él mucho tiempo y luego se contradijo

diciendo que había estado con él 4 o 5 meses, pese a que la realidad probatoria la desmiente, pues éste solo llevaba dos meses trabajando en la cafetería, y CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA se había incapacitado hacía un mes, por lo que por mucho había estado con él un mes.

Igual hace mención al testimonio de CESAR ENRIQUE RODRÍGUEZ VERA, de fecha 11 de Septiembre de 2006, donde, al exhibirle el DVD marcado como N° 2, recogido en las instalaciones de Caracol Televisión, señaló que "…*reafirmando que para la fecha de los hechos solo conocía a Cristina del Pilar Guarín Cortés, reconoce a las siguientes personas: Bernardo Beltrán (00:32:50 a 00:32:56); Héctor Jaime Beltrán (00:33:02 a 00:32:15), Carlos Augusto Rodríguez Vera (00:33:26 a 00:33:36)m Cristina del Pilar Guarín Cortés (00:33:42 al 00:33:43), Ana Rosa Castiblanco (00:33:50); David Suárez Celis (00:34:02); Gloria Anzola (00.34.14); y, Norma Constanza Esguerra (00.34.27). No más*". No obstante al final de la diligencia, cuando se le manifiesta si tiene algo más que agregar a la diligencia, señaló que "... *Pues no, solamente que pues la imagen de* ***la persona que sale en el video de la Televisión Española con el suéter azul, se me hace sumamente parecido a mi hermano, pues no absolutamente seguro pero puede ser él...***", para concluir que el declarante no está seguro que sea su hermano.

Frente a CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, cuestiona el reconocimiento en video realizado por RENE GUARIN CORTES, de quien indica surgen incoherencias y confusiones, ya que en la primera parte de su declaración señala que ese día su hermana tenía una *"falda a cuadros rojos y azules escocesa, una blusa rosada*", y posteriormente, en el video de la Televisión Española, reconoce a alguien que podría ser su hermana de "*vestido oscuro (azul) blusa rosada*" y en un aparte siguiente del video la reconoce vestida de "*falda escocesa y blusa rosada o roja*", con lo que no encuentra ningún grado de precisión y concordancia en el reconocimiento hecho por GUARIN.

Afirma que el motivo de la confusión obedece a que RENE GUARIN no vio el día 6 de noviembre de 1985 cómo estaba vestida su hermana.

Resalta lo señalado por RENE GUARÍN en cuanto a que "*A partir del 7 nos fuimos a buscar al abogado del colectivo JOSE ALVEAR RESTREPO, al doctor JOSE EDUARDO UMAÑA MENDOZA para por intermedio de él, comenzar a hacer una exigencia al Estado sobre el paradero de mi hermana. Fue así como pudimos establecer que curiosamente los desaparecidos correspondían a las personas que estaban trabajando en la cafetería del palacio de justicia, junto con tres visitantes y una guerrillera de nombre IRMA FRANCO PINEDA.*", para concluir que se vislumbra su interés por situarse en cercanías del Palacio de Justicia para el 7 de noviembre de 1985, resultando extraño que para ese momento tuviera conocimiento de la desaparición de todos los empleados de la cafetería, tres visitantes y una guerrillera, cuando ni siquiera los propios familiares tenían conocimiento de la supuesta desaparición, y menos supieran que IRMA FRANCO era guerrillera y que había desaparecido.

Pero a más llama la atención sobre el hecho de que eso no fue lo señalado por este deponente en declaración rendida el 13 de noviembre de 1986, en donde al ser interrogado sobre si había realizado indagaciones ante las autoridades con el objeto de establecer la localización de CRISTINA GUARIN "*CONTESTO: Personalmente no he realizado ninguna diligencia, me enteré que el Procurador General anterior JIMENES (SIC) GOMEZ realizó una visita al Charry Solano que tuvo resultados negativos.*".

Hace referencia al reconocimiento llevado a cabo por RENE GUARIN sobre el video obtenido en inspección judicial a la residencia del Coronel PLAZAS VEGA, que en similares condiciones realizó frente al video aportado por la señora ANA MARIA BIDEGAIN DE URAN, para destacar que en este reconocimiento describe a CRISTINA DEL PILAR con una ropa diferente a la

descrita en las diligencias anteriores, cambiando su versión y señalando que la blusa que tenía su hermana era roja y no rosada.

De otro lado, CECILIA CABRERA GUERRA el 16 de agosto de 2007 aduce reconocer en video a CRISTINA DEL PILAR, pero, dice el abogado, si esta testigo había compartido con CRISTINA DEL PILAR solo tres o cuatro días anteriores al 1º de octubre de 1985, no se entiende cómo es posible que la reconozca en el video, máxime cuando en una anterior diligencia, en la que se le enseñó el video de la Televisión Española, donde se aprecia la misma imagen en la que supuestamente sale CRISTINA, la declarante no la reconoció, señalando que no la conocía muy bien porque solo había compartido con ella tres o cuatro días.

Alega que independientemente de lo cuestionable que resulta tanto el procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía como las conclusiones a que se pueda llegar de las mencionadas diligencias, lo que resulta claro es que las únicas personas que vieron salir de su casa el 6 de noviembre de 1985 a CRISTINA DEL PILAR GUARIN fueron sus padres.

Señala que en 1985 la señora ELSA MARIA OSORIO DE ACOSTA, en declaración que obra en el plenario, además de indicar que "*llevaba un mes y algunos días como cajera de la cafetería*" y que "*tenía un implante dental*", describió con lujo de detalle la manera como su hija estaba vestida ese día, indicando que vestía "*... falda café oscura con rayitas en la parte de abajo habanas, una blusa color rosado suave, con unos metidos de encaje, una chaqueta de paño color beige, medias habanas y zapatos habanos, bolso larguito color beige o cafecito claro, esa era la vestimenta*" con lo que, para el togado, se demuestra que el reconocimiento hecho por RENE GUARIN y CECILIA CABRERA GUERRA es "*absolutamente falto a la verdad*", por cuanto las prendas de vestir que ellos describen y que se aprecian en el video no

corresponden a las que ese día tenía CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, lo que se suma a las graves inconsistencias y contradicciones que se destacan en las declaraciones de la señora CABRERA GUERRA.

A lo dicho agrega las diferentes declaraciones rendidas por MARIA NELFI DIAZ, empleada del Palacio de Justicia, quien ha repetido hasta la saciedad, tanto en declaraciones tomadas en este proceso como en las otras causas, que esa persona que sale a hombros de un soldado es ella.

Señala que en Diligencia de Inspección realizada a los videocasetes 2, 11 y 15 por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante el 5 de febrero de 1988 MARIA NELFY DIAZ se reconoció saliendo del Palacio de Justicia a hombros de un Soldado, en la misma imagen que había sido identificada por JOSE MARIA GUARIN ORTIZ como correspondiente a su hija CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES.

En esa misma diligencia contó la declarante que esa secuencia fue vista el día de los hechos en televisión por sus hijos JULIO CESAR VALENCIA DIAZ y HUMBERTO VALENCIA DIAZ, quienes la reconocieron en la toma de un noticiero de televisión, teniendo el convencimiento de que había salido viva de estos trágicos hechos.

Agrega el defensor que no solo MARIA NELFY DIAZ se ha reconocido en la citada imagen, sino que también lo han hecho compañeras de trabajo que tuvieron la oportunidad de observar los videos en la diligencia realizada ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal el 5 de febrero de 1988, tal como lo hicieron la Doctora MARIA YINED REYES DE PEREZ, funcionaria rescatada del Palacio de Justicia, y CONSUELO GUZMAN DE OSPINA, también secuestrada y rescatada de dicha edificación.

Así, concluye que no solo MARIA NELFY DIAZ se ha identificado

como la persona que sale en los videos a hombros de un soldado y que según las imágenes en efecto lleva una falda escocesa y una blusa roja, sino cuatro (4) personas más, entre ellas sus propios hijos, lo cual ha sido ratificado desde su primera declaración sin haber variado hasta el día de hoy.

Alega que no se puede desconocer la prueba que obra dentro del proceso, tal como el dictamen pericial denominado Informe 374870 del 11 de diciembre de 2007, correspondiente al Cotejo de imágenes de video de "*ALGUNOS DE LOS DESAPARECIDOS*" con las fotografías obrantes en el proceso, rendido por el CTI, Grupo de Policía Judicial, en donde se concluyó que las imágenes de los videos no reúnen las características mínimas necesarias para cotejo morfológico.

Por manera, considera que contraviniendo la opinión de los expertos en la materia, la Fiscal estimó de motu proprio que ella podía realizar el cotejo y con ello desvirtuar lo que se ha probado hasta la saciedad en el proceso: que la imagen de video en la cual sale una mujer a hombros de un soldado del Ejército corresponde a MARIA NELFI DIAZ y no a CRISTINA DEL PILAR GUARIN.

Respecto a que, según la acusación, "*e. …. puede construirse probatoriamente que fueron sometidos al mismo interrogatorio al que se les sometió a los demás liberados, pero además que fueron especialmente manejados por lo menos Carlos Rodríguez Irma Franco Pineda, tanto así que ameritó una escolta especial*.", refiere que en ninguna de las declaraciones que obran en el plenario se hace mención directa de los Sargentos NIETO VELANDIA y RUBAY JIMENEZ en relación con el presunto manejo dado a CARLOS RODRÍGUEZ y a IRMA FRANCO PINEDA, ni mucho menos que hayan estado encargados de *la "escolta especial"* que supuestamente se les dio a estas personas.

Insiste en que sus prohijados no tuvieron contacto con las personas que ingresaron a la Casa Museo del Florero y que permanecieron en las instalaciones de la misma, y nunca tuvieron una relación directa con los mal llamados "*retenidos*".

Agrega que esa deducción la hace la Fiscalía atendiendo lo consignado en el oficio 0027 de 27 de enero de 1986, suscrito por el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, Comandante del B2, por cuanto en dicho documento se hace relación del personal adscrito al B2 para la fecha de los hechos, pero arguye que su contenido no demuestra que los mismos hayan colaborado en las actividades de recepción e identificación de las personas rescatadas del Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que, como lo han manifestado sus prohijados en diferentes declaraciones, no estuvieron en la Casa del Florero para los días 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que estuvieron realizando otra clase de actividades, las cuales han sido señaladas por ellos.

Considera que tampoco se puede asegurar que sus representados ostentaron posición de garante institucional frente a las personas que supuestamente salieron con vida del Palacio de Justicia, y apoyándose en lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de febrero de 2009, Radicado 26409, MP. Sigfredo Espinosa Pérez, señala que bien sea por la responsabilidad como autor mediato por estructura organizada de poder, que se señala en la sentencia, o por la coautoría impropia que se atribuye en la acusación, respecto de los sargentos NIETO VELANDIA y RUBAY JIMENEZ no existen pruebas que permitan atribuirles la posición de garantes, pues no está demostrado que tuvieron bajo su órbita funcional y de cuidado a cualquiera de las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia.

En tal sentido, considera que para endilgarle responsabilidad penal a los procesados hacen falta verdaderas pruebas, pues no se encuentra una sola prueba creíble que los vincule con la única persona cuya desaparición forzada está presuntamente documentada, que es la miembro de la organización guerrillera, IRMA FRANCO.

Considera que, en su totalidad, las referencias al B-2 del Ejército Nacional y a los aquí procesados son malintencionadas o dirigidas a buscar fines diferentes al esclarecimiento de los hechos, puesto que parten de generalidades como hecho indicador de una hipótesis – teoría del caso, más aún cuando en todas las declaraciones e injuradas surtidas en la presente causa ninguno de los declarantes manifiesta ni hace una plena identificación e individualización, por los nombres y rangos, de sus prohijados, que los relacionen directa o indirectamente con las presuntas desapariciones que conllevaron a este juicio.

Ahora, el cumplimiento de las labores de Inteligencia, que en su criterio no eran otras que encontrar a las personas que participaron en la toma del Palacio de Justicia y a quienes habían colaborado para ello, de haber sus prohijados llevado a cabo esas actividades, obedeció a funciones propias de los protocolos de inteligencia, los cuales se encuentran establecidos dentro del marco jurídico de las Fuerzas Militares, que per se no pueden catalogarse como directrices para delinquir.

Para el abogado, tal como lo señala la Fiscalía, existió una verdadera división del trabajo pues a unos les correspondió la parte operativa y a otros la parte de inteligencia a fin de establecer variables fundamentales para llevar a cabo la parte operativa. Sin

embargo, los miembros del B2, de conformidad a lo dispuesto en el Manual de Inteligencia de Combate que obra en el plenario, nunca llevaban a cabo la parte operativa que se ejercía con soporte en la información legalmente obtenida, y nunca utilizaban la información con fines delictivos, como los que hoy son objeto de reproche.

Con la información procesada lo que se hacía, y actualmente se hace, es controlar, conjurar o evitar más acciones terroristas o desmantelar la existente y al grupo que estaba actuando, pero dentro de un marco de legalidad, siendo erróneo y grave interpretar que por ser miembro del B2 del Ejército Nacional y por cumplir funciones de inteligencia se es un delincuente.

Insiste el togado en que si bien el Teniente Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, al mando del B2, presuntamente coordinó el recibo, identificación, registro y entrevista de los rehenes liberados que fueron trasladados a la Casa del Florero, no por ello se puede predicar responsabilidad penal de sus prohijados, quienes en las injuradas, así como al ejercer la defensa material en la vista pública, han sido enfáticos en manifestar que para las fechas de los hechos no se encontraban en la Casa del Florero**.**

En cumplimiento de órdenes dentro de la cadena de mando, asegura el abogado, el Sargento NIETO VELANDIA el día 6 de noviembre de 1985, por orden directa del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, estuvo prestando acompañamiento al General ARIAS CABRALES, comandante de la Brigada, al interior del Palacio de Justicia; posteriormente estuvo alrededor de la Casa del Florero con el fin de estar atento a la eventual presencia de elementos del M-19 en apoyo a la incursión al Palacio de Justicia, para posteriormente, en horas de la noche, por órdenes igualmente del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, dirigirse a la Brigada XIII a fin de elaborar un

documento sobre los hechos que estaban sucediendo, para ser presentado al Comando Superior.

Labor encomendada a NIETO VELANDIA atendiendo que para la época se desempeñaba como analista del blanco M-19; función que venía desarrollando por un término de dos años y ocho meses y lo hacía persona idónea para elaborar dicho documento, que relacionaba las actuaciones realizadas por el M-19 antes de la incursión al Palacio de Justicia. Documento entregado al Capitán CÁRDENAS OVANDO, quien a su vez lo envió con un suboficial del Ejército a la Casa del Florero el 7 de noviembre de 1985 en horas de la tarde.

En el caso de RUBAY JIMENEZ, quien para la época de los hechos trabajaba recaudando información de inteligencia del Blanco EPL, afirma que el día 6 de noviembre de 1985, a las 18 horas (6:00pm), por orden del Mayor JORGE GONZÁLEZ FORERO, se desplazó hacia la Plaza de Bolívar a llevar un capote (prenda que se coloca encima del vestido) y la comida al Comandante de la Brigada, General ARIAS CABRALES, desplazándose hasta la Casa Museo 20 de Julio, en donde permaneció hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y luego de dirigirse a la Brigada le dieron la orden de regresar nuevamente a llevarle el desayuno al General ARIAS, al Coronel SÁNCHEZ y al Coronel CARVAJAL, al igual que unas raciones de campaña para el personal.

Al llegar al museo 20 de Julio le dieron la misión de permanecer allí cargando unos radios, es decir, enchufándolos a un cargador de radio, puesto que se utilizaban radios transmisor y receptor; permaneciendo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin poderse retirar porque se podían perder los elementos. Además debía prestar seguridad en la parte externa de la Casa del Florero, y

el 7 de noviembre a las 2:00 p.m. el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO le ordenó escoltar al General ARIAS CABRALES al Palacio de Justicia, y luego de ello se desplazó a su domicilio.

Por consiguiente, su defendido no colaboró en momento alguno en recibir entrevistas al personal rescatado del Palacio de Justicia.

Señala el defensor que para la Fiscalía se encuentra probado que los sargentos NIETO VELANDIA y RUBAY JIMENEZ eran especialistas en inteligencia de mucha experiencia y conocimiento del tema, pero con sus hojas de vida, obrantes en el plenario, se demuestra que ellos tuvieron carreras militares en calidad de suboficiales pero nunca tuvieron formación integral y extensa para haber sido "*ESPECIALISTAS EN INTELIGENCIA*".

Afirma que LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA fue suboficial y se desempeñó en el arma de artillería como comandante de escuadra, comandante de pieza de artillería, y en marzo de 1983 fue trasladado en comisión de servicios a la Brigada de Institutos Militares y se le asignaron algunas funciones en el Blanco M-19 como Jefe de Blanco, sin tener formación militar en Inteligencia.

Básicamente sus funciones consistían en recopilar y canalizar información del grupo subversivo M-19, recibiendo el Comando de la Décimo Tercera Brigada (BR-13) los resúmenes semanales de inteligencia de las unidades bajo su control, contando cada unidad con una sección de inteligencia que se le denominaba S-2 y blancos del M-19 – FARC-ELN-EPL y contrainteligencia, de manera que sus prohijados no eran las únicas personas que recopilaban información del blanco M-19, pues cada una de las unidades que se encontraban bajo el control de la Brigada 13 cumplían la misma función.

Afirma que la información recepcionada pasaba al Jefe del B-2, quien tomaba las decisiones pertinentes; pasando luego al jefe de la sección de análisis, sin que el B-2 de la Brigada desarrollara operaciones militares como tal, pues simplemente transmitía información legalmente obtenida.

Agrega que tal y como obra en el respectivo folio de vida, a partir del 30 de enero de 1984 a LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA lo asignaron como Analista del Blanco M-19 para poder cumplir con uno de los requisitos para efectos de pensión de vejez, dado que tenía problemas de salud en el oído y por esa razón no pudo seguir en el arma de artillería, sin que contara con la experiencia ni la formación necesaria para desempeñar dicho cargo, ni tenia mando ni injerencia en la toma de decisiones relacionadas con la información obtenida dentro del ciclo de inteligencia, siendo hasta el 19 de agosto de 1988 que inició un curso básico de inteligencia que culminó el 1° de noviembre de 1988, esto es, 3 años después de ocurridos los hechos del Palacio de Justicia.

En cuanto al sargento ANTONIO RUBAY JIMENEZ GÓMEZ, fue capacitado con un curso de mecánica automotriz, desempeñándose como instructor de mecánica y conducción de los carros de reconocimiento liviano, y como Jefe de la Sección de Transporte, siendo en octubre de 1984 trasladado en comisión de servicios a la Brigada de Institutos Militares, al B-2, y fue asignado al Blanco EPL, sin tener formación militar en inteligencia ni poseer la experiencia ni la formación necesaria para desempeñar dicho cargo. Tampoco tenía mando ni injerencia en la toma de decisiones relacionadas con la información obtenida dentro del ciclo de inteligencia.

Concluye que los sargentos a quienes defiende no eran expertos en inteligencia de combate, labor desempeñada por militares especialistas en inteligencia destacados ante la DINTE, Dirección de Inteligencia, y el Batallón Charry Solano.

En cuanto a la prueba indiciara grave aducida por la Fiscalía en contra de sus prohijados, con base en la cual les endilga responsabilidad como coautores del delito de desaparición forzada agravada, parte de atribuirles participación en el proceso de individualización, registro e interrogatorio, lo que considera es una afirmación "*tendenciosa, grave, antijuridica*", por cuanto la Fiscalía realiza esa inferencia asumiendo que sus defendidos eran analistas de Inteligencia destacados ante el B-2, capacitados para individualizar, registrar e interrogar, considerando tal valoración un yerro de la Fiscalía por la mala apreciación y valoración que hace respecto de la Inteligencia Militar y las personas que la ejercían.

Señala que la Fiscalía construye tal hipótesis olvidando que dentro de la gran cantidad de declaraciones, injuradas y diligencias de exhibición de videos que obran en el plenario, ninguno de los declarantes, de los familiares de los presuntos desaparecidos, e inclusive de las personas que según el dicho de la Fiscalía fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos en el segundo piso de la Casa del Florero y en instalaciones militares, ni el custodio de IRMA FRANCO, EDGAR MORENO FIGUEROA, militar activo para la fecha de los hechos, hicieron alusión directa de los sargentos, pues, pese a que portaban sus uniformes, nunca los testimonios los ubicaron en el segundo piso de la Casa del Florero elaborando listas, ni menos interrogando.

Incluso, señala, a la vista pública comparecieron diferentes declarantes y jamás hicieron un reconocimiento en estrados de sus

prohijados o manifestaron que fueran los responsables de la identificación, interrogatorios y desaparición de las presuntas víctimas.

Ahora, en cuanto la existencia de prueba indiciaria grave contra sus prohijados, apoyado en una extensa cita de la obra "*Lógica de las Pruebas en Materia Criminal*", de Nicola Framarino Dei Malatesta, resalta el deber del funcionario judicial de mencionar cuál es el hecho indicador que ha demostrado dentro del proceso y cuál es la regla de experiencia empleada para llegar al hecho indicado. En otras palabras se debe indicar expresamente la manera como se construye el indicio, so pena de incurrir en falta de motivación que conduciría a una eventual nulidad.

Señala que para el ente acusador está probada la desaparición de 11 personas, sin que, en su sentir, dentro del plenario se evidencie prueba de ello, así como tampoco obra prueba que genere certeza en cuanto a que sus prohijados recibieron a dichas personas, las interrogaron, elaboraron las listas y menos que posteriormente las desaparecieron.

Considera el togado que todas las pruebas relacionadas por el ente instructor, con las cuales se sustenta la acusación en contra de sus prohijados, tienen una particularidad y una semejanza, y es que de su valoración, ninguna deriva responsabilidad penal a sus patrocinados ni tampoco logran probar la teoría del caso de la Fiscalía, por cuanto dentro de la gran cantidad de declaraciones, injuradas y exhibición de videos que obran en el plenario nunca se hizo alusión directa y plena individualización e identificación de los sargentos.

Frente al testimonio de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL y la prueba grafológica ordenada por este Despacho con el fin de establecer si

la firma que aparece en la declaración de agosto de 2007 como de EDGAR VILLARREAL tiene uniprocedencia con la de aquel, considera que atendiendo la experticia que se llevó a cabo por parte de Medicina Legal se debe tener en cuenta que para la experticia se incluyeron documentos que el investigador del CTI no cotejó al momento de realizar su estudio, por lo cual estima que el dictamen emitido por Medicina Legal es acorde con la realidad, habiéndose concluido que no se permite emitir un pronunciamiento técnicamente fundamentado.

Por lo anterior, insiste en que se le otorgue mayor credibilidad al dictamen de Medicina Legal para dar por demostrado que entre la firma de duda y las indubitadas tenidas en cuenta por Medicina Legal no existe uniprocedencia manuscritural.

De manera subsidiaria, en caso de no prosperar la anterior solicitud, peticiona que se tenga en cuenta que VILLAMIZAR ESPINEL ha manifestado en la presente causa que la declaración cuestionada no fue rendida por él, por lo cual el contenido y conclusiones obtenidos de la misma serian inexistentes y no probarían nada frente a sus patrocinados.

Sintetiza el señor defensor, haciendo referencia al documental periodístico denominado “28 Horas que cambiaron a Colombia” que las personas rescatadas del Palacio de Justicia no solo fueron conducidas a la Casa del Florero sino a otros sitios como el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que el manejo de los rehenes liberados no solo fue realizado por personal del Ejército sino por personal de la Policía Nacional, F2, D.A.S., Cruz Roja, Defensa Civil, Dijin y Sijin.

Aunado a ello se presentaron situaciones relevantes, tales como el manejo dado a los cadáveres y a las evidencias recolectadas en el interior del Palacio de Justicia, sin el cumplimiento de protocolos de cadena de custodia, ni técnicas de manejo de la escena del crimen.

Con fundamento en lo anterior, solicita se dicte sentencia de carácter absolutorio a favor de sus patrocinados, al considerar que no se cumple con lo dispuesto en el art. 232 de la ley 600 de 2000 para condenar.

El abogado **defensor del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIAN**O comienza por asegurar que el hecho por el que se acusó a su prohijado no existió, pues en su criterio no hay desaparecidos.

Precisa que solo hará mención a diez de las once personas que se dice desaparecidas, en razón a que a su representado no se le acusó por IRMA FRANCO PINEDA.

De LUCY AMPARO OVIEDO dice que sus padres señalan que la persona que se registra en los videos saliendo del Palacio no es su hija, por cuanto no reconocen las prendas que vestía el día de los hechos, y eso unido a que NUBIA STELLA HURTADO TORRES reconoce que es ella la persona que aparece en los registros fílmicos, le permite concluir, entonces, que la persona que a través de videos se reconoce como LUCY AMPARO OVIEDO saliendo del Palacio de Justicia en verdad corresponde a la señora NUBIA STELLA HURTADO.

Igual refiere que la persona que en los registros fílmicos se identificó como CRISTINA DEL PILAR GUARIN en realidad corresponde a MARIA NELFI DIAZ, quien al observar los videos se reconoció cuando era llevada en hombros por un soldado.

Resalta lo señalado por NUBIA ESTELA HURTADO TORRES, quien asegura que CARLOS RODRIGUEZ, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ y JAIME BELTRAN FUENTES en ningún momento estuvieron en el baño junto a los demás rehenes.

Considera desvirtuado lo indicado por la fiscalía, no solo por el reconocimiento que de sí misma hace MARIA NELFI DIAZ, sino por el reconocimiento que hacen la doctora MARIA YINED REYES de PEREZ y la señora CONSUELO GUZMAN DE OSPINA, quienes corroboran que la persona con falda escocesa que sale en hombros de un soldado es MARIA NELFI DIAZ.

Hace referencia a la declaración rendida por JOSE ANTONIO SANCHEZ BORDA, obrero del cementerio del sur, con quien en su sentir se demuestra que CRISTINA DEL PILAR GUARIN falleció en el Palacio de Justicia y fue enterrada en el cementerio del sur.

En cuanto a GLORIA ANZOLA DE LANAO, hace referencia el defensor a lo señalado por MARIA NELFI DIAZ, en cuanto a que, entre las personas que se encontraban en el baño, la única que no era ni de la Corte ni del Consejo de Estado le comentó que era abogada litigante y esa persona murió en el baño, lo cual hila con lo expuesto por el señor ROMULO ANZOLA LINARES, padre de GLORIA, quien refiere que su hija era abogada, de 30 años de edad, que llevaba varios negocios, inclusive ante la Corte, y tenía por costumbre dejar su carro en el parqueadero de Palacio de Justicia, para concluir que esas dos versiones permiten ver que se trata de la misma persona: GLORIA ANZOLA DE LANAO, por lo que llega a la convicción que ella murió en el baño del tercer piso y fue

enterrada en el cementerio del sur, considerando que no se encuentra desaparecida sino sin identificar.

En punto a DAVID SUSPES CELIS, chef de la cafetería, pone en tela de juicio la declaración rendida por la señora CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, quien lo identifica en los registros fílmicos, pues en declaración rendida en audiencia del 24 de enero de 2012 HECTOR DARIO CORREA TAMAYO se reconoce como la persona que aparece saliendo del Palacio con las manos en alto y que fue señalada como DAVID SUSPEZ CELIS.

Por consiguiente, considera demostrado que DAVID SUSPEZ CELIS no salió del Palacio de Justicia y por tanto no se puede imputar a los miembros del B-2, menos al Coronel SANCHEZ RUBIANO, una desaparición que no ocurrió.

Frente a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, hace referencia a la declaración rendida por su padre el 20 de febrero de 2006, quien sostuvo que a su hijo lo tenían en la Casa del Florero, que recorrió hospitales y el anfiteatro de Medicina Legal, pero nunca lo volvió a ver.

Sin embargo, destaca la declaración de su hermano, MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, rendida el 10 de abril de 2006, que da cuenta que llegó a la Casa del Florero siendo las 2 o 3 de la tarde del mismo día que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, permaneciendo ese día y los dos días siguientes observando, mirando, preguntando por lo empleados de la cafetería, siendo informado por algunos soldados que los primeros rehenes salieron en las horas de la mañana.

Después del segundo día de la toma, cuando ya había acabado todo, logró entrar a la cafetería y allí vio la ropa de los empleados colgada en percheros, en puntillas, y varios documentos de identidad en el piso, encontrando el documento de su hermano.

Con lo anterior, considera demostrado que HECTOR JAIME BELTRÁN FUENTES no fue llevado a la Casa del Florero, pues su hermano MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES así lo corrobora, en tanto cómo detective del DAS para ese entonces pudo permanecer en la Casa del Florero y en los alrededores del Palacio de Justicia durante eso dos días en la búsqueda de los empleados de la cafetería y en especial de su hermano, como él lo afirma.

Siendo ello así, es un hecho que HECTOR JAIME BELTRÁN FUENTES no salió del Palacio de Justicia y por lo tanto no hubo la aducida desaparición forzada de él.

Al referirse a NORMA CONSTANZA ESGUERRA, persona que proveía de pasteles la cafetería del Palacio de Justicia, graduada en derecho internacional y diplomada, hace alusión al informe rendido en 1986 por el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creado por Decreto 3300 de 1985, de donde destaca:

"….los desaparecidos.
Para acceder al cuarto piso desde la cafetería y por esta escalera privada se hace necesario hacer un recorrido por el corredor del tercero, aledaño a la tribuna superior del salón de audiencias y ascender luego por escalera principal del sector sur.
Hechos hay que indican el traslado de los ocupantes de la cafetería al cuarto piso por la vía que se deja descrita:
En el corredor mencionado, los soldados que avanzaban ocupando el sector, hallaron tortas o pasteles que hambreados, consumieron a pesar de naturales recelos sobre trampas o <cazabobos> como ellos denominan los artefactos

dispuestos para destruir soldados incautos. Estos pasteles tuvieron que ser llevados de la cafetería y no parece que tengan origen distinto a la fábrica de la proveedora señorita esguerra, quien minutos antes acababa de surtir la despensa del establecimiento.
Así mismo en el cuarto piso al lado de los restos calcinados de un cadáver no identificado, se encontraron objetos de adorno personal que los familiares de la misma señorita Esguerra reconocieron como de su pertenencia y que, precisamente, usaba el día de la tragedia".

De manera, señala que no se puede creer que los supuestos desaparecidos hayan salido con vida del Palacio de Justicia, cuando la señora ELVIA FORERO DE ESGUERRA, madre de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, ha reconocido el cadáver de su hija como el que fue retirado de la morgue con el nombre del Magistrado PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA, a pesar de haberse establecido que era un cuerpo de mujer, porque como dice el dictamen de Medicina Legal tiene el "*útero no preñado*".

Por lo anterior afirma que el cadáver de esta supuesta desaparecida se encontró en el cuarto piso, con lo que se ratifica lo afirmado por el Tribunal Especial de Instrucción en cuanto a que los supuestos desaparecidos fallecieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia y sus cadáveres "*no han sido identificados*".

Concluye que NORMA CONSTANZA ESGUERRA no está desaparecida, sino que fue un cuerpo entregado de forma equivocada, siendo lo más probable que se encuentre en el lugar del Magistrado PEDRO ELIAS SERRANO.

De LUZ MARY PORTELA DE LEON señala que solo constan las declaraciones de sus progenitores, de las que no puede extraerse que haya salido con vida del Palacio de Justicia, así como tampoco que se encuentre desaparecida.

Afirma que comparte lo expuesto por el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de segunda instancia dentro del radicado 200800025-09, en cuanto a que "…*es evidente que solamente se presume su salida viva del Palacio de Justicia, nada más. Por ende, en relación con esta persona al no haber prueba sobre la materialidad de la conducta se revocará la sentencia en relación con la responsabilidad del procesado frente a la desaparición de esta señora*".

Circunstancia que afirma no ha cambiado en este proceso y por lo tanto no podría predicarse su desaparición, y menos que el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO tuviera responsabilidad alguna sobre este hecho que no se encuentra probado.

Asegura que lo anterior es reconocido por la misma fiscalía en sus alegatos de conclusión cuando señala que "*… no existen reconocimientos ni testimonios que afirmen haber visto salir con vida del Palacio de Justicia a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, LUZ MARY PORTELA LEÓN, GLORIA ANZOLA DE LANAO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA y LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, y que se plantean contradicciones respecto de los reconocimientos en imágenes de DAVID SUSPEZ CELIS y CRISTINA DEL PILAR GUARÍN, también lo es que la presencia de todos ellos en ese lugar el día de los hechos está acreditada, sumado a que no se encontraron sus cuerpos calcinados ni en la fosa común"*.[30]

De lo anterior concluye que no solo la defensa sino también el señor Vice-fiscal señalan que de LUZ MARY PORTELA LEON no se puede predicar que se encuentre desaparecida.

De GLORIA STELLA LIZARAZO, persona que llevaba tres años laborando en la cafetería donde manejaba el autoservicio, se infiere

[30] Sentencia Tribunal Superior de Bogotá, Rad. 2008-00025. De fecha 30 de abril de 2012, contra LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA.

que, al igual que de LUZ MARY PORTELA LEON, solo se puede predicar que probablemente estuvo en el Palacio de Justicia, pero no que salió con vida y menos que estuviera desaparecida.

Considera que el reconocimiento que realiza sobre el material fílmico la señora SATURIA CABRERA ha sido cuestionado inclusive por el Tribunal Superior de Bogotá, que manifestó en el fallo de segunda instancia proferido contra el Coronel PLAZAS VEGA que no existe prueba directa o indirecta que "*indefectiblemente*" permita afirmar que GLORIA STELLA LIZARAZO salió con vida del Palacio de Justicia.

Por ende, estima que al no existir prueba de su salida con vida, se encuentra desvirtuado su desaparecimiento, encontrándonos frente a otro cuerpo que no ha sido reconocido.

En cuanto a CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA indica que al igual que los demás no ha sido identificado.

Se remite a la diligencia de reconocimiento sobre películas y/o video-casettes por parte de alguno de los familiares de supuestos desaparecidos, realizada el 11 de abril de 1986 por el Juez 27 de Instrucción Criminal Ambulante en las oficinas de Corresponsalía de Televisión Española, para destacar que en relación con CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, su padre, el señor ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ, al indagársele acerca de si la persona que aparece en el proyector puede ser en realidad su hijo, respondió: "*NO, hoy puedo afirmar que la persona que aparece en el VIDEO, NO es mi hijo, por cuanto, tanto yo como mi familia hemos adelantado por nuestra propia cuenta todas las averiguaciones que nos han sido posibles para poder suministrar a la investigación una información seria y verás. Es así como nosotros fuimos las primeras personas en ver este VIDEO y ponernos en*

contacto con los demás familiares de los desaparecidos, pues inicialmente tuvimos la convicción de que esa IMAGEN correspondía a mi hijo CARLOS. Hicimos venir a su esposa que vive en PASTO Y CON SU COLABORACION Y PRESENCIA HEMOS VISTO NUMEROSOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS EN AGENCIAS DE PRENSA Y REVISTAS Y EL MARTES DE LA PRESENTE SEMANA 3 DE ABRIL, vimos un VIDEO que tiene TV-HOY, que funciona en la calle 38, numero 1536 de la ciudad, cuyas tomas corresponden a esta misma salida del PALACIO DE JUSTICIA y en el pudimos constatar que la persona que habíamos creído que era mi hijo CARLOS, NO ES, y corresponde a otra persona.".

Argumenta que desde hace más o menos 27 años el señor ENRIQUE RODRIGUEZ HERNÁNDEZ y otros familiares conocen y han estado en contacto con los videos de la Televisión Española y TV-HOY, en cuyas tomas se ve la salida de rehenes del Palacio de Justicia, y CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA no es reconocido por su padre, sus familiares ni por su esposa CECILIA CABRERA como la persona que creían había salido viva del Palacio de Justicia**.**

Refiere la declaración rendida por CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ VERA, hermano de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, en la que da cuenta de algunos videos a los que tuvieron acceso y en los que parecía verse saliendo a su hermano del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero, pero que por la calidad de las imágenes no les permiten tener certeza, haciendo especial mención al vídeo de la Televisión Española, indicando que ninguno de los familiares pudo tener certeza de que la persona que aparecía fuera su hermano.

Alude a la página 91 del expediente 87 –D- 4082 en el cual se encuentra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de Reparación Directa en el caso de CRISTINA DEL

PILAR GUARIN CORTES, expediente en el que obra la declaración del teniente de la Policía Judicial LUIS JOAQUÍN CAMACHO SARMIENTO, quien da cuenta que el jueves siete de noviembre le correspondió prestar servicio en las horas de la noche en el Palacio de Justicia y que siendo aproximadamente las ocho de la noche se le acercaron unas personas que se presentaron como familiares del personal que trabajaba en la cafetería y habló con quien dijo ser la esposa de CARLOS, administrador de la cafetería, a quien le manifestó que conocía a su esposo de vista pero que no lo había visto salir del Palacio.

TULIO CHIROLA ESCANIO manifestó que no conocía a todo el personal de la cafetería pero conocía muy bien al administrador, ya que él permanecía mucho tiempo en la caja y en muchas ocasiones se acercaba a las mesas a atender directamente al personal, y conocía bien a los dos empleados que atendían las mesas, pero a ninguno de ellos vio en la Casa Museo durante el tiempo que allí permaneció el día de la toma del Palacio de Justicia.

Menciona la declaración rendida el 28 de noviembre de 1985 en el Despacho del Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante por LEONOR MARIELA AVILA ROLDAN, escribiente de la secretaría general del Concejo de Estado, secuestrada en el baño y herida en la espalda, quien del personal de la cafetería señaló conocer al administrador CARLOS, a GLORIA que era la niña que les servía el almuerzo, a un mesero llamado JIMMY y a otras personas que distinguía de vista, pero no vio a ninguno de ellos mientras la toma, dentro del edificio ni en la Casa del Florero.

BLANCA INES AMAYA DIAZ, auxiliar de servicios generales en comisión del Ministerio de Justicia, el 11 de diciembre de 1985, en el Despacho del Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante,

señaló que conocía de vista a todo el personal que laboraba en la cafetería del Palacio de Justicia y que no vio a ninguno de ellos cuando ocurrían los hechos, ni en la casa del florero.

MARIA NELFI DIAZ, en declaración rendida el 12 de febrero de 1988, cuaderno anexo 5 IP 070 F223, al momento de indagársele si vio en la Casa del Florero a alguno de los funcionarios que trabajaban en la cafetería, señaló que no vio a nadie.

Hace alusión a la audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2011 en este Despacho, en la cual a JOSELIN SANCHEZ ALVARADO, auxiliar judicial de la Sala de Casación Penal de La Corte Suprema de Justicia, uno de los rescatados del Palacio de Justicia que estuvo en la Casa del Florero, se le indaga si conocía al personal de la cafetería y señaló que conocía al señor RODRÍGUEZ y a la cajera, pero al momento de proyectar el video obtenido en la inspección realizada en la casa del Coronel PLAZAS VEGA, en la que se aprecia la salida de rehenes del Palacio de Justicia, no reconoce a ninguno de los empleados de la cafetería.

Resalta que esta declaración concuerda con la rendida por el mismo SANCHEZ ALVARADO el 9 de diciembre de 1985 en el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, en la que igualmente al ser indagado por las personas que laboraban en la cafetería que funcionaba en el primer piso del Palacio de Justicia, refiere que las conocía de vista y el nombre del administrador que era CARLOS, pero no vio a ninguna de estas personas cuando ocurrió la toma, ni en la Casa del Florero.

Transcribe la declaración vertida por CARLOS ARIEL SERRANO el 27 de enero de1986 para señalar que su dicho es importante no solo por ser cercana a los hechos sino porque se relaciona con la

persona que fue conducida a la Casa del Florero y que corresponde a las características que según la señora CECILIA CABRERA GUERRA, esposa de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ, le había dado el Dr. SERRANO de su esposo, quien enteró al señor ENRIQUE RODRIGUEZ que la persona que subió al segundo piso en la Casa del Florero no era su hijo.

Agrega que se encuentra dentro del proceso la declaración rendida por la señora CABRERA GUERRA, que se transcribe en la Resolución de Acusación contra el Coronel EDILBERTO SANCHEZ, de la cual refuta que con la amputación de los dedos que presentaba CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ no se puede afirmar que sea la persona que se ve corriendo hacia la Casa del Florero, puesto que la limitación física no le permitiría correr en la forma como dicen lo están viendo.

Aduce que igualmente existe otro hecho relevante y es que dentro del proceso obra demanda de parte civil presentada por el DR. JOSE EDUARDO UMAÑA MENDOZA en representación de MARIA DEL PILAR NAVARRETE y ENRIQUE ALFONSO RODRIGUEZ, de la que destaca que, en gracia de discusión, si CARLOS RODRÍGUEZ se encontraba haciendo una consignación, pagando el arriendo, no se puede asegurar que se encontrara dentro del Palacio al momento en que ocurrió la toma del Palacio de Justicia.

Respecto a las diligencias de reconocimiento de videos efectuadas en el año 2007, 22 años después de la toma del Palacio de Justicia, señala que pese a que en el año 1986 no se había podido reconocer personas en los videos, en la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte se presentaron unos reconocimientos que llaman la atención, pues, en su sentir, de lo manipulado de esta diligencia es que se da origen a este proceso.

Afirma que la Fiscalía deja constancia que las imágenes exhibidas son producto de diferentes inspecciones judiciales y de incorporación documental y por ende son pruebas nuevas. No obstante, considera que son los mismos videos que se están viendo desde el momento de los hechos, tal y como se puede apreciar a simple vista, y pese a ello la Fiscalía manipuló esta prueba pretendiendo hacerla pasar como nueva, y con la ayuda de SANDRA BELTRAN, RENE GUARIN y CECILIA CABRERA, 22 años después si pudieron reconocer a sus familiares.

Hecho que fue fundamento para la calificación del sumario en contra del Coronel EDILBERTO SANCHEZ, haciendo alusión a que SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ y CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA hicieron los reconocimientos en diligencia llevada a cabo el 16 de agosto de 2007.

Aduce que el 28 de agosto de 2012 se allegó al proceso dictamen de cotejo morfológico, donde el objetivo de la diligencia era "*realizar cotejo de imágenes entre las fotografías y/o imágenes de los presuntos desaparecidos y las imágenes recogidas en diferentes videos sobre la salida de rehenes del palacio de justicia, en donde se reconoce a los supuestos desaparecidos…*", y se señaló que dentro de los videos cotejados se encuentra el que fue obtenido en diligencia de inspección practicada en la casa del Coronel PLAZAS VEGA, mencionado como prueba nueva, del cual, aduce, ni siquiera con la tecnología de vanguardia "*SE PUDIERON OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Y SUFICIENTES DE LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES A PARTIR DE LAS CUALES SE PUEDA REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DE RASGOS MORFOLÓGICOS FACIALES, DADO QUE EL MATERIAL APORTADO POR LA AUTORIDAD CARECE DE LA CALIDAD SUFIENCIENTE*"; por lo tanto no se elaboró cotejo morfológico.

Frente a lo anterior, señala que pudo más la visión de esas personas que la tecnología, dándole mayor credibilidad a las primeras, a pesar que este hecho no genere certeza en punto a que realmente estas personas hayan salido con vida del Palacio de Justicia, y menos que los reconocimientos, que considera manipulados y sesgados, puedan fungir como prueba de cargo que demuestre una desaparición.

Realiza un análisis de los dictámenes de genética practicados dentro de este proceso, que han sido señalados como prueba de la existencia de desaparecidos, considerando equívoco darle dicha valoración a esos dictámenes.

Trae a colación las conclusiones que considera se deben tener en cuenta respecto de la prueba científica, así como de las declaraciones de la Dra. YOLANDA GONZALEZ, el Dr. CARLOS VALDES y el Dr. RODRIGUEZ CUENCA, para sostener que los resultados de los dictámenes de genética realizados sobre los restos exhumados de una fosa común en el cementerio del sur, donde podría haber sido depositados cuerpos provenientes de los hechos del Palacio de Justicia, no se pueden interpretar como concluyentes de que las personas listadas como desaparecidas en efecto hayan sido víctimas de ese delito.

El que esos dictámenes no hayan dado ningún cotejo positivo, es indicativo de que en esa fosa había restos que probablemente no corresponden a los hechos del Palacio de Justicia.

Para el defensor, la fosa exhumada no es necesariamente la única a la que pudieron llegar los cadáveres del Instituto Nacional de Medicina Legal, pues no se tiene conocimiento absoluto de si esta

era la única fosa utilizada para inhumar los cuerpos provenientes de Palacio.

Agrega que con los dictámenes se demuestra que en la fosa común hubo cadáveres provenientes de zonas diferentes al Palacio de Justicia; que el manejo de los cadáveres fue muy malo, deficiente; que es posible que varios cuerpos calcinados no hayan sido informativos, esto es, que no aportaron información y ni siquiera el ADN lo pudieron procesar.

En capítulo aparte hace mención a la declaración presuntamente rendida por EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL ante la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte, señalando que esta persona se presentó ante este Despacho con el fin de poner en conocimiento que él nunca rindió la referida declaración y por ende, partiendo de este hecho concreto, lo que constara en el plenario queda sin validez jurídica, pues esa declaración no fue reconocida ni en su contenido ni en su firma por el presunto declarante.

Situación que llevó a la elaboración de un cotejo grafológico, practicado el 10 de abril de 2012, el cual se realizó con base en un documento aportado por la Fiscal instructora a un proceso penal diferente que cursa en su contra, concluyéndose la uniprocedencia de firmas.

Dictamen del cual se solicitó una ampliación y al mismo tiempo fue objetado por el Ministerio Público, por lo que peticiona se acceda a las pretensiones de la Procuraduría, pues el mencionado dictamen y su ampliación están viciados de ilegalidad.

Señala que la Fiscalía hace mención al principio de legalidad y al bloque de constitucionalidad, indicando que la hipótesis delictiva que

surgió inicialmente se mantiene y se trata de un secuestro agravado en concurso con desaparición forzada que se ha venido ejecutando desde 1985, conducta desplegada por los aquí vinculados durante la operación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, lo que considera no es verdad, por cuanto los que iniciaron la acción delictiva fueron los del M-19 y la reacción de las Fuerzas Militares de Colombia fue una acción legítima en defensa del Estado Colombiano y sus instituciones, tal y como se establece en la constitución de 1991 y lo establecía la Carta Magna de 1886, vigente para 1985.

Aduce que no se configura el delito de secuestro ya que, en primer lugar, se probó que no hay desaparecidos sino cuerpos sin identificar. En segunda medida, es la misma Fiscalía la que en la resolución de acusación señala que no fue un actuar improvisado del Ejército de Colombia, sino que estaban dispuestos para ello como era su deber. Aplicándose en toda su extensión el "*plan tricolor",* y que las secciones de inteligencia del Ejército se habían fortalecido, pues desde el mismo informe de Corinto era una recomendación a seguir.

En ese entendido, considera que aplicado en toda su extensión el plan tricolor, y si tanto en el plan tricolor como en el plan de inteligencia se tenía como misión identificar, ubicar, capturar e interrogar simultáneamente a integrantes del M-19, si el personal de inteligencia, según resolución 162 de 1979, tenía carácter de policía judicial, no se pudo incurrir en secuestro sino en detención arbitraria, respecto de lo cual cita lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 15 de febrero de 1972, frente a la conducta punible de detención arbitraria.

Por ello considera que la Fiscalía tomó equivocadamente el delito de secuestro, cuando no se configura ni el delito de secuestro ni el de detención arbitraria, por cuanto no hay desaparecidos.

Para el defensor la Fiscalía ignora la sentencia C-368 de 2000 al procesar por el delito de desaparición forzada por hechos ocurridos antes de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, que consagra esta conducta como delito y señala la pena correspondiente.

De otra parte, indica que la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria en contra de su prohijado por ser coautor del delito de desaparición forzada; coautoría que se define como la forma de participación en el delito, que requiere de manera sine quanon la existencia de un acuerdo común y la división de tareas para cometer el ilícito, donde cada uno de los copartícipes actúa en consonancia con el preacuerdo, realizando la labor acordada.

Sin embargo, considera que tal y como se ha constatado por esa defensa no existe prueba que lleve a la certeza que hay desaparecidos y menos aún que su representado haya desplegado conducta alguna que transgreda las normas, ni se cumple con el presupuesto del acuerdo previo, pues ese acuerdo previo la Fiscalía lo establece atendiendo el plan tricolor, que es un plan defensa nacional, que por su misma naturaleza no puede calificarse como un acuerdo criminal. Además, aquí no se probó por qué tal afirmación debe ser tenida en cuenta para que el fallador acoja la petición de condena solicitada.

Por tanto, considera que al no cumplirse con los requisitos de existencia del hecho ni responsabilidad del procesado, el fallo a proferir debe ser absolutorio.

Finalmente solicita desatender las solicitudes de la Fiscalía y de la parte civil de una decisión condenatoria, así como la solicitud de la parte civil en cuanto a la compulsa de copias para revisar la cesación de procedimiento dictada a favor de su prohijado por la desaparición de IRMA FRANCO PINEDA.

El **defensor de OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ** solicita sentencia absolutoria a favor de su representado, al considerar que en su caso es claro que no concurren los presupuestos del art. 232 de la Ley 600 de 2000.

Aduce que de la salida con vida y desaparición de los visitantes ocasionales, así como de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, no hay prueba y no hay indicio alguno en cuanto a que IRMA FRANCO PINEDA fuera retenida, trasladada y desaparecida por su mandante.

De NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO sostiene que desde hace más de 20 años se encuentra establecido que murió incinerada en el cuarto piso del Palacio de Justicia, hecho que de manera arbitraria se han negado a reconocer las autoridades que han conocido de este proceso.

Aduce que no existe controversia alguna sobre su presencia al interior de la sede judicial para el momento de la toma, ya que se sabe que se dedicaba a surtir de pasteles varias cafeterías como la del Senado y la del Palacio de Justicia, y dentro del proceso obran pruebas que corroboran que ingresó al edificio antes de la toma ejecutada por el M-19 y que luego de su ingreso se iniciaron los hostigamientos, lo cual fue principalmente informado por su prima AMPARO PEÑA, quien la esperaba en el vehículo que conducía

NORMA CONSTANZA y se encontraba estacionado en la Plaza de Bolívar.

Eso es corroborado por ELVIRA FORERO DE ESGUERRA y RICARDO ESGUERRA REAGA, padres de NORMA CONSTANZA.

Sin embargo, lo que no está probado es que haya salido con vida del Palacio de Justicia, por cuanto se tiene noticia de la identificación de su cadáver en una diligencia llevada a cabo el día 12 de enero de 1988 en la que la señora ELVIRA FORERO DE ESGUERRA identificó una pulsera como de propiedad de su hija, ante lo cual se procedió a buscar el acta de levantamiento N° 1171, a la que estaban relacionados esos elementos, verificándose que correspondía al cadáver calcinado de una mujer.

Obra constancia que el sexo de este cadáver no solamente fue establecido en el acta de levantamiento sino también en la necropsia 3805-85 realizada por un patólogo forense.

No obstante, relacionado con este mismo cuerpo calcinado se efectuó por parte de la señora CIRIA MERCY MENDEZ DE TRUJILLO un reconocimiento de prendas, específicamente de un reloj Citizen redondo, con pulsera metálica, con lo cual concluyó que correspondía al cadáver del Doctor PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA, pese a que al momento de enumerarse en el acta de levantamiento los objetos que le fueron encontrados al cadáver, no se hizo mención del reloj Citizen que fue base para reconocer el cadáver del Doctor SERRANO ABADIA.

En el acta de reconocimiento de cadáver efectuada por CIRIA MERCI MENDEZ DE TRUJILLO se dice que lo hace en calidad de madrina de matrimonio y que lo reconoce por un “*RELOJ CITIZEN*

REDONDO CON PULSERA METALICA". Sin embargo, en el acta de levantamiento número 1171 solo se menciona una pulsera metálica, una pata de una montura de gafas y varias piezas de collar, objetos reconocidos por la señora FORERO DE ESGUERRA como pertenecientes a su hija, con excepción de la pata de montura.

Por manera, existió confusión en la identificación y entrega de cuerpos; entregando como de PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA un cadáver de sexo femenino reconocido por ELVIRA FORERO DE ESGUERRA como el de su hija NORMA CONSTANZA ESGUERRA, lo que se ratifica con la declaración rendida por el Patólogo Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal DIMAS DENIS CONTRERAS VILLA, prosector en la necropsia 3805-85, al igual que con lo señalado por GERARDO RAFAEL DUQUE MONTOYA, Dactiloscopista Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, al reconocer que no verificó el acta de levantamiento y el protocolo de necropsia en el reconocimiento hecho por CIRIA MERCY MENDEZ DE TRUJILLO, madrina de matrimonio del Dr. PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA.

Así, no existe ninguna duda que los restos entregados a la familia del Doctor SERRANO ABADIA en realidad corresponden a NORMA CONSTANZA ESGUERRA, quien al igual que los empleados de la cafetería y visitantes ocasionales fue conducida por el M-19 al cuarto piso, donde murió carbonizada.

En cuanto a LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA la información obtenida a través de las pruebas recaudadas revelan que posiblemente se encontraba en el Palacio de Justicia al momento de la incursión guerrillera, pues así lo refirieron sus familiares, quienes señalan que ese día 6 de noviembre de 1985 tenía una cita con un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y que posiblemente

luego se dirigió a la oficina del Dr. ALFONSO REYES ECHANDÍA, a quien le solicitaría una recomendación laboral.

Considera que en este caso no existe prueba directa que indique que efectivamente esta persona ingresó al Palacio de Justicia, pero por el hecho de no volverse a saber nada de ella se infiere que efectivamente ingresó y allí falleció por el incendió suscitado.

La única referencia que se hace a la supuesta salida con vida del Palacio de Justicia de LUCY AMPARO OVIEDO son algunas diligencias de reconocimiento en video realizadas por sus padres los días 13, 14 y 15 de enero de 1988, en donde según ellos la ven saliendo con vida del Palacio de Justicia.

Sin embargo, esto fue desvirtuado por MARÍA CRISTINA DE QUINTERO y CONSUELO GUZMÁN DE OSPINA, quienes manifiestan que reconocen a NUBIA STELLA HURTADO al observar los mismos videos puestos de presente a los familiares de LUCY, y por la propia NUBIA STELLA HURTADO, quien afirmó ser la persona que salió rescatada del Palacio de Justicia y que es confundida con LUCY AMPARO por sus familiares.

Sobre el particular MARÍA CRISTINA DE QUINTERO y CONSUELO GUZMÁN DE OSPINA afirmaron que "*la persona que sale del brazo de un soldado, de pelo hasta los hombros, observándose en uno de sus hombros algo blanco, posiblemente parte de la blusa, es Nubia Stella Hurtado Torres, quien no se hizo presente a la diligencia, pero que estuvo con todos los presentes en el baño que sirvió de reducto y refugio y que no era muy conocida para la época de los hechos, en razón a que no era funcionaria ni del Consejo de Estado ni de la Corte Suprema de Justicia, sino secretaria del hijo del Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien era una visitante asidua por ser amiga de la primera de las nombradas…*".

NUBIA STELLA HURTADO en declaración rendida el 12 de febrero de 1988 indicó que el día de los hechos llevaba "*…una falda azul, una blusa blanca, chaleco vinotinto y un saco azul, tenía zapatos 6 y medio que no son muy altos de color uva y la cartera del mismo color de los zapatos … ese día tenía las gafas pero se me perdieron, no supe que se hicieron…*", mientras que el padre de LUCY AMPARO refirió que su hija "*ese día iba con un traje habano de paño, falda y chaqueta, blusa roja, color rojo como una rosa...*". Teniendo en cuenta esas descripciones, al observar las imágenes de video, en sentir del abogado, se puede constatar que efectivamente la persona que sale del Palacio de Justicia es NUBIA STELLA HURTADO, pues viste un traje azul y una blusa de color blanco, prendas que concuerdan con las referidas por ésta.

Así, concluye que no está probado que LUCY AMPARO OVIEDO hubiera salido con vida del Palacio de Justicia y por tanto menos que hubiera sido objeto de desaparición forzada.

De GLORIA ANZOLA DE LANAO no existe controversia alguna sobre su presencia al interior del Palacio de Justicia para el momento de la toma, pues habitualmente estacionaba su vehículo en el parqueadero de este edificio y en efecto fue encontrado allí al terminar la operación militar. Hecho corroborado por algunos familiares de la señora ANZONA, como su padre ROMULO ANZONA LINARES

Sin embargo al examinar si salió con vida del Palacio de Justicia, no existe prueba indiciaria, circunstancial, ni directa de ello.

Aduce que en el alegato de conclusión de la Fiscalía se hizo referencia parcial a la declaración de MARIA CONSUELO ANZOLA MORA, hermana de GLORIA ANZOLA DE LANAO, dejando por

fuera circunstancias importantes que se deben tener en cuenta al momento de proferirse el fallo de fondo sobre la desaparición de esta persona.

Dicha testigo manifestó en su declaración: "*Yo llegue al palacio el viernes a las ocho y media de la mañana, viernes ocho de noviembre, llegué con un mayor de la policía, Diego Anzola, subimos directamente al cuarto piso, estaban haciendo el levantamiento de los cadáveres, yo revisé cadáver por cadáver, los dientes que había en esos cadáveres y los objetos personales y aseguro que mi hermana no estaba allí. Hacia las horas de la tarde yo fui nuevamente a medicina legal y volví a revisar, tampoco está allí ni había nada que pudiera asegurar, posteriormente estuve sábado y domingo a ver si llegaban nuevos cadáveres y nada. Dentro de los cadáveres quemados había 5 sin cabeza, yo estaba cuando los despegaron, lo vi como si estuvieran uno encima de otro, al despegarlos todos tenían prendas militares tipo guerrillero debe ser y eran hombres, esto nos lo aseguró un médico de medicina legal. De esos cadáveres había uno que estaba quemado todo pero aún tenía algo de huesos de la cara pero tenía caninos y mi hermana no tenía caninos….*".

Lo que no se menciona por parte del ente instructor y es de vital importancia para determinar si efectivamente GLORIA ANZOLA DE LANAO salió con vida del Palacio de Justicia, es que la cadena de custodia, las evidencias y la escena de los hechos fueron adulteradas por diversas personas, pues la testigo afirma haber revisado cadáver por cadáver, los dientes que habían en esos cadáveres y los objetos que portaban, previo a que las autoridades encargadas del caso realizaran los levantamientos o inspecciones de cadáveres.

Igualmente la testigo refiere haber observado 5 cadáveres sin cabeza, que incluso estaban pegados, pero en este proceso se tiene establecido que existieron otros cadáveres que presentaban esas mismas características, es decir, calcinación completa, y como

quiera que no fueron revisados en su totalidad por la testigo, no se tiene certeza de que GLORIA ANZOLA DE LANAO haya salido con vida del Palacio de Justicia, y por el contrario se corrobora que falleció al interior del edificio.

De GLORIA ANZOLA DE LANAO la Fiscalía no presentó ni una sola prueba de que haya salido con vida y sin embargo concluyó que fue llevada a la Casa del Florero y fue desaparecida por su prohijado.

Aduce que obran en el proceso diversas diligencias de exhibición de videos, fotografías y objetos, realizadas respecto de GLORIA ANZOLA DE LANAO con personas que la conocían muy de cerca como su esposo FRANCISCO LANAO, CONSUELO ANZOLA MORA y VIVIANA DE ANZOLA, sin que en ningún video o fotografía haya sido reconocida, ni los objetos que ella portaba para el día de los hechos.

De manera, no existe ninguna prueba que permita al menos inferir que esta persona salió con vida del Palacio de Justicia y, por el contrario, se ratifica la postura de la defensa en cuanto a que falleció incinerada al interior del Palacio.

De LUZ MARY PORTELA LEÓN las pruebas recaudadas indican que para el día de la toma guerrillera se encontraba reemplazando a su señora madre, quien trabajaba lavando los platos en la cafetería del Palacio de Justicia.

Eso se conoce por declaraciones tomadas a ROSALBINA LEON y JOSE ESTEBAN CARDENAS, madre y padrastro de LUZ MARY, quienes además indicaron que para ese momento los empleados de la Cafetería usaban uniforme y contaron cómo se encontraba vestida.

La señora ROSALBINA LEON manifestó que su hija *"…tenía 1.50 de estatura, mona o castaño claro, pelo recién cortado como de hombre, tez blanca, ojos color claro, delgada, lunar en el pómulo derecho cerca a la oreja, narizona, caja en el maxilar superior, solamente tenía tres muelas y el resto era postiza y de abajo no tenía sino los del frente y como dos o tres muelas pero no tenía puente ni caja. Vestido azul y rayas negras a lo largo y un saco rojo en lana y media velada, un bolso negro grande y otro negro pequeño por dentro".*

Descripción de prendas que concuerda con la hecha por JOSE ESTEBEN CARDENAS MARTINEZ, quien la describió con *"vestido azul a rayas negras, un saco rojo, bolso negro, aparte de eso ellas traían unos vestidos para usar dentro de la cafetería, pero no se cómo eran.".*

Por lo anterior, aduce, se puede inferir que efectivamente LUZ MARY PORTELLA DE LEON ingresó al Palacio de Justicia a realizar las labores de reemplazo de su señora madre, pero la Fiscalía no aportó prueba alguna que permita colegir que salió con vida del Palacio de Justicia, por lo que no se puede afirmar que fue desaparecida, y menos que su prohijado lo hizo.

Respecto de BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ tampoco existe controversia alguna de su presencia al interior del Palacio de Justicia, pues laboraba como mesero de la Cafetería.

La Fiscalía da por probado que salió con vida por varios reconocimientos realizados por algunos familiares, entre los que se encuentra el de SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ en declaración rendida el 26 de agosto de 2007, quien afirmó haberlo identificado al ver sus pantalones y una persona con la contextura de su hermano, por su forma de peinarse y por salir con un pantalón negro y camisa blanca.

Sin embargo, previo al supuesto reconocimiento realizado por SANDRA BELTRAN en el año 2007, el 12 y 16 de enero de 1988, en diligencias de reconocimiento de objetos y fotografías, ésta persona no reconoció objeto o fotografía de su hermano.

De manera, no es creíble el reconocimiento realizado el 26 de agosto de 2007, esto es, 22 años después de ocurrida la toma guerrillera, cuando transcurrido apenas dos años desde los hechos, sobre imágenes similares, no reconoció a su hermano.

Pone de presente que en la declaración que rindió SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ el 26 de agosto de 2007 estuvo acompañada por RENE GUARÍN CORTES, respecto de quien, frente al reconocimiento que realizó, existen varias cosas para desvirtuarlo, siendo lo primero que BELTRAN HERNANDEZ llevaba trabajando en la cafetería solo dos meses; que RENE GUARÍN CORTES es el hermano de la otra supuesta desaparecida CRISTINA DEL PILAR GUARIN, y que la esposa del administrador de la cafetería, SATURIA CABRERA reconoció que había compartido poco tiempo con BERNANDO y con CRISTINA, lo que significa que GUARIN muy posiblemente o no lo conoció o lo vio muy pocas veces, por lo que es muy poco probable que RENE GUARIN hubiera podido reconocer a BERNARDO BELTRAN.

Cobra importancia lo anterior por cuanto es precisamente cuando RENE GUARIN manifiesta que lo reconoce que SANDRA BELTRAN aduce también reconocer a su hermano saliendo del Palacio de Justicia, pese a que en diligencias previas y poco tiempo después de transcurrida la toma no lo reconoció en videos similares.

Agrega que BERNARDO BELTRAN era mesero en la cafetería del Palacio de Justicia y como tal tenía uniforme para desarrollar su

actividad, uniforme que fue recordado por su señora madre y constaba de un pantalón negro, una camisa blanca de manga corta y un corbatín.

Conforme a las reglas de la experiencia y teniendo en cuenta que la toma guerrillera inició luego de las 11:40 de la mañana, se puede inferir que a esa hora se encontraba uniformado, lo cual disiente de las prendas de vestir señaladas en el reconocimiento realizado por RENE GUARIN y SANDRA BELTRAN.

De no haber tenido puesto el uniforme se encontraría con la ropa con la que salió de su casa, referida por su señora madre, MARIA DE JESUS HERNANDEZ DE BELTRAN, como un *"pantalón beige en pana, una camiseta con unas rayas muy insignificantes azul clarita, casi más blanca que azul, manga corta y un suéter de color verde manzana de lana, zapatos negros mocasín y medias blancas.*", y las personas que aducen reconocerlo saliendo de Palacio afirman que portaba un pantalón oscuro, una camisa de cuello para corbata y un buso de cuello redondo.

La otra prueba relacionada por la Fiscalía de la supuesta salida con vida de BERNARDO es la declaración de la señora CECILIA CABRERA GUERRA, quien menciona que lo ve cogido por el brazo derecho por un soldado, que lo identifica por la forma de peinarse, por la forma de correr, por la forma de la cara, las cejas, la estatura y el tamaño del cuerpo.

Este reconocimiento no concuerda con la vestimenta que ese día portaba BERNARDO, pues estaba trabajando y si salió de Palacio muy seguramente tenía puesto o su uniforme o la ropa que su señora madre refirió, pero nunca la señalada por quienes aducen reconocerlo.

Además, la mencionada declarante refiere reconocerlo por la estatura y el tamaño del cuerpo, pese a que varios familiares al observar un video similar dijeron expresamente que por la talla esa persona no era BERNARDO.

Pese al esfuerzo de la Fiscalía y estos testigos por demostrar que BERNARDO BELTRAN salió con vida del Palacio de Justicia, las pruebas sobre las que se basan pierden todo su peso y credibilidad, y por ello concluye que BELTRAN HERNANDEZ no salió con vida del Palacio de Justicia y por tanto no puede predicarse su desaparición forzada.

Frente a GLORIA STELLA LIZARAZO aduce que la única prueba que trae la Fiscalía como supuesta evidencia de su salida con vida, es el reconocimiento que hace de ella CECILIA CABRERA, esposa de CARLOS RODRÍGUEZ, al manifestar que la había visto salir y que la veía con una camiseta negra manga corta, falda color verde o gris, cabello negro, tez blanca, cabello corto, como peinada por la mitad, gorda y gorda de piernas, descalza y además le parece que llevaba medias veladas.

Y a fin de demostrar su presanidad el ente instructor trae a colación lo manifestado por su esposo, LUIS CARLOS OSPINA ARIAS, quien señaló que le consta que el día de los hechos ella salió a laborar al Palacio de Justicia e indicó cómo se encontraba vestida su esposa ese día.

Respecto al reconocimiento efectuado por la señora CABRERA DIAZ precisa que esta persona la conocía porque al parecer habían tratado anteriormente a los hechos, pero no la veía todos los días, siendo ello de importante relevancia para señalar que nadie sabía

cómo estaba vestida GLORIA ESTELA LIZARAZO el 6 de noviembre de 1985, por varias razones. La primera, porque ella vivía sola con sus hijas, hecho que fue manifestado en el proceso por su hermana DEYANIRA LIZARAZO, quien en declaración obrante a folios 447 al 448 del cuaderno anexo 6, señaló: "*… Últimamente ella estaba viviendo solita con sus niños porque desde hacía tres meses su esposo se había ido para Pereira……*".

Con lo anterior considera demostrado que no era posible que alguien pudiera describir las prendas que llevaba ese día GLORIA ESTELA LIZARAZO y menos su esposo, cuando llevaba tres meses fuera de la ciudad, viviendo en Pereira, y ello es corroborado por el mismo señor OSPINA[31] en declaración cuando afirmó que no estaba en la ciudad cuando ocurrieron los hechos, que estaba en Pereira trabajando con uno de sus hermanos y que se enteró de los hechos por la radio y la televisión.

Por tanto, si OSPINA hacía tres meses que no veía a GLORIA ESTELA LIZARAZO no era posible que supiera como se encontraba vestida, de donde deduce que no se puede probar la presanidad de GLORIA con esta persona, pues para ese momento no compartían vivienda y menos puede saber cómo se encontraba vestida.

Aunado a lo anterior, al laborar GLORIA ESTELA LIZARAZO en la cafetería, es más que obvio que a la hora en que inició la toma tuviera puesto el uniforme que describió su señora madre, LIDA ROSA LIZARAZO DE LAGOS, al referir que *"…en el trabajo usaba tenis y una blusa blanca con una gorra blanca en la cabeza….."*.

Considera que la declaración de OSPINA ARIAS es contradictoria en varios aspectos, por cuanto indica que vio salir a varias personas

[31] Declaración que obra a folios 435 al 436 del Cuaderno Anexo 6

de las hoy presuntamente desaparecidas, entre ellas a CARLOS RODRÍGUEZ, a GLORIA ESTELA LIZARAZO y a ROSA CASTIBLANCO. Sin embargo de esta última, mediante prueba de ADN, se demostró que murió calcinada en el cuarto piso del Palacio de Justicia, siendo imposible que la hubiera visto salir con vida del edificio.

Otra de las imprecisiones del testigo consiste en el hecho de que identifique saliendo del Palacio de Justicia a CARLOS RODRÍGUEZ, cuando inicialmente en su declaración indicó que GLORIA STELLA solo conocía a ROSA y que él no distinguía a los otros compañeros de su esposa porque iba muy poco a la cafetería. Sin embargo identifica a quien solo llevaba trabajando en la cafetería 4 meses, siendo improbable que lo haya conocido antes de la toma, pues está probado que OSPINA los últimos tres meses estuvo por fuera de la ciudad.

Afirma que el conocimiento del testigo fue adquirido luego de haber visto un video que le enseñó o suministró CECILIA CABRERA, y ello lo concluye de lo señalado por él en diligencia de declaración, cuando "***PREGUNTADO.-*** *Señor Ospina, por favor indíquele al Despacho si usted con anterioridad al momento o a la fecha en que vio esas imágenes en Noticias Uno, si usted las había visto anteriormente.* ***CONTESTO.-*** *Me mostró un video la señora de don Carlos Augusto, doña Cecilia, que ella tiene un video, ella nos mostró un video, y ahí se ven los que sacan del Palacio de Justicia, porque nosotros estábamos muy desubicados, a nosotros no nos han dado nada*.".

Lo anterior demuestra que su conocimiento no procede de forma directa sino que fue aprendido del video suministrado por CELICIA CABRERA, y lo que se puede observar es que trata de "*cuadrar*" la

vestimenta observada en el video mostrado por la señora CABRERA, con el fin de obtener una prueba de "*hecho verdadero*".

Ahora, el reconocimiento efectuado por CECILIA CABRERA se puede contrarrestar con la diligencia de reconocimiento efectuada el 11 de abril de 1986, a la que asistieron CONSUELO CASARONAS y DEYANIRA LIZARAZO, esta última hermana de GLORIA, quienes respecto del reconocimiento de GLORIA LIZARAZO indicaron no estar seguras que fuera ella.

Aunado a que, reitera, para ese día laboral GLORIA LIZARAZO debía portar su uniforme de blusa blanca y tenis, y esas prendas no concuerdan con la descripción realizada por la señora CABRERA, quien la describe con camiseta negra manga corta y falda color verde.

De manera, no puede ser creíble el reconocimiento efectuado en los videos por la señora CABRERA, por varias razones: la primera, esta señora no sabía cómo estaba vestida GLORIA ese día, y existe otra diligencia realizada por su propia hermana, quien manifiesta que se le parece pero que no puede asegurar que sea ella, y, finalmente, porque esos videos no tienen la nitidez necesaria que permita identificar a las personas, precisamente por sus características particulares.

Así las cosas, no existe prueba de que GLORIA STELLA LIZARAZO haya salió con vida del Palacio de Justicia.

De DAVID SUSPES CELIS la única prueba que trae la Fiscalía como supuesta evidencia de su salida con vida del Palacio de Justicia es la declaración de CECILIA CABRERA GUERRA en la cual presuntamente realiza el reconocimiento del señor SUSPES

CELIS, en donde no lo reconoce de manera fehaciente, pues refiere que se parece un poco, pero no lo hace de una manera certera, por lo que no se puede indicar que lo haya reconocido de manera definitiva.

Aunado a lo anterior, DAVID SUSPES era el chef de la cafetería y como tal tenía un uniforme para desarrollar su actividad, por lo que, conforme a las reglas de la experiencia y teniendo en cuenta que la toma guerrillera inició luego de las 11 a.m., es lógico que a esa hora se encontrara uniformado y preparando el almuerzo, tal y como lo indicó su esposa LUZ DARY SAMPER BEDOYA, quien señaló: "*Como era hora de almuerzo se suponía que él debía estar con ropa de trabajo, el vestido de él consistía en un pantalón blanco, una chaqueta blanca, un gorro blanco y unas botas no sé de qué color……..*", y no como lo señaló la señora CABRERA, con traje y corbata.

De cualquier manera, según la ropa con la que salió de su casa, descrita por su esposa como un vestido con pantalón gris de paño, zapatos negros mocasines, una camisa blanca con rayitas ligeras azules y saco de paño azul, aceptando que SUSPES CELIS se encontrara con esa ropa, esa vestimenta no concuerda con las prendas observadas en el video en el que la señora CECILIA CABRERA aduce reconocerlo.

Contrario a ello, en las diferentes diligencias de reconocimiento a las cuales asistió la señora MARÍA DEL CARMEN CELIS, madre de DAVID, y otros familiares, no fue reconocido en ninguno de los videos expuestos.

Por lo anterior, no existe ninguna prueba de que DAVID SUSPES CELIS haya salido con vida del Palacio de Justicia, por ello no se

puede sustentar en calidad de certeza que existió el delito de desaparición forzada.

En cuanto a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES no existe controversia alguna sobre su presencia al interior del Palacio de Justicia para el momento de la toma, pues se sabe que se encontraba allí porque laboraba como mesero de la cafetería, hecho corroborado por algunos testigos como MARÍA DEL PILAR NAVARRETE y MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES. No obstante, considera que en lo que tiene que ver con su salida con vida del Palacio de Justicia no existe prueba.

Frente a esta persona se tienen las declaraciones rendidas por su hermano MARIO DAVID, en especial la llevada a cabo el 20 de enero de 1986, en la cual indicó que el 6 de noviembre de 1985, aproximadamente a las 12:30, hizo presencia en la Casa del Florero averiguando por el personal de la cafetería, estando pendiente de la salida de rehenes durante los dos días, sin obtener resultados positivos en su búsqueda.

MARIO DAVID refirió haber realizado la búsqueda de su hermano en forma permanente los dos días de la toma, 6 y 7 de noviembre de 1985, y por su condición de empleado del DAS tuvo acceso a varios sitios como el Palacio de Justicia y la Casa Museo del Florero, sin que, pese a la búsqueda exhaustiva que realizó, viera a su hermano y menos a los otros empleados de la cafetería.

Por manera, si no los vio es porque estas personas jamás salieron con vida del Palacio de Justicia, porque si ello hubiera sido así muy seguramente MARIO DAVID BELTRAN los hubiera visto.

En declaración de MARÍA DEL PILAR NAVARRETE URREA, esposa de HECTOR JAIME BELTRAN, llevada a cabo el 22 de noviembre de 1985, señaló: "*…El hermano de mi esposo es del DAS, se llama Mario Beltrán y trabaja en los juzgados de la 19 con 27 en el 5º piso, se fue para allá y nos llamaba cada rato diciendo que sacaban gente muerta o viva y no lo vio sacar a él en ningún momento, así transcurrieron esa noche y ese día … fuimos a Medicina Legal como a las 8:30 de la noche del jueves, mi cuñado no nos dejó entrar porque dijo que entre los que se podían reconocer no estaba él …*".

CLARA ISABEL FUENTES DE BELTRÁN, mamá de HECTOR JAIME BELTRAN, adujo en diligencia del 20 de enero de 1986 que su hijo MARIO se fue para la Plaza de Bolívar y se comunicaba constantemente con ella, pero que su hijo HECTOR JAIME no apareció por ningún lado, indicando además que a su hijo lo sacaron entre las primeras personas evacuadas; pero hasta el 7 de noviembre su hijo MARIO no lo vio entre las personas que evacuaban, indicando que no se sabe nada porque estuvieron en todas partes: hospitales, clínicas y Medicina Legal en donde les dijeron que no había ni heridos ni muertos, búsqueda que realizaron por 15 días.

La madre de HECTOR JAIME BELTRAN acudió a varias diligencias de exhibición de videos, pero en ellas nunca reconoció a su hijo saliendo con vida del Palacio de Justicia.

HÉCTOR JAIME BELTRÁN, padre de HECTOR JAIME BELTRAN, indicó que su hijo no apareció ni vivo ni muerto, pero indica que él salió vivo del Palacio de Justicia junto con otros empleados de la cafetería, lo llevaron a la Casa del Florero conducido por las Fuerzas Militares y de ahí en adelante es un misterio su paradero. Agregando que no fue testigo presencial de la salida del Palacio de

Justicia de los empleados de la cafetería conducidos por miembros de las FF.MM, pero que eso es de público conocimiento.

El señor HECTOR JAIME BELTRAN asistió a varias diligencias de exhibición de videos, pero en ninguno de ellos reconoció a su hijo saliendo con vida del Palacio de Justicia, y pese a que advirtió que su esposa sí lo reconoció en un video saliendo con vida, tal y como se desprende de la declaración rendida por ella no es cierto que lo hubiera reconocido.

Por consiguiente, no existe ninguna prueba de que esta persona haya salido con vida del Palacio de Justicia, por lo que su desaparición se presume pero no se encuentra probada.

Frente a CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS tampoco existe controversia sobre su presencia al interior del Palacio de Justicia para el momento de la toma, pues laboraba como cajera de la Cafetería.

No obstante, respecto a la declaración y reconocimiento en video efectuado por CECILIA CABRERA GUERRA el 16 de agosto de 2007, en donde adujó reconocer a CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES y la describió con una falda a cuadros escocesa y una blusa roja, cargada por un soldado, en medias y descalza, con cabello negro corto, en estado físico aceptable, y señaló que un mes antes de los hechos había compartido con ella porque la había remplazado, considera que antes de darle credibilidad se debe reparar en la declaración que esta testigo rindió en el año 2006, donde manifestó lo siguiente:

“*PREGUNTADA: Indíquenos si usted reconoce o podría reconocer las caras de las personas que trabajaban en la Cafetería y con cuál de ellas tenía más trato,*

más cercanía, más tiempo de conocimiento. CONTESTO: A excepción de Bernardo Beltrán y Cristina Guarín, había compartido con el personal restante durante los 5 meses anteriores. El trato y relación era por igual con todos ellos. Bernardo Beltrán había sido contratado hacía dos meses de la toma del Palacio, por cuanto el mesero que había se había retirado. Cristina Guarín, la conocí muy poco porque ella era conocida de mi suegra Elena Vera y ella fue quien nos manifestó que mientras yo iba a estar ausente, siendo cristina una persona de confianza podría ayudarnos con los oficios de la caja registradora. Entonces con ella prácticamente compartí unos 3 o 4 días que fueron anteriores del 1 de octubre del año 1985…".

De modo, la testigo conocía muy poco a CRISTINA, por lo que no es claro cómo puede reconocerla en el video y asegurar enfáticamente que es ella.

Por su parte, las declaraciones y reconocimientos en video realizados por RENE GUARIN CORTES, hermano de CRISTINA, deben valorarse teniendo en cuenta que en un primer momento en su declaración, sin observar el video, refirió que su hermana el día de los hechos "*…. tenía una falda a cuadros rojos y azules escocesa, una blusa rosada….*"*.*

Sin embargo, al exhibir el video obtenido de la Televisión Española se consignó que "*el declarante manifiesta en 01.01.32 la persona (mujer) entre un militar (izq. de la pantalla) y persona de la Cruz Roja (der. De la pantalla), caminando, de vestido oscuro (azul) blusa rosada en el centro izquierda de la pantalla parece que fuera su hermana por los rasgos.*
En 01.03.52 centro un poco debajo de la pantalla, alzada en hombros por militar, descalza, de falda escocesa y blusa rosada o roja, el declarante manifiesta que podría ser su hermana."

En esas condiciones, cuando en un primer momento refirió que su hermana portaba el día de la toma una "*falda a cuadros rojos y azules escocesa, una blusa rosada*", y al observar el video reconoce a alguien

que podría ser su hermana con un "*vestido oscuro (azul) blusa rosada*" y en un aparte siguiente del video la reconoce vestida de "*falda escocesa y blusa rosada o roja*", es evidente que el testigo no merece credibilidad.

ELSA MARIA OSORIO DE ACOSTA, mamá de CRISTINA DEL PILAR GUARIN, describió las prendas de vestir que su hija portaba ese día, como una *"…falda café oscura con rayitas en la parte de abajo habanas, una blusa color rosado suave, con unos metidos de encaje, una chaqueta de paño color beige, medias habanas y zapatos habanos, bolso larguito color beige o cafecito claro, esa era la vestimenta*". No obstante, en diligencia de exhibición de videos llevada a cabo el 3 de marzo de 1986 la señora ELSA MARÍA OSORIO no reconoció a su hija saliendo con vida del Palacio de Justicia.

Por manera, el supuesto reconocimiento efectuado por CECILIA CABRERA GUERRA y RENE GUARIN no se puede tener como prueba para demostrar la salida con vida de CRISTINA DEL PILAR GUARIN, toda vez que las prendas de vestir que llevaba al salir de su casa el día 6 de noviembre de 1985 son diferentes a las de la persona que dicen corresponder a ella en los videos que les fueron puestos de presente.

Aunado a lo anterior, JOSÉ MARÍA GUARÍN ORTIZ, padre de CRISTINA DEL PILAR, el 17 de enero de 1986, respecto a las prendas que portaba su hija, señaló: "*…un saco habano, una blusa habana de cuello volteado, una falda escocesa negra a colores vivos, zapatos color beige y cartera habana…*". Descripción que tampoco coincide con la persona rescatada del Palacio de Justicia.

Por el contrario, MARIA NELFI DIAZ, el 12 de febrero de 1988, al ser preguntada si "*Recuerda usted qué prendas de vestir tenía el día 7 de*

noviembre de 1986 (sic), *en que se produjo su liberación del Palacio de Justicia?*", manifestó que "*Tenía una falda escocés, café y habanito en cuadros y una blusa rojita de rayitas blancas y un buzo como beige oscuro y zapatos negros altos…..*", y ello coincide perfectamente con la persona que es liberada del Palacio de Justicia, de la que se aduce corresponde a CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS.

En otro aparte de su declaración MARIA NELFI DIAZ, al ser preguntada si "*bajo la gravedad del juramento que ha prestado en esta declaración se ratifica en que la persona que aparece en la segunda secuencia que nuevamente se le exhibe en esta diligencia es usted (se le exhiben nuevamente las secuencias que muestran los videos 2, 11 y 15 en el episodio que muestra la salida de personas liberadas del palacio de justicia y en donde anterior diligencia se reconoció la testigo, refutando por tanto que esa persona sea Cristina Del Pilar Guarín Cortes)*", contesto: "*ESA SOY YO INDUDABLEMENTE, NO TENGO NINGUNA DUDA QUE SOY YO*", postura que ha sostenido y de la que se ha ratificado a lo largo de la historia, incluso la vista pública de este proceso, llevada a cabo el 1° de diciembre de 2011, en la que se le puso de presente el video obtenido en la inspección realizada a la residencia del Coronel PLAZAS en donde volvió a confirmar que la persona sacada en hombros por el soldado es ella, ratificando la manera cómo estaba vestida el día de 6 de noviembre de 1985.

Agrega el defensor que no solo la mencionada testigo se ha identificado, si no que, en diligencia llevada a cabo el 5 de febrero de 1988 "*Ratificaron esta circunstancia de que la persona que sale en hombros del soldado con faldas escocesa es maría NELFI DIAZ (sic) la Dra. María YINED (sic) REYES DE PEREZ y Doña CONSUELO GUZMAN DE OSPINA. Exhibidos los dos cassettes (sic) restantes y detenidos en la misma secuencia ratificaron las anteriores y la misma MARIA NELFI DIAZ que efectivamente se trata de la salida de ella.*".

Por consiguiente, la persona que varios reconocen como CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES realmente es la señora MARIA DELFI DIAZ, y por lo tanto no existe prueba alguna que permita indicar que CRISTINA DEL PILAR salió con vida del Palacio de Justicia.

Ahora, respecto de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA señaló que según la Fiscalía existen varias pruebas que demuestran que salió con vida del Palacio de Justicia, sin embargo tal conclusión solo es obtenida de las declaraciones vertidas por su padre, ENRIQUE RODRÍGUEZ, por su esposa, CECILIA SATURIA CABRERA, y por el entonces Asesor Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, CESAR SANCHEZ CUESTA.

En punto a la declaración del señor ENRIQUE RODRÍGUEZ, verificada en diligencia de reconocimiento en vídeo llevada a cabo el 11 de abril de 1986 en las instalaciones de Televisión Española, ante la cinta N° 2 señaló que un joven acompañado por un soldado se parece a CARLOS, pero posteriormente afirmó que corresponde a otra persona, indicando en ese momento: "*… hoy puedo afirmar que la persona que aparece en el vídeo no es mi hijo Carlos, por cuanto, tanto yo como mi familia hemos adelantado por nuestra propia cuenta todas las averiguaciones que nos han sido posibles para poder suministrar a la investigación una información seria y verás (sic). Es así como nosotros fuimos las primeras personas en ver este vídeo y ponernos en contacto con los demás familiares de los desaparecidos, pues inicialmente tuvimos la convicción de que esa imagen correspondía a mi hijo Carlos. Hicimos venir a su esposa que vive en Pasto y con su colaboración y presencia hemos visto numerosos vídeos y fotografías en Agencias de Prensa y Revistas y el martes de la presente semana 8 de abril, vimos un vídeo que tiene TV HOY que funciona en la calle 38 No. 15-31 de la ciudad, cuyas tomas corresponden a esta misma salida del Palacio de Justicia y en él pudimos constatar que la persona que habíamos creído que era mi hijo Carlos, no es y corresponde a otra persona…*".

Sin embargo, en el año 2006, nuevamente en la sede de Televisión Española y en las mismas imágenes mostradas en el año 1986, manifestó que reconoce a quien podría ser su hijo, como el hombre de buzo azul y pantalón gris, escoltado por un miembro del Ejército (punto 00:10:20), afirmando que "*…cada vez que lo veo más convicción tengo de que puede ser mi hijo…*".

Así, las dos diligencias en las que participó el señor ENRIQUE RODRÍGUEZ no se pueden tomar como reconocimiento de su hijo, por cuanto en la primera existe una respuesta categórica en la que aduce que no es su hijo y después de 21 años cambia de posición, aseverando que llegó a la convicción de que sí es su hijo, de manera que a esta versión no se le puede dar credibilidad.

En ampliación de declaración[32] este mismo testigo aseguró que "*CARLOS SERRANO inmediatamente salió de la casa del florero me llamó y me dio la información de que allá vio a CARLOS que lo habían subido al segundo piso y le habían dicho que lo habían llevado herido y me mencionó una cantidad de cosas*".

No obstante, en declaración rendida por el Doctor CARLOS SERRANO, éste indicó que el señor ENRIQUE debía estar equivocado por cuanto él nunca vio a CARLOS RODRIGUEZ en ningún lado, ni en la cafetería, ni en la biblioteca, ni en la Casa del Florero, y mucho menos que lo hayan subido al segundo piso, y que de haberlo visto hubiera sido el primero en avisarle.

Así, está desvirtuado que el señor ENRIQUE RODRIGUEZ haya reconocido a su hijo, porque en dos oportunidades manifestó que le parecía, es decir, que hay duda de que lo sea, y el testigo que citó

[32] folio 70, Cuaderno 12

para corroborar que hubiese estado en la Casa del Florero, lo desmintió.

El reconocimiento que de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA realizó RENÉ GUARÍN CORTÉS, quien asegura reconocerlo con total certeza por su pelo, el bigote, la forma de caminar, la contextura y la estatura, contrasta abiertamente con lo dicho por los familiares directos de CARLOS RODRÍGUEZ, quienes a lo sumo han manifestado que se parece, pero nunca con certeza, como sí lo hace GUARIN, quien no pertenece a la familia, y conforme a la experiencia, está demostrado que tiene más poder de recordación su familia que una persona que no pertenece a ese círculo.

CECILIA SATURIA CABRERA, luego de observar los videos obtenidos en la inspección realizada en la casa del Coronel PLAZAS VEGA, que corresponden a las mismas imágenes que contiene el video de Televisión Española, afirmó categóricamente reconocer a su esposo CARLOS RODRIGUEZ y a CRISTINA DEL PILAR GUARIN, GLORIA STELLA LIZARAZO y BERNARDO BELTRAN, e inclusive le parece ver a DAVID SUSPES, siendo extraño que antes no haya hecho mención a los demás empleados de la cafetería y en el video que poseía PLAZAS VEGA si los reconozca.

Esta testigo, en diligencia del 16 de agosto de 2007, manifestó *"…., veo a CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, mi esposo. Se deja constancia por el despacho que la secuencia va hasta el 00:36:14. Veo a CARLOS con la misma ropa que salió ese día para el PALACIO, su cabello, la forma como él se peinaba, él se peinaba hacia atrás y se le caía así, hacia los lados, lo identifico por su bigote, poblado, por sus cejas, el lóbulo de la cara, su porte, su estatura y su cuerpo, veo que va asido de los dos brazos, agarrado por dos soldados… lo identifico por su forma de correr.*", y en declaración del 25 de noviembre de 1985 había manifestado que CARLOS "*estaba vestido pantalón de paño gris medio, camisa en tela gris oscuro marca Roland, Buso*

gris claro en algodón por fuera y el interior en lanilla blanca; botas de cuero gris, cortas, con ojaletes en argolla, medias grises. …….”.

Para el abogado defensor, al observar la vestimenta con la que la esposa de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA adujo salió de su casa el día de la toma y compararla con la que viste la persona que dice ser su esposo y que sale del Palacio de Justicia, es evidente que no coincide.

En su sentir, los reconocimientos realizados por CECILIA CABRERA no ofrecen ninguna credibilidad, ya que a solo 12 días de ocurridos los hechos menciona unas prendas de vestir con colores determinados, pero 22 años después lo reconoce con prendas de vestir y colores diferentes, aunado al hecho que en las primeras diligencias de reconocimiento mencionó que “*podría*” ser su esposo, pero no estaba segura.

Por su parte CESAR ENRIQUE RODRÍGUEZ, hermano de CARLOS RODRÍGUEZ, frente al video de TVE señaló: *“… En dos puntos el declarante manifiesta que podría tratarse de su hermano. Aunque de espaldas señala la toma que aparece en éste DVD de un rehén que sale tomando un saco por la mano, de camisa clara y pantalón oscuro, al lado de una mujer que viste blusa o saco rojo y falda oscura. El punto que se identifica es en 00:10:43. Luego de haberlo visto varias veces descarta que pueda ser su hermano. En otro punto de 1:03:50 hasta 1:04:00 sale una persona tomada del brazo por un miembro del Ejército, que el declarante sostiene <u>puede ser su hermano, vestido de pantalón gris y camisa y buso azul</u>,…..”*.

En la misma diligencia afirmó “*…Pues no, solamente que pues la imagen de la persona que sale en el video de la Televisión Española con el suéter azul, se me hace sumamente parecido a mi hermano, pues no absolutamente seguro pero puede ser él…* ”.

Resalta el abogado que se trata del hermano de CARLOS RODRÍGUEZ, que obviamente lo conocía muy bien, y sin embargo manifiesta no estar seguro de que sea su hermano.

Así las cosas, atendiendo las pruebas allegadas al proceso, considera establecido que CARLOS RODRIGUEZ VERA no salió con vida del palacio de Justicia, o al menos no existe certeza de que haya sido así.

De otro lado, dentro del proceso obran pruebas que demuestran que CARLOS RODRÍGUEZ no llegó o no fue visto en la Casa del Florero, tales como la declaración de MARIA NELFI DIAZ, quien el 12 de febrero de 1988[33] manifestó que en la Casa del Florero no había visto a ninguno de los empleados de la cafetería; postura corroborada por otros testigos como JOSELIN SANCHEZ ALVARADO, LUIS JOAQUÍN CAMACHO SARMIENTO y LEONOR MARIELA AVILA ROLDAN, entre otros, quienes afirman que no vieron a CARLOS RODRÍGUEZ en la Casa Museo del Florero.

De manera, reitera que respecto de los visitantes ocasionales del Palacio de Justicia, así como de los empleados de la cafetería, no existe prueba indicativa de que salieron con vida de la sede judicial y, por el contrario, las pruebas muestran que esas personas fallecieron en su interior.

Respecto de IRMA FRANCO PINEDA, señala, la Fiscalía ha manifestado que fue llevada a la Casa Museo 20 de Julio y salió de allí sin conocerse de su destino y ha querido endilgarle responsabilidad a su prohijado en este hecho, pese a no existir prueba directa o indiciaria en su contra.

[33] cuaderno anexo 5 IP 070 F223

No puede predicarse responsabilidad de su prohijado bajo el supuesto de que el personal de la fuerza pública apostado en la Casa del Florero era todo del B2 y que por consiguiente son los integrantes de esa sección los responsables de la desaparición de IRMA FRANCO, pues está probada la presencia allí no solo del B-2, sino del F-2, la SIJIN y el DAS. Menos se puede predicar esa responsabilidad a partir de asegurar que fue el B-2 quien se encargó de la retenida, cuando quienes se la llevaron fueron personas de civil, y el personal de civil en la Casa de Florero en su gran mayoría era del F2 y del DAS.

Recuerda que según consta en el proceso fue por IRMA FRANCO como la policía pudo hacer allanamientos e incautar material del M-19, por lo que plantea como hipótesis que por esa delación sus "*camaradas*" pudieron de alguna manera ser los responsables de su desaparición.

En punto a esto, cita lo señalado por JORGE ENRIQUE VILLAMIL SÁNCHEZ[34], agente de SIJIN, quien preguntado sobre sus actividades durante los días de la toma del Palacio de Justicia contesto: "*… en la Alcaldía nos encontramos con el Capitán BAYONA BORRERO, Jefe inmediato de nosotros, fue cuando él nos impartió instrucciones y dijo que hiciéramos inteligencia hacia los alrededores de la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia … al otro día a las ocho de la mañana regresé nuevamente y me tocó la misma actividad, hacer inteligencia, ya en las horas de la tarde el Capitán BAYONA me llamó y ya iba con otros Agentes que no recuerdo el nombre y dijo, vamos a hacer un allanamiento o registro a una casa donde al parecer salieron los subversivos a asaltar el Palacio de Justicia, fue así como nos trasladamos a la carrera 8ª con calle 4 sur, donde se hizo un registro a una residencia de dos pisos que al llegar pues no se encontró a ninguna persona, lo único que yo vi dentro de la casa fue unos elementos al parecer para fabricación de bombas caseras y unas cajas donde traía un dibujo*

[34] Cuaderno Anexo 72, folio 138

de puñaletas, había dentro de la casa un comedor en mimbre en el segundo piso, los Jefes hablaban de unas fotos, miraban unas fotos y las comparaban con el comedor y decían sí, es correcto, donde estuvieron lo subversivos localizaron un poco de documentos, lo cierto es que los cogieron ellos, y los llevaron para investigación de ellos…" y al interrogársele sobre quiénes se encargaron de registrar la casa indicó: "*De todas maneras el Capitán BAYONA y en esos momentos llegó el Mayor PRETEL*".

De lo anterior infiere que en esa actividad no participó el Ejército, ni operativamente ni a nivel de inteligencia desarrollando interrogatorios y torturas para obtener información.

Para refutar la afirmación según la cual personal del B2 era el encargado de recibir en la Casa Museo 20 de Julio a las personas liberadas del Palacio de Justicia, elaborar listas e identificarlos, hace alusión a la declaración rendida por CARLOS RAMOS HERNANDEZ, uno de los celadores del museo, quien el 9 de diciembre de 1986 afirmó sobre cómo vestían las personas que ingresaron inicialmente al museo cuando solicitaron se les prestara el teléfono, "*Uniformados sí, pero no me acuerdo el color del uniforme. Al que llamaba si le decía General y estaba escoltado por otros de civil*, *pero no sé cómo sería el apellido"* (cuaderno anexo 44 Fl. 111), para concluir que junto al personal de la policía se encontraba personal de civil, no reconocido como del B-2.

El TC. JAIRO ALONSO VELEZ BARRAGAN, de la Policía Nacional, menciona que se trasladó junto con el General JOSE LUIS VARGAS VILLEGAS a la esquina de la Casa del Florero y a los pocos minutos llegó el Comandante de XIII Brigada y se apersonaron de la dirección del operativo, quedando a la espera de recibir órdenes que impartiera el General VARGAS. Entre las instrucciones recibidas

estaba la de llamar al Jefe de Inteligencia de la SIJIN para que coordinara lo pertinente a la identificación de las personas sacadas del Palacio de Justicia; actividad que se inició momentos más tarde.

De la Declaración del miembro del F-2, AUDIAS SEGUNDO BELTRAN ARGOTY, rendida el 28 de noviembre de 1985, concluye que la Policía se encargó de vigilar al personal llevado a la Casa Museo del Florero y dejó liberados a cargo de otros miembros de la policía, mientras sus superiores investigaban quiénes eran.

De la declaración rendida el 28 de noviembre de 1985 por EDGAR TORRES ZETABOBO, miembro del F-2, resalta que las personas que salían de la Casa del Florero lo hacían con su cédula y un carnet que los acreditaba como funcionarios de la Corte o del Palacio de Justicia, y luego que se sacaba la lista en máquina se les permitía la salida al quedar radicados en una lista.

JAIME DE JESUS GAÑAN LOPEZ, oficial de la PONAL, Sub-jefatura del F-2 de Bogotá, el 2 de diciembre de 1985 adujo haber cumplido labor de inteligencia, pues dada la situación que se presentaba al interior del Palacio era difícil ingresar. Posteriormente estuvo en la Casa del Florero coordinando con personal del grupo de inteligencia lo relativo a la identificación de las personas evacuadas del interior del Palacio.

Afirma que todas las personas evacuadas del Palacio de Justicia fueron conducidas a la Casa del Florero, en donde dos oficiales de la SIJIN se encargaban de sacar las listas de los liberados, establecer su identidad y su vinculación como empleados y funcionarios del Palacio, y hasta donde tiene conocimiento, una vez establecida la identidad fueron dejadas en libertad, refiriendo que al

F-2 no fueron conducidas personas de las evacuadas del Palacio de Justicia.

JAIME GALLO ZULETA, miembro de la SIJIN, el 3 de diciembre de 1985 indicó que llegó apoyo del F-2, personal uniformado, entre ellos los tenientes PINZÓN, CAICEDO y FONSECA, y el agente LEÓN, y adujo haber visto a personal del Ejército, personal de civil o sea B-2 o F-2, que tomaban posiciones estratégicas.

Sobre el mismo tema continúa citando declaraciones como la de LISANDRO JUNTO ESPINOSA, Capitán de la Policía Nacional, quien el 3 de diciembre de 1985 señaló que se trasladó al sector del Palacio de Justicia, en donde ya había personal de la Policía uniformada y personal del Ejército, tomando contacto con otros oficiales del F-2, recibiendo órdenes de hacer inteligencia en los alrededores y al día siguiente a las siete de la mañana el Mayor GAÑAN, subjefe de la SIJIN, le ordenó trasladarse a la Casa del Florero con el objeto de tomar datos sobre el personal evacuado de Palacio.

FRANCISCO JAVIER GOMEZ GUTIERREZ, miembro de la SIJIN, el 4 de diciembre de 1985 manifestó que se desplazó hacía el Palacio de Justicia, encontrándose con el Capitán JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS, Jefe del Grupo de Inteligencia, permaneciendo en especial en la Casa del Florero y sus alrededores hasta las 10:00 de la noche, viendo compañeros suyos de otros grupos de la SIJIN en la Casa del Florero.

Por su parte JOSE VELANDIA NIÑO, Teniente Coronel, el 31 de diciembre de 1985 señaló que el 6 de noviembre de 1985 se encontraba de Comandante de la Fuerza Disponible y se dirigió hacia el Palacio de Justicia en donde observó que ya estaba

personal del Guardia Presidencial y personal del F-2 repeliendo un ataque.

De manera, mucho personal de las diferentes agencias de inteligencia del Estado adelantó actividades de identificación, no siendo posible asegurar que fueron miembros del Ejército, y en especial del B-2, quienes interrogaron a IRMA FRANCO, pues no existe claridad frente al personal de civil que hacia parte del operativo, sin conocerse si era del B2 o del F2, por lo que no se puede predicar con certeza la responsabilidad del B2 respecto a la suerte corrida por IRMA FRANCO, cuando ni siquiera se estableció quienes la tuvieron en custodia.

De otro lado, cita la declaración rendida el 3 de diciembre de 1985 por el LUIS MIGUEL MARTIN JIMENEZ, suboficial adscrito a la SIJIN, quien contó haber sido trasladado a las 20:00 horas a la Casa del Florero con el fin de servir como secretario para tomar los datos de las personas rescatadas del Palacio de Justicia, actividad que retomó el 7 de noviembre aproximadamente a las 14:00 horas y adelantó hasta cuando salió el último de los rehenes, para señalar que de ella se desprende que los últimos en irse de la Casa del Florero fueron miembros de la Policía y no del B-2.

Así, estando probado que los miembros del B-2 se fueron de la Casa del Florero sobre las 17:00 horas del 7 de noviembre de 1985, si es cierto, como lo aduce la Fiscalía, que "*… IRMA FRANCO salió custodiada por militares de la Casa del Florero en las horas de la noche del 7 de noviembre de 1985, en un vehículo tipo campero que fue ubicado sobre la puerta principal del inmueble…"*, bajo ninguna circunstancia puede predicarse que quienes la custodiaban pertenecían al B-2, y menos su defendido, pues a esa hora ya no se encontraban en el lugar y ese vehículo tampoco era de esa sección.

Considera que la desaparición de IRMA FRANCO PINEDA se ha convertido en una verdadera cacería de brujas, pues en el proceso solo quedan dudas en cuanto a si está o no realmente desaparecida; si se fue o no con personal del Ejército, de la policía o del DAS, o si pudo correr la misma suerte de CLARA HELENA ENCISO HERNANDEZ, identificada como perteneciente al M-19, quien terminó en otro país, a pesar de haber sido reportada de manera falsa como desaparecida.

En el caso se está deduciendo indiciariamente que las personas que no murieron en el Palacio de Justicia fueron llevadas al Museo del Florero y luego desaparecidas, pero al presentarse la duda se desintegra la certeza, aseveración que quiere respaldar con lo señalado por el Juez de Primera Instancia de la Justicia Penal Militar en proveído del 12 de mayo de 1992, para quien "*Entre los últimos en salir por las escaleras del costado sur, huyendo del incendio en el tercer piso y posteriormente, escapando por un ventanal a eso de las 9 de la noche figuran los doctores: JULIO CESAR URIBE ACOSTA, JORGE ROJAS LADINO y personal subalterno..*

(…..)

De otra parte, otros testigos comentaron que CLARA HELENA ENCISO HERNANDEZ (La mona Claudia) salió con vida y también fue llevada al Museo 20 de Julio, además se sostuvo en autos que en las listas del personal rescatado figuraba el nombre de CLARA ENCISO CONTRERAS y en otra, GLORIA ENCISO CONTRERAS OBANDO, nombres que al ser cotejados con las nóminas de la Corte y Consejo de Estado, no ofrecieron ni siquiera mediana similitud….

Pero el presunto desaparecimiento dejó de ser un misterio al conceder esta señora una entrevista al periodista RAMON AUGUSTO JIMENO SANTOYO, quien le tomó personalmente las fotos que aparecen en la portada de la revista Semana del mes de noviembre de 1988: Otra entrevista dio la misma persona en la ciudad de México a la periodista OLGA GRACE BEHAR LEISER.

Gran revuelo publicitario se produjo cuando FABIO ALEJANDRO MARIÑO CARELA (Comandante Hipolito) a quien se consideró desaparecido de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, dejó la clandestinidad para integrar en representación de ese grupo, la comisión de dialogo en procura del acuerdo de desmovilización y regreso definitivo de los integrantes del M-19 a la vida civil (periódico el Tiempo 22 de marzo de 1989).
Quedan entonces sin piso, los pretendidos indicios traídos por la Fiscalía, como lo hemos comprobado anteriormente.
Es que son numerosas las pruebas, para demostrar que no es cierto que: las personas que no murieron en el palacio de justicia fueron llevadas al Museo y desaparecidas…".

Agrega el defensor que en los videos de Televisión Española se aprecia un grupo de personas saliendo del Palacio de Justicia en sentido contrario al Museo del Florero, al igual que por el costado de la carrera octava son evacuadas unas personas en camillas.

Resalta como significativos los testimonios encontrados en inspección judicial realizada en el archivo general del Ministerio de Defensa el 14 de agosto de 2008, obrantes en la investigación 446 realizada por el comando de la BIM (cuaderno de anexos 116), en donde varios militares pertenecientes al Batallón Guardia Presidencial y a la Escuela de Artillería narraron la salida de personas por el sótano de la edificación.

En ese sentido el Capitán LEOPOLDO GUILLERMO CARVAJAL SOLER mencionó el rescate de ocho rehenes conducidos a la parte exterior y entregados a la Policía Nacional, así como la salida por el sótano del Palacio de Justicia de "*cuatro conductores y un señor*" entregados también a la Policía.

El soldado LUIS ALBERTO JARA CONTRERAS dio a conocer el rescate de rehenes por medio de un carro de bomberos, y el dragoneante ALEXIS MONTOYA FIERRO ayudó a evacuar ocho personas por el sótano.

Miembros de la Policía Nacional ayudaron al rescate de personas ingresando y saliendo por el sótano de la edificación en construcción, como lo refieren el Capitán LUIS GUILLERMO GARZON TORRES y el teniente OZIAS MONTAÑEZ GUERRERO, señalando de este último que ayudó a liberar personas que se encontraban en el primero, segundo y tercer pisos, por la parte interna del edificio.

Todo eso para poner de relieve que no toda persona rescatada del Palacio de Justicia salió por la puerta principal ni todos fueron conducidos a la Casa del Florero.

Conforme a lo señalado, considera que en lo que tiene que ver con IRMA FRANCO solo existen dudas acerca de lo ocurrido con ella. No hay certeza de que haya llegado a la Casa del Florero, pues así como existen testigos que presumen reconocerla otros dicen que no; y en caso de haber llegado a la Casa del Florero se desconoce qué persona o que institución tomó contacto con ella, teniéndose conocimiento que a raíz de informaciones obtenidas a través de un miembro del M-19 por la Policía Nacional se logró ubicar la casa donde se planeó la toma guerrillera.

De otra parte, está probado que existió un manejo irregular de la escena de los hechos, lo que ocasionó problemas para el reconocimiento de cadáveres, situación en la cual el Ejército Nacional, y específicamente su prohijado, no tuvieron nada que ver.

La prueba de las malas prácticas o malos procedimientos se puede extraer de algunas declaraciones de Policiales como el coronel HERRERA MIRANDA ALONSO[35], quien afirmó haber estado en la tarea de evacuación de los muertos a la plazoleta del primer piso, a donde se bajaron todos los muertos y se les practicó el levantamiento respectivo. Situación confirmada por el capitán TATIS[36], de la Policía Nacional, al referir que miembros de la Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos se encontraban bajando cadáveres al primer piso.

Se ha dicho que el Ejército Nacional realizó un manejo irregular e incluso alteró la escena de los hechos. No obstante, en su criterio, las pruebas indican que quienes adulteraron la escena de los hechos fueron otros organismos del Estado, especialmente la Policía Nacional, pues como lo señaló el General ARIAS CABRALES[37], al concluir la resistencia armada se dispuso el retiro de las tropas, cediendo el control total a la Policía Nacional, la cual procedió a realizar las diligencias de levantamiento y recolección de los cuerpos incinerados.

El Mayor VASQUEZ RODRÍGUEZ no tuvo ninguna injerencia en el desarrollo de los acontecimientos posteriores a la recuperación del

[35] Declaración del 27 de octubre de 1987 que " … después del asalto final de la terminación del operativo estuve en la tarea de evacuación de los muertos a la plazoleta del primer piso donde se encuentra el monumento a Márquez, allí se bajaron todos los muertos y se les practicó el levantamiento respectivo…"

[36] declaración rendida el 12 de enero de 1985, quien dijo: "Al día siguiente, viernes, entramos a las siete y cuarto de la mañana aproximadamente y para esa hora, se encontraban dentro del edificio, gente de la cruz Roja, defensa Civil y Bomberos, bajando cadáveres aproximadamente había un grupo de unos doce cadáveres que habían llevado al patio de la primera planta…"

[37] "Al concluir el rescate de las personas secuestradas, el 7 de Noviembre, y cesar toda resistencia armada por el grupo de antisociales que había irrumpido violentamente en el Palacio de Justicia, se dispuso el retiro de las tropas del recinto, cediendo su control total a la Policía Nacional, la cual procedió a partir de ese momento, con sus elementos propios (Policía Judicial), a practicar el levantamiento de cadáveres y a la recolección de los cuerpos incinerados que en número considerable habían sido encontrados en el cuarto piso del inmueble. Esta labor, así como la identificación, evacuación y demás actividades subsiguientes de rigor, fueron continuadas por elementos de la Policía Nacional y Medicina Legal, en lo cual ninguna injerencia tuvo la Brigada."

edificio judicial. No tenía capacidad de mando para ordenar ninguna acción a los militares presentes en el Palacio de Justicia o en el Museo 20 de Julio. Por ello no se le puede atribuir responsabilidad alguna en la segura alteración de la escena de los hechos; el lavado realizado a algunos cadáveres; el manejo irregular que se dio con respecto a los cadáveres calcinados, como tampoco la decisión de ordenar a determinada autoridad realizar los levantamientos, su posterior traslado a Medina Legal o el trámite de reconocimiento y entrega de cadáveres.

Las diligencias de levantamiento de cadáveres no se realizaron con la debida técnica forense, lo cual contribuyó a generar un caos en la posterior identificación y entrega de cuerpos.

Como se desprende de lo sostenido por DIMAS DENIS CONTRERAS VILLA, patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, en los procedimientos para la identificación de cadáveres se utilizaron fragmentos de prendas de vestir, calzado y joyas, debido a que había cadáveres calcinados parcial o completamente. Sin embargo, algunos funcionarios al hacer los levantamientos colocaron muchas prendas de valor aparte de los cuerpos, lo que significó que varios de esos cadáveres llegaran al Instituto de Medicina legal sin los elementos respectivos, o si llegaron los elementos no se supo a qué cadáver correspondían.

Además, los cadáveres llegaban en bolsas plásticas y al destaparlas encontraban restos correspondientes a cadáveres diferentes, es decir, en una misma bolsa podían encontrar dos pelvis ó tres fémures o un caso marcado como hombre y era mujer.

Así las cosas, la adulteración y las irregularidades en la escena de los hechos impiden determinar con la certeza exigida por la ley 600

de 2000 en su artículo 232 que las personas presuntamente desaparecidas hayan salido con vida del Palacio de Justicia, pues las pruebas indican que a muchos cadáveres no se les practicó diligencia de levantamiento y muchos otros llevados a Medicina Legal no fueron identificados adecuadamente, por lo que en este momento, ni antes, ni después, se podrá determinar con certeza qué personas murieron en la toma del Palacio.

Pese a que en la actualidad las autoridades afirman que 11 personas se encuentran desaparecidas, no se puede saber realmente si ellas se encuentran dentro de esos cadáveres no identificados o mal entregados a los familiares, sabiendo que en un caso se entregó un cadáver cuando en realidad eran dos, y de la existencia de varios cadáveres a los que no fue posible realizarles la prueba de ADN por su alto nivel de degradación.

La falta de rigor en el procedimiento de levantamiento de los cadáveres se hace patente en las declaraciones de JAIME ANTONIO GAMBOA[38], empleado de SERVIASEO, quien refirió haber encontrado un pedazo de cráneo con pelo y que un compañero suyo encontró un pedazo de hueso de un brazo, partes que botaron junto con la tierra y los escombros; JOSE MIGUEL PERILLA[39], también de SERVIASEO, quien encontró un cráneo quemado y parte de algunos dedos amontonados, y CARLOS JULIO ROJAS ALDANA[40], quien da cuenta de cómo en el primero

[38] Declaración del18 de marzo de 1986: “En el tercer piso encontré un pedazo de cráneo con pelo, eso lo botamos…un compañero mío si encontró un pedazo de hueso de un brazo, no sé el nombre del compañero, eso lo comentaron a la hora de tomar las onces, nosotros le comentamos al supervisor Flórez quien no dijo nada y entonces botamos eso junto con la tierra y los escombros

[39] Declaración del 31 de marzo de 1986 “Yo encontré en el segundo piso parte de un cráneo quemado y parte de los dedos estaban amontonados...”

[40] “En la parte de afuera en el primer piso donde se encuentra la estatua encontramos como un pedazo de cráneo, y pedazos de ropa aparentemente de mujer, estaba todo en un montoncito como carbonizado. Nosotros lo vimos ahí y eso se barrió todo, eso lo había visto todo mundo…”

piso encontraron un pedazo de cráneo y pedazos de ropa, todo en un montoncito como carbonizado, y todo fue barrido.

De manera, afirma, se botó junto con los escombros y la basura valiosa prueba útil para la identificación de cadáveres, pruebas de ADN, etc., que muy seguramente hubieran dado como resultado la no existencia de este proceso, pues no se puede decir con certeza que los presuntos desparecidos salieron con vida del Palacio de Justicia.

En cuanto a la responsabilidad atribuida al Mayor OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRÍGUEZ en la presunta desaparición de las once personas, señala que su prohijado para la época de los hechos ostentaba el cargo de analista del Blanco FARC y en tal condición tenía dentro de sus funciones el estudio de los documentos e informaciones recibidas de organismos del Estado encargados de realizar actividades de inteligencia, y de toda información donde se mencionara a este grupo subversivo. Obtenida esa información la evaluaba y la enviaba al Comando del Ejército, específicamente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE).

En punto a lo señalado por la Fiscalía en cuanto a no entender cómo especialistas en inteligencia, quienes manejaban el conocimiento del blanco y realmente conocían cuales eran los integrantes del grupo subversivo, simplemente hubieran sido llevados para *"mirar",* para *"suministrar o controlar los alimentos*", aduce que es preciso indicar que su representado no manejaba el Blanco M–19, no conocía quienes eran sus integrantes y por ello fue destinado a otras labores, no de especialista de Blanco o analista, sino como un soldado más, presto a la colaboración y entrega de alimentos en la operación.

Dentro de la Brigada existían personas denominadas “Analistas”, que se especializaban según el grupo objetivo hacia quien se orientaban las actividades de inteligencia, entre ellos FARC, M-19, ELN, entre otros; por lo tanto, si la toma la hubieran realizado las FARC posiblemente su mandante sí hubiera prestado su conocimiento como especialista en este Blanco, lo cual no fue así.

OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRÍGUEZ fue enviado como apoyo del Coronel SÁNCHEZ pero no como especialista, ni analista de Blanco, sino como un colaborador más, aunque por la cantidad de policías y miembros del DAS presentes en la Casa del Florero no habría sido necesaria su presencia.

Respecto al señalamiento de haber realizado labores de identificación o reconocimiento de las personas liberadas del Palacio de Justicia presuntamente pertenecientes al M-19, reitera que el Mayor VASQUEZ no conocía, ni era experto en el grupo M -19, por lo que no podía señalar a alguno de los rescatados como perteneciente a ese movimiento.

Las actividades desarrolladas por su prohijado al interior del Museo 20 de Julio consistían en (i) Sacar las listas de las personas liberadas del Palacio de Justicia, lo que no implicaba ningún tipo de interrogatorio, pues obedecía simplemente a preguntar nombre, numero de cédula y estado de salud, y (ii) Se encargó de actividades de tipo administrativo como recibir y entregar los alimentos para las tropas.

Para la defensa es una verdad incontrovertible la participación directa de la Policía Nacional en labores de inteligencia e interrogatorios tanto en los alrededores del Palacio de Justicia como en la Casa del Florero, actividades iniciadas incluso antes de la

llegada de los hombres del Ejército Nacional y específicamente de su prohijado.

Así lo corrobora el Teniente Coronel de la Policía Nacional JAIRO ALONSO VELEZ BARRAGAN[41] cuando refiere: "*El día seis de noviembre entre las once y media y doce del día…me trasladé junto con el señor Brigadier General JOSE LUIS VARGAS VILLEGAS al sitio de los acontecimientos…Entre las varias instrucciones que se dieron fue la de llamar al Jefe de Inteligencia de la SIJIN para que coordinara lo pertinente a la identificación de las personas que salieran del Palacio de Justicia, actividad que se inició momentos más tarde. …PREGUNTADO: Sírvase decirnos si usted le fueron dadas órdenes concretas y de ser así cuáles y de parte de quién? CONTESTO: No, la única orden concreta fue la que dije anteriormente, cuál era la identificación de las personas que salían del Palacio de Justicia actividad que se realizó a través del Jefe de Inteligencia de la SIJIN… … En cuanto a la identificación de las personas que salían del Palacio de Justicia, y fueron llevada a la Casa del Florero, como ya mencioné anteriormente, el Capitán Jefe de Inteligencia de la SIJIN se encargó de coordinar tal actividad…*".

El General de la Policía VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO señaló que "*La identificación de quienes salieron del Palacio de Justicia, se llevó a cabo de diferentes maneras, ya que no todos tenían documentos de identidad. Muchos fueron reconocidos como empleados o funcionarios por quienes trabajaban en alguna dependencia de la Corte y Consejo de Estado.*

En la Casa del Florero los señores Tenientes Coroneles HERRERA MIRANDA de la Policía Nacional y SANCHEZ RUBIANO EDILBERTO del Ejército, cumplieron tarea de verificar la identidad, llevando un registro en el cual quedaron anotadas 215 personas.".

En el mismo sentido relaciona las declaraciones del Mayor de la Policía JAIME DE JESUS GAÑAN LOPEZ, llevada a cabo el 2 de diciembre de 1985, en la que manifestó: "*estuve en la Casa del Florero*

[41]Declaración vista a folio 24 y ss del cuaderno anexo 8

coordinando con un personal del Grupo de Inteligencia lo relativo a la identificación de las personas que comenzaron a ser evacuadas del interior del Palacio, actividad esta que se continuó al día siguiente."; LISANDRO JUNCO ESPINOSA, capitán de la Policía Nacional adscrito a la SIJIN, en cuanto expresó: "*al siguiente día a las siete de la mañana el señor MAYOR GAÑAN Sub-Jefe de la SIJIN, me ordenó trasladarme a la Casa del Florero, con el objeto de tomar datos sobre el personal que era evacuado de dicho Palacio…*", y LUIS MIGUEL MARTIN JIMENEZ, suboficial de la Policía Nacional adscrito a la SIJIN, quien manifestó: "*…yo fui trasladado aproximadamente a las veinte horas a la Casa del Florero con el fin de servir como secretario para tomar los datos personales de las personas que iban siendo rescatadas del Palacio de Justicia, esa fue toda mi actividad. El día siete aproximadamente a las 14 horas nuevamente me ordenaron trasladarme a la Casa del Florero con el fin de continuar con esa misma actividad hasta que salió la última persona de los rehenes. Las personas suministraban el nombre y apellidos completos, el número de cédula o documento de identidad, la dirección de residencia y teléfono y el grado y cargo que desempeñaban en el Palacio de Justicia, a muy pocos se les pidió documentos de identificación, porque algunos no los portaban y se estimaba que no era necesario puesto que eran trasladados por personal de las fuerzas armadas directamente a dónde yo estaba…*".

De manera, no es cierto que el Ejército Nacional controlara en su totalidad las actividades desarrolladas en la Casa del Florero; que se hayan encargado de las labores de identificación y control de las personas rescatadas con vida del Palacio de Justicia, ni que haya sido el único organismo del Estado encargado de las labores de control e identificación de los liberados.

Tanto la Policía Nacional, por intermedio de la DIJIN y la SIJIN, así como el DAS participaron activamente en las actividades de inteligencia llevadas a cabo en la Casa Museo del Florero. Es más, como se desprende de la declaración de EDGAR TORRES ZETABOBO, agente de la Policía Nacional adscrito a la SIJIN, quien

controló toda la gestión de identificación de las personas liberadas del Palacio de Justicia fue la Policía Nacional.

Al Mayor OSCAR WILLIAM VASQUEZ se le acusa de haber realizado interrogatorios a personas liberadas o presuntos guerrilleros provenientes del Palacio de Justicia, cuando no existe ninguna prueba de ello y cuando lo único cierto es que, tal y como lo ha afirmado, estuvo en la Casa del Florero colaborando en algunos momentos sacando listas de las personas liberadas y estando pendiente de gestiones de tipo administrativo como la recepción y entrega de alimentos a la tropa, gestiones que le colmaron bastante tiempo.

En cuanto a lo expuesto por los apoderados de la parte civil en su alegato de conclusión como "*PAPEL Y CAPACIDAD DE LOS ACUSADOS*", en donde refieren expresamente que el mayor VASQUEZ RODRÍGUEZ, cuando regresó a la Brigada el 7 de noviembre y durante los días posteriores, dirigió los interrogatorios de algunas personas llevadas allí, catalogadas sospechosas, como JOSÉ VICENTE RUBIANO, quien manifestó haber sido trasladado a la Escuela de Caballería, donde fue interrogado y torturado, considera "*mentirosa y malintencionada*" la vinculación que hacen de su prohijado con el capitán mencionado por el testigo, pues tal y como está señalado en la misma resolución de acusación VASQUEZ RODRÍGUEZ es oriundo de San José de Pare (Boyacá), mientras que, según el deponente, "*El capitán pastuso era el que mandaba a la gente a que nos pegaran, pero los otros que nos pegaban no sabía que grados tenían porque no tenían distintivos de grado. Ellos, los que nos pegaban, decían era 'mi capitán'. Había cuatro o cinco además del Capitán*" (subraya el expositor).

Igual califica de carente de verdad lo dicho por la parte civil en cuanto a que el Ejército a través de interrogatorios pudo establecer el lugar donde se había planeado la toma guerrillera por parte del M–19, toda vez que eso fue realizado por la Policía Nacional y fue de esa inteligencia de donde salió la información sobre el lugar donde se planeó la toma, tal y como lo precisó anteriormente con base en el testimonio de JORGE ENRIQUE VILLAMIL SÁNCHEZ[42], agente del F-2, que permite afirmar que en esa actividad no participó el Ejército ni operativamente ni con labores de inteligencia.

De otro lado, en cuanto a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, no se encontraba en Bogotá para el 6 y 7 de noviembre de 1985, sino en la ciudad de Villavicencio, lo cual fue corroborado por él en diligencia celebrada el 24 de febrero de 2012 y se encuentra soportado documentalmente con las órdenes del 1, 5 , 6 y 7 de noviembre de 1985 del Batallón de Servicios N° 7 de Villavicencio y la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, obrantes en el cuaderno 32 a folios 9 al 74, dentro de las cuales no figura ninguna anotación ni orden de desplazamiento de personal con destino a la operación del Palacio de Justicia, y por ello, todo lo que de este testigo cita la Fiscalía no puede ser cierto.

Agrega que VILLAMIZAR ESPINEL rindió declaración bajo la gravedad del juramento asegurando no haberse presentado nunca a declarar ante la Fiscalía 4ª delegada ante el Corte, por lo que, partiendo de este hecho concreto, todo lo que se desprenda de esa prueba ilegal no puede ser tenido en cuenta, aunado a que la declaración que obra en el plenario no fue reconocida ni en su contenido ni en su firma por el presunto declarante.

---

[42] Cuaderno Anexo 72, folio 138

En ese mismo sentido señala que el dictamen grafológico practicado para cotejar la firma de VILLAMIZAR con la impuesta en la declaración supuestamente rendida ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte, concluyó que la firma dubitada es uniprocedente respecto de un documento aportado por la Fiscal Cuarta a un proceso penal seguido en su contra, del que no se acreditó su legalidad ni autenticidad, ni se le puso de presente a VILLAMIZAR ESPINEL para que diera fe si era o no su firma, por lo que solicita se acceda a las pretensiones de la Procuraduría, pues el dictamen, así como su ampliación, está viciado de ilegalidad.

Resalta como extraño que la Fiscal Cuarta tuviera en su poder un documento original que le pertenece al proceso. Pero más que eso, que siendo un original que debería ser exactamente igual al dubitado, no lo es.

Al respecto se refiere a lo señalado por la Fiscalía en cuanto a que "[el] *testimonio, …. fue practicado válidamente por la instructora en desarrollo de una diligencia de inspección; aunque al testigo solo se le formuló una pregunta, ello se explica por lo avanzado de la hora en que se tomó la diligencia y porque con base en sus informaciones se haría una prospección en el lugar; además,* ***en el acta consta que se dispuso continuar la declaración en una nueva oportunidad, lo cual no fue posible porque el señor Villamizar Espinel no pudo ser ubicado nuevamente***" (subrayado y resaltado del texto), para señalar que, atendiendo lo visto en la declaración que obra en el expediente puede ser que sea así, pero ello no se consigna de esa manera en el documento en original aportado por la Dra. ÁNGELA MARÍA BUITRAGO, en donde lo que se señala es: "*A continuación el despacho le solicita indique el sitio referido en su declaración. Se tiene apoyo de fotografía con los investigadores Efrén González y Pablo Vásquez. En tanto se fija el sitio que indica en su declaración se suspende la misma y se firma por quienes en ella interviene*".

De manera, concluye, además de estar viciado de ilegal, también se ha faltado a la verdad cuando se dice por la Fiscalía que la diligencia no se pudo terminar por cuanto el declarante no pudo ser ubicado nuevamente, ya que esto no es lo que consta en los dos documentos obrantes dentro del proceso.

Por lo anterior solicita se tenga en cuenta el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que no pudo llegar a una conclusión.

Finalmente, con base en declaración rendida por RENE GUARIN el 13 de abril de 2007 ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte (cuaderno de copias N° 14), aduce que hace cerca de 28 años éste se reunió con los familiares de los desaparecidos, lo cual debe tenerse en cuenta, pues está claro que este proceso nace en virtud de los reconocimientos surgidos de esas reuniones, y dadas las condiciones personales de RENE GUARIN, indultado del M-19, es un testigo catalogable como sospechoso.

Para la defensa eso resulta relevante porque fue RENE GUARIN, junto con SATURIA CABRERA, quienes supuestamente reconocen en los videos a los "*desaparecidos*", y eso es lo que finalmente ha constituido prueba de cargo en contra de su prohijado.

Por lo anterior solicita que al momento de hacer la valoración probatoria para dictar sentencia se tenga en cuenta el interés que le asiste a RENE GUARIN y a SATURIA CABRERA, a quienes considera testigos sin la credibilidad necesaria para ser tenidos en cuenta.

Finalmente el **defensor de FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA** inicia su intervención señalando que su alegación está dirigida a demostrar la no culpabilidad de los militares, al no existir prueba que

con certeza demuestre que las personas por las cuales se averigua y cuyo paradero se desconoce, hubiesen salido con vida del Palacio de Justicia e ingresado a la Casa Museo 20 de Julio, al igual que a desvirtuar la responsabilidad endilgada por la Fiscalía a su prohijado como coautor del delito de desaparición forzada.

Señala que la Fiscalía orientó su investigación tan solo contra miembros del Ejército, dejando por fuera a los miembros del M-19 y a entes estatales que acudieron en ayuda para sofocar la revuelta, tales como la Policía Nacional, el DAS, el F2, el GOES, la Cruz Roja y la Defensa Civil, quienes debieron ser llamados al proceso para aclarar su intervención en los hechos.

Su prohijado fue llamado a responder en calidad de coautor del delito de desaparición forzada, de cuya imputación extracta como cuestión jurídica a probar con certeza por parte de la fiscalía, (i) la existencia del hecho; (ii) la coautoría de FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, y (iii) su responsabilidad penal.

Frente a la existencia del hecho, precisa que en cuanto a la presencia de los desaparecidos de la cafetería que funcionaba en el Palacio de Justicia se ha de aceptar para su demostración la referencia que al respecto realizaron (i) El Tribunal Especial de Instrucción, (ii) la Fiscalía 4ª, frente a la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 24 de julio de 1997, Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández, y (iii) El Informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de Palacio de Justicia, aceptando sus conclusiones como acreditación del hecho que se investiga y sobre lo cual aduce no tener reparos.

En cuanto a la calidad de coautor por la que fue llamado a juicio FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA indica que se debe

establecer su intervención en la ocurrencia de la infracción, a fin de definir si tiene tal calidad.

Cuestiona lo argumentado en la resolución de acusación para atribuirle a los procesados responsabilidad en condición de coautores, considerando que se realizó una mala citación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en atención a que lo allí establecido aplica para organizaciones criminales u organizaciones delictivas como sería el caso del M-19, la ONT-FARC, ELN, o las organizaciones de narcotraficantes, pero para el caso no es de recibo, siquiera como ejemplo, por no encontrarse satisfechos los requisitos que demanda la figura de la coautoría como son el acuerdo previo, la división de trabajo y la esencialidad del aporte.

En su sentir en este caso no se puede hablar de acuerdo previo, porque el Ejército Nacional es un organismo que forma parte de la Fuerza Pública, cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, siendo en cumplimiento de esa misión que el Ejército acudió a la Plaza de Bolívar a defender la patria y las instituciones.

Tampoco se puede hablar de acuerdo porque ni su prohijado, ni ningún otro militar habían acordado previamente acudir al Palacio de Justicia a cometer alguna conducta delictiva y menos acordaron a quien desparecer, acudiendo al lugar en cumplimiento de una orden de autoridad competente.

No puede predicarse que los procesados "*dominan el hecho colectivo*", aplicando una teoría expuesta por los autores alemanes Roxin y Kai que, considera, no tienen cabida en Colombia; ni puede decirse que

"*gobiernan su propia voluntad*", en atención a que son miembros de las Fuerzas Armadas, sometidos a grados establecidos en los reglamentos y en los organismos castrenses, existiendo niveles jerárquicos y de subordinación, por lo que en el caso del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO y los demás militares sindicados no gobernaban su propia voluntad, siendo su deber como militares acudir en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

No puede asegurarse que existió división del trabajo ya que en un organismo como el Ejército las funciones que deben cumplir oficiales, suboficiales y soldados están establecidas en las leyes, decretos y reglamentos que los rigen.

Igual tampoco puede indicarse nada sobre la esencialidad del aporte, porque su defendido solo estaba cumpliendo la orden de llevar unos radios a la Casa del Florero, y con su presencia o sin ella la recepción e identificación de las personas rescatadas se estaba cumpliendo por el DAS, la DIJIN, el F2 y otros organismos del Estado dispuestos para tal fin.

Concluye que la Fiscalía no logró acreditar la calidad de coautores de los encausados. No demuestra por qué FERNEY CAUSAYA es coautor. No concreta cual fue su participación, pues si bien estuvo presente no lo hizo desarrollando las actividades que aduce el ente instructor; estuvo pero a partir de la 1:30 de la tarde del 7 de noviembre de 1985 y no por voluntad propia. El fin de su presencia no era ilícito y su única función fue llevar unos radios y entregarlos al Coronel SÁNCHEZ RUBIANO.

Argumenta que la imputación realizada por el ente instructor no cumple con los requisitos exigidos por el art. 29 del Código Penal,

inciso 2º, resaltando que FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA no sabía ni se imaginaba lo que iba a ocurrir los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y reitera que llegó el 7 de noviembre a la 1:30 pm. sin tener conocimiento de las circunstancias en que se desenvolvieron los hechos dentro del Palacio de Justicia, ni estuvo en la Casa del Florero realizando entrevistas, ni identificación de las personas liberadas, funciones realizadas por personal de la DIJIN, el F2, el DAS y la Cruz Roja.

Concluye que Fiscalía se limitó a predicar la existencia de una coautoría con fundamento en la presencia de su defendido en el lugar de los hechos el 7 de noviembre de 1985, presencia que el ente acusador procedió a inferir del oficio 027 de 1986, suscrito por el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, evidencia que considera circunstancial y que no debió tenerse en cuenta para emitir resolución de acusación en contra de su prohijado.

Refiere que el ente acusador se limita a imputarle responsabilidad a su defendido generalizando el análisis probatorio, pasando por alto que la responsabilidad penal no es colectiva sino individual, siendo necesario indicarle al procesado cual es el comportamiento que lo hizo incurrir en el tipo penal por el que se le acusa.

De otra parte, asegura que al examinar las pruebas recogidas en este proceso no encuentra certeza respecto de la hora en que supuestamente salieron con vida los desaparecidos, pues por un lado se afirma en los reconocimientos que realizaron en videos sus familiares que aparecen saliendo después del mediodía del 7 de noviembre, pero contra esa afirmación se encuentra la declaración de un soldado que afirma que sacó al administrador de la cafetería y a CRISTINA GUARÍN el día 6 de noviembre a las 4 de la tarde.

Hace referencia al salvamento de voto presentado a la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en contra del Coronel PLAZAS VEGA, en donde se resaltan las innumerables contradicciones presentes en los mencionados reconocimientos, atendiendo que en los realizados a poco tiempo de sucedidos los hechos no pudieron afirmar con certeza que sus familiares salían con vida y sin embargo 24 años después recuerdan detalles como el tipo de zapatos, blusa y hasta el color de las prendas que vestían.

Resalta que ha quedado sin repuesta "*un pequeño detalle*" y es que si todos los empleados de la cafetería se encontraban listos para atender las actividades de la hora del almuerzo, lo lógico era que se encontraran uniformados, y no se explica entonces cómo, cuando supuestamente salen del Palacio de Justicia, su reconocimiento está basado en las ropas que tenían puestas cuando salieron de sus casas hacia su trabajo.

A su juicio los reconocimientos efectuados son producto de una planeada preparación de los testigos y familiares de los presuntos desaparecidos, quienes tuvieron la oportunidad de observar los videos para coincidir en sus conclusiones.

Cita en extenso las conclusiones expuestas por el Tribunal Especial de Instrucción, publicadas en el diario oficial el día 17 de junio de 1986, sobre el punto de los desaparecidos, para señalar, sin glosa alguna ni darle alcance a la luz del acervo probatorio, para concluir que con ello queda demostrada la no responsabilidad de los acusados en las presuntas desapariciones por las que fueron llamados a juicio, pues según el Tribunal Especial, salvo IRMA FRANCO PINEDA, los restantes supuestos desaparecidos murieron en el cuarto piso de la edificación.

Hace mención al testimonio de FRANCISCO DE LA CRUZ LARA, celador del Museo 20 de Julio, quien reconoció a IRMA FRANCO PINEDA como la mujer que salió el día jueves entre algunos rescatados del Palacio de Justicia, a quien vio cuando era interrogada y sacaron entre las siete y media u ocho de la noche bajo estrictas medidas de seguridad, la subieron a un Jeep Nissan Patrol verde entre dos o tres detectives, para indicar que con ello queda confirmada la versión de FERNEY CAUSAYA PEÑA de no haber participado en interrogatorios, al igual que se descarta la intervención de miembros del ejército en lo sucedido a IRMA FRANCO.

En su sentir la Fiscalía tampoco demostró que su defendido o cualquiera otro de los militares sindicados hubiese participado en el mal manejo del lugar de los hechos, lo que originó la falta de identificación de algunas personas fallecidas dentro del Palacio de Justicia o la desaparición de las personas por cuyo paradero se investiga.

La Fiscalía soporta la imputación de responsabilidad en la sospecha, la apariencia, en los testimonios rendidos por los familiares de las personas desaparecidas o sin identificar, los cuales son tenidos en cuenta como portadores absolutos de la verdad respecto a los reconocimientos de sus familiares saliendo con vida del Palacio de Justicia, cuando en realidad en la mayoría de esas declaraciones se utilizan términos ambivalentes como "*podría ser, pero no estoy segura…podría tratarse … parecía ver saliendo…pues no absolutamente seguro…pero puede ser él*", con lo que se desvirtúa la certeza sobre la salida con vida de las personas que presuntamente se encuentran desaparecidas.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía trata de convencer dentro de este proceso que las contradicciones y el no reconocimiento de los desaparecidos por sus familiares en épocas recientes a los hechos se debe a que 25 años después estos reconocimientos se realizan sobre el video recuperado en la inspección judicial practicada en la casa del Coronel PLAZAS VEGA, como si las imágenes que allí se observan fueran inéditas o desconocidas, posición que considera equivocada, en razón a que esas imágenes son la compilación de todas aquellas que observaron en los videos de la Televisión Española, el Noticiero TV HOY y 24 Horas.

En su criterio la Fiscalía se fundamente en prueba indiciaria que no encuentra demostración en el hecho indicador, por cuanto la desaparición de las personas es una suposición indemostrada, que ni con las pruebas de ADN se ha podido establecer, por cuanto no se ha podido efectuar prueba científica a dos de los cuerpos recuperados de la fosa común del cementerio del sur, entre los que podían encontrarse algunas de las personas que aquí se tienen como desaparecidas.

Tampoco existen pruebas que permitan afirmar que su prohijado tuvo bajo su custodia, ya fuera funcional o por orden superior, el cuidado de alguno de los desaparecidos, ni que hubiera ordenado su traslado a alguna unidad militar, máxime cuando esto correspondía a un nivel de decisión superior al que pudiera tener el Sargento CAUSAYA PEÑA.

Concluye que en el caso de su prohijado no hay certeza de su responsabilidad, existiendo duda que se fortalece cuando su superior, el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, afirmó haberlo confundido con BOCACHICA; sin que los testimonios acopiados

señalen su presencia en la Casa del Florero realizando labores de identificación o interrogatorio de los rehenes liberados.

Finaliza sintetizando que la Fiscalía no logró probar que su defendido fuera participe de la conducta de desaparición forzada, por lo que solicita se profiera sentencia de carácter absolutorio a favor de FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Previo a ocuparnos del análisis encaminado a emitir el fallo que en derecho corresponda, y dado que, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, "*La valoración de las pruebas, en general, es actividad que el juzgador desarrolla de manera definitiva en la sentencia, no antes. … De ahí que pueda el juez diferir para la sentencia el pronunciamiento y consiguiente apreciación de las pruebas que se han obtenido en orden a demostrar la existencia de error en el contenido de un experticio*"[43], resulta necesario resolver en primera medida lo concerniente a la objeción formulada por el señor Representante del Ministerio Público respecto al dictamen pericial grafológico DG-672741 de fecha 10 de abril de 2012, elaborado por el CTI sobre muestras manuscriturales del testigo EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL.

Habiéndose escuchado durante la audiencia pública a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, persona que, tanto ante la Procuraduría General de la Nación como ante este Despacho, aseguró haber sido suplantada en diligencia de declaración recepcionada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en agosto de 2007, se dispuso tomarle muestras manuscriturales con el apoyo de personal

[43] Auto del 6 de junio de 2007, radicado 24044.

especializado del CTI y realizar cotejo grafológico, con el fin de determinar si la rúbrica que como de EDGAR VILLARREAL aparece en la referida diligencia a folio 251 del cuaderno 19 de instrucción se corresponde o no con los rasgos manuscriturales de VILLAMIZAR ESPINEL.

El estudio grafológico DG-672741, de fecha 10 de abril de 2012**,** realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación – División Criminalística, Investigador Criminalístico VII, Víctor Hugo Rojas Peña, concluyó que entre la firma manuscrita dubitada que en original se observa en la declaración que rinde EDGAR VILLARREAL ante el Despacho Cuarto de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del Radicado P19755, Palacio de Justicia, a folio 251, "*presenta características gráficas manuscritas que se corresponden o identifican frente a las muestras de referencia indubitadas que de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL se aportaron; es decir, son uniprocedentes manuscrituralmente*" (folio 15 cuaderno original de objeción).

Para el estudio el perito tuvo en cuenta, como material indubitado, además de 17 folios de muestras manuscriturales tomadas a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL durante la declaración rendida ante este Despacho el 23 de febrero de 2012 y tres folios correspondientes a las firmas del acta de audiencia de esa fecha, aportadas por el juzgado, varios documentos contenidos en cuatro contenedores identificados con los números 0044 R, 9760 P, 9761 P y 3252 R, que hacen parte de una investigación adelantada en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO, ex Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por la presunta suplantación del señor EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL en la declaración cuya firma dubitada se estudia.

De los referidos contenedores el perito extractó, entre otros documentos, "*cuatro (4) folios originales en cuyo plano superior derecho se lee 'Radicado P19755-Palacio de Justicia Declaración de Edgar Villarreal*", aportados el 16 de junio de 2011 por la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte (Contenedor 9760 P. Fols. 3 cuaderno original objeción y 110 y siguientes cuaderno original anexo 17 de la causa), y dos carpetas con 90 y 15 folios, respectivamente, correspondientes a la hoja de vida de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL de la Oficina de Personal del CTI (Contenedor 3252 R. Fols. 4 y 5 original de objeción y 1 y siguientes cuaderno original anexo 17 de la causa).

El señor Procurador 171 Judicial II Penal objetó el dictamen pericial grafológico por considerar que adolece de errores graves que ameritan elaborar un nuevo dictamen, conforme los lineamientos del artículo 251 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Orienta inicialmente su argumentación a demostrar que la pericia rendida contiene yerros edificados en vicios de legalidad, pues le resulta inexplicable que se le hubiera entregado al perito para su examen un documento que hasta el momento resultaba desconocido para los sujetos procesales, documento inexistente en las investigaciones adelantadas por los hechos del Palacio de Justicia, refiriéndose concretamente al oficio fechado el 16 de junio de 2011 mediante el cual la Dra. ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUÍZ aportó a la investigación seguida en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta suplantación de un testigo, unos supuestos originales de la declaración rendida por EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Insiste en que dicho documento no hacía parte de ninguna otra investigación o proceso judicial, por lo mismo, no se trata de ningún documento oficial o público. De tal suerte que, en su sentir, no se garantizaron los presupuestos de legalidad en este proceso penal, toda vez que el documento citado parece surgir de la cosecha personal de la Dra. ÁNGELA MARÍA BUITRAGO.

De ahí concluye que esta es razón suficiente para sustentar el vicio que recae sobre el medio de prueba citado, máxime cuando no fue ingresado en forma legal, regular ni oportuna al proceso penal, ni sometido a la obligada controversia ritual, cercenándose de esa forma la legalidad de la prueba; razón por la cual debe ser necesaria e inevitablemente excluida de la peritación, amén que no cumple el rigor normativo de la prueba trasladada que informa el artículo 239 del C.P.P., ni respeta el principio legal y constitucional de contradicción, reglado en los artículo 13 del C.P.P. y 29 de la Constitución Nacional.

Resalta que el perito se limitó a rendir su concepto con las muestras que le fueron entregadas y la labor de respeto a las garantías procesales la reclama del juzgado para preservar la legalidad de la actuación judicial. Y ello porque la inquietud que siempre ha acompañado al Ministerio Público recae en la diligencia realizada en la Escuela de Caballería en el mes de agosto de 2007, donde acudió un ciudadano que pudo suplantar a VILLAMIZAR ESPINEL.

Solicita que el documento presentado por la Dra. ÁNGELA MARÍA BUITRAGO a la Fiscalía Delegada ante la Corte sea excluido del análisis pericial, en primer lugar porque el documento no puede ser a la vez firma dubitada e indubitada; en segundo lugar fue allegado al juicio de manera extemporánea, burlando la ritualidad y la

legalidad debida; por último, porque la firma indiscutiblemente pertenece al sujeto que suplantó a VILLAMIZAR ESPINEL.

De lo anterior emerge, a su juicio, un grave error al que es ajeno el perito, pero que conduce a las conclusiones que se objetan por uniprocedencia emitidas en el dictamen, que de haberse alertado y evitado arrojarían un resultado diverso que se busca obtener en la medida que se respete la legalidad y el debido proceso.

Ataca igualmente la pericia por su "*limitado e insuficiente análisis*", toda vez que el examen se redujo al estudio de tres firmas indubitadas, no obstante la cantidad de firmas que fueron puestas a su disposición para el estudio. Circunstancia que se agrava si se tiene en cuenta que una de las tres firmas analizadas no solo adolece de ilegalidad sino que, además, es claro que constituyen la misma dubitada.

En su criterio no basta que el perito se limite a enunciar los documentos que sirvieron de objeto para su estudio, sino que se requiere que los analice integralmente, ya para afirmar, ora para infirmar sus conclusiones, sin detenerse únicamente en aquellos que le merecieron algún interés por su correspondencia manuscritural y nada se diga de todos aquellos que le fueron puestos a su disposición para igual cometido, con lo cual antes que evocar transparencia e imparcialidad, informa sesgo y desconfianza.

Acota que el examen se quedó corto e insuficiente, pues los 17 folios de muestras que le fueron tomados al testigo EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL el 23 de febrero de 2012 no fueron objeto de análisis, tampoco la muestra que quedó al firmar la diligencia ni la que estampó el testigo en la Procuraduría General de la Nación el 23 de mayo de 2011.

Concluye esta parte afirmando que se vulnera el artículo 257 de la ley 600 de 2000, no porque se cuestione la idoneidad del perito, sino porque se dejaron de lado numerosas pruebas que obran en el proceso y que fueron entregadas al perito para su cotejo, sin que ofrezca ninguna explicación ese proceder u olvido. De ahí que, a su juicio, resulte insuficiente el análisis realizado.

Por último, el objetante orientó su ataque a la pericia porque advirtió deficiencias de carácter técnico científico para arribar a la determinante conclusión de uniprocedencia caligráfica. En tal sentido sostiene que el dictamen es deficiente en su sustentación debido a que se describen de manera superficial algunas letras pero no sus características semejantes y que tangan un alto valor probatorio, ni mucho menos sus elementos caligráficos intrínsecos.

Resalta que la firma motivo de controversia no tiene semejanzas o correspondencias caligráficas de alto valor identificativo frente a las muestras patrón que se le tomaron al testigo, como tampoco presenta analogías gráficas con la signatura que estampó VILLAMIZAR ESPINEL en el testimonio rendido ante la Procuraduría General de la Nación.

Acota que el perito solo utilizó como soporte para su dictamen segmentos de tres firmas modelo, sin expresar los motivos del por qué no confrontó ni determinó las firmas patrón tomadas en abundancia para ser tenidas en cuenta en el momento de llevar a cabo los respectivos parangones de las que hace alusión en su informe.

Adujo que el perito no habló de los trazos envolventes que configuran esa letra capital, lo que resta contundencia a su

conclusión, máxime cuando basa su concepto en la forma como hace la letra “d”; en la abertura visible ubicada en la zona superior de la letra “g”; en la terminación acelerada de la letra “R” y en la caja de renglón, pero ninguno de ellos corresponden a puntos concluyentes y fundadas razones manuscriturales, para llegar a la conclusión de identidad o uniprocedencia emitida en el dictamen.

Cuestionó el análisis realizado a los trazos de la “u” y de las consonantes, además que al observar la firma que registró en la cédula nueva, en lo concerniente a los grafismos, trata de asemejarse en algo a la firma cuestionada, aunque también presenta diferencias como en la letra “d”, la “R”, entre otras. Aspectos que alertan graves errores de carácter técnico que no revisten la capacidad de fuerza y valor para sustentar las conclusiones a las que arribó el perito, al generalizar unas conclusiones que son afines en el común de los gestos manuscriturales, sin avanzar en el detalle y particularización de las grafías, lo que impidió la individualización puntual de señalamientos certeros que ameritarían las conclusiones emitidas.

Tramitada y obtenida la aclaración, ampliación y adición al dictamen a expensas de las solicitudes elevadas por la bancada de la defensa, fue traída al proceso en copia autentica la documentación que hacía parte de los contenedores identificados con los números 767 R, 0044 R, 9760 P, 9761 P y 3252 R (folios 231 y 251 cuaderno original incidente objeción y cuaderno anexo 17 causa), lo cual fue puesto a disposición de los sujetos procesales mediante auto del 18 de diciembre de 2012 (fol. 233 c. incidente objeción), y se dio trámite a la objeción corriendo el traslado de rigor.

Descorriendo el traslado incidental, la bancada de la defensa comparte lo dicho por el Procurador en cuanto a los vicios de

legalidad, debido a que los documentos utilizados como soporte del experticio no fueron aducidos legalmente, ni conocidos por el Juzgado, en una clara violación del principio de inmediatez en la práctica de la prueba, no habiendo sido posible tampoco la oposición o convalidación de la misma, acorde a los parámetros de la Ley 600 de 2000.

El perito utilizó pruebas trasladas ilegalmente de otra actuación, sin utilizar las ordenadas por el Juez. No tomó el material de confrontación, como la hoja de vida militar de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL y la declaración rendida ante la Procuraduría, lo que pone en duda las conclusiones a las que arribó.

Dan la razón al Ministerio Público cuando señala que el perito no le asignó ningún valor a la amplia gama de documentos que tuvo para la confrontación, bien fuera para convalidarlos y utilizarlos en la pericia o descartarlos, asignándoles un valor de acuerdo con las condiciones y requisitos del material grafológico que rigen este tipo de experticios. Además, si algunos documentos no eran apropiados debió plasmar las razones, sin que le sea dable al juez presumir o inferir las razones por las cuales un material le sirvió como soporte de sus conclusiones, en tanto que otro no.

No se conocen las fechas de producción de las muestras patrón, en especial del documento que toma como referente para señalar las identidades grafonómicas, cuando uno de los requisitos indispensables para realizar un cotejo grafológico es el denominado coetaneidad entre el material de duda y las muestras patrones, que deben ser contemporáneas, de la misma época de producción de las firmas patrones e indubitadas, pues el gesto gráfico no es estático ni permanece inmodificable en el tiempo.

Por tanto, como del material allegado ilegalmente a la actuación se desconoce la fecha de producción, limitándose a señalar "*El contenedor*", las conclusiones son sesgadas e inexactas.

Para la defensa el dictamen adolece de fallas tanto de orden procedimental para el abordaje de un estudio grafológico de firmas, como de aspectos propios de la pericia y desde el punto de vista técnico y científico.

Se limita a señalar la existencia de semejanzas en elementos morfoestructurales y dinamográficos que no explica en qué consisten, ni cómo se comportan tanto en la firma de duda como en las escasas muestras patrones que tomó para confrontación, destacando la falta de idoneidad del perito o su deseo de arribar a una conclusión conveniente, pese a no contar con los elementos necesarios para tal fin, comparando una firma ilegible o siglada, como la plasmada en la declaración objeto de controversia, con firmas patrones legibles, error imperdonable para un experto grafológico forense.

El perito utilizó como muestras patrones firmas de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL en las cuales escribe su nombre de manera perfectamente legible y esto es reiterativo a través del material manuscritural tomado como muestras indubitadas, en tanto que la firma de duda es de tipo ilegible, en la cual solo se pueden distinguir un elemento gráfico alfabético cual es la letra "d" minúscula de tipo cursivo. Los demás elementos gráfico manuscritos plasmados en la firma de duda son trazos caprichosos que no corresponden a formas alfabéticas puras o distinguibles dentro del alfabeto.

Reiteran que uno de los requisitos del material de estudio es la similitud en el estilo caligráfico, ya que no se puede confrontar un

material ilegible frete a uno legible; uno en letra cursiva a otro con letra imprenta, mayúscula o minúscula; razones por las que solicitan despachar favorablemente la objeción presentada por el representante del Ministerio Público y decretar la práctica de un nuevo dictamen.

La Fiscalía sostuvo que el documento al que se refiere el Ministerio Público ciertamente es extra-proceso, como también los demás documentos indubitados, circunstancia que no afecta la legalidad de la prueba pericial practicada, pues el perito tuvo acceso a ellos y a otros que forman para de la indagación seguida contra la ex-Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Dra. ANGELA MARÍA BUITRAGO, en cumplimiento de lo ordenado por el Despacho y el documento en cuestión fue recolectado, asegurado, identificado y registrado como lo establece el artículo 251 de la Ley 600 de 2000, respetando la cadena de custodia. Además, el análisis se llevó a cabo con base en firmas obrantes en documentos diferentes.

Agregó que el análisis no se limitó a tres firmas, sino que tuvo en cuenta el material constituido por las muestras indubitadas, como la documentación extraproceso relacionada en la experticia, a la cual tuvo acceso el perito.

Nada obliga al perito a hacer una comparación puntual del documento de duda con todas y cada una de las muestras indubitadas, de manera que, si bien es cierto en el dictamen no quedaron plasmados los análisis y resultados efectuados a la muestra indubitada tomada al declarante, como tampoco a la registra en el acta de la audiencia del 23 de febrero de 2012 y en la declaración rendida por VILLAMIZAR ESPINEL ante la Procuraduría, ello no es motivo para objetar el dictamen.

El hecho que en el material indubitado obtenido directamente dentro de este proceso al perecer no se hayan encontrado características gráficas para ser cotejadas con el material de duda, no implica que se descarte la existencia de uniprocedencia manuscritural, en la medida en la que un amanuense puede de manera intencional desfigurar las grafías.

La comparación que condujo al perito a concluir que la firma dubitada presenta características gráficas que se corresponden o identifican frente a las indubitadas se apoyó en documentos extra-proceso que no dejan duda alguna que su autor es EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, como el denominado formato oficina de personal; el formato único hoja de vida persona natural, función pública, y la resolución de la Fiscalía por la cual se nombró en provisionalidad en el cargo de investigador judicial I a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL.

Para la Fiscalía, el Procurador emitió opiniones de carácter técnico en relación con el estudio grafológico, sin tener la condición de perito grafólogo, cuando el informe se elabora conforme al método científico, apelando a la técnica lumínica así como a instrumental óptico adecuado, por lo que considera que la objeción no está llamada a prosperar.

Los apoderados de la parte civil se oponen a los argumentos expuestos en la objeción al dictamen aduciendo que para el estudio técnico se tuvieron en cuenta los documentos ordenados por el Juez, los que hacen parte de una investigación, y el Juzgado realizó el análisis de acuerdo con el artículo 254 del CPP verificando el cumplimiento de los requisitos de ley y por eso corrió el respectivo traslado.

Sostienen, de otro lado, que el agente de la Procuraduría General de la Nación fundamenta su solicitud en que existe un limitado e insuficiente análisis o deficiencias de carácter técnico científico en el exiguo análisis, lo que dista del deber de acreditar la existencia de un error grave, reiterando que las tres consideraciones básicas del escrito de objeción no tienen vocación de prosperar.

En cuanto al supuesto vicio de legalidad, estiman que se encuentra aclarado en el punto 3, como en los numerales 1 y 2 del informe, pues fue el Juzgado quien autorizó el estudio con el material obrante en el proceso que se adelanta en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual el Despacho dispuso en audiencia pública el 23 de febrero de 2012 la entrega de documentos originales a través de esa Fiscalía, situación consignada en la constancia secretarial de 26 de marzo de 2012, sin que las partes se opusieran.

En punto a la alegada insuficiencia de análisis y deficiencias de carácter técnico científico para arribar a la conclusión de uniprocedencia caligráfica, encuentran que tanto el dictamen como la ampliación del mismo, en los puntos 6, 7 y 13, ilustran de forma suficiente los documentos utilizados para la elaboración del estudio, y es amplia la ilustración que el estudio inicial y la consecuente ampliación hacen sobre las constantes gráficas que se encuentran en las firmas de referencia y la dubitada, respecto de aspectos estructurales, dejando sin fundamento las consideraciones de la defensa y del Ministerio Público.

Para la representación de las víctimas, el agente del Ministerio Público no precisa en realidad la supuesta existencia de un error grave en el dictamen grafológico, concentrándose en formular

críticas especulativas más propias de un alegato defensivo, razón más que suficiente para solicitar se declare infundada la objeción.

En el trámite incidental, a solicitud del Ministerio Público como prueba para acreditar el error presente en el dictamen controvertido, el Despacho ordenó practicar un nuevo dictamen grafológico, esta vez por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en los términos solicitados por el objetante, esto es, excluyendo el documento aportado por la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ, incluido en el contenedor 9760 P.

El Instituto Nacional de Medicina Legal rindió el informe pericial N° 280355 del 17 de noviembre de 2012 (folio 210 cuaderno incidente objeción), encontrando que el material indubitado muestra cómo EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL presenta al menos cuatro maneras de ejecutar las firmas. Que "*si bien dentro de las mismas indubitadas se encuentran por lo menos tres grupos distintos de firmas provenientes del mismo autor, en las que se evidencian cambios y variaciones en las estructuras gráficas de orden general y especifico, es posible inferir que dada dicha variabilidad entre estas muestras, no sería posible cruzarla entre si para fines comparativos, debido a la exclusión que generan los elementos de la dinámica gráfica más importantes presente en las firmas*".

Que "*La firma obrante en el documento de duda, no es posible valorarla en su totalidad dentro del contexto de las muestras referidas, debido a que el formato caligráfico utilizado nada tiene que ver con lo que ya se describió*".

"*Sin embargo, los componentes de algunos signos de la firma de duda que se encuentran en la configuración de la letra "d" y el trazo final de la firma, poseen algunas características de coincidencia y relevancia grafológica, para establecer nexos en la expresión gráfica.*
Pero debido a que estas dos características están presentes, no son viables extrapolar estos hallazgos a la totalidad de la firma cuestionada".

Concluyendo que, dada la construcción de la firma dubitada y la condición del material indubitado, "*la confrontación de una (dubitada) y otras (patrón), no permiten emitir un pronunciamiento técnicamente fundamentado*".

En esas condiciones, para resolver las objeciones formuladas en contra del estudio grafológico DG-672741, de fecha 10 de abril de 2012, partimos del hecho concreto que mediante auto del 1° de marzo de 2012 se ordenó la prueba a efectos de realizar cotejo de las muestras tomadas a VILLAMIZAR ESPINEL, junto con las grafías que del mismo reposaban en el expediente en documentos como el acta de audiencia pública suscrita por él, su hoja de vida militar y la declaración que rindió ante la Procuraduría el 23 de mayo de 2011, con el original del documento dubitado, para lo cual se dispuso solicitar la colaboración de la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pues se tenía conocimiento que dicho original hacía parte de la indagación N° 2009-00166, adelantada por ese Despacho en contra de la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ (fol. 207 original 11 causa).

Para el efecto, el 22 de marzo de 2012, mediante oficio 027, se solicitó a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia facilitar al experto, con las seguridades y reservas del caso, el acceso a los originales de los documentos, dubitados e indubitados, que como procedentes de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL hacían parte de la indagación 2009-00166 (fol. 285 ibídem).

Con base en lo anterior, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia puso a disposición del perito del Cuerpo Técnico de Investigación los contenedores identificados con los números 767 R,

0044 R, 9760 P, 9761 P y 3252 R, con sus respectivos registros de cadena de custodia, donde se encontraban, entre otros, el original del documento dubitado (contenedor 767 R), el original de la declaración rendida por VILLAMIZAR ESPINEL ante la Procuraduría el 23 de mayo de 2011 (contenedor 0044 R), cuatro folios originales aportados a la indagación 2009-00166 por la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ el 16 de junio de 2011 correspondientes al "*Radicado P19755 – Palacio de Justicia Declaración de Edgar Villarreal*" (contenedor 9760 P), y dos carpetas con 90 y 15 folios, respectivamente, correspondientes a la hoja de vida de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL de la Oficina de Personal del CTI (contenedor 3252 R).

Junto con las 17 hojas en original de las muestras manuscriturales tomadas a VILLAMIZAR ESPINEL en la cesión de audiencia del 23 de febrero de 2012 y los tres folios del acta de audiencia firmados por él, esos fueron los documentos tenidos en cuenta por el perito del CTI como elementos de estudio para rendir el dictamen DG-672741, tal y como lo expone expresamente en su informe a folio 1 y siguientes del cuaderno original de la objeción.

Quienes se oponen al dictamen critican, fundamentalmente, que el perito hubiese tenido en cuenta para realizar su estudio los documentos del contenedor 9760 P, esto es, los aportados por la Dra. BUITRAGO RUIZ a la indagación 2009-00166, alegando por ello un vicio de ilegalidad de la prueba.

No obstante, como quiera a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se le solicitó facilitar al experto, con las seguridades y reservas del caso, el acceso a los originales de los documentos, dubitados e indubitados, que como procedentes de EDAGAR VILLAMIZAR ESPINEL hacían parte de la indagación

2009-00166, y dado que en los documentos aportados por la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO figura una signatura como procedente de VILLAMIZAR ESPINEL (fols. 112 y 114 anexo 17 causa), es entendible que dichos documentos fueran puestos a disposición del perito, acorde con lo solicitado por el Juzgado a la Fiscalía.

En esas condiciones, los documentos relacionados en el dictamen como materia de estudio, específicamente los de los contenedores 767 R, 0044 R, 9760 P, 9761 P y 3252 R, hacen parte de una investigación adelantada por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde son conservados con su respectiva cadena de custodia conforme a los preceptos del artículo 254 de la Ley 906 de 2004, y están íntimamente relacionados con el objeto del dictamen pericial ordenado dentro de esta causa, como quiera dos de ellos corresponden a documentos expresamente señalados por el Juzgado como muestras patrón para el cotejo grafológico (contenedores 767 R y 0044 R) y los de los contenedores 9760 P y 3252 R contienen material útil, procedente y pertinente para el estudio, catalogable, por lo menos, como evidencia recolectada por el perito, derivada de su actuación.

Ahora, el artículo 251 del C. de P.P. establece que en el desempeño de sus funciones el perito debe examinar los elementos materia de prueba dentro del contexto de cada caso, y en su inciso segundo dispone que "*El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte, derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial*", siendo un hecho que en el caso que nos ocupa los originales de los documentos sometidos a estudio fueron debidamente identificados, rotulados, recolectados, asegurados, registrados, documentados y establecida claramente su procedencia, tal y como lo señala el dictamen grafológico, de tal

suerte que no existe duda alguna respecto a su procedencia, autenticidad y lugar de su conservación.

En otras palabras, en desarrollo de la labor del perito resultó evidencia que se recolectó, aseguró, registró y documentó, informando de ello al Juzgado, tal y como imperativamente lo dispone el ordenamiento procesal.

De esa manera, toda la documentación tenida en cuenta por el perito para su estudio fue traída al proceso en copia auténtica y puesta a disposición de los sujetos procesales, garantizándoles el conocimiento de la prueba para su examen y el ejercicio de los derechos de controversia y contradicción.

Así las cosas, para el Despacho no asiste razón a la alegada ilegalidad de la prueba tenida como soporte para el estudio grafológico DG-672741, de fecha 10 de abril de 2012, ni se desconocieron o vulneraron derechos de los sujetos procesales en tanto han tenido no sólo la posibilidad sino la oportunidad y garantía de conocer y controvertir los elementos de juicio o evidencia resultante de la actividad desarrollada por el perito grafólogo, al punto que parte del cuestionamiento realizado al trabajo técnico se encamina a excluir del material indubitado considerado por el perito los documentos aportados por la Dra. BUITRAGO, por corresponder, según el sentir de los censores, a un documento proveniente de la misma persona que suplantó a VILLAMIZAR ESPINEL ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte.

Ahora, si el dictamen hubiera basado sus conclusiones de uniprocedencia manuscritural exclusivamente en la confrontación del documento dubitado con los documentos extraídos del contenedor 9760 P, esto es, los aportados por la Dra. ANGELA

MARIA BUITRAGO a la indagación 2009-00166, podría aceptarse la existencia de un error grave en la experticia, en la medida en la que la rúbrica que como de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL figura en ellos igual sería dubitada, como lo alegan quienes cuestionan el estudio técnico.

Sin embargo, fácilmente se advierte tanto en el dictamen como en su ampliación que ello no fue así y que, por el contrario, el perito realizó el examen sobre una amplia muestra de documentos extraídos del contenedor 3252 R, correspondientes a la hoja de vida de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL de la Oficina de Personal del CTI, no existiendo duda alguna en cuanto al carácter indubitado de esas muestras, tanto así que ni el objetante ni quienes lo secundan cuestionan esa calidad del material ni su utilización para el estudio, pues el mismo VILLAMIZAR ESPINEL reconoce haber pertenecido al CTI de la Fiscalía y como tal la hoja de vida aportada por esa institución al radicado 2009-00166 suministró muestras indubitadas libres, espontáneas, desprevenidas y procesalmente desinteresadas, útiles como patrón de comparación.

Examinado con detenimiento el informe pericial y su aclaración o ampliación, se encuentra cómo el perito utilizó por lo menos quince (15) diferentes documentos del contenedor 3252 R y dos de los documentos aportados con las muestras tomadas a VILLAMIZAR ESPINEL, tal y como se aprecia a folios 12, 13, 14 y del 96 al 108 del cuaderno original del trámite de objeción y en las imágenes 35 a 40 vistas a folios 117 a 119 del mismo cuaderno.

No es atinado, entonces, afirmar que el perito basó su estudio en un muy limitado universo de muestras, como tampoco es dable acusarlo de insuficiencia en el análisis, cuando el dictamen y su

ampliación se muestran ricos en explicaciones e ilustraciones para soportar su conclusiones.

Cuestionar lo dicho por el perito en punto a los trazos envolventes de las letras “d”, “g”, “R” y de la “u”, como graves errores de carácter técnico, al igual que otros puntos de análisis, no puede resquebrajar el estudio ni la conclusión del dictamen, cuando, frente a la idoneidad y experiencia del perito, quienes critican su trabajo no acreditan tener los estudios o conocimientos en el tema como para soportar sobre sus propios conceptos la calificación de error grave que lanzan sobre el análisis detallado efectuado por el experto.

Para tratar de probar el supuesto error grave atribuido al dictamen grafológico elaborado por el CTI, por solicitud del objetante se practicó un segundo estudio, esta vez por cuenta del Instituto Nacional de Medicina Legal, excluyendo el documento aportado por la Dra. ANGELA MARIA BUITRAGO RUIZ, entregado al perito en el contenedor 9760 P.

Si bien el informe pericial N° 280355 del 17 de noviembre de 2012 (folio 210 cuaderno incidente objeción), concluyó que, dada la construcción de la firma dubitada y la condición del material indubitado, “*la confrontación de una (dubitada) y otras (patrón), no permiten emitir un pronunciamiento técnicamente fundamentado*”, es evidente que este segundo análisis no muestra la extensión, precisión ni detalle observado en el dictamen cuestionado.

El experto del Instituto Nacional de Medicina Legal se ocupa casi en exclusiva de examinar el material indubitado para precisar que EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL presenta al menos cuatro maneras de ejecutar las firmas; circunstancia que, por los “*cambios y variaciones en las estructuras gráficas de orden general y especifico*”, lo llevan a “*inferir*”

la imposibilidad incluso de cruzar entre sí ese material indubitado para fines comparativos. Pero aparte de su inferencia no suministra al menos aproximaciones ilustrativas de los detalles que le impiden emitir un concepto técnicamente fundado.

Sin embargo, es de resaltar cómo, a pesar de la exclusión del material del contenedor 9760 P, el nuevo estudio encontró que "*…., los componentes de algunos signos de la firma de duda que se encuentran en la configuración de la letra "d" y el trazo final de la firma, poseen algunas características de coincidencia y relevancia grafológica, para establecer nexos en la expresión gráfica*"; hallazgo que si bien para el perito de Medicina Legal no era viable extrapolarlo "*a la totalidad de la firma cuestionada*", de cierta manera y en buena medida apoya los estudios realizados por el experto del CTI, quien igual encontró esas características, pero a diferencia de lo hecho por el perito de Medicina Legal se ocupó de analizarlas en detalle.

En esas condiciones, las críticas realizadas por el objetante y la bancada de la defensa al dictamen pericial rendido por el experto del CTI no acreditan la existencia de un error grave en la experticia y se encaminan más a cuestionar su fiabilidad, tema que hace parte del análisis probatorio propio del juicio y no de una objeción por error grave en los términos previstos por el art. 255 de la Ley 600 de 2000.

Ahora bien, establece el artículo 257 de la Ley 600 de 2000 que para la apreciación del dictamen se tendrá en cuenta la idoneidad del perito, la fundamentación técnico-científica que sustenta el dictamen, el aseguramiento de calidad aplicado, el sistema de cadena de custodia registrado y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Para el caso, el manejo de la evidencia estuvo acorde con las disposiciones vigentes, pues los documentos examinados fueron entregados, unos, directamente por el Juzgado, con su pertinente cadena de custodia, y otros solicitados por el Juzgado a la Fiscalía Delegada ante Corte Suprema de Justicia, recibidos por el perito procedentes del Almacén de Evidencias de la Fiscalía General de la Nación, de manos del investigador a cargo, debidamente embalados, rotulados y acompañados de la respectiva cadena de custodia, lo cual garantiza la continuidad en la manipulación y posterior entrega del material probatorio.

La idoneidad del perito no se ha puesto en tela de juicio, pues está certificado como Investigador Criminalístico VII, perteneciente al CTI, grupo de grafología, con carné N° 4409.

El dictamen y su aclaración o adición presentan una amplia y completa fundamentación técnica para sustentar sus conclusiones, y dentro de los demás elementos probatorios obrantes en el proceso, útiles para apreciar y valorar la experticia, contamos con el reconocimiento fotográfico realizado por el miembro del CTI, PABLO ENRIQUE VASQUEZ HERRERA, en cesión de audiencia pública del 14 de marzo de 2012 (fol. 247 original 11 de la causa- diligencia contenida en CD marcado como sesión 77), en donde, sobre tres álbumes confeccionados por el Grupo de Identificación Especializada, División Criminalística del CTI (cuaderno anexo original causa N° 15), el testigo identificó positivamente a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL como la misma persona que se hizo presente en la Escuela de Caballería el 1° de agosto de 2007 y rindió ante la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la declaración cuya firma dubitada, concluyó luego el dictamen grafológico DG-672741 del 10 de abril de 2012, "*presenta características gráficas manuscritas que se corresponden o identifican frente a*

las muestras de referencia indubitadas que de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL se aportaron; es decir, son uniprocedentes manuscrituralmente".

Si el testigo VASQUEZ HERRERA, quien no solo participó en la diligencia de declaración cuestionada sino sirvió de enlace entre la Fiscalía y el declarante, reconoce a VILLAMIZAR ESPINEL como quien en efecto rindió esa declaración y la suscribió, y el dictamen pericial grafológico encuentra en su estudio técnico uniprocedencia entre la rúbrica dubitada y las muestras indubitadas cotejadas, concluyendo que en realidad fue EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL quien firmó esa diligencia como el declarante, de suyo es concluir en la inexistencia del error grave que se le endilga a la experticia.

Así, pues, no prospera la objeción formulada por el Agente del Ministerio Público al dictamen pericial grafológico DG-672741 de fecha 10 de abril de 2012, en tanto no se acreditó la existencia de error grave en su elaboración ni en sus conclusiones.

Resuelto de esa manera lo concerniente a la prueba grafológica, corresponde ocuparnos de examinar la sentencia que en derecho se impone, teniendo de presente que la Fiscalía llamó a responder en juicio a los aquí procesados como coautores responsables del delito de desaparición forzada agravada, en concurso, consagrado en los artículos 165 y 166 de la ley 599 de 2000, según los cuales, "*El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de su negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.*
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior" (art. 165 c.p.).

Pena que, conforme al artículo 166 de la misma codificación será de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión, multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años, cuando, entre otras circunstancias, la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción.

Dado que los hechos por los cuales se acusa al Coronel ® EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y a los otros encausados tienen su génesis en lo acontecido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y el delito de desaparición forzada imputado se incluyó expresamente en nuestro ordenamiento penal sólo a partir de la Ley 589 de 2000 y luego en el artículo 165 del actual Código Penal, es necesario referirnos al principio de legalidad, como parte basilar del derecho fundamental al debido proceso, pues el art. 29 de la Carta Fundamental dispone que "*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa*".

De conformidad con la descripción típica contenida en el art. 165 de la ley 599 de 2000, la desaparición forzada es un delito continuado o permanente, que se extiende en el tiempo y perdura mientras se mantenga la privación de la libertad, el ocultamiento y la negativa de reconocer dicha privación o de dar información sobre el paradero de la persona desaparecida.

En ese sentido, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, aprobada por la Asamblea General de la ONU a través de resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, en su artículo 17.1, señala que "*Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores*

continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos".

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada el 9 de junio de 1994 mediante resolución 1256 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dispone en su artículo III que *"Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima*".

En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en decisión del 23 de noviembre de 2009, caso Padilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, precisó: "*De todo lo anterior, puede concluirse que los actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter permanente, y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos en la Convención Americana mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, los Estados tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los responsables, conforme a las obligaciones derivadas de la Convención Americana y, en particular, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*".

En nuestro medio, la Corte Constitucional, en la sentencia C-580 de 2002, sobre el punto concretó que "*… este delito debe considerarse como de ejecución continuada o permanente hasta que no se conozca el paradero de la víctima. Esta obligación resulta razonable si se tiene en cuenta que la falta de información acerca de la persona desaparecida impide a la víctima y a sus familiares el ejercicio de las garantías judiciales necesarias para la protección de sus derechos y para el esclarecimiento de la verdad: la persona sigue desaparecida. Esta situación implica que la lesión de los bienes protegidos se prolonga en el tiempo, y por tanto, la conducta sigue siendo típica y antijurídica*

hasta que el conocimiento que se tenga acerca del paradero de la persona permita el ejercicio de tales garantías judiciales. En esa medida, la conducta de desaparición forzada se realiza durante el tiempo en que se prolongue la privación de la libertad y no se tenga información acerca de la persona o personas que se encuentren en tal circunstancia".

Así las cosas, como el delito permanente se mantiene por la voluntad delictiva del actor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado, de suerte que todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumación; mientras se mantenga la conducta punible perdura la consumación, y por lo tanto el comportamiento se va adecuando a la legislación vigente para cada momento y asume las consecuencias del eventual tránsito de legislación, incluso en lo desfavorable, en razón a que la conducta sigue ejecutándose dentro de la vigencia de la nueva ley.

Para el caso, en noviembre de 1985, cuando se dieron los hechos del Palacio de Justicia, regia el Decreto Ley 100 de 1980, donde el bien jurídico de la Libertad individual se protegía a través de la figura del secuestro, comportamiento punible igualmente considerado de ejecución continuada o permanente.

En julio de 2000 entró a regir la Ley 589, por la cual se adicionó el capítulo de la protección de la libertad individual en el Código Penal, para introducir a continuación del secuestro la tipificación de la desaparición forzada y poco después se expidió el nuevo Código Penal, contenido en la Ley 599 de 2000, que tipificó el delito de desaparición forzada en los términos dejados en claro arriba.

Tanto el artículo 165 del nuevo código penal (desaparición forzada) como el artículo 269 del anterior ordenamiento subjetivo (secuestro)

coinciden en sancionar la privación ilegal de la liberad personal y el ocultamiento de la persona, sustrayéndola del amparo de la ley.

De manera, desde el advenimiento de las nuevas normas del código penal, las violaciones a la libertad individual se reprimen desde la perspectiva del delito de secuestro, simple o extorsivo, y de la desaparición forzada; pues son conductas violatorias del derecho a la Libertad individual, pero ésta ultima más dañina y por lo tanto merecedora de penas más gravosas.

Así, teniendo en cuenta la naturaleza permanente del delito de desaparición forzada, y el mantenimiento en el tiempo de la situación de hecho por la que se juzga a los aquí procesados, aun cuando para 1985 el delito de desaparición forzada no hacía parte expresa de la legislación en nuestro país, por la tipificación en la ley 589 de 2000 y luego en la ley 599 de 2000, es esa la calificación que corresponde a los hechos, acorde con los principios de especialidad y consunción[44], pues aún bajo su vigencia se continuó consumando el comportamiento que desde un principio vulneraba los derechos a la libertad, la vida, la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad y a no ser objeto de torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, y que en ese entonces, pese a la multiplicidad de derechos afectados, se calificaba como secuestro.

[44] Conforme a los lineamientos jurisprudenciales el principio de consunción rige en el concurso aparente de tipos, según el cual el juicio de desvalor de una conducta punible ya está comprendido en el juicio de desvalor de otra, que es aplicable en razón de su mayor riqueza descriptiva y de contenido, en otras palabras, el injusto más complejo absorbe los otros que en aquél se hayan consumado, en aplicación del principio de consunción: lex consumens derogat legis consumptae.
De otra parte se recuerda que cuando nos encontramos frente a un concurso aparente de tipos este debe resolverse con exclusión de la norma accesoria, en virtud del principio de subsidiariedad: lex primaria derogat legis subsidiariae.

En otras palabras, el comportamiento endilgado a los procesados era punible desde antes de la entrada en vigencia de las leyes 589 y 599 de 2000, y para 1985 en nuestra legislación era reprimido penalmente bajo la figura del secuestro agravado, pese a que, a más del derecho a la libertad, vulneraba otra serie de derechos esenciales del ser humano.

Ese comportamiento se extendió en el tiempo y se mantuvo aún después de tipificarse en nuestro ordenamiento el delito de desaparición forzada, adecuándose los hechos a la nueva y más amplia descripción típica, configurándose un aparente concurso de delitos, al punto que la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en resolución de primera instancia acusó a los procesados como responsables de secuestro agravado en concurso con desaparición forzada agravada. Situación finalmente definida en el pliego de cargos de segunda instancia al suprimirse el aparente concurso heterogéneo, resolviéndose por confirmar la acusación sólo por el punible de desaparición forzada agravada, en virtud a la mayor riqueza descriptiva de este tipo que abarca la protección a los diferentes bienes jurídicos afectados, subsumiendo el ilícito contra la libertad.

Así, pues, al haberse mantenido la conducta punible en el tiempo y seguirse consumando al entrar en vigencia la nueva legislación, es perfectamente aplicable la tipificación del delito de desaparición forzada agravada, sin vulnerar con ello el principio de legalidad.

En ese sentido, la Corte Penal Internacional, en sentencia del 26 de noviembre de 2008, caso Tiu Tojin versus Guatemala, precisó que *"Por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación*

se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el derecho penal interno, si se mantiene la conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable".

La misma Corte, en el fallo del 23 de noviembre de 2009, Rosendo Padilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, ya citado en este proveído, reiteró que por tratarse de un delito de ejecución permanente, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el Estado, la nueva ley resulta aplicable por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, sin que ello represente una aplicación retroactiva.

Si la nueva ley se aplica cuando el comportamiento no era considerado antes de su vigencia como delito, con mayor razón habrá que hacerlo cuando en la legislación anterior tenía el carácter de punible, pero su sanción era menor.

De conformidad con lo expuesto, cuando se trata de delitos permanentes iniciados en vigencia de una ley benévola pero que continúa cometiéndose bajo una ley posterior más gravosa, es esta ultima la normativa aplicable, pues en tal caso no se dan los presupuestos para acoger el principio de favorabilidad, sino que opera la regla general, esto es, la ley rige para los hechos cometidos durante su vigencia[45].

El derecho comparado nos muestra cómo esta solución ha sido acogida por diferentes Tribunales de la región. En el ámbito peruano, la justicia de ese país, resolviendo un Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Collins Collantes Guerra contra la Sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal (Exp. N°

[45] La Corte Suprema reitera esta interpretación en la sentencia 40.559 del 17 de abril de 2013.

0442-2007/HC/TC 30 Marzo 2007, Considerando 6), señaló expresamente que "*…. no se vulnera la garantía de la lex previa derivada del Principio de Legalidad Penal en caso de que se aplique a un delito permanente una norma penal que no haya entrado en vigencia antes del comienzo de su ejecución, pero que resulta aplicable mientras el mismo sigue ejecutándose. Tal es el caso del delito de desaparición forzada, el cual, según el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas deberá ser considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. En consecuencia, si bien la figura típica de la desaparición forzada de personas no estuvo siempre vigente en nuestro ordenamiento, ello no es impedimento para que se lleve a cabo el correspondiente proceso penal por este delito por hechos que hubieran tenido origen en una detención ocurrida antes de la entrada en vigencia de este delito en nuestro Código Penal, siempre que la permanencia del mismo, consistente en el desconocimiento del paradero de la víctima, persista hasta el momento en que el delito ya estaba contemplado en nuestro ordenamiento*".

Y en Venezuela encontramos el siguiente pronunciamiento:

"*Nuestra jurisprudencia patria plantea que necesariamente debe existir, previamente, la tipificación de un delito para que una conducta sea castigada como tal. Sin embargo, la doctrina penal actualizada, desarrollando el principio de legalidad, ha aceptado que un comportamiento (acción u omisión) que no ha sido consumado en su totalidad puede ser tipificado como delito si durante esa consumación entra en vigencia la disposición legal que lo incluye como hecho punible. Ello ocurre con los delitos permanentes o los continuados, en los cuales se señala que "si la nueva ley entra en vigencia mientras perdura la permanencia o la continuación, se aplicará en todo caso esta ley, sea o no más favorable, y quedan sin sanción los actos precedentes". Por tanto, compartiendo la premisa doctrinaria para dar operatividad al artículo 45 de la Carta Magna, esta Sala precisa que si durante la privación ilegítima de libertad del sujeto pasivo el sujeto activo sigue negado a revelar la suerte o paradero de la persona privada de libertad o a reconocer que se encuentra bajo ese estado, y a su vez, entra en vigencia en esta situación la tipificación legal del delito de desaparición forzada de personas, debe concluirse que los sujetos implicados*

en ese comportamiento pueden ser juzgados y declarados culpables y responsables del delito de desaparición forzada de personas, sin que ello implique retroactividad de la ley penal, pues se trata de la aplicación de la ley que configura el delito inconcluso". (Recurso de revisión. Caso Marco Antonio Monasterio Pérez, Casimiro José Yánez. Relación de sentencias 15.b), Consideraciones IV.2.).

De otro lado, pero en igual dirección, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al abordar un tema similar señaló:

" *…. si bien es cierto, en cumplimiento del principio de legalidad se exige que para que una persona pueda ser juzgada por la comisión de un delito, éste, previamente debe encontrarse reglado en una norma en dicho sentido, no lo es menos que la normativa interna debe ajustarse a lo definido en los Tratados Internacionales y, en ese sentido, armonizarse con los mismos y con la Constitución; razón por la cual, es aceptable que se pueda predicar la aplicación del contenido de dichos instrumentos como fuente de derecho, en atención a la mora del legislador en acoplar las leyes a lo allí definido. Por esto, sería posible aplicar el contenido de un Tratado Internacional reconocido por Colombia respecto de algún delito allí prohibido y sancionado, aún sin existir ley interna previa en dicho sentido, sin atentar contra el principio de legalidad.*

Con claridad, se reitera, antes de la expedición de la Ley 589 de 2000 ya existía la proscripción de los delitos como el genocidio, lo que permite –sin violentar el principio de legalidad- que la norma de carácter internacional sea tenida en cuenta como la que tipifica dicho delito y, en consecuencia, conductas constitutivas del mismo puedan ser sancionadas penalmente, aún cuando se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley interna. Es evidente la trascendencia internacional que connota la comisión de esta clase de conductas, ya definidas como de lesa humanidad, tanto así que, es reprochable la mora del legislador en implementar leyes de carácter interno que sancionen eficazmente las mismas, pero ello no es óbice para desconocer la existencia de una norma supranacional que obliga a darle cumplimiento y efectivizar las penas en contra de los autores de tan penosas conductas. Máxime, cuando al tratarse de un crimen catalogado como de nivel

internacional y atentatorio de la dignidad humana, para su tipificación deben tenerse principalmente en cuenta los estándares internacionales, por lo que, una vez más se repite, su consagración normativa internacional previa como delito, permite que su adecuación bajo los parámetros y condiciones aquí expuestas no sea violatoria del principio de legalidad y, aún más, si se tiene en cuenta lo consagrado en el inciso 1º del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con entrada en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968, donde se habla de una tipicidad no solo nacional, sino también, internacional".[46]

El carácter de delito de lesa humanidad de la desaparición forzada está claramente precisado en la sentencia C-317 de 2002, en la que la Corte Constitucional recordó cómo "*En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos -OEA- en la Resolución AG/RES. 666 (XII-0/83) declaró que la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad. Este pronunciamiento se originó en consideración a que la calificación de la desaparición forzada de personas, como crimen internacional de lesa humanidad, es una condición importante y necesaria para su prevención y represión efectivas, para lo cual se debe promover la investigación de tales situaciones.*

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver en 1989 los casos hondureños de Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, efectuó la primera descripción exhaustiva del crimen de desapariciones señalando que se trata de un delito de lesa humanidad que constituye una violación múltiple a distintos derechos consagrados en la Convención como la vida, la libertad y la dignidad humana. Sobre el particular dicha Corte en memorable fallo sentó la siguiente doctrina:

'…. Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta denominación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA ha afirmado

[46] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal , Auto del 13 de mayo de 2010, M.P. María del Rosario González de Lemos.

que "es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad" (AG/RES.666, supra). También la ha calificado como "un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (AG/Res. 742, supra).

……

Como queda visto, la comunidad internacional ha reconocido que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad pues se trata de un atentado múltiple contra derechos fundamentales del ser humano en cuanto supone la negación de un sinnúmero de actos de la vida jurídico-social del desaparecido, desde los más simples y personales hasta el de ser reconocida su muerte, situación que acarrea para los Estados el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas, y de política para prevenir y erradicar este crimen de lesa humanidad".

Específicamente en nuestra legislación, desde su inclusión explícita como delito en la Ley 589 de 2000, que adicionó el artículo 268 del código penal de 1980, la desaparición forzada de personas es considerada delito de lesa humanidad, tal y como se desprende de la exposición de motivos que antecedió su tipificación y que cita la Corte Constitucional en la sentencia que venimos referenciando, enfatizando que "*El Gobierno en su empeño por lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país y de adecuar nuestra normatividad a los postulados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (...) pretende tipificar conductas proscritas por la humanidad entera (...)*

El contenido del proyecto se centra en la tipificación de la desaparición forzada de personas, del genocidio y de la ampliación típica de la tortura, incorporando estos tres delitos como un capítulo nuevo del Código Penal <u>que los agrupe como delitos de lesa humanidad</u>, respondiendo a los requerimientos de carácter internacional y a la realidad de nuestro país.

La conciencia jurídica universal ha repudiado la comisión individual o masiva de las desapariciones forzadas y de genocidios como unas de las conductas más lesivas contra las personas y contra el género humano, por lo cual la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, lo mismo que la

Organización de Estados Americanos, las han calificado como delitos de lesa humanidad" (subrayamos).

En esos términos, contrario a lo alegado en su intervención final por el sargento ® LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, no hay duda del carácter de crimen de lesa humanidad que en el contexto universal y específicamente en nuestro sistema penal comporta la desaparición forzada de personas.

En esa medida, contextualizando esa circunstancia con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en la decisión anteriormente citada, ha de tenerse en cuenta que para cuando se dieron los hechos materia de debate, existían normas internacionales que abogaban por la represión de comportamientos lesivos de derechos humanos.

Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, que contiene principios esenciales en cuanto al respeto de los derechos básicos de las personas, reconociendo los derechos de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969, prohibía ya la privación arbitraria de la vida y la libertad, condenando el delito de genocidio, lo mismo que los tratos crueles, inhumanos y degradantes, enfatizando el derecho que tienen las personas retenidas a la información sobre los motivos de su detención.

En ese orden de cosas, es claro que las normas a aplicar en el juzgamiento de conductas punibles de lesa humanidad deben estar contenidas en las leyes nacionales o en las internacionales que son de obligatoria aplicación en el orden interno por virtud del bloque de constitucionalidad.

Para el caso, donde se ha discutido que los hechos no pueden ser tipificados como desaparición forzada por cuanto para cuando sucedió la toma y recuperación del Palacio de Justicia ese comportamiento no estaba contemplado en la legislación interna, recordemos, como se hizo al citar a la Corte Constitucional, que la OEA, mediante la Resolución AG/RES. 666 de 1983, ya había señalado que la desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal, y declarado que la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad.

En 1984 la misma organización aprobó la Resolución AG/RES 742 para *"Exhortar a aquellos Estados donde han ocurrido desapariciones de personas, que se esclarezca su situación y se informe a sus familiares sobre su suerte*".

Por manera, desde antes de los hechos del Palacio de Justicia existían instrumentos internacionales que propendían y exigían el respeto irrestricto a los derechos esenciales del ser humano, en particular a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no ser arbitrariamente detenido, preso ni

desterrado, y reconocían la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, por lo que, unido a lo inicialmente advertido respecto a la permanencia y continuidad en el tiempo del comportamiento punible, es dable afirmar que la acción penal adelantada contra EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, por el delito de desaparición forzada, no lesiona los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal.

Así las cosas, es dable ocuparse de examinar si de conformidad con lo dispuesto por el art. 232 del código de procedimiento penal se satisfacen los presupuestos de certeza necesarios para condenar, como lo pide la Fiscalía y la representación de las víctimas, o si, por el contrario, ha de absolverse a los procesados por no reunirse la prueba indispensable sobre la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad de los acusados.

Como se dijo al comienzo de esta providencia, conforme al contenido de la resolución de acusación, corresponde al Despacho determinar, de cara a la prueba recopilada a lo largo de 29 años de investigaciones llevadas a cabo por diferentes autoridades judiciales y en lo posible agrupada en el expediente, si en efecto IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, DAVID SUSPES CELIS, LUZ MARY PORTELA, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ANZOLA DE LANAO y LUCY AMPARO OVIEDO fueron sujetos pasivos del delito de desaparición forzada y en caso positivo si de

ello son responsables los cinco miembros retirados del Ejército Nacional aquí procesados.

Juicios y estudios de otra naturaleza respecto a lo acontecido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, de indiscutible importancia y valor para el país, corresponden a otras instancias y autoridades, como la Comisión de la Verdad que publicó su informe final en 2010[47], la jurisdicción Contencioso Administrativa que se ha ocupado internamente de establecer la responsabilidad institucional, y la justicia internacional que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió declarar culpable al Estado Colombiano por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y las torturas de 17 personas.

Nos ocuparemos, pues, de la prueba relacionada con la situación específica de cada una de las personas señaladas en el pliego de cargos como desaparecidas, sabiendo que el punible de desaparición forzada es pluriofensivo y se caracteriza por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, o grupos o individuos que actúan determinados por ellos o con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa privación de la libertad o la suerte de la persona, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El comportamiento punible no se agota con la afectación de la libertad, la cual, incluso, en un principio puede ser lícita. Lo que resulta determinante es el ocultamiento de la persona privada de la

[47] "Por su propia naturaleza, la Comisión de la Verdad carece de atribuciones jurisdiccionales y de facultades para derivar responsabilidades individuales de cualquier índole, por lo que su mandato es esencialmente ético, histórico y académico, enmarcado en los valores que orientan el Estado de derecho, el ordenamiento constitucional y la normatividad internacional vinculante para Colombia, tanto desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho penal internacional, marco propio y característico del trabajo de las comisiones de la verdad, aplicable integralmente al caso colombiano, ya que sus normas se refieren tanto a las obligaciones estatales como a las del grupo de actores armados irregulares" Comisión de la Verdad, Informe Final.

libertad y la negativa a reconocer dicha privación o de informar sobre su suerte y su paradero, manteniéndose el comportamiento punible en el tiempo y en la consumación hasta que no se conozca el paradero de la víctima.

De manera, aun cuando la víctima hubiese muerto, si el autor no suministra información sobre la privación de la libertad sufrida por esa persona, o no informa acerca de la suerte corrida por ella, el delito sigue ejecutándose, en tanto continúa incumpliéndose el deber de información, toda vez que el desconocimiento de la suerte y de la ubicación de la víctima es lo que caracteriza el punible, siendo parte del reproche penal precisamente el que el victimario no dé razón sobre la ubicación del desaparecido, bien sea vivo o muerto.

Es tan cierto lo anterior que nuestro legislador, previendo la posibilidad de la muerte de la víctima, en el art. 167 de la Ley 599 de 2000 no excluye en esa hipótesis la configuración del punible de desaparición forzada, pero sí estima circunstancia de atenuación punitiva el que los autores o partícipes suministren información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida.

A la luz de ese marco jurídico procederemos a examinar las pruebas relacionadas con las once personas señaladas como desaparecidas del Palacio de Justicia, haciendo una pequeña semblanza de cada una, en reconocimiento de su individualidad jurídico social y en tanto puede ser útil como marco de referencia para evaluar la prueba existente sobre su supervivencia a la operación militar.

IRMA FRANCO PINEDA, Identificada con cédula de ciudadanía N° 35.315.738, nació el 4 de julio de 1957; tenía 28 años de edad cuando el asalto al Palacio de Justicia. Era estudiante de derecho de la Universidad Libre. Integrante del grupo subversivo M-19, donde se le conocía con el alias de “Mariana”.

Sus rasgos físicos sobresalientes eran, cabello liso negro, ojos claros, nariz respingada, pecosa, dientes delanteros encontrados[48].

El acervo probatorio suministra certeza en cuanto a que, como integrante del M-19, IRMA FRANCO participó en la toma de la sede judicial; sobrevivió a la operación de recuperación de la edificación, de donde fue sacada con vida junto a un grupo considerable de rehenes evacuados en los instantes finales del operativo militar; fue conducida a la Casa del Florero, sitio en el que quedó a disposición de los organismos de seguridad del Estado y al ser reconocida por varias personas como integrante del grupo insurgente es sometida a tratamiento especial bajo custodia permanente y en las primeras horas de la noche del 7 de noviembre de 1985 es llevada bajo estrictas medidas de seguridad por varios sujetos que la hacen abordar un automotor, permaneciendo desaparecida hasta el día de hoy.

Si bien es cierto en los eventos de desaparición forzada regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en condiciones de mayor ocultamiento o porque es difícil obtener la colaboración de testigos, por temor a las represalias, de manera que por lo general ha de acudirse a la prueba indiciaria, el caso de IRMA FRANCO marca una connotada excepción, pues cuenta con abundante prueba directa para tener certeza de su desaparición forzada y refutar la obstinada posición de quienes

[48] C.O. 45 Anexo Instrucción Fl 217.

dentro de este proceso, como el señor defensor y la vocero del Coronel ® SANCHEZ RUBIANO, siguen insistiendo en que no hay desaparecidos por los hechos del Palacio de Justicia.

Que IRMA FRANCO ingresó al Palacio de Justicia como parte de la avanzada del grupo guerrillero, haciéndose pasar por una abogada que adelantaba gestiones propias de su profesión, se desprende, inicialmente, de la declaración de HILDA DÍAZ DE AGUDELO, empleada de la Secretaría del Consejo de Estado[49].

La testigo fue una de las personas retenidas en el baño ubicado entre el segundo y el tercer piso del Palacio, liberadas el jueves 7 de noviembre y conducidas a la Casa del Florero, y describe a la guerrillera que respondía al alias de “MARIANA”, a quien vio desde horas de la mañana en la Secretaría del Consejo de Estado en compañía de otra mujer, supuestamente con la intención de revisar un expediente. Al iniciarse las hostilidades, cuenta la testigo, las dos mujeres, utilizando armas de fuego, obligaron a quienes se encontraban en la oficina de la Secretaría del Consejo de Estado a tenderse en el suelo, permaneciendo allí como hasta las dos de la tarde cuando las dos guerrilleras los condujeron al baño ubicado entre el tercero y el cuarto piso, donde ya habían concentrado a otros rehenes.

En el mismo sentido depuso DARIO ENRIQUE QUIÑONEZ PINILLA, Secretario General del Consejo de Estado, quien reconoció a IRMA FRANCO, por ser la hermana del Dr. JORGE FRANCO PINEDA, cuando la vio en la oficina de la Secretaría General, e igual da cuenta cómo IRMA, y otra mujer que la

[49] fls. 36 – 39 c. anexo de instrucción 44, y folio 210 anexo 56 de instrucción.

acompañaba, los amedrentaron con sendas armas de fuego al iniciarse la ocupación guerrillera, los hicieron tender en el piso, indicándoles que eran del M-19, y cómo esas mismas mujeres los condujeron por las escaleras del costado norte hasta un baño ubicado entre los pisos 3° y 4°[50].

Si bien este testigo no advirtió la salida de guerrilleras al finalizar la operación militar, y no puede asegurar si IRMA FRANCO salió o no con el grupo de mujeres liberadas, sí la describe coincidentemente con lo sostenido por otros deponentes y ratifica que IRMA era conocida como MARIANA[51].

LEONOR MARIELA AVILA ROLDAN, para ese entonces escribiente de la secretaría General del Consejo de Estado, narra los primeros momentos de la toma en términos similares a los anteriores, y aun cuando no se refiere expresamente a IRMA FRANCO como tal, por no conocerla previamente, sí reconoce a MARIANA como la misma que en el primer piso los encañonó con un arma de fuego y la describe con falda escocesa como café, rojo y blanco, botas altas negras, blusa café o terracota, cabello hasta los hombros, capul un poco ondulado en las puntas, ojos claros, nariz pequeñita, pecosita, de estatura regular, joven entre 23 y 26 años; recordando que MARIANA en ningún momento se cambió de ropa y haber escuchado comentarios, rumores, que MARIANA había salido de Palacio, "*algunas veces se decía que en un carro que había cerca a la Casa del Florero y otras veces que estaba en el segundo piso del Museo*"[52].

---

[50] Anexo Instrucción 66, fol. 101 y siguientes. Declaración del 5 de diciembre de 1985 ante Juzgado 30 de Instrucción Criminal.
[51] Anexo Procuraduria 1. Fols. 43 y siguientes. Declaración del 1° de diciembre de 1986 ante Juzgado 6° de instrucción Penal Militar.
[52] Original anexo 56 de Instrucción, fols. 126 y siguientes; declaración del 28 de noviembre de 1985 ante Juzgado 30 de Instrucción Criminal, y Original Investigación COFAC 11, fols. 185 y siguientes, declaración del 2 de diciembre de 1986 ante Juzgado 6° de Instrucción POenal Militar.

A partir de allí, son varias las declaraciones que identifican a IRMA FRANCO en el baño donde se retuvo a cerca de 70 rehenes; la señalan saliendo de la edificación judicial junto al grupo de liberados cuando ALMARALES lo autorizó en las postrimerías del operativo militar, y la ubican en la Casa del Florero, custodiada por un soldado. Incluso hay quien observa el momento en el que es sacada de la Casa Museo, subida por varios sujetos a un automotor tipo campero y llevada con destino desconocido.

HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO la reconoció en una fotografía publicada en un periódico de circulación nacional como "*de pelo (…) castaño claro, pecosa, blanca, de vestido tenía una falda escocés, larga a cuadros como cafés, con blanco, con crema, una blusa morada o lila y unas medias negras, yo diría que de unos 21 a 22 años, creo que era de ojos claros, así de señales lo único que impactó a uno era que era como pecosita y muy bien parecida y la vi en la Casa del Florero en el segundo piso en un corredorcito que hay ahí y que da al patio central, eso tiene como una baranda (…) yo diría que de 4 a 5 de la tarde, no puedo precisar bien la hora, del jueves siete y ahí al lado tenía un soldado, ella estaba sentada y el soldado estaba ahí al lado, no habían más personas, incluso ella tenía una herida en una pierna (…)*".

En declaración del 5 de diciembre de 1985 ante la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación, CORREA TAMAYO señaló: "*[…] todos estaban heridos menos la guerrillera mona pecosa que simplemente tenían un rasguño en una pierna me dijo ella […] A magally (sic) la llevaron al segundo piso, a donde estaba la otra guerrillera – la mona pecosa. Y digo que la mona pecosa –guerrillera- estaba en el segundo piso porque varios de los rehenes la vimos sentada en el corredor del segundo piso; a Magaly la llevaron hasta allá y luego la bajaron. Magaly se dio cuenta que esa guerrillera estaba en el segundo piso. Las muchachas de Serviaseo se dieron cuenta también que la guerrillera pecosa estaba en el segundo piso, como también algunas magistradas y auxiliares del Consejo cuyos nombres no*

sé porque yo no conozco casi a nadie por sus nombres. A la gente que no se daba cuenta nosotros le decíamos "mire, allá está guerrillera que estaba en el baño" en esos momentos ella estaba vestida con las mismas medias negras, la falda larga a cuadros, una blusa como moradita, con zapatos […]"[53].

Este mismo testigo el 21 de febrero de 1986, ante la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial, reiteró: "*[…] Asimismo reconozco a la guerrillera que me referí en mi anterior declaración como a la pecosita, que aparece en la fotografía de periódico con el numero 31, ella tenía zapatos de tacón, unas medias negras, falda escocesa larga, una blusa morada, pelo castaño claro, largo, pecosa, de ojos grandes, tenía un revolver en la mano; ella nos tranquilizaba a todos los rehenes, nos daba indicaciones de cómo evitar que las explosiones nos reventaran los oídos; ya en los últimos momentos la vi cojear, ella fue la que le pidió permiso a Almarales para salir entre los rehenes y él la dejo salir y salió infiltrada con nosotros y luego la vi en la Casa del Florero en un balcón en el segundo piso, la tenían aparte con un soldado al lado, cuando yo llegue a la Casa del Florero ya a ella la tenían en el segundo piso pero no supe quién la delataría; no supe tampoco que suerte corrió; yo salí de la Casa del Florero a las seis y cuarto o seis y media y hasta esa hora la vi allá […]*"[54].

En ampliación de declaración del 24 de noviembre de 1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar el testigo se mantuvo en lo dicho, precisando que la primera vez que vio a esa guerrillera fue cuando los metieron al baño ubicado entre el tercero y el cuarto piso, como a la una de la tarde del miércoles seis; y al ponerle de presente una fotografía, el declarante precisa: "*Si señora esta es la pecosita de la que he hablado, la misma que vi en el baño y en el segundo piso de la casa del Florero*", dejando el Despacho constancia en cuanto a que "*el declarante hace referencia al folio No. 2 del cuaderno que fue enviado por la Procuraduría General de la Nación, al Señor Procurador delegado para las Fuerzas Militares, fotografía que de acuerdo al mismo folio pertenece a la*

[53] C. Anexo Procuraduria 4 Fls 220.
[54] C.Anexo Procuraduría 22 A, Fl 1 al 4

tarjeta decadactilar enviada por la Registraduria Nacional del Estado Civil a IRMA FRANCO PINEDA […]"[55].

En diligencia de audiencia pública celebrada por este Despacho HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO vuelve a ratificar su dicho.

También MARIA NELFY DÍAZ DE VALENCIA[56] identificó en fotografías que se le pusieron de presente a IRMA FRANCO, indicando que entre las guerrilleras que salieron del Palacio "*a la única que vi dando pastas fue a la pecosa que estaba con nosotros; estaba vestida de falda a cuadros, larga, botas, tenía un revólver pero en ningún momento lo utilizó contra nosotros*".

MAGALYS MARÍA ARÉVALO MEJÍA corrobora las versiones anteriores el 29 de noviembre de 1985 ante la comisión Investigadora de la Procuraduría, donde señaló: "*[…] como a las tres de la tarde todavía estaba el humo y entraron más rehenes, entre ellos estaba el secretario general del Consejo doctor QUIÑONES, las tres secretarias de él: Hilda, Mariela y Helena entraron también, creo, dos compañeras llamadas NELSY que es del Ministerio y ALBA, una señora del tercer piso que es del Consejo, pero ella murió; los entraba una guerrillera, vestida de civil y estaba armada; vestía falda escocesa a cuadros color café, botas cafés, bolso café, blusa beige, tenía un revolver o pistola, arma pequeña, tenía el pelo recogido, pelo negro, pecosa, de ojos verdes; yo después vi su fotografía en el Espectador del martes 12 de noviembre estaban las fotos de unos de la cafetería y al lado de esas fotos estaba la de ella, es de apellido PINEDA […] me asombre al ver la foto de la guerrillera, en esa foto decía que se buscaba como desaparecida; yo a esa niña la había visto en la Corte desde unos tres meses antes, yo pensé que era litigante o estudiante y esta misma guerrillera fue la que el jueves, como a la una y media, empezó a decirnos que ella quería salir con nosotros como rehenes junto con una mona, que ya describí la de facciones bruscas y otra bajita y dos guerrilleros mas decían también que quería salir con nosotros como rehenes: uno de ellos era el que tenia la bala en*

[55] C.O 58 Anexo Instrucción Fl 127 y ss
[56] C. Anexo Procuraduría 2 folio 7.

la pierna y otro que tenia la mano abierta, herida. El jueves a las dos y media de la tarde, cuando salimos del baño, las guerrilleras dijeron que salían como rehenes, es decir, la PINEDA, la mona de facciones bruscas, los dos muchachos heridos […] todos fuimos saliendo y vi que en el grupo que salimos del baño salieron las dos guerrilleras y los dos guerrilleros heridos, pero antes, los guerrilleros habían cambiado de ropas […] Yo alcance a ver qué adelante, después de salir del Palacio, un soldado llevaba al mono alto hacia la Casa del Florero y en el sector de la casa del florero vi, al lado de un señor vestido de verde, a la muchacha guerrillera pecosa, de ojos verdes […]"[57].

Posteriormente, en declaración del 24 de noviembre de 1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, MAGALYS MARÍA ARÉVALO MEJÍA manifestó: "*[…] En el segundo piso [del Museo 20 de Julio] de personas que me acuerde vi a la guerrillera pecosa, vestida de falda escocesa como café a cuadros, no me acuerdo si tenía el saco o una blusa beige, con la que estaba en el baño, de pelo negro recogido y de ojos verdes, no porque ahí en el baño yo me hubiera fijado en ella sino porque anteriormente la había visto en el Palacio antes de la toma […] la mona no vi si salió o se quedó en el abaño, pero la otra la pecosa sí la ví que salió del baño ….. me acuerdo que vi a la pecosa recostada en un carro no recuerdo que carro era pero estaba ahí un militar, el carro estaba casi al frente de la casa del Florero, no por la 7ª. Sino por la calle 12, casi estaba por el lado del andén, después la vi en el segundo piso de la Casa del Florero, sentada con varias personas más. PREGUNTADO: Cuando ud vio a la guerrillera de que nos habla en el baño, durante la toma del Palacio de Justicia, como vestía?. CONTESTO: Con una falda escocés café a cuadros, con botas cafés, un bolso café y tenía un saco cafecito de lana y la blusa era beige, estaba con el pelo recogido. […]*"[58].

Versión ratificada luego por MAGALYS ARÉVALO, quien el 16 de febrero de 2006 ante la Fiscalía sostuvo que "*en la catedral, al respaldo la tenían con la cara hacia la catedral y yo estoy diciendo Irma Franco porque…ella antes siempre se identificaba como Irma Franco y se valía de las llaves del baño y pienso que sí era guerrillera, porque entramos al baño, yo estaba en el baño fue la cosa y creo que ellas fueron las que cogieron al doctor*

[57] C. Anexo investigación Procuraduria 4 Fl 112 y ss
[58] C.O Anexo Procuraduria 11, Fl 11 y ss

Gaona porque él entró hacia el baño y ella era la que iba apuntando el revólver…y ella estaba con una falda escocesa color café a cuadros y una blusa como beige y creo que tenía botas, pues creo no porque ya en la esta en la catedral la vi con botas...”[59].

CARMEN ELISA MORA NIETO[60] recordó que en la Casa del Florero vio en el segundo piso a una de las guerrilleras, a quien custodiaban dos hombres vestidos de civil. Hace la descripción de las prendas vestidas por esta persona, coincidiendo con la descripción que de IRMA FRANCO realizan los demás testigos.

Versión corroborada por BETTY QUINTERO GONZÁLEZ ante el Juzgado 6º de Instrucción Penal Militar el 10 de diciembre de 1986, al dar cuenta que entre el grupo de rehenes salió una de las guerrilleras a quien le decían MARIANA y fue conducida al segundo piso del museo.

Agrega que de MARIANA se acuerda en razón a que junto con otra mujer fueron las que los tomaron como rehenes en la Secretaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado y permaneció con ellos en la oficina como hasta las tres de la tarde, cuando los subieron al baño situado entre el tercer y el cuarto piso.

Recuerda que Mariana “*… vestía una falda a cuadros amarillos y color ladrillo, anchita, la blusa color ladrillo, manga larga, pelo largo cogido atrás, botas altas, no recuerdo si eran cafés o negras, esa niña era joven, alta delgada, un color trigueño, la niña era bonita […] MARIANA no se cambio de ropa, si pensaba salir, no sé cómo no se cambio de ropa, NATALIA sí tan pronto subimos al baño que queda situado entre el 3 y segundo piso ella se cambio de ropa […]*”.

---

[59] C.O. 5 de instrucción, folios 1 y siguientes.
[60] Folio 178 anexo 56 de instrucción.

A más de eso, narra cómo en la Casa del Florero "*dos señoras del aseo del Palacio de Justicia, le decían a un agente de la Policía que ellas sí identificaban si el agente no dejaba que MARIANA las viera a ellas, entonces yo pregunté de que quien se trataba, ellas me contestaron que de MARIANA la guerrillera que había salido en nuestro grupo y que se encontraba en el segundo piso, efectivamente yo mire y ahí estaba MARIANA con su misma ropa que había entrado al Palacio y que había salido […] MARIANA estaba en el segundo piso en un hall de la Casa del Florero y las niñas del aseo como nosotros en el primer piso hacia el lado de las escaleras que quedan a la izquierda, a MARIANA tenían que sacarla un poquito para que las niñas del aseo la vieran y hasta ahí vi yo, ya que las niñas del aseo lloraban ya que ellas no querían que MARIANA las viera […]*"[61].

Esta versión la sostuvo igualmente la señora QUINTERO ante el Juzgado 23 de Instrucción Criminal el 13 de febrero de 1986[62].

En el mismo sentido, AMANDA LEAL GALLEGO, para ese entonces auxiliar judicial en la Corte Suprema de Justicia, reconoce a IRMA FRANCO en fotografías, la describe con falda "*plizadita*" amarilla a cuadros y botas; precisando que "*ella salió con nosotras*", refiriéndose al instante final en el que se autoriza por los asaltantes la salida del grupo de rehenes mantenidos en uno de los baños del costado norte de la edificación. Agrega que en la Casa del Florero escuchó que preguntaban quien era una mujer separada del grupo y mantenida en el segundo piso y al observar vio que se trataba de la misma que había observado en el baño, esto es, IRMA FRANCO[63].

En sesión de audiencia del 26 de enero de 2012 se escuchó nuevamente a esta testigo, quien en términos generales sostuvo su versión, precisando que IRMA FRANCO iba al lado suyo.

---

[61] C.O 44 Anexo Instrucción Fl 117 y ss
[62] Original COFAC 1, fol. 258.
[63] Anexo 67 de Instrucción, Fols. 41 y siguientes.

En declaración rendida ante la Fiscalía, la señora ELIZABETH FRANCO PINEDA[64] refirió que su hermano JORGE vio a IRMA "*con una falda escocesa en alguna de las tomas que salió"* y que recibió la llamada de un Coronel de la Policía o del Ejército para comunicarle que había visto a IRMA en la Casa del Florero, que no se preocuparan que no tenía rasguño alguno; que le harían los interrogatorios de rigor y luego la soltarían.

Asegura que luego, su hermano y ella se encontraron con el Coronel, quien al enterarse de la desaparición de IRMA les habría manifestado que "*nunca se imaginó que le pasara algo y que él la había visto perfecta con otro poco de gente que tenían ahí*"*.*

Hace referencia a un soldado que habría custodiado a IRMA y que con una bala escribió el número telefónico para llamar a su hermana MERCEDES por solicitud de IRMA.

A su turno JORGE ELIÉCER FRANCO PINEDA[65] sostuvo que varios periodistas amigos suyos le informaron que su hermana estaba en el Palacio de Justicia y que él la vio *"en un noticiero de Televisión (…) en una fila de personas que las conducen de la puerta del Palacio hacia la Carrera 7ª, ella va con una falda escocesa a cuadros y unas botas"*.

En declaración del 14 de noviembre de 1985 ante la Procuraduría General de la Nación este mismo testigo había señalado: "*[…] en la casa de algunos familiares se empezaron a recibir informaciones por distintos medios que nos indicaban que IRMA se encontraba viva pues había sido vista en la Casa del Florero, en un rincón del patio custodiada por un soldado […] hemos estado totalmente pendientes en Medicina Legal, para la identificación*

[64] C.O. Instrucción 6, folio 6.
[65] Ibídem, folio 80.

de los cadáveres y en el Cementerio del Sur, donde nos informaron habría entierro en fosa común, y allí jamás ha llegado el cuerpo de IRMA […]"[66].

Asegura JORGE FRANCO en sus declaraciones más recientes, confirmando lo dicho por su hermana ELIZABETH, que un día recibió una llamada telefónica de un oficial de la Policía, quien le manifestó que no se preocupara por IRMA, pues se encontraba ilesa, que había salido bien. El uniformado le habría manifestado haber saludado a IRMA, a quien vio en el segundo piso de la Casa del Florero detenida, que "*había que estar atentos al proceso que se le siguiera*".

No obstante, otro oficial del Ejército relacionado con la familia le aconsejó que no insistiera más en lo de IRMA, pues *"A ellos los tuvieron 8 días en las caballerizas de Usaquén, luego los mataron y los cadáveres de la casi totalidad los llevaron a la fosa común del Cementerio del Sur, pero el de Irma y el de una señora Anzola, por considerar que sus familias tenían cierta capacidad de reacción pública y de otras cosas, los separaron y los llevaron a la fosa común del cementerio de Chapinero*"[67].

Así mismo da cuenta que días después de los hechos del Palacio de Justicia su hermana MARIA MERCEDES recibió una llamada de un soldado que se identificó como EDGAR, quien le refirió que *"Irma se encontraba detenida en las caballerizas de Usaquén*"; que le había pedido el favor de llamar a su familia, suministrándole un número telefónico que anotó con la punta de una bala.

Esa versión la mantiene JORGE FRANCO en sesión de audiencia del 20 de abril de 2009[68], en la que además señala que varias personas le informaron que los retenidos estaban siendo conducidos

[66] C.O 7 Anexo Instrucción Fl 177 y ss
[67] Cuaderno de Copias 6 de Instrucción, folio 82.
[68] Sesión 18 de audiencia pública.

a la Escuela de Caballería, a la Escuela de Inteligencia ubicada en San Cristóbal, a la Escuela de Artillería e inclusive a Melgar, estimando más convincente que hubieran sido llevados a las caballerizas de Usaquén, pues él tenía conocimiento que allí llevaban a los detenidos políticos y los torturaban.

Según el testigo, recibió información de que a IRMA, a los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y a una abogada de apellido ANZOLA los tenían en la Escuela de Caballería.

Se estableció que el oficial al que se refirió JORGE FRANCO como quien le suministró información sobre IRMA era el Brigadier General (r) de la Policía FÉLIX GALLARDO ANGARITA, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá para la fecha de los hechos, quien se presentó ante la justicia[69] reconociendo que tuvo con JORGE FRANCO una relación de amistad, que igual conoció a IRMA FRANCO, y respecto de quien sostuvo que se enteró de su presencia en el museo porque, cuando él salió de la Casa del Florero de averiguar por la Dra. AYDE ANZOLA, "*iban dos agentes de la Policía y comentaron que había una mujer que preguntaba por el doctor FRANCO, por un doctor Jorge Franco y que decía que no era guerrillera*"; asegurando no recordar cómo fue la comunicación con JORGE FRANCO, aceptando que le comentó simplemente lo que escuchó y nada más.

Asegura no haber visto a IRMA en la casa museo sino escuchado, mientras se dirigía del museo a la sede del Palacio de Justicia, cuando dos policías comentaban, no sólo que allí había una mujer que decía no ser guerrillera y preguntaba por JORGE FRANCO, sino que estaba en un segundo piso en la Casa del Florero y era hermana de JORGE FRANCO.

[69] C.O. Instrucción 10, folio 90 y siguientes.

Pese a lo evasivas que se muestran las afirmaciones de este deponente, tratando de marcar distancia respecto a cualquier conocimiento específico de lo ocurrido, lo cierto es que muy a pesar de su intento de suministrar la menor información posible termina por confirmar la presencia de IRMA FRANCO, con vida, al interior del museo Casa del Florero luego de terminada la operación militar de recuperación del edificio del Palacio de Justicia, tal y como lo han expuesto los otros testigos mencionados que tuvieron la oportunidad de verla en ese lugar.

MARIA DEL SOCORRO FRANCO PINEDA confirma que la familia recibió al menos dos llamadas telefónicas de personas que tuvieron directamente contacto con IRMA en la Casa del Florero, para informar que su hermana estaba detenida. Uno, dice, fue un militar amigo de la familia que la vio y habló con ella. El otro fue un soldado de nombre EDGAR, que estaba prestando el servicio militar y llamó a MERCEDES para indicarle que él había estado custodiando a IRMA en la Casa del Florero y ella le dio el número del teléfono pidiéndole llamar a la familia.

Respecto a la identidad del primero, arguye no estar autorizada por él para suministrar su nombre y además haberse recibido amenazas por si lo dicen, al igual que por seguir haciendo averiguaciones sobre la suerte y el paradero de IRMA[70]

Así mismo rindió declaración MERCEDES FRANCO DE SOLANO, quien, corroborando lo sostenido por sus familiares, dio a conocer que días después de la toma del Palacio de Justicia recibió una llamada de EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA, soldado que custodió a IRMA en la Casa del Florero.

[70] Cuaderno de copias de instrucción N° 6, folio 87 y siguientes.

En su declaración ante la Procuraduría General de la Nación el 18 de enero de 1986 expresamente dijo la señora FRANCO DE SOLANO: "*[…] el domingo siguiente diez de noviembre, me llamó un hombre, tenia voz de muchacho, él empezó preguntando directamente por Mercedes, yo le dije inmediatamente "sí, yo soy, quien habla" y él me dijo "Mira, yo soy un amigo", le pregunte "quien es" y creí que era una persona que me quería tomar del pelo, entonces le dije "yo no tengo tiempo de atenderlo" y agregué que yo necesitaba salir inmediatamente. El me dijo "a qué horas me puede atender, es algo importante y es algo que le interesa", entonces yo le dije "yo no vuelvo aquí sino hasta las seis de la tarde". Por la noche el muchacho me volvió a llamar, yo misma le contesté, él me dijo "a usted no se le perdió una amiga en el Palacio de Justicia? Usted que sabe de su amiga?" Y yo le contesté "no estamos hablando de una amiga, estamos hablando de mi hermana", él me dijo "sí, yo sé, usted es la profesora, ella le manda a decir que la tienen en la Brigada de Institutos Militares, que tranquila que ella está bien, que cree que tan pronto las interroguen ella sale". Yo le pregunté que si la tenían a ella sola o con más gente y él me contesto que había mucho personal, y ante esta respuesta, al decir "personal" yo me imagino que quien llamaba se trata de un soldado por el lenguaje que utilizaba […] El dijo que Irma tenía una falda, no recuerdo si dijo que color tenía la falda, dijo que también tenía puesto una especie de buzo, y yo no me interesé mucho en que me describiera la ropa por cuanto yo no sabía cómo estaba vestida […] La llamada del muchacho, a quien supongo soldado, se repitió como otros dos fines de semana y decía que tranquila, que mi hermana estaba bien y que continuaba en la Brigada, después no hubo más llamadas […]*"[71].

La señora MERCEDES FRANCO PINEDA ratificó su dicho en audiencia pública[72].

Lo anterior aparece corroborado con las diferentes declaraciones rendidas por EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA, quien para

[71] C.O 27 Anexo Instrucción Fol. 33 y ss y C.O 45 Anexo Instrucción Fol. 221 y ss
[72] Sesión 30 de audiencia pública.

el año 1985 prestaba servicio en la Policía Militar y en razón a ello estuvo en el lugar de los acontecimientos.

Narra MORENO FIGUEROA que estando al lado de la Casa del Florero "*el teniente RINCÓN que era del Ejército, del Batallón de Policía Militar número 1, [le] dio la orden específica de cuidar una muchacha, estuvimos ubicados en el segundo piso de la Casa del Florero*". En esa tarea estuvo aproximadamente una hora, hasta cuando "*entró un oficial…a una oficina que queda diagonal al pasadizo donde nos encontrábamos y mandó seguir a la muchacha que yo estaba custodiando... el oficial cerró la puerta y pues... ya me dirigí a la formación de los pelotones que habíamos estado ahí y nos dirigimos al batallón*".

Anota que IRMA FRANCO fue separada del grupo de rehenes y conducida al segundo piso del Museo debido a que varios liberados la señalaban como guerrillera.

Precisó que la mujer salió del Palacio de Justicia el día 7 de noviembre, se identificó como IRMA FRANCO y le solicitó comunicarse con su familia para avisarle *"que la tenía la brigada"*, proporcionándole un número telefónico al que él llamó posteriormente para transmitir el mensaje.

Textualmente narró EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA en sus diversas salidas procesales: "*[…] salieron unos rehenes, entre ellos había una muchacha de nombre IRMA según decían ella era guerrillera, a mi me tocó custodiarla, cuidarla, yo con ella no tuve tiempo de hablar, ella me pidió el favor de que por que no le avisaba a la familia, a la hermana que ella estaba en poder de la Brigada, ya después a ella la entraron a una oficina y yo posteriormente baje a reunirme con los compañeros*".

Al interrogársele respecto a cuál de los dos días cumplió servicio de vigilancia en la Casa del Florero, precisó que "*Fue en el segundo día, el*

horario sino recuerdo, creo que fue después del medio día más o menos", y sobre el sitio específico de la Casa Museo en donde custodió a la retenida señaló "*… el balcón, en el segundo piso, es como una especie de corredor*".

Cuestionado sobre cómo se enteró que la mujer se llamaba IRMA contestó: "*Ella me dijo que se llamaba IRMA, me dio el nombre no más*".

Respecto a la comunicación sostenida con la familia de IRMA manifestó: "*Ella se llama MERCEDES …. Si claro la llamé ….. El teléfono creo que es 533282. Yo llamé como tres días después …. Llamé como en dos ocasiones y no la encontré, no le deje razón y finalmente la encontré y le dije que la hermana IRMA me había pedido el favor de que le informara a ella que ella estaba retenida, que estaba en poder de la Brigada ….*".

En punto a las características físicas y la indumentaria que vestía IRMA, la describió con "*…. una falda café hasta la rodilla, unas botas altas del mismo color café clarito, una blusa, no recuerdo el color, y ella tenía los ojos un poquito claros, cabello más o menos hasta los hombros, el cabello color castaño clarito, el cabello ligeramente ondulado, creo que lo tenía como con una hebilla, no tenia cicatrices en la cara, blanquita más o menos, no era tan digamos así oscura, era más bien delgada*", precisando que estaba bien de salud, cansada, con unos rasguños en las piernas[73].

La versión de MORENO FIGUEROA, sostenida imperturbable a lo largo de los años, es conteste, clara, precisa. Es corroborada por la familia FRANCO PINEDA y concuerda en lo esencial con lo depuesto por las diferentes personas que igual tuvieron contacto directo con IRMA FRANCO y dan cuenta de su presencia, luego de salir viva del Palacio de Justicia, en las instalaciones de la Casa del Florero, custodiada en el segundo piso por un soldado.

---

[73] C.O 8 COFAC Fol. 115; Anexo 66 de Instrucción, folio 155; C.O 10 Causa Fl 69 y C.O 5 Causa Fol. 198.

La descripción que de la retenida suministra el testigo concuerda con la aportada en las diferentes declaraciones recepcionadas sobre el particular y encaja con la semblanza reseñada.

No hay, pues, lugar a dudar de la veracidad y fiabilidad de este testimonio, como tampoco lo hay para restarle credibilidad a lo narrado por todos aquellos que han dado fe no solo de la presencia de IRMA FRANCO al interior del Palacio de Justicia durante la toma y retoma de la edificación, sino de su supervivencia al holocausto y su presencia en el museo bajo custodia de las fuerzas militares.

Pero es que además de los testigos ya mencionados, existen en el expediente otros que además de confirmar la presencia de IRMA FRANCO en la Casa Museo del Florero, concuerdan en describir la manera cómo fue sacada de ese lugar, escoltada por personal civil y militar, alrededor de las 6:00 p.m. del siete de noviembre, para ser llevada en un vehículo tipo campero.

Al respecto FRANCISCO DE LA CRUZ LARA, celador de la Casa Museo del 20 de Julio, observó en la segunda planta a varias personas retenidas, entre ellas un grupo de aproximadamente siete personas, quienes al parecer habían sido encontradas en los alrededores del Palacio de Justicia y fueron sacadas de allí el 7 de noviembre escoltadas por personal militar, desconociendo su destino. Afirma que esas personas estaban retenidas por "*sospechosas*" y eran custodiadas por soldados del Batallón Guardia Presidencial.

Además de las seis o siete personas mencionadas, el 7 de noviembre vio ingresar una mujer a la Sala de Firmantes del Acta bajo la custodia de un soldado, y la describe como de 1.70 a 1.75 de

estatura, "*delgada, con falda, botas, unas medias negras veladas, tenía una blusa, creo que también negra y creo que un saco, no me acuerdo exactamente, la falda si no era gris era negra, las botas eran como de gamuza corticas de color café claro, era de unos 28 a 32 años, precisar exactamente el color de la piel pues es difícil porque ella salió con hollín*". Esa mujer permaneció en el museo hasta las seis u ocho de la noche del día 7, cuando "*salió del Museo vigilada…escoltada por gente de civil y un militar vestido de verde del Ejército…*".

Ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, en declaración vista a folio 166 y siguientes del cuaderno original de anexos de la instrucción N° 66, expresamente el señor LARA señala haber estado en el segundo piso de la Casa del Florero y darse cuenta que personal militar y civil interrogaban a la mujer retenida por algunos datos personales como nombre, profesión, estudios, y motivo para estar en el Palacio de Justicia, y que "*ella de nombre dijo que era IRMA FRANCO, que estudiaba derecho, que en el palacio de justicia buscaba a un magistrado para que le ayudara o le firmara la tesis*".

En declaración rendida el 18 de diciembre de 1985 ante la comisión Especial de la Procuraduría, específicamente señaló: "*[…] El jueves entre algunos rescatados que salieron del Palacio, venía una muchacha por ahí de uno setenta y cinco de estatura, aproximadamente delgada y de tez morena, y al subir al segundo piso la encontré allí con uno de los guardias del B-2, que la interrogaban, preguntándole nombre profesión y los motivos por el cual (sic) se encontraba en el Palacio de Justicia, ella contaba que estaba buscando a un abogado para que le corrigiera una tesis, ella salió entre las siete y media u ocho de la noche del jueves, en estrictas medidas de seguridad […] En la página N° 12, se encuentra una fotografía en papel periódico de una mujer cuyo nombre es IRMA FRANCO PINEDA, la reconozco como la persona sospechosa que entró el día jueves al Museo el Veinte de Julio y sacada del Museo en las condiciones ya descritas anteriormente […]*"[74].

[74] C.O 49 Anexos Instrucción Fol. 91.

El 2 de diciembre de 1986, ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, el señor LARA sostuvo su versión señalando que "*[…] Se condujo a una mujer a la Sala "Firmantes del Acta" […] El día fue el 7 de Noviembre, la hora no la sé, pero creo que en las horas de la mañana, cuando yo me di cuenta la mujer ya estaba en el segundo piso, vigilada por un militar, un soldado, no me acuerdo como vestía*".

La mujer "*Permaneció el Jueves todo el día más o menos aproximadamente, no estoy muy seguro, a una hora de seis a ocho de la noche de ese Jueves, o hasta más o menos seis u ocho de la noche del Jueves, hora en la cual salió del Museo vigilada, en el segundo piso la vigilaba un militar un Soldado, al salir del Museo sale escoltada por gente de civil y un militar vestido de verde del Ejército, tenía un grado mayor que el de un soldado, pero no era un Soldado, era un militar; el dato preciso de cuantas personas la escoltaban no sé, pero eran unas cuatro o cinco personas, no supe hacia donde la conducían, yo me encontraba en el corredor del primer piso cuando la sacaron, colocan un Jeep, le echan reverso al Jeep y lo colocan frente a la puerta del museo y la muchacha ingresa por la parte de atrás del Jeep con uno o dos detectives detrás, yo supongo que eran detectives, yo me encontraba a una distancia no mayor de diez metros del lugar donde colocaron el Jeep, […] Estaba como con una fractura en una pierna, hago la aclaración de que se quejaba mucho de una pierna, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, decía que le dolía mucho una pierna, caminaba y cojeaba, no me acuerdo si le vi sangre, ella caminaba y cojeaba, no me comentó nada sobre la pierna o sobre lo que le había pasado en la pierna solo que se quejaba de esa pierna […]*"[75].

A su turno PEDRO LEÓN ACOSTA PALACIOS hace referencia a la mujer que salió "*…. el jueves ya tardecito como más tarde de las seis, fue la última que salió del museo, por esa es que han venido averiguando, de la cual yo vi el campero que se llevó la muchacha pero no recuerdo cómo era el campero, ni si era Toyota o Nissan u otra marca de carro, sé que era un campero y a mí me extrañó fue que por qué estando el carro así sobre la calle once lo atravesaron y lo colocaron de reverso quedando la parte de atrás hacia la puerta del Museo, o sea que la muchacha entraba de una vez al carro, no era*

[75] C.O 44 Anexo Instrucción Fol.51; Anexo Instrucción 66 Fol. 163 y ss.; C.O 58 Anexo Instrucción Fol. 176, y C.O 3 Procuraduría Fol. 26.

sino dar el paso del andén que lo separaba de la puerta lo cual me extrañó porque siempre lo colocan en estado normal, ahí se fue la muchacha y adiós porque no volví a saber nada de ella"[76].

Agrega que a esa persona la vio el jueves en el segundo piso, "*esa fue una de las últimas que llegó como sospechosa, esto de que la ví fue antes de terminarse la gazapera esa, esto sería como las dos, de todas maneras esas muchachas permaneció* (sic) *el resto de la tarde ahí y la paseaban por los corredores de la segunda planta*", y la describe "*… delgadita, más bien peli-crespa* (sic)*, tenía como cola-caballito* (sic)*, la falda era ancha escocesa, cuadros pero no se que colores, tenía un saco como amarillo, creo que iba era de botas pero no recuerdo el color, esa muchacha estaba por ahí como entre unos veinticinco años, era más bien trigueña*"[77].

Finalmente recuerda que cuando la mujer es sacada de la Casa del Florero y subida al campero por dos hombres vestidos de civil, que no sabe si eran del DAS o del F2, junto a él se encontraba FRANCISCO DE LA CRUZ LARA y lo único que escuchó decir a los dos hombres que la custodiaban fue "*esta hijupueta no la paga*"[78] (sic).

Aun cuando este testigo no identifica expresamente a la mujer como IRMA FRANCO, las circunstancias y características descritas por él coinciden con las señaladas por los restantes deponentes que la individualizan como tal, en especial con lo relatado por FRANCISCO DE LA CRUZ LARA, quien enfática y expresamente sí la individualiza, identifica y reconoce como IRMA FRANCO.

En igual sentido JOSÉ URIEL CEPEDA CORREDOR, a la sazón auxiliar de servicios generales en el Museo 20 de Julio, el 9 de diciembre de 1986, ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal

[76] C.O Procuraduria N° 1, Fol. 147.
[77] Ibídem.
[78] C.O Procuraduria N° 1, Fol. 149

Militar, contó que de aproximadamente diez personas que vio tenidas en el segundo piso como sospechosas, dos eran mujeres, "*Una era como de veinte años, joven, vestía de Blu-jean,* (sic) *tenía un saco de lana pero no me acuerdo ahora, la otra tenía una falda y botas, la falda era como oscura larga …., la mujer de falda tenía un saco abierto, como oscuro también, pero no el color, las botas eran azules o negras, siempre era bota alta, la falda le daba más debajo de la rodilla, era de nariz pequeña, ojos saltones, …*".

Recuerda que "*[…] La de blue jean la trajeron como siete u ocho de la noche del día seis, la otra de falda fué el siete que yo la vi en el segundo piso en la Sala Nariño, después de las doce y fue la última persona que sacaron del Museo, yo salí a las siete de la noche y de allí la sacaron de cinco y media a seis, la sacó una persona de civil y otra persona un militar que no se qué grado tenía, el militar vestía de verde, uniforme verde, pero entre el uniforme de la policía y del Ejercito no se distinguirlos. A la muchacha de falda le estaban haciendo preguntas en el segundo piso y como a las cuatro y media ya se había acabado todo, y era la última persona que le estaban haciendo preguntas y yo estaba sentado en la portería, a ella la sacaron por la puerta y fueron las últimas personas que salieron […]*"[79].

A la luz de las declaraciones que se han venido citando, queda claro que IRMA FRANCO PINEDA efectivamente salió viva del Palacio de Justicia y al ser señalada como guerrillera por algunas de las personas que la vieron al interior de la Casa del Florero, fue separada del grupo y conducida al segundo piso de la edificación, donde fue custodiada por el soldado EDGAR MORENO.

Luego de permanecer toda la tarde del 7 de noviembre en el museo, fue sacada de allí a primeras horas de la noche por personal vestido de civil, unos, y con uniforme militar, otro, - no como lo sostienen los defensores que argumentan que a IRMA se la llevaron agentes de

[79] C.O 44 Anexo Instrucción Fol. 106 .

civil - quienes la hicieron abordar un campero, especial y estratégicamente posicionado a la entrada del museo; emprendiendo la marcha con rumbo desconocido.

Sobre la suerte corrida por IRMA FRANCO después de salir de la sede del Museo del 20 de Julio, el expediente brinda la versión de BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN[80], testigo en un principio protegido con reserva de identidad, quien explicó que en virtud a su trabajo y por tener acceso a diferentes actividades de inteligencia y contrainteligencia desarrolladas en el Batallón CHARRY SOLANO (actual Brigada 20), tuvo conocimiento sobre varios casos de desaparición y muertes ejecutadas por miembros de esa institución, entre ellos el ocurrido con IRMA FRANCO.[81] [82]

Sostiene este testigo que en la Casa del Florero concentraban a las personas rescatadas del Palacio de Justicia como a los especialistas de inteligencia, tanto de la Charry Solano (para ese entonces COICI), especialmente los que cubrían el blanco M-19, también los de la Brigada 13, la Policía, la SIJIN y la DIJIN. A quienes identificaban como pertenecientes al M-19 los trasladaban para la B-13, la DIJIN, la SIJIN, etc. Cada quien se llevaba a los que reconocía y eran de su interés, de acuerdo con el blanco que manejaban.

En cuanto a IRMA FRANCO específicamente refiere que fue llevada a la B-20 (Charry Solano-COICI) en un "*campero Nissan Patrol de color azul claro, de placas en ese momento AM, pero no me acuerdo el numero, creo*

[80] C.O. 1, folio 127 y 135.
[81] Según obra a folio 241 del original anexos de instrucción N° 88, a este testigo se le había levantado la reserva de identidad desde el 11 de abril de 2003. Sin embargo, el 28 de julio de 2006 la Fiscalía Cuarta ante la Corte nuevamente ordena el levantamiento de esa reserva (fol. 27 original instrucción N° 6).
[82] Según ACTA DE RESERVA DE IDENTIDAD, Clave BR020, radicación RG-035, del 21 de noviembre de 1994, BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN laboró hasta noviembre de 1990 con el Ejército Nacional, en la Brigada 20. Fol. 247 original anexos de instrucción N° 88.

que era AM 4651", por cuenta del Grupo de Operaciones Especiales GOES, siendo instalada en una camioneta tipo "*Chevivan*" de color café, especialmente acondicionada con equipo para interrogatorios y torturas[83], entregándola a los analistas e interrogadores *"SV-GUSTAVO SERRATO y ss GUSTAVO ARÉVALO y al jefe de blanco que en ese momento había"*.

Asegura que a IRMA FRANCO siempre la mantuvieron dentro de ese vehículo y luego de obtener información, como la ubicación de la casa donde se había hospedado parte del grupo del M–19 que participó en el asalto al Palacio de Justicia, "*que era una casa ubicada al oriente de la carrera décima pasando el Instituto de cancerología*", y sobre un atentado que el grupo guerrillero planeaba con un *"bus bomba"*, a más de datos relacionados con la "*organización, composición, ubicación e identificación de la gran mayoría de miembros de la organización M–19, incluyendo lo que ellos denominaban el secretariado exterior, o sea las personas que estaban en otros países gestionando ayudas para la organización como EVER BUSTAMANTE GARCÍA (…)*", procedieron a asesinarla y sepultarla en "*la loma donde hoy en día quedan los polígonos*", de lo cual se encargaron los oficiales CAMILO PULECIO TOVAR y CARLOS FERNANDO MEJÍA LOBO.

De BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN es importante resaltar que la declaración que venimos citando no fue rendida específicamente como parte del proceso seguido por los hechos del Palacio de Justicia y que dentro de ella el deponente suministra información, además de lo ocurrido con IRMA FRANCO, sobre otros hechos supuestamente atribuibles a personal del Batallón de Inteligencia Charry Solano o Brigada 20, relacionados con acciones de desaparición forzada de personas, torturas y homicidios,

[83] "tenía gravadoras, (sic) cablesconectados a baterías al piso tenia correas para atar a las personas de pies y manos y demás una silla, la carrocería estaba separada de la cabina por una especie de vidrio con una ventanilla para observar a la persona que se tenia allí sin ser visto" (sic) Folio 128 cuaderno copias de la instrucción N° 1.

concretamente de NIDIA ERIKA BAUTISTA, AMPARO TORDECILLA, OSCAR WILLIAM CALVO OCAMPO, GUILLERMO MARIN y AVELINO RODRIGUEZ o LUIS PRIETO.

Una declaración similar había rendido GARZÓN GARZON en enero de 1991 ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, a donde acudió solicitando protección para sí y su familia, aduciendo problemas de seguridad derivados de su actividad como miembro del Batallón Charry Solano[84].

En esa ocasión, a más de señalar que como miembro de inteligencia del Charry Solano infiltró grupos subversivos como el M-19 y las FARC, se refirió lacónicamente a lo acontecido con IRMA FRANCO, en términos coincidentes con lo sostenido en su versión bajo reserva, y suministró información sobre los mismos otros casos.

En esas condiciones no puede afirmarse, en principio, que lo sostenido por BERNARDO GARZÓN sobre IRMA FRANCO estuviera movido por un interés particular o intensión perniciosa de afectar el proceso o de específicamente involucrar o perjudicar a alguno de los aquí procesados o sembrar dudas y enmarañar la investigación por los hechos sucedidos en la retoma del Palacio de Justicia, tal y como se ha sostenido en relación con otros deponentes.

De otro lado, para medir la fiabilidad de la información suministrada, es del caso advertir que la Fiscalía, con ocasión de la información que venía suministrando GARZÓN GARZÓN, en 1995 adelantó un trámite de beneficios por colaboración y en sendos informes

[84] Cuaderno Original de Anexos de la causa N°1, Fols. 5 y siguientes.

evaluativos rendidos por el Fiscal Regional identificado con el código 023 conceptúa que los datos entregados por este deponente "*han servido, no solo a la Procuraduría, sino que, los nuevos que ha suministrado para la identificación de los presuntos responsables tanto materiales como intelectuales de los hechos narrados, si bien es cierto, penalmente no han sido utilizados, ….. en lo disciplinario y que se conociera en otrora época ha sido utilizado para adelantar dicho proceso, …*" y por consiguiente considera que se hace acreedor a los beneficios consagrados en la Ley 81 de 1993[85].

En el mismo sentido se pronunció PABLO GONZALEZ MONGUI, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría entre septiembre de 1989 y marzo de 1991, persona que frente la Fiscalía Delegada ante la Dirección Nacional del CTI, bajo juramento, reconoció que con los datos suministrados por GARZÓN se pudo establecer el paradero de NIDIA ERIKA BAUTISTA y LUIS PRIETO, concretando que "*La información suministrada por esa persona fue muy valiosa y considero que sigue siendo importante, porque hasta donde la Procuraduría pudo constatar, todos los datos por él suministrados, fundamentalmente sobre ubicación de las Victimas fueron constatados excepto en el caso del cuerpo de AMPARO TORDECILLA, que pudo haber sido arrastrado por las aguas del rio en donde fue asesinada*"[86].

Ahora, si bien finalmente el 11 de agosto de 1997 el Despacho del Fiscal General de la Nación niega los beneficios por colaboración a GARZÓN GARZÓN, no fue precisamente porque la información suministrada no fuera valiosa, útil o fuera falsa.

Por el contrario, tuvo en cuenta que "*los avances conseguidos en la Procuraduría conducen a pensar en la seriedad de la colaboración*"[87]; sin

[85] Folios 190 al 193 y 219 al 223 Original de Anexos de la Instrucción N° 88.
[86] Folio 217 ibídem.
[87] Folio 235 del mismo cuaderno.

embargo, encontró que los esfuerzos de los organismos investigativos fueron insuficientes para corroborar la información obtenida y arrojar resultados. En otras palabras, que la negligencia, la falta de diligencia y eficacia de los organismos de investigación del Estado no permitieron verificar la información y obtener resultados en materia penal. Además para entonces cualquier beneficio resultaba extemporáneo, como quiera el interesado ya había cumplido el total de la pena que estaba purgando, de modo que no había beneficio alguno para ofrecerle.

Es fiable, entonces, lo sostenido por BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN sobre la suerte corrida por IRMA FRANCO PINEDA luego de ser sacada en un campero de las instalaciones de la Casa Museo del 20 de julio o “Casa del Florero” por efectivos de los cuerpos de inteligencia del Estado, hecho este que encaja con lo dicho por los testigos citados atrás, dándole más peso y credibilidad a su dicho.

Dentro del expediente hay referencia en cuanto a que, ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar donde se adelantaba investigación por el secuestro, tortura y homicidio de NIDIA ERIKA BAUTISTA, BERNARDO ALFONSO GARZÓN se habría retractado de lo sostenido ante la Procuraduría, siendo esa otra de las razones por las cuales finalmente la Fiscalía negó los beneficios por colaboración tramitados.

No obstante eso haya sido así, la retractación de GARZÓN GARZÓN no desvirtúa per se su dicho inicial, pues es importante no perder de vista que se habría dado precisamente ante la justicia penal militar, con relación a información suministrada respecto de personal militar y de inteligencia militar supuestamente involucrado en conductas punibles, por lo cual GARZÓN temía por su vida y la

de su familia y por ello había solicitado no sólo a la Fiscalía beneficios por colaboración sino a la Procuraduría protección, sin obtener nada de ello.

Igual, recuérdese cómo, según PABLO GONZALEZ MONGUI, exjefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, el cuerpo sin vida de NIDIA ERIKA BAUTISTA pudo ser encontrado gracias a la información suministrada por BERNARDO GARZÓN y, entonces, no puede desatenderse que la referida retractación se hubiera dado precisamente dentro del proceso adelantado por la justicia Penal Militar por el secuestro, tortura y homicidio de NIDIA ERIKA BAUTISTA.

En esas condiciones, son más fiables los dichos iniciales del testigo que la retractación verificada en las circunstancias indicadas, máxime cuando aquellos son contestes, claros, lógicos, coherentes y encuentran respaldo en otros elementos de juicio acopiados en el expediente, mientras ésta soporta máculas por el interés específico que se puede deducir en el testigo para llevarlo a negar lo que sí conoció[88].

A lo anterior se suma la comunicación radial captada por el radioaficionado PABLO MONTAÑA, en la que LUIS CARLOS

---

[88] "….. la jurisprudencia de esta Corte tiene establecido que el hecho de que un testigo se retracte de sus afirmaciones iniciales, no desvirtúa por sí mismo el contenido de lo expresado inicialmente, versión que no se deslegitima por ese sólo hecho, sino que depende del análisis conjunto de la prueba practicada, sujeta en su apreciación al sistema de la persuasión racional, ello con el propósito de establecer cuándo el testigo dijo la verdad y cuándo no.

……

La retractación, ha sido dicho por la Corte, no destruye per se lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apodíctica lo dicho en sus nuevas intervenciones. 'En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, el cual podrá consistir ordinariamente en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas como sucedieron, o en un interés propio o ajeno que lo lleva a negar lo que sí percibió. De suerte que la retractación sólo podrá admitirse cuando obedece a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace y siempre que lo expuesto a última hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las demás comprobaciones del proceso" (Corte Suprema de Justicia.- M.P. José Leonidas Bustos Martínez.- 26 de junio de 2013).

SADOVNIK SANCHEZ, jefe del Estado Mayor de la Brigada 13 (ARCANO 5), sostiene con el jefe del B-2 de la Brigada, EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO (ARCANO 2)[89], la siguiente conversación:

"***ARCANO 5:*** *Arcano Dos - Arcano Cinco, Otero está con cédula falsa, parece que lo tiene usted allí entre el personal, cambio.* ***ARCANO 2:*** *Un RPT que no le alcancé a copiar el nombre, cambio.* ***ARCANO 5:*** *Otero, Otero Otero, Otero Cifuentes salió con cédula de un muerto, cambio.* ***ARCANO 2:*** *Estoy QSL.* ***ARCANO 5:*** *Arcano Dos - Arcano Cinco.* ***ARCANO 2:*** *Un conductor que yo le doy el nombre posteriormente, cambio.* ***ARCANO 5:*** *Esta QSL. La foto de Luís Francisco Otero Cifuentes está en la primera página de El Tiempo, cambio.* ***ARCANO 2:*** *Recibido y QSL, lo conocen y no está dentro de los que tenemos acá, cambio.* ***ARCANO 5:*** *R, está QSL ¿y el, el seis uno de los seis de estos sujetos eh?, cambio.* ***ARCANO 2:*** *No, negativo únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto, sobre una sujeto que es abogada y que, ya fue reconocida por todo el per…, todo personal, cambio.* ***ARCANO 5:*** *Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio.* ***ARCANO 2:*** *Recibido y QSL"* (subrayamos).

Comunicación que permite corroborar lo dicho por los diferentes testigos en cuanto a que el Ejército, y en particular el B-2, tenía en su poder a una abogada reconocida como guerrillera por los liberados, y, más aún, que respecto de esa persona se le transmitió al jefe del B-2 una directriz específica y contundente: según el análisis efectuado a esas comunicaciones por los expertos HENRY ARMANDO SANABRIA y JOHN EDWARD PEÑA, sin lugar a dudas la orden de ARCANO 5 significaba consumar la desaparición de la sospechosa.

[89] El Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, a folio 198 del cuaderno original 4 de instrucción precisa los indicativos de radio utilizados durante la operación del Palacio de Justicia: ARCANO 6 – Comandante B13 (Jesús Armando Arias Cabrales); ARCANO 5 – Jefe Estado Mayor B13 (Luis Carlos Sadovnik Sánchez); ARCANO 4 – Jefe de Logística B13; ARCANO 3 – Jefe de Operaciones B13; ARCANO 2 – Jefe de Inteligencia (B2) B13 (Edilberto Sánchez Rubiano); ARCANO 1 – Jefe de Personal B13; AZABACHE 6 – Luis Alfonso Plazas Vega, y COLOMBIA 6 – podría ser el Presidente, el Ministro de Defensa o el Comandante General de las Fuerzas Militares.

Así las cosas, contrario a la especulación de quienes ante la contundente evidencia de la salida viva de IRMA FRANCO del Palacio de Justicia prefieren ignorar el trágico tratamiento al que fue sometida y del que, excepcionalmente, da cuenta el expediente, para conjeturar que seguramente salió del país permaneciendo en la clandestinidad, como lo hizo CLARA HELENA ENCISO, hasta donde se tiene conocimiento única integrante del M-19 que consiguió escapar del operativo militar de recuperación de la edificación; la prueba recaudada suministra certeza de su privación de la libertad por cuenta de agentes del Estado, el ocultamiento de su persona y la mantenida negativa durante 29 años a reconocer dicha situación o a informar sobre su suerte y su paradero.

El hecho de, según lo informa BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, haber sido asesinada y sepultada clandestinamente, tal y como se dijo, no desvirtúa la consumación y permanencia del reato de desaparición forzada, en tanto aún hoy en día continúa desaparecida y quienes la sometieron a esa afrenta persisten en callar y ocultar su paradero.

El caso de IRMA FRANCO PINEDA, que, como se dijo, es excepcional por cuanto está avalado por abundante prueba directa de incontestable contundencia, marca desde ya una premisa importante para la valoración de todos y cada uno de los restantes casos en los que la prueba se presenta más susceptible de crítica, y es que ha quedado demostrado, lejos de toda duda razonable, que en los hechos del Palacio de Justicia, en la operación de recuperación de la edificación judicial por parte de las fuerzas del Estado, efectivamente se dio la desaparición forzada de personas.

Esto es de vital importancia si se tiene en cuenta que tratándose de procesos en los que se encuentra cuestionada la violación de los derechos humanos, el proceso analítico y valorativo de la prueba requiere una mayor exigencia, puesto que el contexto histórico social juega un papel importante para entender el desarrollo de algunas conductas, siendo ello relevante en la construcción de los postulados lógicos en procura de una acertada apreciación probatoria.

De ahí que cobre relevancia y justificación la síntesis histórica expuesta al comenzar esta providencia para contextualizar los hechos materia de investigación y juzgamiento y el hecho demostrado del sometimiento a desaparición forzada de la única persona respecto de la cual indiscutiblemente la prueba indica que estaba vinculada al grupo guerrillero M-19, salió viva del Palacio de Justicia y fue puesta bajo custodia de las fuerzas militares.

Hechos que, junto a otros suficientemente probados dentro del informativo, permitirán la construcción de postulados e inferencias lógicas encaminadas a develar las dudas planteadas respecto a la suerte corrida por las personas pertenecientes a la cafetería del Palacio de Justicia y las visitantes ocasionales sobre quienes hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero.

Y es que, en particular frente a la conducta punible de desaparición forzada, ante la dificultad probatoria, reviste importancia y prevalencia el análisis a partir de la prueba indiciaria.

Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose de la obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas

circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos, en particular cuando el Estado demandado haya asumido una conducta renuente en sus actuaciones ante la Corte[90].

En materia de violación de derechos humanos, específicamente en el reato de desaparición forzada atribuido a agentes del Estado, es el sujeto a quien se le imputa el acto quien goza de los mejores elementos probatorios para esclarecer los hechos, circunstancia que debe tenerse en cuenta en el momento de realizar la valoración probatoria.

No implica esto invertir la carga de la prueba ni desconocer el postulado fundamental de presunción de inocencia, sino una manifestación del concepto, jurisprudencialmente reconocido y aceptado incluso en materia penal, de carga dinámica de la prueba, entendido no como la liberación del Estado de su obligación de demostrar la existencia del hecho punible y la responsabilidad del procesado, sino de hacer radicar en cabeza de éste el deber de ofrecer los elementos de juicio suficientes para controvertir las pruebas que en tal sentido ha aportado el ente investigador.

"*La carga de la prueba corresponde al Estado porque éste, cuando tiene a un ciudadano bajo su arresto y control exclusivo, debe garantizar la seguridad y los derechos de esa persona. Además, es el Estado quien ejerce control sobre los elementos de prueba concernientes a la suerte corrida por el detenido. Estos extremos son particularmente pertinentes en casos de desaparición, en que los familiares de la víctima u otros interesados no están en condiciones de conocer su paradero*"[91].

[90] CIDH Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49
[91] COMISION-IDH. Informe Nº 112/00 Caso 11.099 Yone Cruz Ocalio Perú, 4 de diciembre de 2000.

Esta es una de las razones, además, por las que "*La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas*"[92].

Así las cosas, tratándose del punible de desaparición forzada puede determinarse la existencia del hecho a partir de las pruebas indirectas y/o circunstanciales, las cuales a través de inferencias lógicas y la valoración integral permiten el esclarecimiento de la conducta; de manera que la prueba documental y testimonial directa no son las únicas que pueden fundamentar la sentencia, máxime cuando en esta clase de delitos los medios probatorios son esencialmente indirectos.

Sobre ese particular el Consejo de Estado ha precisado cómo "… *la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios*"[93].

"*La valoración probatoria en los asuntos de desaparición forzada debe realizarse con especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón a su particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas evidentes de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente*

---

[92] CIDH Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 131; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 137

[93] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2002, expediente 12.812.

identificados, por lo tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones, ….”[94]*.*

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte cómo no existe ningún impedimento en utilizar prueba indiciaria para demostrar la concurrencia de cualquiera de los elementos de la desaparición forzada, incluyendo la privación de la libertad[95]. Criterio compartido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto considera que, en casos donde no se ha demostrado la detención de una persona por autoridades estatales, se puede presumir o inferir dicha detención si se establece que la persona estaba en un lugar bajo control del Estado y no ha sido vista desde entonces.

Ahora, como lo dispone el artículo 238 del código de procedimiento penal, las pruebas deben ser valoradas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, esto es, de conformidad con las leyes de la ciencia, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

Esas reglas del sistema de la sana crítica se hacen especialmente evidentes en la elaboración de los indicios, en tanto estos implican que de un hecho indicador debidamente demostrado, se infiere la existencia de otro (hecho indicado) a través de una inferencia ajustada a los principios de la lógica, las leyes de la ciencia, la experiencia y el sentido común.

---

[94] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2008, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
[95] *Cfr.Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240.

En palabras de la Corte Suprema de Justicia, contenidas en proveído que a pesar del paso del tiempo no pierde su vigencia, "*El indicio como mecanismo probatorio se plasma en un juicio de inferencia lógica que emite el juez teniendo en cuenta la existencia probada de un hecho indicador que lo lleva a concluir la existencia de otro indicado. Tal instrumento conceptual le permite al juez adquirir certeza sobre la autoría y responsabilidad del procesado cuando otros medios probatorios no se la brindan; la confiabilidad descansa en la demostración racional del hecho indicador y en la capacidad del juez para valorarlo e inferir de él la existencia del hecho indicado y su lógica conexión con el sujeto a ellos ligado*"[96].

De manera, dada la carencia de prueba directa, el indicio cobra especial relevancia al analizar un supuesto de desaparición forzada, lo que implica examinar en conjunto una serie de conductas debidamente probadas dentro del expediente y que, unidas por un fin común, permiten develar la real ocurrencia del comportamiento.

Para el caso, como se dijo, partimos del hecho suficiente e indiscutiblemente demostrado de la real ocurrencia de desapariciones forzadas en desarrollo de la operación de recuperación del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, tal y como quedó evidenciado con el tratamiento dado a IRMA FRANCO PINEDA.

Hecho indicador tan indiscutible, pese a los esfuerzos realizados por la defensa para negar lo innegable, que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado Colombiano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, por acción, por la desaparición forzada de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA e IRMA FRANCO PINEDA[97], dejando con ello en claro cómo en

---

[96] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de julio de 1982. M.P. Dr. Alfonso Reyes Echandía.
[97] CIDH sentencia de 14 de noviembre de 2014, caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia.

efecto, durante el operativo, personas salidas con vida del Palacio de Justicia quedaron bajo custodia de las fuerzas de seguridad y fueron desaparecidas, sin conocerse hasta ahora su paradero.

Junto a lo anterior, concurren otros elementos indiciarios que, analizados en conjunto, contribuyen a establecer la suerte corrida por las otras personas desaparecidas luego de la recuperación de la edificación judicial.

Es un hecho reconocido y suficientemente documentado al interior del expediente que las personas sacadas del Palacio de Justicia eran conducidas al Museo 20 de Julio o Casa del Florero, bajo estrictas medidas de seguridad, y allí quienes eran considerados sospechosos o especiales (s) eran llevados al segundo piso, separados de los demás liberados, donde permanecían bajo custodia de personal de las fuerzas militares o de seguridad del Estado.

Tal fue el caso de IRMA FRANCO, YOLANDA SANTODOMINGO, EDUARDO MATSON, ORLANDO ARRECHEA, ORLANDO QUIJANO, MAGALIS MARIA AREVALO y HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, entre otros.

Sobre el particular dan cuenta los diferentes testigos ya referidos en este proveído, quienes vieron en el segundo piso de la Casa Museo a IRMA FRANCO PINEDA, en especial y particularmente EDGAR ALFONSO MORENO FIGUEROA, soldado de la Policía Militar que la custodió en ese lugar[98].

En el mismo sentido declaró AMÉRICA ISABEL RAMÍREZ BAQUERO, secretaria del Museo Casa del Florero, quien en declaración del 18 de diciembre de 1985 señaló cómo al segundo

[98] Anexo 66 de Instrucción, folio 155 y siguientes; original causa N° 5, folio 198; Declaración en audiencia pública.

piso fueron llevadas cuatro o cinco personas para interrogarlos, pues había dudas sobre ellas, entre las que vio a una muchacha morenita vestida con falda ancha; personas que mantenían con las manos en alto y mirando hacia la pared[99].

Esta misma testigo, en versión rendida el 9 de diciembre de 1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, señaló: "*[…] yo creo que era de noche subieron unos jóvenes al segundo piso, había un señor moreno, gordito, otros jóvenes más bien delgados que los pusieron con las manos contra la pared, otro joven de vestido oscuro, lo pusieron a la salida de los Firmantes del Acta a ese joven se lo entregaron al papá, pero yo no lo vi salir, …., cuando ya llevaron a esos jóvenes, a la entrada de la sala Nariño había otro señor, en el hole del libertador habían otros dos señores y que posteriormente los pasaron a la Sala Nariño, otro joven que tenía un vestido como habano, él mismo dizque que dijo que era empleado de la Corte, no estoy segura si después entraron otro negrito que estaba al fondo de la sala y entraron a dos muchachas yo creo que a ellas les dieron salida porque no las volví a ver, creo que una tenía blue jean, […]*"[100].

Recuerda esta deponente que al segundo piso de la casa museo subían a quienes no satisfacían sus datos, a quienes eran de dudosa identificación ante las autoridades, para preguntarles "*con mucho sigilo*"[101].

HECTOR VARGAS ARIAS, empleado del Museo Casa del Florero, el 12 de diciembre de 1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, preguntado sobre si se dio cuenta el número de personas que habían en el segundo piso del Museo, señaló "*No puedo decir que número de personas porque a eso de las cuatro y media de la tarde ya no pude volver a subir al segundo piso por cuanto no me permitieron la*

[99] Anexo 3 A, parte 2, Procuraduría, folios 80 al 82.
[100] C.O 44 Anexos Instrucción Fl 110
[101] Folio 112 ibídem.

entrada, precisamente por las personas que tenían allí como sospechosas […]"[102].

PEDRO LEÓN ACOSTA PALACIOS, también empleado del Museo, el 12 de diciembre de1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, precisó que "*[…] allí se sacaban los rehenes y los que decían o se decían ser sospechosos del M-19 se subían al segundo piso y los demás en el primer piso […] en la Sala de los Firmantes allí se instalaron unas mesas donde iban tomando apuntes iban entrando los que decían ser sospechosos del M-19. […]*".

Recuerda que las personas conducidas a la segunda planta de la casa del Florero "*Tal vez un total de los que llegaron más o menos fueron como unas siete u ocho personas, mujeres habían dos mujeres que decían ser, o escuchaba yo que decían ser guerrilleras …., de los que decían ser sospechosos recuerdo a un Abogado de nombre ORLANDO QUIJANO y a un joven que resultó ser empleado del Palacio de Justicia, porque habían dos en la Sala Nariño que era un hombre y una mujer, el hombre lo tenían allá contra un rincón y le iban a hablar y entonces conversaba la muchacha y entonces el hombre le decía que se callara, la mujer le decía al policía, al soldado o al del F-2 "Uds. Si pueden coger a una mujer del pelo", me parece que le dijo algo pero no recuerdo bien, el muchacho como lo tenían volteado contra la pared y le iban a preguntar y como la muchacha hablaba y él le decía que se callara entonces el que lo estaba cuidando le pegaba un puntapié muy feo, este resultó ser sobrino del gobernador del Atlántico o del Magdalena y que estudiaba en la Universidad […]*"[103].

En torno a este mismo punto la para entonces auxiliar judicial de la Corte Suprema de Justicia, AMANDA LEAL GALLEGO, en la Casa del Florero escuchó preguntar quién era una mujer que habían separado del grupo y la tenían en el segundo piso[104].

[102] C.O 44 Anexos Instrucción Fl 149
[103] C.O 44 Anexos Instrucción Fl 151
[104] Anexos Instrucción 67, folio 43.

BETY QUINTERO GONZALEZ, abogada que para cuando comenzó la toma se encontraba en la Secretaría del Consejo de Estado, recuerda haber visto en el segundo piso de la Casa del Florero a una de las mujeres que las intimidó con arma de fuego al darse inicio la operación subversiva, precisando que a la guerrillera la condujeron al segundo piso del museo, lo mismo que a la niña de los tintos, a quien describe como morenita, alta, delgada[105].

MARIA NELFI DIAZ vio que a su amiga MAGALIS la subieron al segundo piso del museo[106] y MAGALIS MARIA AREVALO MEJIA, para entonces trabajadora de servicios generales en el Palacio de Justicia, confirma que en la Casa del Florero la señalaron de ser guerrillera y la subieron al segundo piso donde la colocaron mirando contra la pared mientras pasaba gente a reconocerla. Asegura haber recibido malos tratos, especialmente de un "*militar del ejército alto, acuerpado blanco*"[107].

De la versión suministrada por esta deponente vale resaltar cómo, a más de señalar el trato recibido por ella en el Mueso del 20 de Julio, confirma la salida con vida de IRMA FRANCO PINEDA pero, igual, asegura que el jueves hacia las dos y treinta de la tarde, cuando salieron del baño donde los mantenían cautivos, vio salir a dos mujeres de la guerrilla y a dos guerrilleros heridos que se habían cambiado de ropa, observando cómo un soldado conducía "*al mono alto*" hacia la Casa del Florero[108], enfatizando que un guerrillero mono de ojos verdes, herido en la mano, vistiendo camiseta y jean,

[105] Declaraciones del 13 de febrero de 1986 ante el Juzgado 23 de Instrucción Criminal y del 10 de diciembre de 1986 ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar, vistas en el cuaderno original COFAC 1, folio 258 y ss., y Anexos Instrucción 44, folio 117.
[106] Anexo 3 A Parte 2 Procuraduria, folio 50, declaración del 6 de diciembre de 1985.
[107] Anexos Procuraduría 4. Folio 144. Declaración del 2 de diciembre de 1985. Su versión igual se encuentra a folio 112 del mismo cuaderno (29 de noviembre de 1985); en el Anexo de Instrucción 71, folio 80 al 105 (6 de diciembre de 1985); Anexos Instrucción 56, folio 83 (9 de diciembre de 1985); Anexos Procuraduría 11 (24 de noviembre de 1986); Anexos Procuraduría 3, folio 293 (20 de febrero de 1986); Original Instrucción 5, folio 1 (febrero 16 de 2006) y cuaderno de causa, declaración en audiencia del 24 de enero de 2012.
[108] Declaración del 29 de noviembre de 1985 ante la Procuraduría. Anexo Procuraduría 4, folio 116.

salió del Palacio de Justicia: "*yo lo vi atravesando la calle, la carrera 7ª, rumbo a la Casa del Florero, custodiado por un soldado*"[109].

HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, a la sazón citador de la Sala Constitucional, narra cómo, cuando salieron de Palacio, un soldado le dijo a otro "*este es uno de ellos*", por lo que lo encañonaron y empezaron a empujarlo, a tratarlo mal de palabra y le pegaron una patada. Así lo llevaron a la Casa del Florero donde se le arrimó un coronel con traje azul e insistiendo en que era guerrillero lo pusieron aparte con otros dos señores. Asegura que con ellos salió la guerrillera pecosita que habían subido al segundo piso y que a MAGALI, que servía tintos, también la cogieron como guerrillera[110].

Por su parte EDUARDO MATSON OSPINO, sobre el mismo punto que por ahora se examina, en declaración rendida el 5 de diciembre de 1985 ante la Procuraduría Regional de Cartagena, señaló: "*[…] ya para salir nos dijeron a YOLANDA, a un señor mono que decía ser Abogado de LEGIS y a mí que nos hiciéramos atrás de todos y entre ellos comentaron que nosotros tres éramos especiales, en ese momento fue cuando salimos del Palacio y un hombre del Ejercito o de la Policía no se bien, solo me di cuenta que estaba uniformado, me tomó del pelo por detrás y me llevó hasta la casa del Florero pasando en medio de una fila de militares que decían son guerrilleros y nos tiraban golpes con la culata del arma, …. Al entrarnos a la casa del Florero como decían que éramos guerrilleros y nos llevaran al segundo piso […] fue donde nos pegaron porque éramos guerrilleros, como nos tenían en cunclillas mirando a la pared y todo el que iba entrando nos pegaba patadas o nos cogían del pelo […]*"[111].

Y YOLANDA ERNESTINA SANTODOMINGO ALBERICCI el 2 de diciembre de 1985 ante la Procuraduría Regional de Santa Marta, contó cómo "*[…] refiriéndose a nosotros dos y un señor que decía ser*

[109] Anexos Procuraduría 3, folio 294, ampliación de declaración del 20 de febrero de 1986.
[110] Anexo 56 de Instrucción, declaración del 10 de diciembre de 1985 ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal, folios 118 y siguientes. En similar sentido declaró en audiencia pública el 24 de enero de 2012.
[111] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 164 y ss

Abogado de Legis, nos llevaron a la casa del Florero cogidos del pelo, allí después de subir las escaleras nos metieron a un cuarto a los tres […] como nos habían hecho sentar en el piso mirando hacia la pared, no pude ver bien todo lo que ocurría pero habían varios hombres de civil y de uniforme que entraban y salían, varios de ellos nos interrogaban sosteniendo que éramos guerrilleros y ví cuando le pagaban a Eduardo patadas por el estómago y los testículos […]"[112].

ORLANDO QUIJANO, abogado que el día de la toma guerrillera se encontraba en la sede de las Altas Cortes, vivió una situación similar. Cuando fue rescatado del primer piso de la edificación por miembros del ejército, fue llevado a la Casa del Florero, donde no le creyeron que era abogado, le quitaron sus papeles y lo subieron al segundo piso, al Salón Antonio Nariño. Vio allí más o menos seis personas más, reconociendo entre ellos a "*un negrito*", ORLANDO de la Sala Penal.[113]

Ahora, respecto de esas personas conducidas al Museo, consideradas sospechosas (s) o especiales, puestas a disposición del B-2 de la Brigada, había instrucciones específicas y determinantes, como se desprende de la comunicación radial sostenida entre el Jefe del Estado Mayor de la B-13 (LUIS CARLOS SADOVNIK) y el Jefe de Inteligencia de la Brigada, Coronel SANCHEZ RUBIANO:

"***ARCANO 5:*** *Eh, recomendación especial* ***mantener*** *eh los no heridos y los que aun no se han podido identificar plenamente eh aislados,* ***aislados****, eh la DINTE, lo va apoyar con material para su clasificación, cambio.*

ARCANO 2: *Recibido y QSL, creo que eh no hemos podido identificar sino una y ya está plenamente identificada por las personas acá, cambio.*

---

[112] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 170 y ss
[113] Original 5 de Instrucción, folio 165, declaración del 2 de junio de 2006.

ARCANO 5: *R, eh ya sabe* ***las instrucciones complementarias a estos son terminantes****, cambio.*

ARCANO 2: *Ah, recibido y QSL, recibido y QSL Arcano Cinco*"[114] (subrayamos).

Los expertos al analizar esta conversación sostenida entre ARCANO CINCO y ARCANO DOS concluyen que el primero ordena al segundo *"mantener privadas de la libertad y aisladas a las personas que aun no han sido identificadas, con el propósito de confrontar información que proporcionará la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE). ARCANO DOS, oficial de inteligencia de la Brigada Trece, confirma a ARCANO CINCO que su personal ya ha identificado a una persona, con base en información de inteligencia. Ante esto, ARCANO CINCO reitera que las instrucciones en estos casos son terminantes,* ***lo que evidenciaría una orden tácita de proceder de manera irregular****, ante esta simulación del lenguaje"*[115] (resaltamos).

Adicional a lo dicho, la retención, el hecho de haber sido sometidos a interrogatorio y el traslado a otros sitios de algunas de las personas consideradas sospechosas no fue documentado por los organismos de seguridad, como tampoco la forma y el momento de su puesta en libertad.

De manera, está demostrado que personas salidas vivas del Palacio de Justicia, bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado, reconocidas como integrantes del grupo guerrillero, como es el caso de IRMA FRANCO PINEDA, o consideradas sospechosas de hacer parte del M-19 o colaboradores del mismo, como sucedió con YOLANDA SANTODOMINGO ALBERICCI**,** EDUARDO MATSON OSPINO, ORLANDO ARRECHEA, ORLANDO QUIJANO, HECTOR DARIO CORREA TAMAYO y MAGALIS MARIA AREVALO MEJIA, fueron separadas del grupo de rescatados, enviadas al segundo

[114] CD Transcripciones Carpeta Jimeno RC5 L-B Pág. 9.
[115] Folio 18 cuaderno 102 Anexo Instrucción.

piso de la Casa del Florero, donde eran mantenidas aisladas para ser interrogadas bajo "*instrucciones complementarias*" terminantes.

Estas personas, salvo MAGALIS MARIA AREVALO MEJIA y HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, fueron posteriormente trasladadas a otros sitios bajo control de los organismos de seguridad y del ejército, y no se registró los lugares a donde fueron remitidos, como tampoco todos aparecen en las listas de personal rescatado del Palacio de Justicia, como se evidencia en el oficio 021814 BR13-B2-252, con el que el General ARIAS CABRALES, Comandante de la B-13, el 16 de noviembre de 1985 le informa al Juzgado Segundo Penal Especializado que seis personas remitidas y puestas a disposición de la XI Estación de Policía por parte de MIGUEL ANGEL CARDENAS OBANDO, oficial encargado de la Sección B-2 de la Brigada en ausencia del Teniente Coronel SANCHEZ RUBIANO, no aparecen relacionadas en la lista de rescatados del Palacio de Justicia y ciertamente ninguna de ellas figura en la lista que a ese oficio anexa el Comandante de la B-13 como personas rescatadas[116], como tampoco figuran IRMA FRANCO, YOLANDA SANTODOMINGO ALBERICCI**,** EDUARDO MATSON OSPINO, ORLANDO ARRECHEA, ORLANDO QUIJANO, MAGALIS MARIA AREVALO MEJIA ni CORREA TAMAYO.

Igual no aparecen los nombres de estas personas en el listado de personal rescatado que obra a folios 3 al 12 del cuaderno 4 de Anexos de la Instrucción y, como ocurre con el caso de IRMA FRANCO, aún se mantiene la negativa de parte de los organismos de seguridad del Estado de reconocer esa privación de la libertad o de informar sobre su paradero.

[116] Folios 104-110. Cuaderno No. 1 Anexo de la Instrucción.

Ciertamente es perfectamente legítimo, ante una situación como la presentada en el centro del Poder Judicial, adelantar las labores de investigación indispensables para distinguir entre los rehenes y los asaltantes, pero ello no justifica la omisión de registrar la retención de los sospechosos y documentar detalladamente y con claridad el tratamiento y curso que se le dio a cada uno de ellos. Menos omitir informar la suerte corrida por los retenidos o negar que la privación de la libertad ocurrió.

Una garantía elemental pero esencial para prevenir actuaciones ilegales o arbitrarias contra la libertad personal es precisamente el deber de registrar y documentar cabal y completamente toda detención, indicando con claridad las causas de la misma, la autoridad que la realiza, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la caractericen, así como el momento y las condiciones de la puesta en libertad del retenido o la constancia de ponerse a disposición del funcionario judicial competente.[117]

En el caso, algunas personas salidas con vida del Palacio de Justicia bajo custodia de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, puestos a disposición del B-2 de la Brigada 13 del Ejército Nacional en el museo Casa del Florero, fueron consideradas sospechosas o señaladas de pertenecer o colaborar con el grupo

[117] Para el doctrinante español JOAQUÍN GARCÍA MORILLO la problemática de la libertad personal alcanza su máxima intensidad cuando la privación, restricción o limitación tienen su origen en un agente del poder público distinto al judicial, dado que la detención legítima conlleva una serie de requisitos, entre ellos: (1) Que la privación se efectúe por una autoridad competente (2) Que se informen los motivos de la detención, (3) Que dichos motivos se hallen preestablecidos en la ley (4) Que se le informen los derechos al privado de la libertad y (5) Que el detenido sea puesto a órdenes judiciales para garantizar un proceso justo, factores que deben ser acatados tanto en tiempo de paz como de guerra, acorde con lo establecido por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. (GARCÍA MORILLO, Joaquín. El derecho a la libertad personal (Detención, privación y restricción de libertad). Ed. Universidad de Valencia. Valencia, España. 1995, p. 23).

insurgente M-19, retenidas para interrogatorio, trasladadas a otras dependencias militares y policiales, sin ser registradas debidamente sus detenciones ni darse cuenta del paradero o suerte corrida por ellas, ni dejarse a disposición de autoridad judicial competente. La ausencia de registro detallado sobre el tratamiento dado a esas personas permite advertir cómo se quiso ocultar información sobre ellas y sobre el procedimiento al que se les sometió.

Otro hecho de significativa importancia al momento de examinar el conjunto de la prueba es el relacionado con el traslado a instalaciones militares y de policía de personas salidas del Palacio de Justicia luego de ser puestas a disposición del B-2 de la Brigada 13 en la Casa del Florero y tenidas como sospechosas de hacer parte de la operación subversiva.

El mismo Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, en diligencia de indagatoria, reconoce que remitió a la Brigada seis personas para que allí se constatara su identidad, siendo recibidos por quien quedó encargado del B-2 y éste los remitió luego a la DIJIN. Asegura que él los mandó a la B13 para que allí se hiciera el oficio remisorio a la DIJIN.[118]

Las personas a las que se refiere SANCHEZ RUBIANO corresponden a PATRICIO TORRELEDO CHAPARRO, ORLANDO ARRECHEA OCORO, ORLANDO QUIJANO, LUIS ENRIQUE JIMENEZ, ANTONIO ARCE SAUL y SIMON ROGELIO PRADO RODRIGUEZ, quienes luego figuran remitidos a la XI Estación de Policía por MIGUEL ANGEL CARDENAS OBANDO, oficial

[118] Folio 36 cuaderno 7 de copias de la instrucción.

encargado de la Sección B-2 de la Brigada en ausencia del Teniente Coronel SANCHEZ RUBIANO.[119]

La justificación suministrada por el Coronel SANCHEZ RUBIANO para haber remitido a esas personas a la Brigada, según él para que allí se elaborara el oficio para enviarlos a la DIJIN, suena sin sentido y carente de lógica, si atendemos que en las instalaciones del museo había personal de la DIJIN y de otros organismos de seguridad, a quienes se les pudo haber entregado directamente el personal cuya verificación de identidad y antecedentes debiera hacer esa entidad. De manera, no se observa la necesidad de llevarlos hasta las dependencias de la B13 para simplemente elaborar un oficio remisorio para conducirlos luego a la DIJIN.

Eso indica más bien que la razón para trasladar personas sacadas del Palacio de Justicia a la Brigada y a otras dependencias militares o de policía obedecía a otros propósitos, específicamente para ser sometidas a interrogatorios, como se hace evidente a folios 33 y siguientes del cuaderno Anexo 4, donde figuran copias de diligencias de versión rendidas ante personal de la Brigada por JULIO ENRIQUE DIAZ SUAREZ, CARLOS JULIO ACOSTA FLORES, PEDRO ANTONIO NIETO VARGAS, ARISTOBULO ROZO, MANUEL JOSE CANTOR LEON, ANTONIO RUIZ y LUIS ALBERTO NOSSA, personas diferentes a las reconocidas por SANCHEZ RUBIANO como remitidas a la Brigada, lo que demuestra que el número de personas trasladadas de la Casa Museo 20 de Julio a las instalaciones de la B-13 fue mucho mayor a la aceptada por el procesado y para efectos diferentes a los aducidos por él.

---

[119] Oficio 0640 del 7 de noviembre de 1985. Anexo 1 folio 102. Folio 23 Cuaderno 24 Anexo de Instrucción.

Esa situación la dan a conocer MANUEL JOSE CANTOR LEON, CARLOS JULIO ACOSTA FLOREZ y PEDRO ANTONIO NIETO VARGAS, quienes pese a ser conductores al servicio de Magistrados de la Corte y del Consejo de Estado, fueron conducidos de la Casa del Florero a las dependencias de la Brigada XIII para ser interrogados.[120]

En el mismo sentido se tiene la versión de ORLANDO QUIJANO, quien cuenta cómo, luego de permanecer desde el 6 hasta el 7 de noviembre en la Casa del Florero un oficial ordenó que lo trasladaran al Cantón Norte, siendo llevado al batallón de Usaquén, a las caballerizas en la sétima con cien, donde lo sometieron a varios interrogatorios en un cuarto oscuro. Asegura que en la Brigada, si bien no lo torturaron físicamente, lo interrogaron con trato fuerte, diciéndole que era del M19, que "*cantara*" e informara cuánta gente se había metido al Palacio. Allí, dice, duró un día o día y medio, hasta cuando lo llevaron a la SIJIN, en la Avenida Caracas con Calle 6ª, donde permaneció aproximadamente un día, viendo en ese lugar, en los patios, al "negrito" ORLANDO.[121]

Cuenta que de la Casa del Florero lo sacaron rápido y lo metieron en una camioneta por la calle 11, pensando que lo llevaban para matarlo.

ORLANDO ARRECHEA OCORO, el 28 de noviembre de 1985 ante la Comisión Especial de la Procuraduría señaló que en el museo le "*[…] dijeron que [lo] dejaban retenido que por sospecha, luego de eso me hicieron varias preguntas y hasta el día siguiente que nos echaron para la Brigada y luego para la Estación Sexta para buscar antecedentes […] nos llevaron en una patrulla me parece que del ejercito […] eso fue a donde está el*

[120] Folio 198 Anexo 58; Folio 53 Anexo 71 Instrucción, y Folio 182 del mismo cuaderno.
[121] Original 5 de Instrucción, folios 165 y siguientes.

Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK […] únicamente nos tomaron las huellas […]"[122]

El traslado de personal rescatado del interior del Palacio de Justicia a las instalaciones de la Brigada 13 es igualmente corroborado por GUSTAVO MESA PEÑALOZA, conductor de la Cruz Roja, quien el 6 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante precisó que trasladó "*[…] conductores del Palacio de Justicia el día siete a las once de la mañana que a ellos los llevaron a la Casa del Florero y que habían estado por allá escondidos en el sótano del Palacio de Justicia, a ellos los recogí en la Casa del Florero para llevarlos a la Brigada de Institutos Militares, en Usaquén, un soldado iba con ellos, yo los dejé en la Brigada ese día siete como en eso de las once de la mañana, allá me tomaron a mi datos, mi nombre y todo, no me acuerdo bien en el momento si fueron cuatro o seis […] Eso fue por orden de un Teniente Coronel o Coronel DAZA, porque él tenía aquí un escudo con el apellido de él, en el pecho, no sé con qué fin, únicamente dijo: trasladar éste personal a la Brigada, allá los deje, me tomaron mis datos y salí […]*"[123].

Versión corroborada por MARÍA DE JESÚS TOVAR BERMEO, enfermera de la Cruz Roja, quien el mismo día ante la misma autoridad reconoció que "*[…] Al día siguiente, en la mañana aproximadamente a las diez u once de la mañana llevamos otra ambulancia de la Cruz Roja, conducida por el señor MESA a la Brigada de Institutos Militares, a cinco o seis señores que decían ser conductores de los Señores Magistrados […]*"[124].

Obsérvese, de otro lado, que en las instalaciones de la Escuela de Caballería, ubicada en esta ciudad aproximadamente en la carrera séptima con calle 106, en el sector de las caballerizas, para la época de los acontecimientos estudiados existía un sector conocido

[122] C.O 45 Anexo Instrucción Fl 226. C.O 49 Anexo Instrucción Fl 23.
[123] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 254
[124] C.O 7 Anexo Instrucción Fl 2

como área de coordinación reservada, a cargo del B-2 de la Decimo Tercera Brigada, donde además desarrollaban labores los miembros de la contraguerrilla y al que no tenía acceso ni el comandante de la Escuela de Caballería. Sitio donde se llevaban a cabo interrogatorios.

Así lo da a conocer el mismo Comandante de la ESCAB para la época, Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, quien reconoce que "…. *dentro de las instalaciones de la Escuela de Caballería y en el área general de las pesebreras existe y existía una edificación que no estaba bajo el control del comandante de la Escuela de Caballería sino de la Brigada 13 y particularmente correspondía al B–2 de la Brigada. No tenía el comandante de la Escuela ni los oficiales ni control, ni responsabilidad, ni acceso a ese lugar. Allí también operaban las fuerzas de contraguerrilla urbana que tampoco dependían del Comandante de la Escuela de Caballería sino de la Brigada*", y agrega que "*a ese lugar es posible que hayan sido conducidas personas en proceso de investigación*."[125]

Específicamente ante la pregunta de si en las instalaciones de la Escuela de Caballería se acostumbraba llevar a cabo interrogatorios por miembros de inteligencia, el Coronel PLAZAS VEGA responde que a partir de 1978 un sector de la Escuela de Caballería que funcionaba como *"enfermería de ganado caballar"* fue habilitada *"por disposición de la Brigada como área de interrogatorios y dependiendo directa, exclusiva y reservadamente"* de la misma Brigada. Aclara que por esta circunstancia es que se hace referencia a que en la Escuela de Caballería era en donde se llevaban a cabo los interrogatorios[126].

Esta información es corroborada por el General GILBERTO ROCHA AYALA en declaración rendida el 4 de agosto de 2009 dentro del

[125] Folio 186 a 187 Cuaderno 12 de Instrucción.
[126] Folio 91 Cuaderno 13 de Instrucción

proceso adelantado en contra del Coronel PLAZAS VEGA, en cuanto, frente al manejo del área de coordinación reservada, indica que fue utilizada por la XIII Brigada, enmarcada donde funcionaba la enfermería veterinaria. A esta área no tenían acceso los oficiales, solamente los orgánicos del B-2 de la XIII Brigada, lugar en el que se cumplían labores de inteligencia, como entrevistas con algunos detenidos.

Explica que funcionó aproximadamente desde 1978 y dependía directamente del B-2. Señala que las pesebreras quedaron bajo el control del B-2 y sabe que a esa zona llevaban detenidos pero nunca preguntó al respecto. Precisó que el Coordinador de la Zona Reservada era el Coronel SANCHEZ RUBIANO y el responsable del área era el Capitán ROBERTO VELEZ BEDOYA.

Cuestionado sobre la existencia de unas instalaciones *"reservadas"* en el interior de la Escuela de Caballería que dependían de manera directa del Comando de la Brigada, el General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES afirmó no tener conocimiento de la existencia de instalaciones de ese tipo, pero reconoce que si había unos alojamientos para una unidad de contraguerrillas urbanas que cumplía las funciones propias de su organización, aunque manifiesta que "*si había algún espacio con esas características de restringido o reservado debería estar bajo el control de los elementos de inteligencia de la Brigada XIII*", aclarando de todos modos que dependencias de ese tipo no hacen parte de la estructura orgánica de una Brigada.[127]

En sentido similar, el para ese entonces Capitán OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ explicó que "*Cuando había retenidos de*

[127] Folios 71 a 72 Cuaderno 19 de Instrucción.

cualquier naturaleza, no estoy hablando del Palacio de Justicia, cuando había retenidos de cualquier naturaleza, se llevaban a la Escuela de Caballería, porque allá existían las celdas o calabozos para tener a esos retenidos, en las instalaciones del Cuartel General no existía ninguna celda, ni calabozos, ni pieza de retenidos, por ejemplo, cuando yo hice una operación que era de mi blanco contra el grupo Ricardo Franco, los detenidos después de los allanamientos se llevaron a la Escuela de Caballería y como eso sí era de mi blanco, allí estuve yo, dirigiendo los interrogatorios"[128].

De manera, es claro que personas sacadas con vida del Palacio de Justicia por miembros del Ejército y de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado que participaron en la operación de retoma de la edificación fueron conducidas a la Casa del Florero, donde se les consideró sospechosos de pertenecer o ser colaboradores del grupo subversivo M-19; siendo remitidos a las instalaciones de la Decimo Tercera Brigada, específicamente algunos al sector de las caballerizas de la Escuela de Caballería, donde funcionaba un área reservada a cargo del B-2, destinada para llevar a cabo interrogatorios, y a otras dependencias militares o de policía en las que igual se les sometía a interrogatorios.

Así, no es de recibo el planteamiento en punto a que los traslados de personal rescatado del Palacio a dependencias militares o de policía obedecieran simple y llanamente a tareas de verificación de identidad y de cotejo de eventuales antecedentes.

La finalidad, como se hace palpable, era someter a esas personas a interrogatorios más profusos y "especializados", bajo un tratamiento más severo, agresivo y violento del que ya de por sí se les brindaba a los sospechosos o especiales en la Casa del Florero, donde a más de mantenerlos con los brazos en alto, mirando contra la pared,

[128] Folio 53 Cuaderno 12 de Instrucción.

llegaban a propinarles puntapiés y a maltratarlos halándoles del pelo y profiriendo en su contra expresiones soeces y amenazadoras.

Si eso era allí, frente a una gran cantidad de personas ajenas a los estamentos de inteligencia del Estado, civiles rescatados de las ruinas de Palacio, trabajadores del museo e incluso la posible presencia de periodistas que pudieran filtrase al interior de la Casa del Florero, como hay evidencia que en efecto ocurrió; es posible vislumbrar lo que acontecía en los interrogatorios adelantados en aquellas áreas reservadas de exclusiva responsabilidad del B-2 y organismos de inteligencia, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía.

Algo de lo que ocurrió en esos sitios lo dan a conocer EDUARDO MATSON OSPINO y YOLANDA ERNESTINA SANTODOMINGO ALBERICCI, respecto de quienes se tiene conocimiento también fueron considerados como sospechosos de hacer parte del grupo insurgente, subidos al segundo piso de la casa museo del 20 de Julio, trasladados a instalaciones de la Policía y del Ejército y por quienes el Estado Colombiano también reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilidad por acción por las torturas a que se les sometió por miembros de los cuerpos de seguridad oficiales[129].

EDUARDO MATSON OSPINO rindió declaración en varias oportunidades y en esencia siempre ha sostenido lo dicho el 5 de diciembre de 1985 ante la Procuraduría Regional de Cartagena, cuando señaló: "*[…] ya para salir [del Palacio de Justicia] nos dijeron a YOLANDA, a un señor mono que decía ser Abogado de LEGIS y a mí que nos hiciéramos atrás de todos y entre ellos comentaron que nosotros tres éramos*

[129] CIDH, sentencia del 14 de noviembre de 2014, caso RODRIGUEZ VERA y otros vs. Colombia.

especiales, en ese momento fue cuando salimos del Palacio y un hombre del Ejercito o de la Policía no se bien, solo me di cuenta que estaba uniformado, me tomó del pelo por detrás y me llevó hasta la casa del Florero pasando en medio de una fila de militares que decían son guerrilleros y nos tiraban golpes con la culata del arma, …. Al entrarnos a la casa del Florero como decían que éramos guerrilleros y nos llevaran al segundo piso […] fue donde nos pegaron porque éramos guerrilleros, como nos tenían en cunclillas mirando a la pared y todo el que iba entrando nos pegaba patadas o nos cogían del pelo […] después que entregué mi billetera me dijeron que cerrara los ojos y me hicieron caminar hacia el fondo del cuarto donde me hallaba, al fondo del pasadizo y allí arrodillado contra la pared y las manos en la nuca me interrogaron de nuevo, sobre mi familia y que hacía yo dentro del Palacio, en ese lugar también me golpeaban hombres según medio pude ver vestidos de civil, patadas, puños, me jalaban del pelo, que para verme la cara, me dejaron un rato tirado en el piso, al mismo tiempo yo sabía que en un cuarto contiguo YOLANDA gritaba: "Hay, (sic) no me peguen …" […] luego nos dijeron que nos paráramos y nos reunieron con YOLANDA en una Panel de la Policía y nos llevaron a la DIJIN, creo […] allí nos bajaron de la Panel y nos hicieron subir como tres pisos y allí nos hicieron en una oficina la prueba de guantelete o de la Parafina y recuerdo que uno de ellos decía que nos iban a cortar las manos y otro decía déjenmelos a mí que yo los hago hablar, les pego un pepaso (sic) […] entonces cuando nos bajaron y nos llevaron nuevamente a la Panel que nos habían traído allí y nos subieron junto con tres soldados del ejército vestidos de caqui, el oficial del ejército y un chofer y se dirigieron al centro de inteligencia o logística que queda a la salida para Villavicencio, en el barrio San Cristóbal Sur, de nombre CHARRY SOLANO […] , me parece, allí entramos y fuimos ascendiendo […] entonces se ordenó dar marcha atrás al vehículo y abrieron las puertas del mismo ordenando que nos tiráramos al suelo de la camioneta, entonces nos vendaron los ojos, nos interrogaron y luego nos bajaron de la Panel y nos esposaron y al parecer nos separaron y me dieron varias vueltas y me condujeron creo a una habitación y seguían interrogándome y confundiéndome con todo lo que les respondía […] me dijo además que si yo les decía que era guerrillero ellos nos ayudaban, pero que le dijera que donde estaba la gente […] Después de un rato entró alguien al cuarto y nos dijo que nos iban a soltar, que según entendí era el Coronel PINZON, nos pidieron que los entendiéramos que era cuestión de procedimiento militar […]"[130].

[130] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 164 y ss.

Por su parte YOLANDA ERNESTINA SANTODOMINGO ALBERICCI, el 2 de Diciembre de 1985 ante la Procuraduría Regional de Santa Marta, en versión igualmente sostenida en lo esencial a lo largo de sus diferentes apariciones procesales, contó cómo "*[…] refiriéndose a nosotros dos [habla de EDUARDO MATSON] y un señor que decía ser Abogado de Legis, nos llevaron a la casa del Florero cogidos del pelo, allí después de subir las escaleras nos metieron a un cuarto a los tres donde después apareció una señora que dijo conocer al Abogado de Legis y a él lo dejaron ir […] como nos habían hecho sentar en el piso mirando hacia la pared, no pude ver bien todo lo que ocurría pero habían varios hombres de civil y de uniforme que entraban y salían, varios de ellos nos interrogaban sosteniendo que éramos guerrilleros y ví cuando le pagaban a Eduardo patadas por el estómago y los testículos […] cuando salí a la calle de la casa del Florero, miré el reloj y eran creo las 8:00pm, me subieron a una camioneta panel de la Policía y luego subieron a Eduardo y nos llevaron según entiendo a la DIJIN […] de allí nos llevaron a un sitio por la salida a Villavicencio […] después a mi me esposaron y vendada me pusieron a oir un ruido de agua corriendo o cayendo, me pararon ahí y me dijeron que me iban a tirar a esa cascada desnuda para ese momento ya estaba como loca de los nervios […] después de un rato sentí la voz de Eduardo en otro cuarto y creo entraron dos hombres que me pidieron excusas, yo aún estada vendada y así me sacaron y nos dejaron con Eduardo en un lugar de la Carrera décima como a la 1:00 A.M. y nos dijeron que al día siguiente a las 10:00 A.M nos presentáramos con el Coronel Sánchez en la Brigada […]*"[131].

A más de lo sostenido por YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON sobre el trato recibido de parte de los organismos de seguridad del Estado como sospechosos de pertenecer al M19, el expediente brinda la declaración de JOSÉ VICENTE RUBIANO GALVIS, quien en noviembre de 1985 fue retenido por el ejército en la vía a Zipaquirá y muestra cómo las

[131] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 170 y ss

torturas fueron un medio no poco utilizado como instrumento para obtener información[132].

Da cuenta este deponente que *"tres o cuatro días antes de lo de Armero*" fue detenido en un retén militar en la vía a Zipaquirá, porque en el bus en el que viajaba los militares encontraron unas armas y lo tomaron como sospechoso a él, a su acompañante y a otro de los pasajeros del bus.

Afirma que fueron trasladados "*al lado de Usaquén a la Escuela Militar que queda en la 106"* y los "*metieron en unas caballerizas*" en donde fueron objeto de múltiples maltratos con el propósito que dijeran que eran *"subversivos"*, *"porque el día anterior había sido la toma del Palacio de Justicia y nos torturaron hasta que más pudieron…".* Posteriormente fue trasladado a la Cárcel Modelo, permaneciendo allí durante 15 días, al término de los cuales, con ayuda del Secretario de Obras Públicas CARLOS HERNÁN LÓPEZ, logró salir en libertad.[133]

El lugar a donde fue llevado junto con tres personas más era "*donde guardan los caballos. Es pequeño, como de 1,20 por dos metros de largo en donde meten un caballo, que queda sobre la séptima"*.

Al confrontársele con un Informe del Ejército (Anexo 91. Folio 224) donde se afirma que fue capturado el 7 de noviembre de 1985 a las 18:00 horas en un allanamiento en el municipio de Zipaquirá, manifiesta que tal informe no es veraz, como quiera fueron capturados "*entrando a las carboneras de Zipaquirá, no en un allanamiento sino dentro de una buseta*", aproximadamente a las nueve o nueve y media de la mañana, y como a las 6 y media o 7 de la noche estaban en las Caballerizas de la Escuela de Usaquén.

---

[132] Declaración del 15 de mayo de 2007. Folios 139-144. Cuaderno No. 15 de la Instrucción.
[133] Folios 139 a 140 Cuaderno 15 de Instrucción.

Recuerda que entre quienes lo detuvieron se encontraban un Capitán y un Teniente a quienes vio en el municipio de Zipaquirá, y respecto del Capitán dice que era "*un pastuso bajito*" pero no recuerda el nombre.

Señala que ingresaron por la carrera séptima en unos camiones hasta unas oficinas, aproximadamente a las 7 de la noche. Afirma que en esa oficina les pegaron mucho y que les "*dieron*" para que reconocieran ser guerrilleros. De ese lugar los pasaron al frente de las caballerizas y los encerraron hasta el día siguiente.

Al solicitarle aclarar en qué lugar se le sometió a los maltratos, las torturas y los choques eléctricos a los que hizo alusión, aclara que primero lo torturaron en la oficina a la cual ha hecho mención y después lo encerraron en las caballerizas. Respecto a los choques eléctricos manifiesta que se los infligieron tanto en Zipaquirá como en la Oficina de la Escuela de Usaquén.

Al preguntarle si durante el tiempo que permaneció en las Instalaciones de la Escuela de Usaquén conoció, vio o supo de personas que también hayan estado retenidas, diferentes al grupo de personas con las que ingresó, señala que la noche en la que estuvo retenido en la oficina en la cual recibió maltratos y torturas vio que llegaron aproximadamente tres o cuatro camiones con militares que "*venían gritando…que habían ganado la guerra*" y que de los camiones vio que bajaban a tres o cuatro muchachos –pero no alcanzó a "*divisar*" si eran hombres o mujeres– que "*llevaron para otro lado, no se para donde y después al rato, a nosotros nos subieron a la caballeriza y después ellos siguieron gritando otra vez por allá*". Respecto a las personas que afirma que los militares bajaron de los camiones,

señala que no supo de quienes se trataba o quienes eran, porque él también estaba detenido y no supo que hicieron con ellas, sólo que las llevaron a otro sitio[134].

De esa manera está demostrado, incluso en parte con reconocimiento de responsabilidad por el Estado colombiano ante la Justicia Internacional, que varias personas rescatadas del Palacio de Justicia, consideradas sospechosas, entre ellas IRMA FRANCO PINEDA, YOLANDA SANTODOMINGO ALBERICCI y EDUARDO MATSON OSPINO fueron trasladados a instalaciones militares y de policía por ser considerados sospechosos; estos últimos fueron sometidos a torturas y en el caso de FRANCO PINEDA posteriormente fue desaparecida.

Asimismo, ORLANDO ARRECHEA y ORLANDO QUIJANO también fueron trasladados a la Escuela de Caballería y luego a la Estación Sexta de la Policía, siendo sometidos a interrogatorios y a tratos crueles e inhumanos, como lo da a conocer QUIJANO en sus versiones.

En la ESCAB funcionaba un área reservada de responsabilidad del B-2 de la Brigada 13, ubicada en las caballerizas, sitio donde efectivamente se sometía a interrogatorio y torturas a personas retenidas bajo sospecha de pertenecer a grupos subversivos, tal y como ocurrió con JOSÉ VICENTE RUBIANO GALVIS.

Permite concluir lo anterior que efectivamente se trasladaron sobrevivientes del Palacio de Justicia considerados sospechosos a guarniciones militares, entre ellas a las instalaciones de la Escuela de Caballería, donde funcionaba un área reservada a cargo del B-2,

[134] Declaración del 22 de agosto de 2007. (Folios 92-95. Cuaderno No. 20 de la Instrucción).

destinada para interrogatorios; algunos fueron sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos.

En este contexto cobran relevancia las cuestionadas manifestaciones vertidas por EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con presencia del representante del Ministerio Público, en tanto aseguró que como integrante de un grupo especial de la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, el 6 de noviembre de 1985 fueron traslados en apoyo de los operativos de recuperación del edificio del Palacio de Justicia.

Asegura que el segundo día, esto es, el 7 de noviembre, en un primer viaje llevaron a la Escuela de Caballería una señora con falda a cuadros y a un hombre vestido con buso, no recuerda si era blanco o beige, a quienes metieron a las pesebreras, quedando él como custodio de esas personas, con la orden de: "*a esos perros ni agua*".

Cuenta que pasadas las 4:30 de la tarde de ese mismo día llevaron otras tres personas, cree que eran otra mujer y dos hombres, y los ubicaron aislados en pesebreras diferentes, cada uno en una.

Asegura haberse dado cuenta de las torturas y vejámenes a los que fueron sometidas esas personas, a quienes "*…. colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. ….. [a] la primera que se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie*".

Narra las torturas infligidas al hombre que señaló vestido con un buso, a quien escuchó pedir "*… que no le hiciera eso que él era de la cafetería*". Asegura que "*Como a los 10 o 15 minutos sale Achury y comenta con Gamboa 'curso, curso, se me fue este hijueputa', fue cuando [se] dio cuenta que se había muerto*".

Describe a esa persona como de cabello bien cuidado, peinado por la mitad, de cara no muy robusta y tampoco era muy acuerpado. Tenía un bigote que no era "*… estilo Pancho Villa, pero sí un bozo*" que califica de "*quiebra novias*".

Señaló que también una mujer murió mientras era torturada y los cuerpos fueron enterrados en un hueco donde había enterrado un caballo[135].

Esta declaración ha sido fuertemente cuestionada por cuanto en mayo de 2011 VILLAMIZAR ESPINEL se presentó ante la Procuraduría solicitando protección y negando ser quien rindió esa versión, de donde ha surgido la especie de una supuesta suplantación encaminada a perjudicar a los militares involucrados en los diferentes procesos seguidos por los hechos del Palacio de Justicia.

No obstante, es significativo que la versión detallada y descarnadamente expuesta por quien se presentó ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema compagine con los otros elementos de juicio relacionados a lo largo de estas consideraciones que dan cuenta de las irregularidades cometidas por las fuerzas del Estado en el manejo de las personas consideradas sospechosas de ser miembros o colaboradores del grupo insurgente M-19, incluso

[135] Folio 248 al 251 original 19 de instrucción.

concuerde con la versión de otros ex miembros de las fuerzas militares que dan cuenta del traslado de personas rescatadas del Palacio de Justicia a las instalaciones de la Escuela de Caballería y de cómo en sus pesebreras o caballerizas eran sometidas a torturas, como ocurre con la también criticada versión de TIRSO SAENZ ACERO[136].

Otro elemento de juicio que tiende a dar fiabilidad a la versión de VILLAMIZAR ESPINEL es el hecho de encontrar en el libro de comandancia de guardia BASER de la Brigada 13 una anotación correspondiente a las 18:30 horas del 7 de noviembre de 1985, en la que se lee: "*El señor CT Diaz S-2 de la ESINF trae cinco detenidos que quedan a órdenes del B-2*"[137].

Igual no puede pasarse desapercibido que la descripción suministrada por este deponente del hombre torturado y muerto en las instalaciones de la Escuela de Caballería, a quien escuchó afirmar ser de la cafetería, se ajusta a la descripción que se conoce de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA.

Ahora, como se dijo al comenzar estas consideraciones, con las pruebas grafológicas practicadas dentro de este expediente en la audiencia pública, quedó acreditado que quien rindió la declaración en las instalaciones de la Escuela de Caballería cuando la Fiscalía se ocupaba en adelantar labores de prospección, efectivamente fue

---

[136] TIRSO SÁENZ ACERO, para 1985 cabo segundo del Ejército, declaró en términos generales que como tenía asignado un tanque, por una dispensa especial por la falta de un conductor, pese a estar detenido para ese entones en las instalaciones de la ESCAB, participó en la operación de recuperación del Palacio de Justicia y entre lo que puede dar fe asegura haber visto a 5 ó 6 personas, cuando eran bajadas de un tanque y metidas a las caballerizas. Señaló que luego un cabo le comentó que a esas personas las tuvieron como 15 días y que las interrogaron y a cada una la tenían en una caballeriza, aislada y encapuchada. Que se les había pasado la mano con uno de los que estaban interrogando y se les había muerto por lo que lo llevaron para enterrarlo y posteriormente sacaron a otros dos dentro del baúl de un carro, quedando dos personas que también murieron.

[137] Folio 126 Cuaderno 64 Anexo de Instrucción.

EDAGAR VILLAMIZAR ESPINEL y no es cierta la argumentada suplantación.

Esto fue corroborado con el reconocimiento fotográfico realizado el 14 de marzo de 2012 en el curso de la audiencia pública por el Investigador Criminalístico VII del CTI PABLO ENRIQUE VASQUEZ HERRERA, funcionario a través de quien se contactó VILLAMIZAR con la Fiscalía, tal como lo expone el investigador en declaración ante este Despacho y lo pone de presente en sus informes 353823 del 25 de julio de 2007 y 365603 del 11 de octubre de 2007.[138]

Investigador que igual da cuenta bajo juramento cómo el 1° de agosto de 2007 finalmente se encontraron con VILLAMIZAR, a eso de las dos o tres de la tarde, en el Teatro Patria para luego ingresar a la sede de la ESCAB, donde se tomó la cuestionada declaración.

Que casi cuatro años después de rendir esa deposición VILLAMIZAR ESPINEL se retractara e incluso negara ser el expositor, se explica con lo informado por el investigador VASQUEZ HERRERA desde octubre de 2007, cuando en cumplimiento de misión de trabajo 4928 señala: "*Con relación a la ubicación del señor EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, para continuar con su declaración el día 11 de octubre del año en curso, me permito informar que tuve comunicación telefónica con el mencionado y manifestó que no quiere presentarse a extender la declaración, que venía realizando con el Despacho por las siguientes circunstancias:*

Se encuentra muy preocupado y angustiado, porque los medios de comunicación escritos y hablados, en días pasados dieron a conocer detalles de su declaración que había dado a la Fiscalía, dándose a conocer al público su nombre completo y apellido, al igual que gran parte de lo consignado dentro de la misma, por otra parte dieron información relacionada con su hoja de vida que reposa en el Archivo General del Ministerio de Defensa. Manifestó que él no

[138] Folios 179 original instrucción 19 y folio 217 original instrucción 23.

autorizó a nadie para sacar dichas notas periodísticas, las cuales trascienden en su entorno, vida familiar y económico. Aunado al temor que pueda ocurrirle algo a su vida y a las de sus familiares"[139].

Mismas razones aducidas por VILLAMIZAR ESPINEL a la Procuraduría en mayo de 2011 para solicitar protección y negar ser el autor de la mentada declaración.

En el mismo sentido, HÉCTOR CALDERÓN PARRA, Investigador Criminalístico del CTI, en declaración que aparece en disco de sesión de audiencia N° 37, en el cuaderno original 5 de la causa, a folio 136, señaló que conoció a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL cuando compartieron espacio académico en la Fundación educativa Lombroso. Da cuenta de cómo VILLAMIZAR ESPINEL aseguraba tener información sobre los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia y la ubicación de unas fosas hacia los lados de las caballerizas de la Escuela de Caballería, teniendo entendido que finalmente rindió una declaración, a raíz de la cual la actitud de EDGAR VILLAMIZAR cambió aduciendo que lo habían "*quemado*" y le habían arruinado toda la vida porque había salido en prensa y televisión, comenzando a sufrir dificultades económicas, a andar "*caracterizado*", esto es, disfrazado, a desaparecer periódicamente, hasta cuando se perdió totalmente.

De otro lado, recordemos que VILLAMIZAR ESPINEL, como él mismo lo reconoció ante la Procuraduría y este Despacho y está acreditado con su hoja de vida militar, para la época de los hechos del Palacio de Justicia era orgánico de la Séptima Brigada, y en el expediente hay evidencia clara en cuanto a que, para el operativo de recuperación, la Brigada 13 recibió apoyo, entre otras, de tropas de la Séptima Brigada, tal y como se aprecia en la conversación

[139] Folios 218 y 219 original instrucción 23.

radial sostenida entre el General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, Arcano 6, y el Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK, Arcano 5:

"*Arcano 5: vamos a tener las siguientes agregaciones, Compañía de Policía Militar de la Buque Ratón uno, cambio.*
Arcano 6: Eh ¿de la Policía Militar de que Buque Ratón?, cambio.
Arcano 5: De la primera, cambio.
Arcano 6: QSL.
Arcano 5: Dos comparsas de la Buque Ratón Siete, cambio.
Arcano 6: QSL".

Sobre el particular, los peritos JHON EDWARD PEÑA y HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, señalaron que las expresiones Buque Ratón 1 y Buque Ratón 7 hacen referencia a las Brigadas 1 y 7, con jurisdicción militar en Cundinamarca, Boyacá y Meta, "*quienes al parecer, enviaron apoyo a la Brigada 13 durante el operativo para patrullar la ciudad de Bogotá, para realizar controles urbanos en caso de demostraciones de mayor envergadura por parte de cómplices de los atacantes del Palacio*"[140].

Por su parte, el General RAFAEL SAMUDIO MOLINA, para la época Comandante del Ejército, en sesión de audiencia del 30 de noviembre de 2009 ante el Juzgado 51 Penal del Circuito manifestó sobre el mismo punto que formalmente no se decretó por parte del Ejército la agregación del COICI a la Brigada XIII, como si hubo agregaciones de la Escuela de Suboficiales de Melgar, una compañía de Villavicencio y una compañía de Tunja.

En esas condiciones, a juicio de este Despacho, ha quedado acreditado sin hesitación que EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL sí fue

[140] Folio 11 Anexo Instrucción 102.

quien declaró ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2007 en las instalaciones de la ESCAB; que su retractación y negativa a reconocerse como autor de esa declaración está suficiente y claramente explicada en los temores por su seguridad y la de su familia, y que sus dichos, al ser congruentes y coincidentes con otros elementos de juicio probados dentro de la actuación, suministran información confiable y creíble sobre la suerte corrida por varias personas sacadas del Palacio de Justicia en el operativo de recuperación de la edificación por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes fueron conducidas a las caballerizas de la Escuela de Caballería, torturadas y algunas desaparecidas.

En este punto vale mencionar que en el expediente obra un documento suscrito por RICARDO GÁMEZ MAZUERA, dirigido a la Procuraduría General de la Nación, presentado ante el Notario 17 del Círculo de Bogotá el 1° de agosto de 1989, en el que, aparte de dar a conocer su historial como miembro de la Policía Nacional desde cuando ingresó a la Escuela de Carabineros en la ciudad de Villavicencio, asegura haber participado en labores de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, por lo que tuvo conocimiento de las torturas sufridas por CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA[141], de quien dice *"salió del Palacio y fue llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel ALFONSO PLAZAS VEGA, quien dio las siguientes instrucciones 'me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe'...*",

Las torturas buscaban que RODRÍGUEZ VERA aceptara ser colaborador del M-19 en la toma del Palacio de Justicia, pues se

[141] Folio 111 del Original 1 de Instrucción.

manejaba la hipótesis de que *"en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto*"*.*

Afirma que CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ durante cuatro días fue sometido a la privación de alimentos y bebidas, siendo colgado de sus pulgares, golpeado con violencia en sus testículos y arrancadas sus uñas, falleciendo como consecuencia de esos tratos y al parecer fue inhumado *"en secreto, probablemente 'en los polvorines', cerca del sitio donde se hacen prácticas de polígono, en la misma escuela*".

Dichos que en términos generales y en esencia concuerdan con lo sostenido por los otros ex miembros de las fuerzas del orden como EDGAR VILLAMIZAR y TIRSO ARMANDO SAENZ ACERO, y encajan con los restantes elementos de juicio acopiados a lo largo de la investigación que efectivamente dan cuenta del tratamiento dado por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado a los sospechosos de hacer parte o ser colaboradores del M-19.

Sobre la existencia de RICARDO GAMEZ MAZUERA hay suficientes pruebas en el expediente, como su tarjeta decadactilar vista a folio 56 del anexo de instrucción 41; en diligencia de inspección realizada al Archivo General de la Policía Nacional se obtuvo copias de algunos rollos microfilmados con información relacionada con miembros de la fuerza pública, entre ellos GAMEZ MAZUERA[142]; a folio 187 del cuaderno anexo 88 de la instrucción obra un certificado expedido por la Secretaría General de la Policía Nacional en el que hace constar que RICARDO GÁMEZ MAZUERA estuvo vinculado con la Institución mientras duró su servicio militar obligatorio; la hoja de vida de GÁMEZ MAZUERA obra a folios 9-29 del mismo cuaderno. Igualmente obra un informe de fijación

[142] Folio 5 al 8 Anexo Instrucción 88. Diligencia del 25 de enero de 2007.

fotográfica para identificación de la apariencia facial y proyección de envejecimiento de GAMEZ MAZUERA[143].

Adicional a lo anterior, se tiene la declaración de YESID RAMIRO PADILLA GONZALEZ, empleado de la Notaría 17 de Bogotá, en la que MAZUERA autenticó la firma impuesta en el documento remitido a la Procuraduría General de la Nación, quien al exhibírsele el escrito reconoce que las firmas y los sellos son originales[144].

En esas condiciones, no es dable considerar que el documento sea un anónimo, y si bien su versión no pudo ser recibida dentro del proceso con las formalidades de un testimonio, hay elementos de juicio que no permiten desecharlo y privarlo de credibilidad sin mayor análisis, no sólo por la coincidencia sustancial advertida arriba.

No obstante la Procuraduría Delegada ante las Fuerzas Militares asegure que luego de adelantar las averiguaciones del caso logró desmentir todas y cada una de las afirmaciones realizadas por GAMEZ MAZUERA[145] e incluso que al cotejar su versión con el protocolo de necropsia 3821 y el acta de levantamiento de RUTH MARIELA ZULUAGA DE CORREA se desvanezcan sus afirmaciones en cuanto a las supuestas torturas y muerte de esta señora, y sus manifestaciones respecto a la supuesta salida con vida de ALMARALES[146] no coincida con las versiones de los últimos liberados que dan cuenta que el guerrillero quedó en el baño cuando en horas de la tarde del 7 permitió la salida de los rehenes; llama la

[143] Folio 83 y siguientes ibídem.
[144] Declaración del 22 de agosto de 1989 ante la Viceprocuraduría General de la Nación. Folio 86 Anexo 88 Instrucción.
[145] Folio 256 Original 4 de Instrucción.
[146] Asegura GAMEZ MAZUERA que ALMARALES fue sacado vivo de Palacio el 7 de noviembre en la mañana, herido en una pierna, y conducido en ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico – Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia Charry Solano, donde fue asesinado y luego vuelto a llevar a Palacio para ser sacado entre los muertos.

atención que a folio 259 del cuaderno original 4 de instrucción hay información procedente del hospital Simón Bolívar en cuanto a que allí sí hay historia clínica de de RUTH MARIELA ZULUAGA DE CORREA y que hay una lista de quemados llevados en noviembre de 1985, donde figura dicha señora.

De manera, si bien se acredita que el cuerpo de la señora ZULUAGA DE CORREA fue levantado en las instalaciones del Palacio de Justicia, lo que implicaría en lógica que su deceso se produjo durante el operativo de retoma, también queda palpable que alguien salió con su identidad y fue trasladada al hospital Simón Bolívar con quemaduras, y puede inferirse, entonces, que es a esa persona a la que hace referencia RICARDO GAMEZ MAZUERA en su escrito.

De otro lado, a folio 65 del cuaderno 6 de Instrucción aparece la declaración del Dr. CRISOBAL SASTOQUE MELANI, médico al que hace referencia GAMEZ MAZUERA como el que atendió a RUTH MARIELA ZULUAGA en el hospital Simón Bolívar.

Si bien en su declaración, rendida en agosto de 2006, esto es, casi 21 años después de los hechos, niega saber de remisiones de personas liberadas del Palacio de Justicia al hospital Simón Bolívar en noviembre de 1985, indicando que "*De pronto puede suceder que hubiera llegado paciente de manera particular y se hubiere registrado*", lo interesante es que reconoce ser médico cirujano plástico, con postgrado en quemaduras, y para 1985 ejercía su profesión como, entre otros cargos, Director del Programa de Atención Integral del Paciente Quemado, con sede en el Hospital Simón Bolívar, donde pasaba la mayor parte del tiempo.

Frente a esto cabe la pregunta: se tomó la molestia GAMEZ MAZUERA, en agosto de 1989, casi cuatro años después de ocurridos los hechos, de elaborar con tanto detalle un montaje para desacreditar a los miembros del Ejército Nacional que participaron en la recuperación del edificio judicial, al punto de averiguar que en efecto para noviembre de 1985 trabajaba en el Simón Bolívar un doctor SASTOQUE MELANI, para relacionarlo con una persona que en efecto aparece en los listados de quemados llegados a la institución en noviembre de ese año?

Si ello fue así, cómo se explica no haber previsto inconsistencias como la referida a la salida de ANDRES ALMARALES, mientras sí se busca cubrir un detalle marginal como que el Dr. SASTOQUE MELANI atendió a quien habría ingresado al hospital Simón Bolívar como RUTH MARIELA ZULUAGA.

Detalles tales no permiten descalificar de tajo la versión de GAMEZ MAZUERA, como lo hizo la Procuraduría delegada ante las Fuerzas Militares, y por el contrario le asignan credibilidad al mostrarse ajena a una elaborada y ponderada preparación y sí como el reflejo de la percepción propia de unos acontecimientos.

Ahora, para noviembre de 1985 GÁMEZ MAZUERA oficialmente no hacía parte de ningún organismo de seguridad del Estado, pero eso no implica per se que su versión sea mentirosa o inaceptable, pues él mismo explica haber ejercido labores de inteligencia y no puede desconocerse que esas tareas no estaban restringidas a personal uniformado o legal y oficialmente adscritas a algún organismo de seguridad, y por su propia naturaleza muchas veces eran desarrolladas de civil e incluso utilizando colaboradores, civiles, personas no incluidas en nóminas oficiales que en aparente ejercicio de labores cuotidianas recopilaban información y prestaban otras

ayudas a los diferentes estamentos castrenses y de policía, tal y como se evidencia en las declaraciones de BERNARDO GARZÓN GARZÓN y MARLIO QUINTERO PASTRANA, persona esta ultima que como conductor de taxi prestaba servicios al COICI recolectando información y realizando otras tareas.

Por manera, tampoco por este aspecto es dable demeritar sin más fórmula de juicio la información suministrada por GAMEZ MAZUERA.

Así, de cara a esclarecer lo sucedido con el grupo de personas desaparecidas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia no se puede simplemente ignorar la información suministrada por YOLANDA SANTODOMINGO, EDUARDO MATSON OSPINO, BERNARDO GARZON, JOSÉ VICENTE RUBIANO GALVIS, EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, TIRSO SAENZ y RICARDO GAMEZ MAZUERA; máxime cuando para la época no eran inusuales esas prácticas desconocedoras de los derechos humanos, a las que acudían como método de "investigación e inteligencia" miembros de los organismos de seguridad del Estado.

Muestra de ello son los fallos del Consejo de Estado que para entonces fueron proferidos condenando a la Nación por casos de tortura y que originaron amenazas e intimidaciones a varios Magistrados, como ocurrió por la *"decisión del negocio relacionado con las torturas en el proceso seguido por OLGA LÓPEZ en contra de la Nación*", según se desprende de declaraciones como las de los doctores REINALDO ARCINIEGAS BAEDECKER, MARIO ENRIQUE PÉREZ VELASCO y CARLOS BETANCOURT JARAMILLO[147].

[147] La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró al Estado *"administrativamente responsable de los perjuicios causados al doctor Iván López Botero, a la doctora Olga López Jaramillo de Roldán y a la menor Olga Helena Roldán*

En ese escenario no es extraño que en desarrollo de la operación de retoma del Palacio de Justicia se hayan dado desapariciones forzadas de personas (caso comprobado de IRMA FRANCO); que aún hoy día se ignore el paradero de varias personas que estuvieron al interior de la edificación durante los trágicos acontecimientos (de quienes se dice salieron vivos bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado); que a pesar de existir evidencia de la salida con vida y la aprehensión de otros miembros del M-19 no se tenga conocimiento de haberse judicializado persona alguna como participante del atentado contra la sede judicial, y que, por el contrario, haya versiones dando cuenta del ajusticiamiento de guerrilleros heridos que ya habían sido puestos fuera de combate, en un claro desconocimiento del derecho internacional humanitario.

Y es que en punto a esto último no es insustancial recordar que, según lo expuesto por MAGALIS MARIA AREVALO MEJIA, vio salir del Palacio de Justicia en el grupo de liberados en las postrimerías del operativo de recuperación a dos guerrilleros heridos que se habían cambiado de ropa, aseverando que un soldado conducía "*al mono alto*" hacia la Casa del Florero[148]. Sobre este episodio precisa que un guerrillero mono de ojos verdes, herido en la mano, vistiendo camiseta y jean, salió del Palacio de Justicia: "*yo lo vi atravesando la calle, la carrera 7ª, rumbo a la Casa del Florero, custodiado por un soldado*"[149].

Recordemos que lo sostenido por esta testigo en muchos aspectos está refrendado por otros deponentes y que ella tuvo contacto

---

López como consecuencia de las torturas morales a que ellos fueron sometidos y de las lesiones psíquicas y corporales causadas a la doctora Olga López Jaramillo de Roldán (…), en las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares (BIM), y otras dependencias oficiales" Expediente 3507 del 27 de junio de 1985, demandante OLGA LÓPEZ JARAMILLO y otros contra el Estado colombiano,

[148] Declaración del 29 de noviembre de 1985 ante la Procuraduría. Anexo Procuraduría 4, folio 116.

[149] Anexos Procuraduría 3, folio 294, ampliación de declaración del 20 de febrero de 1986.

bastante directo con los guerrilleros al interior del baño donde los mantuvieron retenidos hasta su liberación, al punto de ser cuestionada por la colaboración que les prestó para atender las heridas de algunos de ellos, situación que pudo incidir en su catalogación inicial como sospechosa; razones por las cuales es dable asignarle credibilidad a su dicho en cuanto afirma haber visto salir con vida de la edificación retomada a por lo menos un guerrillero herido, diferente a IRMA FRANCO, custodiado por un efectivo del ejército con rumbo a la Casa del Florero, y, entonces, llama la atención no sólo la inexistencia de reporte oficial de esa novedad, sino el hecho de no haber sido judicializada, puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, ninguna persona imputada de pertenecer al grupo subversivo.

Esa ausencia de capturados judicializados y de sobrevivientes del grupo subversivo, bien se explica en el tratamiento dado a los considerados sospechosos y en lo narrado por testigos como ANA LUCÍA LIMAS MONTAÑA, para la época de los hechos empleada de la empresa Serviaseo Ltda., quien manifiesta que cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia, junto con una compañera se refugiaron en un cuarto de servicio, a donde llegaron dos guerrilleros mal heridos, a quienes personal del Ejército, una vez establecieron el control de ese sector, asesinaron.

Sobre el particular señala la declarante que *"…entonces bajaron unos soldados y golpearon en el cuarto pero ya más tarde y preguntaron que si había gente… repitieron otra vez y a mí me amenazaron los guerrilleros, dijeron que no fuéramos a hablar porque aquí nos matan entonces uno de ellos empezó a regañar al compañero por haberse quejado y los soldados decían "sino abren la puerta ponemos una granada para que explote esto" y yo pensé que a patadas no me mataban los guerrilleros por haber abierto la puerta y de primera salió la compañera y el Ejército nos preguntó que quiénes éramos, entonces uno de los*

guerrilleros dijo que éramos las señoras del tinto y nosotros le dijimos que no porque éramos del aseo y a mi compañera la hicieron salir con las manos arriba y luego salí yo y me preguntaron que quién era y dije que una trabajadora de ahí y nos preguntaron que quienes eran los muchachos que estaban adentro y entonces el Ejército nos amenazó que teníamos que decir la verdad y si no nos mataban, ….., entonces ellos cogieron y nos subieron por las escaleras, tres escalones no más del tercer piso y nosotros volvimos y les repetimos que eran guerrilleros y dijeron ellos o sea los soldados les dijeron a los dos muchachos que se pararan, les dijeron tres veces que se pararan y uno de ellos el que estaba herido en las espaldas le dijo "compa yo no me puedo parar ayúdeme" y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros y en ese momento ellos gritaron ya para morir…"[150].

Versión confirmada por MARÍA MERCEDES AYALA LESMES (también empleada de la empresa Serviaseo Ltda.), en cuanto a que ambas se refugiaron en un cuarto de aseo ubicado en uno de los pisos superiores del Palacio de Justicia a donde llegaron dos guerrilleros mal heridos a quienes soldados del Ejército asesinaron a "*quema ropa*"[151].

Muestra esto la actitud asumida por los miembros de los cuerpos armados del Estado respecto de quienes eran identificados como integrantes del grupo insurgente y explica el tratamiento especial dado a los considerados sospechosos de ser miembros o colaboradores del M-19.

---

[150] Declaración del 3 de diciembre de 1985 ante la Comisión Especial de Investigación de la Procuraduría General de la Nación. (Folios 165-173. Anexo 4 – Libro 4. Investigación Procuraduría. I.P. 070). Igualmente obra a folios 170-178. Cuaderno Anexo No. 3. Investigación Procuraduría. I.P. 070).

[151] Declaración del 6 de diciembre de 1985 ante la Comisión Especial de Investigación de la Procuraduría General de la Nación. (Folios 242-248. Anexo 4 – Libro 4. Investigación Procuraduría. I.P. 070). Igualmente obra a Folios 19-23. Cuaderno Anexo No. 3A. Investigación Procuraduría. I.P. 070. Diligencia de Ampliación de Declaración del 11 de diciembre de 1985 ante la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación. (Folios 281-285. Anexo 4 – Libro 4. Investigación Procuraduría. I.P. 070).

Entre estos últimos indiscutiblemente se encontraban los trabajadores de la cafetería, respecto de quienes inteligencia militar tenía sospechas de ser auxiliadores del grupo insurgente. Así lo da a conocer GAMEZ MAZUERA cuando precisó que las torturas infligidas buscaban que RODRÍGUEZ VERA aceptara ser colaborador del M-19 en la toma del Palacio de Justicia, pues se manejaba la hipótesis de que *"en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto*"*.*

El mismo Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO reafirma esa apreciación de RICARDO GAMEZ en una de sus primeras versiones, al señalar ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante el 17 de enero de 1986 que "*… más de una persona informó que esa cafetería era el centro de abastecimiento de este grupo subversivo porque no se puede pensar que todo ese material y esa munición incautada haya entrado ese mismo día. Además de eso que explicación podría haber de que exactamente los trabajadores de esa cafetería no se hayan encontrado ninguno ni siquiera incinerados, ni tampoco sus documentos ni sus pertenencias, dónde están?*"[152].

Para el coronel SANCHEZ fue extraño que en un panfleto el M-19 hiciera mención a sus muertos y a la desaparición de los miembros de la cafetería, y no a la desaparición de otras personas, lo que, por intuición, le permitía pensar que algo tenían que ver con la subversión. Además, según él, otras personas habían informado que días anteriores habían observado el ingreso de bultos a la cafetería y que varios trabajadores "*habían sido contratados recientemente y eran muy jóvenes*".

Lo anterior da credibilidad a lo sostenido por los padres de LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA en cuanto a que se entrevistaron con

[152] C.O. 30 Anexo Fl 33 y ss . C.O. 66 Anexo Fl 235 y ss.

"*… el Comandante del B-2 del Ejército Coronel Sánchez*", quien les manifestó que "….*los nueve empleados de la cafetería todos son del M-19, se fueron cogieron el monte y ahora dicen que nosotros los tenemos*"[153].

Conversación sobre la que igual da cuenta JAIRO ARIAS MÉNDEZ, esposo de LUCY AMPARO OVIEDO, pues refiriéndose al Coronel SÁNCHEZ RUBIANO precisó cómo "… *el tipo charló arto rato con nosotros, después él manifestó que los de la cafetería, los 9 de la cafetería estaban desaparecidos porque se habían ido para el monte y que ellos … habían sido los encargados de haber entrado uniformes y que comida y municiones y algunas armas …*"[154].

Esas manifestaciones cobran mayor relevancia si se atiende que provienen ni más ni menos que del Jefe de Inteligencia Militar de la Brigada 13, quien precisamente por su cargo es de asumir contaba con información para hacer esa clase de aseveraciones.

Por eso se entiende que ese convencimiento de los estamentos castrenses sobre la supuesta participación de colaboradores del movimiento subversivo desde el interior del Palacio de Justicia se refleje una vez más en el escrito que contiene la intervención del entonces Ministro de Defensa, General MIGUEL VEGA URIBE, ante la Cámara de Representantes con ocasión al debate promovido sobre los hechos del Palacio de Justicia, en donde refiriendo las supuestas palabras de un soldado colombiano desconocido dijo: "*… El hombre –magistrado se convierte en un mito, es llorado por miles de miles de personas, por sus alumnos, por sus exalumnos y colaboradores, algunos de los cuales lloran lagrimas de cocodrilo porque desde adentro del Palacio ayudaron*

[153] Fl. 173, c. anexo 1.
[154] Fl. 262, c. anexo 6.

a los sicarios a esconder las armas, costales con arena, víveres, explosivos, para que asesinaran a quienes hoy lamentan"[155].

De modo, es un hecho suficientemente demostrado que los integrantes de la cafetería desde un comienzo fueron catalogados sospechosos de pertenecer o auxiliar al M-19, tal como lo reseñó el diario El Tiempo el 20 diciembre de 1985 al publicar que "*Se tiene la plena credibilidad de que por lo menos diez empleados de la cafetería están comprometidos con el grupo subversivo*"[156].

Adicional a esto, es significativo que, al igual que EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, familiares de varios de quienes figuran como desaparecidos aseguraron haber sido objeto de amenazas por sus insistentes pesquisas buscando a sus seres queridos[157].

Amenazas que muestran cómo se ha querido evitar el esclarecimiento de los hechos, y se extendieron a todo aquel que se ocupara en la búsqueda de los desaparecidos o pudiera dar información sobre ellos, tal como ocurrió, se reitera, con VILLAMIZAR ESPINEL, JORGE FRANCO PINEDA y CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA[158], entre otros.

Esa situación explica el que se conozca en el expediente diversas versiones de algunos testigos que en una primera deposición no contaron detalles manifestados posteriormente, mostrándose

---

[155] C.O. 5 Anexo Instrucción Fl 131.
[156] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 104
[157] Declaraciones de OSCAR ANZOLA MORA del 3 febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante; ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ del 29 de agosto de 2001 ante la Fiscalía; MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES del 10 de abril de 2006 ante la Fiscalía; MARÍA DEL SOCORRO FRANCO del 14 de agosto de 2006 ante la Fiscalía; JORGE ELIÉCER FRANCO PINEDA del 14 de agosto de 2006 ante la Fiscalía; RENÉ GUARÍN CORTES del 16 de agosto de 2007 ante la Fiscalía, y FRANCISCO JOSÉ LANAO AYARZA del 12 febrero de 2008 ante la Fiscalía.

[158] Declaración de CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

aparentemente contradictorias, razón por la cual se les quiere restar credibilidad, sin sopesar los motivos que les habrían llevado inicialmente a omitir información.

Tal es el caso de CESAR AUGUSTO SANCHEZ CUESTA, quien en declaración rendida el 3 de febrero de 1986 no hizo mención a situaciones y detalles expuestos por él tiempo después ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, SÁNCHEZ CUESTA explicó razonable y circunstanciadamente los motivos por los cuales inicialmente omitió informar ciertos detalles. Sobre el particular adujo que las circunstancias que rodeaban la declaración inicialmente rendida en 1986, *"…. ponían en riesgo mi vida y mi seguridad personal, ya que para el momento de esta declaración ya se me habían hecho las advertencias pertinentes por parte de los militares, y había recibido, como lo reitero, ciertas visitas a mi lugar de residencia por parte de vehículos sospechosos. ... La advertencia que se me hizo en las instalaciones del ejército, ubicadas en lo que se denomina como el Cantón norte, fueron claras, contundentes, precisas, de lo que me podía suceder si seguía indagando por el administrador, o por alguna otra persona. Si en el momento pertinente de la declaración hubiese declarado lo que declaré en el mes de septiembre de este año, ante esta fiscalía, estoy seguro de que no estaría en este momento con vida*".

Ahora, llama la atención que este deponente manifieste cómo, al acercarse a las instalaciones del Cantón Norte a averiguar por CARLOS RODRIGUEZ, recibió de respuesta "*… que no molestara más y que dejara de estar indagando por personas que no valían la pena porque eran guerrilleros y asesinos*"[159], coincidiendo en ello con los familiares de algunos de los desaparecidos que informan haber recibido como

[159] Rec. 14:20, grab. Sánchez C. Cesar A. Audio Declaración; DVD Marcado como Ítem 80-67J3, "Transfer oficio fl. 301 c. # 12. Informe No. 337123, 19-04-07".

respuesta de miembros de la Brigada XIII, incluido el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, que sus seres queridos eran guerrilleros y no aparecían porque "*habían huido al monte*".

Igual, la modalidad de seguimientos y acosos percibidos en su contra es similar a la señalada por EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL en su deposición ante este Juzgado; similitudes que, junto a sus explicaciones sobre las razones por las cuales en sus primeras versiones no dijo todo lo que posteriormente manifestó ante la Fiscalía, permiten dar credibilidad a este testigo, y aceptar que por las amenazas recibidas en su momento no declaró todo lo percibido y conocido por él sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Similar situación vivió JORGE ELIÉCER FRANCO PINEDA y su familia, según lo dio a conocer cuando manifestó que *"…. en una ocasión a mi casa, en una semana santa, en San José de Babaría llegaron tres vehículos jeep con personas armadas de fusiles R-15 amedrentando por los hechos de búsqueda que estábamos haciendo de Irma*"[160].

Así las cosas, no fueron situaciones aisladas las relatadas en punto de las amenazas e instigaciones de que fueron víctimas familiares de quienes figuran como desaparecidos y testigos que eventualmente podían suministrar información importante para la investigación.

Por el contrario, hay sustanciales y relevantes coincidencias de tiempo, modo y lugar que exigen dar credibilidad a sus dichos, para inferir razonablemente que la finalidad de todo ese despliegue de amenazas e intimidaciones era simple y llanamente evitar que se

[160] Fl. 84 del c.o. 6

siguiera indagando la verdad sobre la suerte corrida por los desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos.

Ahora, se ha insistido por parte de la defensa que en realidad las personas que figuran como desaparecidas murieron al interior del Palacio de Justicia, en el cuarto piso de la edificación, y sus restos se encuentran entre los cadáveres sin identificar, exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur, o fueron entregados equivocadamente por errores en la identificación.

Sobre el particular, lo primero a decir, a propósito de la hipótesis que se ha lanzado en punto a la posible existencia de más de una fosa común en el Cementerio del Sur donde se habrían inhumado cuerpos provenientes del Palacio de Justicia, es que la diligencia de exhumación se intentó inicialmente el 12 de febrero de 1986, estableciéndose que "*… la fosa común motivo de esta diligencia, se encuentra recibiendo cadáveres desde el mes de septiembre …*"[161] (subrayamos). Diligencia finalmente suspendida por los evidentes riesgos para el personal.

El Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante, el 18 de marzo de 1986 ordenó solicitar concepto a la Secretaria de Salud con el fin de determinar la viabilidad de adelantar la exhumación de la fosa común del Cementerio del Sur, "*… teniendo en cuenta que desde Septiembre del año pasado, hasta el 12 de Febrero del corriente año, se habían sepultado aproximadamente unos 279 cadáveres…*"[162] (subrayado del Despacho).

[161] C.O 9 Anexo Instrucción Fl 108
[162] C.O 10 Anexo Instrucción Fl 146

Finalmente el proceso de exhumación se inició en el año 1996, para lo cual un odontólogo y dos antropólogos realizaron inspección a los libros del Cementerio del Sur y recibieron declaraciones al personal del campo santo, concluyéndose que sólo había una fosa común abierta para la época de los hechos del Palacio de Justicia, según sus indagaciones, abierta en septiembre de 1985 y clausurada en enero de 1986.

Según lo manifestó el Dr. CARLOS EDUARDO VALDÉS, actual Director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de Jefe de la División Criminalística del CTI de la Fiscalía General de la Nación y como tal dirigió el proceso de exhumación, antes de iniciar las labores se investigó y realizó estudios con base en los cuales se descartó la posibilidad de que existieran otras fosas comunes, concluyendo que "*esa fosa no había sido ni perturbada ni alterada*"[163].

De lo que se conoce en el proceso, las inhumaciones en la fosa común del Cementerio del Sur de los cuerpos provenientes del Palacio de Justicia se realizaron entre el 9 de noviembre de 1985 y el 21 de enero de 1986, en un total de 38 cuerpos o restos inhumados.

El 9 de noviembre, por orden del Juez 78 de Instrucción Penal Militar se depositaron en la fosa común 26 cuerpos, de ellos 10 identificados (ARIEL SANCHEZ, protocolo de necropsia 3797; EDISON ZAPATA VASQUEZ, protocolo de necropsia 3747; FRANCISCO VARGAS SOTO, protocolo de necropsia 3757; RICARDO MORA GONZALEZ, protocolo de necropsia 3764;

[163] Declaración del 15 de marzo de 2012 en audiencia pública ante este Despacho.

HECTOR ARTURO LOZANO, protocolo de necropsia 3765; WILLIAM ALMONACID, protocolo de necropsia 3768; MARIO GARCIA RESTREPO, protocolo de necropsia 3769; JESUS ROA VELASCO, protocolo de necropsia 3772; JESUS ANTONIO CARVAJAL BARRERA, protocolo de necropsia 3781, y ANGELA MURILLO, protocolo de necropsia 3784)[164] y 16 rotulados como NN (protocolos de necropsia 3758, 3800, 3801, 3802, 3807, 3827, 3831, 3835, 3839, 3843, 3845, 3771, 3777, 3779, 3823 y 3782).

El 20 de noviembre se inhumaron 8 cuerpos como NN (protocolos de necropsia 3008, 3816, 3819, 3820, 3822, 3830, 3840 y 3849).

El 23 de noviembre se inhumó el cuerpo correspondiente al protocolo 3877 y el 30 del mismo mes el del protocolo 3818.

Finalmente, el 21 de enero de 1986 fueron llevados a fosa común los cuerpos relacionados con los protocolos de necropsia 3832 y 3811.

De manera, si conforme a la información que para marzo de 1986 tenía el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante, la fosa común, abierta desde septiembre de 1985, venía recibiendo cadáveres hasta al menos el 12 de febrero de 1986, esto es, estuvo habilitada hasta esa fecha; es de concluir que todos los cuerpos procedentes del Palacio de Justicia que tuvieron ese destino fueron sepultados en la misma fosa y por lo tanto no hay lugar para abrigar

[164] Aun cuando el Juez 78 de Instrucción Penal Militar ordenó entregar 25 cuerpos, Medicina Legal dejó de entregar, de los solicitados por el Juez, los correspondientes a ANDRES ALMARALES, protocolo de necropsia 3773, y el de JAIME ALBERTO CORDOBA, protocolo de necropsia 3799, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares. En cambio entregó los correspondientes a los protocolos de necropsia 3807, 3801 y 3797 que no hacían parte de la lista del Juzgado de Instrucción Penal Militar.

duda alguna sobre la posibilidad de existir otra fosa común en el Cementerio del Sur que para esa época hubiese recibido cuerpos de las víctimas de la retoma de la sede judicial.

El proceso de exhumación en la fosa común del Cementerio del Sur, ampliamente ilustrado por el Dr. CARLOS VALDES en audiencia pública ante este Despacho, lo realizó la División de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación con la asesoría arqueológica y bioantropológica del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contando con veeduría internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia.

La investigación preliminar se inició el 20 de agosto del 1996 y finalizó en enero de 1997; la fase de campo transcurrió entre el 26 de enero y el 9 de septiembre de 1998, y la de laboratorio entre 1998 y 2012.

La fosa tenía un área de 36 metros cuadrados, dividida en 9 cuadrículas de 2x2 metros. Los restos aparecieron desde el primer nivel, pero se encontró que existían 5 niveles separados por material de relleno y desechos hospitalarios, se excavaron 40 cm más, corroborándose el final de la fosa.

De acuerdo a la información del Cementerio del Sur, los investigadores esperaban encontrar 261 cadáveres, de ellos 149 infantiles y 112 adultos. Sin embargo encontraron 165 restos óseos,

correspondientes a 90 adultos, 49 infantiles, 6 miembros amputados y 18 sin articulación[165].

En el primer nivel, de 50 cm. de profundidad, se ubicaron 16 adultos, 4 infantiles y una posible amputación de miembro inferior. Tres estaban desarticulados.

En el segundo nivel, de 30 cm., se obtuvieron 21 esqueletos adultos, 18 infantiles, dos miembros amputados y un miembro sin articulación anatómica. Tres estaban desarticulados.

En el tercer nivel, de 70 cm., se exhumaron 20 esqueletos adultos, 12 infantiles, 3 miembros amputados y 17 miembros sin articulación anatómica. 8 estaban incinerados y fragmentados, de ellos 3 en estado de putrefacción.

En el cuarto nivel, de 50 cm., se hallaron 24 esqueletos adultos y tres infantiles; 12 con huellas de incineración, 6 en estado de putrefacción.

Finalmente, en el quinto nivel, de 65 cm., se hallaron 10 esqueletos adultos y 3 infantiles.

La fosa se excavó hasta delimitar completamente su extensión; cuando los huesos se encontraban mezclados se individualizaban con cintas de colores. Los individuos adultos se identificaron con números y los infantiles con letras.

[165] C.O 14 Anexo Causa Fl. 234.

Según da cuenta el expediente, provenientes del Palacio de Justicia fueron remitidos 94 cadáveres al Instituto Nacional de Medicina Legal[166]. De esos 94 cadáveres, como se dijo, 38 fueron inhumados en la fosa común del Cementerio del Sur. A los restos exhumados se les practicaron exámenes genéticos de ADN en 2001, 2002, 2010 y 2012 y, salvo ANA ROSA CASTIBLANCO que inicialmente figuraba en el grupo de desaparecidos de la cafetería del Palacio, ninguno de esos restos ha sido identificado como correspondiente a las personas desaparecidas.

Es de señalar que previo a realizar los cotejos de ADN el Laboratorio de Identificación realiza unos estudios preliminares que corresponden al llamado "cuarteto básico de identificación"[167]. Además, se llevan a cabo análisis osteopatológico, dental y reconstrucciones faciales, los cuales procuran un estudio integral de identificación.

Para el efecto, los primeros restos fueron seleccionados por encontrarse en bolsas plásticas o con huellas de incineración o desarticulados anatómicamente o con vidrios de seguridad incrustados, además de ubicarse en el nivel de la fosa que, según los estudios, correspondía a la de restos del Palacio de Justicia, de acuerdo a la época de inhumación.

Inicialmente se rindieron tres informes parciales en los años 2001 y 2002, posteriormente en el 2010 y 2012 se realizaron cotejos de ADN a prácticamente la totalidad de restos exhumados, procurando

[166] Oficio del Instituto Nacional de Medicina Legal del 17 diciembre de 1985.

[167] Métodos para determinar el sexo, edad, patrón racial y estatura (talla).

especial atención en los que no se tenían resultados, así como en aquellos que no se habían practicado cotejos, es decir, familiares de NORMA CONSTANZA ESGUERRA e IRMA FRANCO PINEDA. Así las cosas, finalmente de los 94[168] restos óseos no se obtuvieron resultados de los esqueletos 18 y 58, toda vez que las muestras de ADN siguen siendo insuficientes por su alta degradación.

En un primer estudio, realizado por el Laboratorio de Genética de la Fiscalía General de la Nación y el Laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se seleccionaron 28 muestras y se analizó si los restos pertenecían a FABIO BECERRA CORREA, LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, RENÉ FRANCISCO ACUÑA JIMÉNEZ, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, ANA ROSA CASTIBLANCO TORRES, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA LEÓN, CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, GLORIA ANZOLA DE LANAO Y DAVID SUSPES CELIS[169].

En esa oportunidad se excluyó que dichas muestras correspondieran a nueve de las personas desaparecidas, pero se identificó a ANA ROSA CASTIBLANCO TORRES, siendo sus restos entregados en noviembre de 2001.

En 2001 y 2002 se elaboraron un segundo y tercer estudio, donde se analizaron otros restos y también se excluyeron como correspondientes a las personas desaparecidas.

---

[168] Téngase en cuenta que la numeración corresponde a 93 esqueletos, sin embargo existe el 55 A, para un total de 94 restos óseos.
[169] Informe de tipificación molecular de ADN del Laboratorio de Genética de la Fiscalía General de la Nación y Laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 17 de julio de 2001.

El segundo informe analizó si los restos pertenecían a FABIO BECERRA CORREA, LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, RENÉ FRANCISCO ACUÑA JIMÉNEZ, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, ANA ROSA CASTIBLANCO TORRES, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA LEÓN, CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, GLORIA ANZOLA DE LANAO Y DAVID SUSPES CELIS.

La doctora YOLANDA GONZÁLEZ LÓPEZ, perito del laboratorio de genética de la Fiscalía, declaró en marzo de 2012 dentro de la audiencia pública adelantada por este Despacho, precisando que para entonces se había practicado cotejo genético a los 90 cuerpos adultos exhumados, sin poder obtener resultados respecto de los cadáveres rotulados como 16, 18, 56, 58 y 85, pues presentaban alta degradación de ADN, por lo que el Departamento de Identificación les remitiría otras piezas de esos cadáveres para hacer las pruebas pertinentes. Sobre los restantes, fueron excluidos como pertenecientes a nueve de las personas desaparecidas, restando hacer pruebas respecto de NORMA CONSTANZA ESQUERRA e IRMA FRANCO PINEDA.

En julio de 2012 se realizaron estudios a los cadáveres rotulados con los números 16 y 56, siendo analizados con las muestras de los familiares de los hombres desaparecidos y se excluyeron como pertenecientes a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA y DAVID SUSPES.

El cadáver número 85 fue analizado con las muestras de los familiares de las mujeres desaparecidas y se excluyó que perteneciera a LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA LEÓN, CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, GLORIA ANZOLA DE LANAO y NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO.

Finalmente, en el segundo semestre de 2012 se realizaron exámenes respecto de los familiares de NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO e IRMA FRANCO PINEDA, sin que se hayan identificado sus restos entre los cadáveres exhumados del Cementerio del Sur.

Así las cosas, de lo que da cuenta el expediente, se agotó al máximo el cotejo genético de los restos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur, al punto que sólo de los restos identificados con los números 18 y 58 no se obtuvo resultado debido a la alta degradación del ADN presente en las muestras, excluyéndose la posibilidad de que 88 de los 90 restos de adultos exhumados pertenezcan a las personas desaparecidas.

Adicional al agotamiento del examen genético sobre el 97.7% del universo de cuerpos exhumados con probabilidad de corresponder a víctimas del Palacio de Justicia, valga resaltar que el Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional procesó la información y analizó los restos mantenidos bajo su custodia, llevando a cabo estudios antropométricos y de reconstrucción facial para la identificación indiciaria de los restos.

El informe final de ese estudio aproxima la identificación de once supuestos guerrilleros, un civil y un posible magistrado. Tampoco en

este análisis de los restos exhumados se encuentra evidencia que relacione con los muertos al interior del Palacio de Justicia a las personas señaladas de estar desaparecidas[170].

De manera, conforme a los resultados de las pruebas de ADN llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la nación, se reduce a un 2.3% la posibilidad de que los cuerpos de las once personas señaladas como desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia se encuentren entre los restos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur, y esa posibilidad se restringe a los cuerpos identificados con los números 18 y 58 (pues a los restantes finalmente se les practicó cotejo genético).

De cualquier forma, de hacerse realidad esa posibilidad, esto es, de llegar a identificarse en esos restos a dos de los desaparecidos, faltaría conocer el paradero de nueve de las personas cuya suerte aún se desconoce.

Sin embargo, en punto a esto vale advertir, como lo hicieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 14 de noviembre de 2014 y el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de segunda instancia en contra del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, que "*el hecho de encontrar los restos de alguna de las presuntas víctimas entre los cadáveres exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur no descarta automáticamente la posibilidad de que haya salido viva del Palacio de Justicia*" y por consiguiente que no haya sido

[170] Reconstrucción Escultórica Facial: Se basa en la profundidad de tejido blando que existe en la región facial tomando en cuenta 16 puntos; 7 sobre la línea sagital y 9 pares en norma lateral. Es importante contar con un cráneo que tenga mandíbula, ya que ésta representa aproximadamente el 40% del rostro y tomando en cuenta que se obtiene con esta técnica una aproximación del 80% al rostro real.

objeto de desaparición forzada, pues bien pudieron ser depositados sus restos en esa fosa hasta el 12 de febrero de 1986, fecha en la que se tiene evidencia aún estaba activa.

Esto por cuanto no es descartable que luego de haber sido llevados a instalaciones militares o de policía, sometidos a torturas y ultimados, sus cuerpos, varios días después de la retoma del Palacio, fueran enterrados en ese lugar.

No puede soslayarse versiones según las cuales, personas sacadas con vida del edificio recuperado supuestamente fueron “ajusticiadas” y vueltas a ingresar al Palacio de Justicia para ser retirados sus cuerpos como si hubieran perecido en medio de la confrontación. Tal sería el caso del Dr. CARLOS HORACIO URAN, de quien se dice salió con vida, asesinado y dejado nuevamente al interior de la edificación para hacer el levantamiento del cadáver.

Razonablemente puede inferirse que una situación similar podía haberse dado con algunos considerados sospechosos de pertenecer o ser auxiliadores del grupo subversivo, quienes luego de fallecer a consecuencia de las torturas a las que se les habría sometido bien pudieron ser depositados en la fosa común del Cementerio del Sur para ocultar sus cuerpos.

Queda demostrado, entonces, que, salvo dos posibilidades aun no descartadas científicamente, dentro de los cuerpos exhumados del Cementerio del Sur no se encuentran los once desaparecidos y el hecho de llegarse a identificar en esas opciones vigentes a alguna de las personas reputadas desaparecidas, no descartaría necesaria

y fatalmente su salida con vida del Palacio de Justicia y su sometimiento a desaparición forzada.

Se reduce así considerable y significativamente la posibilidad de que las personas tenidas como desaparecidas hayan perecido al interior del Palacio de Justicia.

Para la defensa subsiste la hipótesis según la cual los cuerpos de estas personas corresponden a entregas equivocadas debidas a la mala identificación de los restos; teoría que si bien cabe dentro de lo posible, es poco probable e implicaría la notable y extraña coincidencia de que precisamente esas entregas equivocadas correspondan, especialmente, a todos los empleados de la cafetería, quienes, como se vio, para la inteligencia del Ejército eran sospechosos de pertenecer o ser auxiliadores del M-19.

El caso emblemático sobre el que descansa la teoría de la defensa para sostener que los desaparecidos corresponden a entregas equivocadas es el de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, cuyo cuerpo se habría entregado a los familiares del Magistrado PEDRO ELIAS SERRANO pese a estar acreditado que los restos correspondían a una mujer.

Esto por cuanto el acta de levantamiento 1171 hace referencia a un cadáver incinerado encontrado en el cuarto piso de la edificación judicial al que se asociaron como elementos encontrados una pulsera metálica, una pata de montura de gafas y varias piezas o pepas de collar. El protocolo de necropsia 3805, correspondiente a ese cadáver, determinó que era el cuerpo de una mujer carbonizada que presentaba útero no preñado.

Sobre el particular, DIMAS DENNIS CONTRERAS VILLA, patólogo forense que elaboró el protocolo de necropsia, afirmó que no hubo equivocación en la determinación del sexo porque se describe un útero no preñado.

En diligencia ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal llevada a cabo el 12 de enero de 1988[171] la señora ELVIRA FORERO DE ESGUERRA, madre de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, reconoció como pertenecientes a su hija la pulsera y las pepas del collar, quedando convencida desde entonces que su hija murió y su cadáver fue mal entregado[172].

El reconocimiento de esos objetos por la señora madre de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, a más de ser extremadamente indeterminado en la medida en la que no se tuvo la precaución de interrogarla por las características particulares que le permitían individualizar esas piezas como parte del ajuar de su hija y nada explica sobre la pata de la montura de gafas que las acompañaba cuando NORMA CONSTANZA no usaba gafas[173], no es conclusivo como para asegurar sin hesitación que en efecto se trataba de sus restos mortales.

Sin embargo, es evidente que esos restos, según el protocolo de necropsia de sexo femenino, se entregaron erradamente como si se tratara del cadáver de un hombre, específicamente del Magistrado PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA, en virtud del precario

[171] Folio 233 original 2 de instrucción.
[172] C.O 82ª Anexo Instrucción Fl 136.
[173] La señora ELVIRA FORERO DE ESGUERRA aclaró que las patas de gafas no pertenecían a su hija porque ella no utilizaba anteojos.

reconocimiento efectuado por la señora CIRIA MERCY MENDEZ DE TRUJILLO a partir de un reloj marca Citizen del magistrado, cuando al cadáver no aparece asociado el haberse encontrado dicho reloj[174].

En esas circunstancias, si bien se puede asegurar que los restos relacionados al acta de levantamiento 1171 y el protocolo de necropsia 3805 no corresponden al Dr. PEDRO ELIAS SERRANO, pues eran de sexo femenino, no se puede afirmar al margen de toda duda que sean los de NORMA CONSTANZA ESGUERRA, en tanto esa apreciación se apoyaría exclusivamente en el reconocimiento extremadamente frágil de los objetos asociados con ellos, si tenemos en cuenta que la señora ELVIRA FORERO DE ESGUERRA simplemente manifestó que la pulsera y las pepas de collar pertenecían a su hija, y el funcionario judicial que adelantó la diligencia no tuvo la precaución de interrogarla para concretar detalles específicos de individualización, esto es, determinar alguna característica especial de los objetos que le permitiera hacer esa afirmación al menos con un alto grado de probabilidad.

Precisión que resultaba necesaria por tratarse de elementos bastante comunes, no caracterizados ni detallados para

[174] La doctora MERCY MÉNDEZ DE TRUJILLO, madrina de matrimonio del magistrado PEDRO ELÍAS SERRANO ABADÍA, asegura que el 8 de noviembre fue a Medicina Legal, donde observó una serie de cadáveres colocados en el suelo en forme de hilera y en el fondo varias bolsas que contenían restos de cadáveres carbonizados. Junto a ellas se hallaban unas bolsas plásticas con objetos personales para ser reconocidos por los familiares.
Anota que ella tomó una de esas bolsas para tratar de ubicar el cadáver del Dr. SERRANO ABADÍA, encontrando un reloj redondo Citizen de hombre que asoció con él porque él tenía un reloj igual para traérselo a su hijo; además en esa bolsa había un trocito de un material que parece nácar en rojo y negro de un esfero Parker que ella le regaló. Con tales elementos tuvo la certeza moral inmediata de que allí estaba el cadáver del doctor PEDRO ELÍAS SERRANO.
Luego fue conducida para que revisara el cadáver o los restos que correspondían a esa bolsa, el que se hallaba marcada con una “F”, lo que indicaba que correspondía a sexo femenino. Asegura que el cadáver fue examinado por algunos patólogos, quienes destacaron la presencia de una fibra compatible presuntamente con una media de mujer, sin embargo, dice, que ella tomó la fibra y señaló “que eso no era nunca fibra de media sino parte de una entretela de una hombrera como quedó demostrado al abrirse una tela que estaba carbonizada y adherida al hueso y era paño, se apreció directamente que era paño de la hombrera y un resto de paño que acabé de reconocer como del vestido que tenía puesto el doctor, era efectivamente paño”.

particularizarlos, que perfectamente pudieron hacer parte del ajuar de cualquier mujer, trabajadora en una oficina, máxime cuando junto a la pulsera y a las piezas de collar se encontraba parte de una montura de gafas; accesorio de frecuente uso por trabajadores de oficina, no utilizado por NORMA CONSTANZA ESGUERRA, según lo sostenido por su señora madre.

No obstante, tampoco podemos afirmar que esos restos no correspondieran a NORMA CONSTANZA ESGUERRA y, por lo tanto, que ella no haya perecido en el cuarto piso de la edificación judicial.

Quienes dan por hecho que NORMA CONSTANZA ESGUERRA efectivamente murió en el cuarto piso y sus restos son los entregados erróneamente a los familiares del Dr. PEDRO ELIAS SERRANO, alimentan su criterio con lo sostenido por el Tribunal Especial de Instrucción Criminal creado por el Gobierno Nacional en 1986 para investigar los hechos de la toma del Palacio de Justicia.

En su informe fechado en mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial N° 37.509 del 17 de junio de 1986, señala ese Tribunal que "*La Cafetería disponía, por razón de los servicios que prestaba, de una escalera privada que la comunicaba con el sótano por donde se proveía de elementos de consumo, y con los pisos segundo y tercero, para la atención de aquellas personas y entidades que ocupaban las partes altas del edificio (ej. reuniones de Sala Plena).*

Para acceder al cuarto piso desde la Cafetería y por esta escalera privada, era necesario hacer un recorrido por el corredor del tercero, aledaño a la tribuna superior del salón de audiencias y ascender luego por la escalera principal del sector sur.

……

En el corredor mencionado, los soldados que avanzaban ocupando el sector, hallaron tortas o pasteles que, hambreados, consumieron a pesar de naturales recelos sobre trampa o "cazabobos" como ellos denominan los artefactos dispuestos para destruir soldados incautos. Estos pasteles tuvieron que ser llevados de la cafetería y no parece probable que tengan origen distinto a la fábrica de la proveedora, señorita Esguerra, quien minutos antes acababa de surtir la despensa del establecimiento" (subrayado ajeno al original).

Ese episodio lo extracta el Tribunal de la declaración del soldado MANUEL EDUARDO BECERRA ROJAS, rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal, y tal como lo hacen hoy día quienes niegan la existencia de desaparecidos en los acontecimientos del Palacio de Justicia, lo considera un hecho indicador del traslado de los ocupantes de la cafetería al cuarto piso.

Asumiendo como cierto que esas "*tortas o pasteles*" eran de los distribuidos por NORMA CONSTANZA ESGUERRA y realmente fueron encontrados por los soldados, tirados en el corredor del tercer piso, puede inferirse razonablemente que al comenzar la toma la señora ESGUERRA estaba en ese sitio y ciertamente pudo haber subido al cuarto piso buscando escapar del intenso intercambio de disparos desatado desde un inicio en el sótano y el primer piso.

Si eso fue así, bien pudo darse el deceso de NORMA CONSTANZA ESGUERRA en el cuarto piso y sus restos podrían corresponder a los relacionados en el acta de levantamiento 1171 y el protocolo de necropsia 3805; de suerte que, sumado eso a las sustanciales inconsistencias en la entrega de ese cadáver (de sexo femenino), junto con el reconocimiento de parte de la señora ELVIRA FORERO DE ESGUERRA de los objetos vinculados a esos restos como pertenecientes a su hija, con todo y lo frágil que se muestra, se abre un margen importante de duda en punto a la supervivencia de

NORMA CONSTANZA ESGUERRA a la toma y retoma del Palacio de Justicia, que no permite asegurar que fue objeto de desaparición forzada.

Lo que no se puede inferir razonablemente del episodio de los pasteles encontrados en el tercer piso del Palacio es lo deducido ligeramente por el Tribunal Especial de Instrucción Criminal: que los pasteles tuvieron que ser llevados de la cafetería y menos que sea indicativo del traslado de los trabajadores de la cafetería al cuarto piso.

Para nada es razonable ni lógico pensar que de estar NORMA CONSTANZA ESGUERRA en la cafetería al iniciarse la operación guerrillera, al ser conducida por los subversivos hacia el cuarto piso dejara su bolso y otras pertenencias personales, que fueron encontradas en la cafetería[175], y en medio de la conmoción, la zozobra y la angustia propias de la situación, sí se preocupara por llevar consigo sus pasteles, para dejarlos tirados en el corredor del tercer piso.

Tampoco puede predicarse con fundamento racional un comportamiento semejante de cualquiera otro de los empleados de la cafetería, que al verse retenidos por los asaltantes y, en gracia de discusión, conducidos como rehenes a los pisos superiores, debieron preocuparse por muchas cosas, como su vida y su integridad personal, pero no por llevar unos pasteles al lugar donde supuestamente los pensaban concentrar.

Lo deducible del hallazgo de los pasteles tirados en el corredor del tercer piso es que NORMA CONSTANZA ESGUERRA no se

[175] El 9 de noviembre su familia ingresó a la cafetería del Palacio de Justicia y encontró en el mostrador varios objetos de ella, incluyendo “la billetera …, pero estaba saqueada”.

encontraba con los miembros del personal de la cafetería al iniciarse la toma subversiva. Que ese momento la sorprendió cuando, muy probablemente, ofrecía sus productos en algunas oficinas de ese nivel, como solía suceder y aún hoy día acontece con vendedores de diferentes mercancías que acostumbran visitar en sus puestos de trabajo a muchos de sus clientes, y por eso la suerte corrida por ella no necesariamente es la misma de la de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.

Lo anterior implica que ese hecho tampoco puede tomarse como indicador de la conducción de los miembros de la cafetería al cuarto piso de la edificación, máxime cuando no hacía parte del plan trazado por el comando guerrillero el concentrar en el cuarto piso más que los rehenes considerados por ellos como fundamentales.

Esta afirmación se desprende del contenido del documento titulado "*idea general de la maniobra*", obtenido por la SIJIN el 7 de noviembre de 1985 al allanar la casa utilizada por los insurgentes para su concentración previa al inicio de la operación, situada en la calle 6ª sur N° 8–42; el cual es citado textualmente por el Tribunal Especial de Instrucción Criminal en su informe.

En lo pertinente, el plan subversivo o "*Idea general de la maniobra*" señala: "*En el asalto la compañía estará desplegada en dos unidades de pelotón.*

El primer pelotón tendrá la misión de asalto y control del sótano y primer piso, ANIQUILANDO las fuerzas del enemigo allí destacadas y garantizando la defensa impenetrable de los únicos lugares de acceso inmediato del enemigo, la puerta principal y la puerta del sótano, como de igual manera garantizar el mayor alejamiento del enemigo de dichos lugares. En síntesis, su misión fundamental es el asalto al sótano y la puerta principal, el ANIQUILAMIENTO del enemigo en el sótano y el primer piso y el control de los mismos,

concentrando en un solo lugar a todas las personas allí presentes, bien en el auditorio, la oficina 115 y la oficina de auxiliares.
El segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos. Su misión fundamental es tomar los rehenes fundamentales que están allí. Para ello ANIQUILARA las fuerzas enemigas y concentrará a los primeros y segundos en las respectivas salas de sesiones" (Subrayados nuestros).

Como se ve, dentro de los planes del grupo asaltante no se contempló juntar a todos los rehenes en el cuarto piso de la edificación. Por el contrario, se dispuso concentrar a los del primer piso en un solo lugar, "*bien en el auditorio, la oficina 115 y la oficina de auxiliares*", y en el tercero y cuarto pisos tomar a los rehenes fundamentales que estuvieran allí para concentrarlos en las "*respectivas salas de sesiones*".

Eso explica que ALFONSO JACQUIN, comenzado el operativo, abandonara la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado (oficina 115), sin llevar consigo a las personas que ya tenía allí retenidas, como lo reconoce el mismo Tribunal Especial al señalar que "*Ella (Dora o Doris) se ubicó en la cafetería, mientras Jacquin y un tercero que se le agregó en la Secretaría de la Sección Tercera (oficina 115), esperaron allí la iniciación de los acontecimientos para dar cumplimiento al plan en las funciones asignadas al primer pelotón sobre concentración de rehenes en dicha oficina*" (Subrayado nuestro).

Lo propio hizo IRMA FRANCO y compañía en la Secretaría General del Consejo de Estado, donde permaneció esperando instrucciones hasta cuando por la presión de la respuesta militar se vio obligada a desplazar a sus rehenes a los pisos superiores, terminando junto al grupo de ANDRES ALMARALES encerrados en los baños del costado noroccidental, donde soportaron toda la violencia del operativo de retoma.

Si ese era el plan trazado y ese fue el comportamiento de ALFONSO JACQUIN y de IRMA FRANCO con los rehenes que tenían bajo su poder en el primer piso, no hay motivos para pensar que cosa diferente sucediera con los trabajadores y demás personas de la cafetería.

Adicional a esto, si las personas de la cafetería no fueron subidas inmediatamente al cuarto piso, difícilmente podrían haber sido llevadas allá con posterioridad, desplazándolos por la escalera que desde el restaurante llegaba al tercer piso, por cuanto, por esa ruta, para "*… acceder al cuarto piso desde la Cafetería y por esta escalera privada, era necesario hacer un recorrido por el corredor del tercero, aledaño a la tribuna superior del salón de audiencias y ascender luego por la escalera principal del sector sur*"[176], y entonces habrían tenido que enfrentar el intenso combate que se desató en ese sector con la irrupción del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía por la azotea del edificio, lo que les impedía acceder al cuarto piso por la escalera principal del sector sur.

Y hay evidencia que los empleados de la cafetería no fueron sacados de ese lugar al iniciarse las acciones de la toma violenta de la edificación, pues como lo narró MATSON OSPINO, la guerrillera de sastre azul que tomó posesión de la cafetería en el comienzo de la operación obligaba a la gente a entrar detrás del mostrador; hay rastros que muestran personas encerradas en un cuarto ubicado en el salón principal del restaurante, donde se encontraron varias pertenencias de sus trabajadores, como la llave de la registradora que siempre llevaba consigo CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, y la señora MARIA DEL CARMEN CASTRO DE PATIÑO, estando en el sótano, en el cuartico donde se preparaba tinto,

[176] Informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal, folio 177.

escuchó voces pidiendo auxilio del lado de la cafetería restaurante del primer piso[177].

Detalle, este último, que permite pensar con cierto fundamento lógico, que los miembros de la cafetería en algún momento del primer día de la toma se quedaron allí sin custodia guerrillera y por eso podían gritar pidiendo auxilio, según lo escuchó la testigo, quien fue rescatada el 6 de noviembre a eso de las seis o seis y treinta de la tarde por miembros del Ejército que la sacaron con otras personas por la carrera 8ª.

Ahora, repárese en cómo muchas personas quedaron atrapadas en diferentes dependencias y oficinas del primer piso y fueron evacuadas paulatinamente a lo largo de la tarde del 6 de noviembre, a medida que el ejército tomaba el control de la edificación; hecho indicativo de no ser parte del plan guerrillero el concentrar a todos los rehenes en un sitio específico y menos en el cuarto piso.

En esas condiciones, no hay razones objetivas para asegurar que, a diferencia de lo ocurrido con el grueso de personas sorprendidas en el primer piso por la toma guerrillera, los de la cafetería sí fueron trasladados al nivel superior del Palacio, cuando la reacción de las fuerzas del Estado no se hizo esperar y rápidamente fueron haciéndose al control del sótano y de la primera planta.

Adicionalmente, HÉCTOR DARÍO CORREA TAMAYO, ante la Procuraduría General de la Nación el 5 de diciembre de 1985[178], dio cuenta que en la madrugada del 7 de noviembre, mientras por instrucción de ANDRÉS ALMARALES pedían a gritos al Ejército

---

[177] Declaración del 7 de febrero de 2006, Folio 22 Cuaderno Original 5 de Instrucción.
[178] Fl. 54 – 64 c. anexo 44

cesar el fuego, alcanzaron a escuchar, en cuatro o cinco oportunidades, voces gritando lo mismo y que, a su parecer, provenían del auditorio ubicado en el costado sur del primer piso.

En ampliación de declaración del 10 de diciembre de 1985[179] reiteró lo dicho, aseverando que aproximadamente a las dos de la mañana *"... escuchamos unas voces que provenían, creo yo, del lado del auditorio o la cafetería que queda Enseguida del auditorio, eran voces de varias personas y ellos gritaban que por favor cesaran el fuego que ellos eran rehenes, nosotros gritábamos y al momentico gritaban ellos; entre nosotros comentábamos ¡hay más rehenes!"* [180]. Versión sostenida incluso en declaración rendida en audiencia pública ante este Despacho.

En ese contexto cobra especial importancia lo dicho por el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO el 6 de diciembre de 1985 ante el Juez Sexto de Instrucción Penal Militar[181], cuando al ser cuestionado por las personas de la cafetería manifestó que *"con extrañeza no apareció ninguna, ..."*, y él mismo se preguntó "*… qué explicación podría haber de que exactamente los trabajadores de esa cafetería no se hayan encontrado ninguno ni siquiera incinerados, ni tampoco sus documentos ni sus pertenencias, dónde están*"[182], pues deja ver cómo, ya para diciembre de 1985, apenas a un mes de sucedidos los hechos, la cabeza del B-2 de la Brigada XIII tenía claro que los cuerpos de los empleados de la cafetería no estaban entre los de las personas que fallecieron calcinadas.

Así, pues, todo tiende a indicar que el personal de la cafetería permaneció en el primer piso y la posibilidad de haber sido

[179] Fl. 72 - 76 c. anexo 44
[180] (Fls. 72 c. anexo 44)

[181] Fls. 230 – 241, C. Anexos 50
[182] Fl. 238, C. Anexos 50.

conducidos al cuarto nivel es poco probable, y, entonces, igual de reducida, por no decir nula, es la probabilidad de que, casualmente, todos los empleados de la cafetería correspondan a restos mortales entregados equivocadamente.

Ahora, aparte de los restos correspondientes al acta de levantamiento 1171, protocolo de necropsia 3805, al que ya se ha hecho referencia y que podrían ser los de NORMA CONSTANZA ESGUERRA; como posibles entregas equivocadas se han mencionado otros siete casos:

1) Acta de levantamiento 1100, protocolo de necropsia 3794; restos incinerados entregados como del Dr. EMIRO SANDOBAL HUERTAS. De estos se dice que fueron reconocidos por la dentadura y una corbata morada; pero el protocolo de necropsia señala la recepción de restos humanos carbonizados correspondientes a por lo menos dos cadáveres adultos, y el acta de levantamiento describe el cadáver en posición natural y la parte inferior sobre otros restos y no registra prendas de vestir.

Sin embargo, respecto de estos restos obra oficio 43340 de la División Laboratorio e identificación del DAS con resultados positivos de necrodactilia[183], descartando que el Dr. SANDOBAL HUERTAS sea una entrega equivocada.

En este evento se cuestiona que tratándose al parecer de por lo menos dos cadáveres se entregaron como si fuera uno.

La Dra. GLORIA MERCEDES JIMÉNEZ, patóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal que llevó a cabo esta necropsia, señaló que "*… al hacer la descripción de los restos examinados es difícil decir que*

[183] Folio 274, libro 9, investigación Procuraduría I.P.070.

corresponden a un solo cuerpo, ya que los fragmentos de columna vertebral no se corresponden exactamente, esos hallazgos son habituales en este tipo de tragedias donde hay fragmentación y carbonización de los cuerpos. Además vienen separados de los fragmentos de columna descritos, vísceras que bien podrían corresponder a otro cadáver, ….. Se hizo la descripción en un solo protocolo porque venían registrados en una sola acta de levantamiento, …"[184].

Si bien se plantea la posibilidad de que en efecto se tratara de restos de dos cuerpos diferentes, esto no quedó plenamente establecido, precisamente por esa falta de diligencia para tratar de individualizarlos, y la patóloga simplemente refiere **lo difícil** que es decir que los restos corresponden a un solo cuerpo en razón a la no correspondencia exacta de los fragmentos de columna y a la presencia de vísceras que "***bien podrían*** *corresponder a otro cadáver*".

Como se nota, la médico forense no es conclusiva ni definitivamente asertiva en cuanto a que se trate de dos cuerpos diferentes, al punto que no procedió a separarlos, como debió hacerlo si en realidad estaba segura de la presencia incuestionable de restos de diferentes personas, sin ser admisible su excusa de no haberlo hecho simplemente por estar registrados en una sola acta de levantamiento.

Lo que denota su dicho es incertidumbre por una apreciación precaria, subjetiva, sin soporte técnico o científico explícito. La patóloga no hizo nada para despejar la duda y, por lo tanto, si le era difícil decir que los restos correspondían a un solo cuerpo, igual le resultaba difícil asegurar que se trataba de dos o más cuerpos.

Por el contrario, quien diligenció el acta de levantamiento sí diferenció la presencia de partes de por lo menos dos cuerpos, pues

[184] Declaración del 17 de marzo de 1987. Fl. 62 ss. Anexo 81

reseñó "*cadáver en posición natural y la parte inferior sobre otros restos*", y si distinguió restos de más de un cuerpo, no hay motivo para asegurar que los embaló y relacionó como si se tratara de uno solo.

Una cosa es que al elaborar el acta de levantamiento y describir las condiciones como se encontró el cadáver, se hiciera relación de la posición de su parte inferior sobre otros restos, y otra que al hacer el levantamiento se hubiese embalado y rotulado todo como si se tratara de un único cuerpo, cuando perfectamente había percibido la individualidad de dos cuerpos o restos diferentes.

De otro lado, nótese que lo encontrado sobre otros restos era la parte inferior del cadáver, y por lo tanto no se entiende cómo la apreciación de la patóloga pone en duda la unicidad del cuerpo con base en la no correspondencia exacta de fragmentos de columna vertebral.

Con todo, en este caso no hay la menor evidencia que pueda relacionar esos restos con cualquiera de las personas reputadas como desaparecidas, en especial y particularmente con los empleados de la cafetería, y, como se dijo, hay resultado positivo de necrodactilia.

2) Acta de Levantamiento N° 1177, protocolo de necropsia 3814. Restos entregados como de MARÍA ISABEL FERRER DE VELÁSQUEZ; la reconoció su hijo por un zapato negro, marca Tonino.

De estos restos se cuestiona su reconocimiento por un zapato cuando, según el protocolo de necropsia, el cadáver estaba totalmente calcinado y no tenía extremidades superiores ni

inferiores, por lo que no se explica que se hayan incinerado las extremidades pero se haya conservado uno de los zapatos.

Asumiendo que en realidad este sea un caso de errada identificación y que el cadáver en efecto no corresponda a la señora FERRER DE VELASQUEZ, tampoco correspondería a ninguno de los empleados de la cafetería, si se tiene en cuenta que al lado del cuerpo se halló un revólver marca Colt y debajo de él un proveedor para RP 15, indicando esto que muy probablemente se trataba de una guerrillera, y, aparte de las sospechas del Ejército, no está demostrado que alguno de los de la cafetería perteneciera al grupo subversivo.

Por lo demás, a este cuerpo no se asoció ningún otro elemento como trozos de vestimenta, adornos o accesorios, que pudieran relacionarlo de alguna manera con los de la cafetería del Palacio o cualquiera otro de los desaparecidos.

3) Protocolo de necropsia 3804, Acta de levantamiento 1174. Se entregó a los familiares de LIBIA RINCÓN MORA, pero se cuestiona que haya sido reconocida por un botón de una falda roja y chaqueta, cuando eso no concuerda con los hallazgos relacionados en el acta de levantamiento y en el protocolo de necropsia.

Para el caso existen dos actas de levantamiento, una realizada a mano y la otra a máquina. En una se consignó que en medio de las piernas del cadáver había residuos de pantalones interiores femeninos color amarillo y media velada, pantalón poliéster azul petróleo. En la otra no se hace referencia al pantalón, y el patólogo forense menciona que los restos estaban acompañados de un fragmento de saco azul.

Esas inconsistencias bien podrían poner en tela de juicio el reconocimiento realizado por los familiares de la señora RINCON MORA, si no fuera porque de estos restos existe oficio 43336 de la División Laboratorio e Identificación del DAS con resultados positivos de necrodactilia[185]. De manera, no tendría por qué subsistir duda respecto a la identidad de ese cadáver.

De todos modos, los trozos de ropa relacionados tanto en una de las actas de levantamiento como en el protocolo de necropsia no se acomodan a la vestimenta de ninguna de las empleadas de la cafetería del Palacio de Justicia o de las visitantes ocasionales que igual figuran como desaparecidas.

4) Respecto al protocolo de necropsia 3824, correspondiente al acta de levantamiento 1164, se reconoció a la auxiliar de Magistrado, MARÍA LYDA MONDOL DE PALACIOS. Sin embargo, se pone en duda ese reconocimiento por cuanto, habiendo sido reconocida por su cónyuge por la obesidad, el dispositivo encontrado en el útero y la edad; en el protocolo de necropsia no se hace referencia a ningún aparato intrauterino y en cambio se menciona un útero con características de aproximadamente 6 semanas de gestación.

No obstante, para este caso existe Oficio 43356 de la División Laboratorio e Identificación del DAS con resultados positivos de necrodactilia[186].

5) Igual sucede con el protocolo de necropsia 3842, acta de levantamiento 1177, en donde se relacionan los restos de quien fue reconocido y entregado como el Dr. FABIO CALDERÓN BOTERO, respecto de quien obra Oficio 43333 de la División Laboratorio e

[185] Folio 270. Libro 9. Investigación Procuraduría. I.P. 070.
[186] Folio 290, Libro 9. Investigación de la Procuraduría I.P. 070

Identificación del DAS con resultados positivos de necrodactilia[187]; de manera que sería irrelevante para efectos de su identificación la discusión en punto a si una cadena con una cruz, por la que en principio se le reconoció, en realidad pertenecían al Dr. CARLOS MEDELLÍN FORERO a cuyos familiares se les entregó.

6) Respecto al acta de levantamiento 1157, protocolo de necropsia 3836, cuyos restos fueron reconocidos como del Dr. DARÍO VELÁSQUEZ GAVIRIA por el Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO a partir de partes del vestido, la contextura del tronco y los fémures largos; se cuestiona la identificación porque en el acta de levantamiento se consigna "*prendas de vestir ninguna*" y no se relacionan una argolla metálica con la inscripción "*Haydde 12-12-64*" y una plaquita metálica con el nombre del Dr. DARÍO VELÁSQUEZ GAVIRIA que fueron entregados a la esposa del Magistrado el 29 de enero de 1986.

Las falencias en las diligencias de levantamiento, evidente y lamentablemente abundantes, sin embargo no permiten dudar que el Dr. CORDOBA TRIVIÑO en realidad tuviera ante sí los restos de un cuerpo que, pese al estado de incineración, conservaba partes del vestido. Más que cuestionar la veracidad de los elementos y características específicas observadas en el cuerpo por el Dr. CORDOBA, la situación muestra, una vez más, la falta de rigorismo y de profesionalismo que caracterizó el levantamiento de los cuerpos.

De cualquier modo, para lo que interesa al tema por ahora estudiado, lo destacable es que tampoco en este caso se desprende evidencia alguna para relacionar esos restos con las personas cuyo paradero hasta el día de hoy se desconoce, como para al menos

[187] Folio 267, Libro 9, Investigación Procuraduría. I.P. 070

intentar una conjetura sobre su posible fallecimiento al interior del Palacio de Justicia

7) Finalmente, los restos correspondientes al protocolo N° 3817, acta de levantamiento 1147, pese a que, según la necropsia, se trataba de un cadáver de sexo masculino (tenía testículos y próstata carbonizados), fue reconocido y entregado como si se tratara de la señora ROSALBA ROMERO DE DÍAZ.

Al igual que sucedió con los restos del acta 1171 (protocolo 3805), este es un caso de inexcusable error en la entrega; pero a diferencia de aquel, aquí no hay evidencia alguna que eventualmente conecte ese cuerpo con los desaparecidos, pese a que en una de las dos actas que se elaboraron de ese levantamiento se reseña como pertenencia encontrada una cadena de metal amarilla, elemento no reconocido por ninguno de los familiares de los empleados de la cafetería o de las visitantes ocasionales cuyo paradero aún se ignora.

Así, de los ocho casos resaltados como los que comportan la mayor y notable cantidad de errores en el proceso de identificación, que impiden tener la certeza necesaria respecto a que la persona reconocida en realidad lo sea: uno ciertamente puede corresponder a una de las personas señaladas de ser desaparecida: NORMA CONSTANZA ESGUERRA; cuatro tienen resultado positivo de necrodactilia, lo que, salvo demostrarse falencias también en ese estudio, descarta en principio errores en la entrega de los restos de EMIRO SANDOBAL HUERTAS, LIBIA RINCÓN MORA, MARÍA LYDA MONDOL DE PALACIOS y FABIO CALDERÓN BOTERO; dos no muestran ningún elemento de juicio o característica específica que eventualmente los aproxime, al menos indiciariamente, a los desaparecidos, y uno pertenecería al cuerpo

de una guerrillera entregado como MARIA ISABEL FERRER DE VELASQUEZ, sin conexión, en principio y hasta donde se sabe, específicamente con ninguno de los empleados de la cafetería, pues no hay en el expediente evidencia concreta, objetiva y contundente indicativa de su pertenencia al grupo subversivo, salvo que se asigne algún grado de probabilidad a las sospechas de inteligencia militar sobre la presunta pertenencia o colaboración de algunos de ellos con el M-19.

En ese orden de ideas, se hace más estrecha e improbable la teoría según la cual la totalidad de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y al menos dos de las visitantes ocasionales cuyo paradero aún se desconoce, habrían fallecido al interior de la edificación en medio de los combates y sus cuerpos, calcinados, entregados equivocadamente, aun cuando tampoco se puede predicar por completo clausurada la posibilidad de encontrar algún caso de esa naturaleza, pues no se puede afirmar que esos sean todos y los únicos eventos de entregas erradas a partir de identificaciones igualmente deficientes.

Cobran fuerza, sí, aun cuando no con la suficiencia como para considerarlos en sí mismos concluyentes y suministradores de certeza, los elementos indiciarios señalados a lo largo de estas consideraciones en dirección a que, al igual que IRMA FRANCO PINEDA, los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, DAVID SUSPES CELIS, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO, LUZ MARY PORTELA LEON, y las visitantes ocasionales LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA y GLORIA ANZOLA DE LANAO, pudieron ser víctimas de desaparición forzada.

Ciertamente la situación de los empleados de la cafetería no es exactamente la misma que la de las visitantes ocasionales, en tanto no hay evidencia para ubicarlos en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar.

Mientras es razonable, en principio, agrupar a los primeros en su puesto de trabajo, especialmente cuando se acercaba la hora de atender el servicio de almuerzos, no hay elementos de juicio objetivos, claros y concretos para dar por cierto que LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA y GLORIA ANZOLA DE LANAO estuvieran en el mismo sitio o fueran reunidas con ellos, pues su presencia en el edificio obedece a motivos diversos y por tanto su ubicación al iniciar la irrupción subversiva muy seguramente era diferente, como al parecer lo fue también la de NORMA CONSTANZA ESGUERRA.

Ahora, el marco indiciario resaltado a lo largo de estas consideraciones, si bien es importante, significativo y, como se dijo, dadas las particularidades y dificultades del trabajo valorativo de la prueba en procesos de desaparición forzada cobra especial relevancia, no es absoluto ni suficiente por sí mismo para dar por probada, al margen de toda duda, la salida con vida de todas esas personas del Palacio de Justicia y su puesta bajo custodia de las fuerzas armadas del Estado, en cuanto subsisten hipótesis que eventualmente podrían ubicar a algunas de ellas en sitios diferentes, incluida, se quiera o no y por polémica que resulte, la derivada de las sospechas de inteligencia militar sobre algunos empleados de la cafetería.

Aun cuando esto último, de ser cierta la pertenencia al grupo subversivo de alguno de ellos, no justificaría la desaparición forzada de personas, como no se justifica la que se dio sobre IRMA

FRANCO PINEDA por ser guerrillera, ni descartaría su salida con vida del edificio, explicaría que al iniciarse la toma se abandonara el puesto de trabajo para tomar posición de combate en algún otro sitio de la edificación, y abriría la posibilidad para que esa persona hubiera fallecido en el cuarto piso y su cuerpo fuera consumido por las llamas.

Así, de llegarse a identificar a alguno de los desaparecidos en los restos de los cuerpos que se dice entregados equivocadamente, se entendería por qué no necesariamente todos los de la cafetería debieron correr la misma suerte.

Por lo tanto, se hace necesario examinar los elementos de juicio suministrados por el expediente específicamente respecto de cada una de las personas señaladas como desaparecidas, para establecer hasta donde la prueba finalmente se corrobora con el aporte indiciario y brinda certeza sobre lo realmente ocurrido con ellas.

En cuanto a que CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, junto a los otros empleados de la cafetería, estuviera al interior de la edificación judicial el 6 de noviembre de 1985 al iniciarse la toma por parte del grupo subversivo, no hay dubitación alguna, no sólo por tratarse de un día hábil y de una hora de especial movimiento para esa clase de tareas, dada la proximidad al servicio de almuerzos que allí se prestaba, lo que implica que todos y cada uno de quienes laboraban en ese sitio estuvieran prestos a atender sus labores cotidianas, incluido, por supuesto, el administrador, si no por cuanto así lo atestiguan diferentes personas que de alguna forma tuvieron contacto con ellos o pudieron darse cuenta de su presencia en el puesto de trabajo.

Sobre el particular, RAMIRO BORJA ÁVILA, a la sazón Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 2 de diciembre de 1985[188], afirmó haber visto *"… al personal de la Cafetería aproximadamente a las once y veinte minutos de la mañana, cuando yo me dirigía a la oficina del Dr. de IRIZARI, pues antes de que subiera al tercer piso bajé al primero, a la Secretaría de la Sala Laboral de la Corte [...].- Yo vi a CARLOS RODRÍGUEZ que era el Administrador de la Cafetería e igualmente vi a uno de los meseros a quien llamábamos JIMMY y vi a la empleada encargada de servir el autoservicio, cuyo nombre ignoro y también vi a la Cajera sentada junto a la Registradora.- No vi a quienes trabajaban en la Cocina aunque supongo que allí estaban porque era una hora cercana al almuerzo"*[189].

JULIA ALBA NAVARRETE, periodista que cubrió los hechos desde sus inicios y la mañana del 6 de noviembre, poco antes de iniciarse la toma, estuvo en el interior de la edificación judicial, también da cuenta de cómo antes de la violenta incursión vio a los empleados de la cafetería en sus puestos de trabajo. Aseguró conocer a los meseros, a la cajera, al administrador y a su esposa, pues todos los días almorzaba allí, y ratificó la presencia de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ en la cafetería, aseverando además haber visto a *"… una mujer joven, gordita y de pelo corto…"*[190] que se desempeñaba como cajera.

En el mismo sentido, JOSELIN SANCHEZ ALVARADO, para ese entonces auxiliar judicial de la Sala de Casación Penal, el 26 de noviembre de 1985, ante la Procuraduría, declaró haber estado el 6 de noviembre, a eso de las 9:00 de la mañana, tomando tinto en la

[188] Fl. 5 – 10 c.o. anexo No. 71
[189] Fl. 7 c.o. anexo No. 71
[190] Fls. 92 al 110 del c. anexos 49.

cafetería, observando allí a una muchacha gordita, bajita, y a los empleados de costumbre.[191]

También el doctor CARLOS BETANCOURT JARAMILLO[192] señaló que el día 6 de noviembre, a las 10:00 am., visitó la cafetería junto con el Dr. GASPAR CABALLERO y el establecimiento funcionaba con normalidad.

A partir de lo anterior es dable asumir como un hecho incuestionable la presencia del personal de la cafetería en sus puestos de trabajo el 6 de noviembre de 1985, previo a comenzar el asalto subversivo.

Respecto de **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA**[193], administrador de la cafetería restaurante, no cabe duda de su presencia en el sitio de trabajo para cuando se dio inicio a los hechos.

Su esposa, CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, dio cuenta que el 6 de noviembre salió hacia su trabajo a eso de las 7 de la mañana. Como se acaba de relacionar, fue visto por varias personas en sus ocupaciones habituales poco antes de que el M-19 hiciera su ingreso al Palacio de Justicia; en especial el Dr. RAMIRO BORJA ÁVILA dice haberlo visto aproximadamente a las 11:20 de la

---

[191] Anexo Procuraduría N° 3 A. Folio 42. Declaración ratificada el 9 de diciembre de 1985 ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal. Folio 96 Anexo de Instrucción 71.
[192] Fls. 59 – 68 c.o. Anexos 5
[193] Hijo de Enrique Rodríguez y María Teresa Vera de Rodríguez (fallecidos). Identificado con cédula de ciudadanía 19.276.179 de Bogotá, nació en Bogotá el 26 de julio de 1956, de 29 años de edad cuando se dio el asalto al Palacio de Justicia. Se desempeñaba como administrador de la cafetería – restaurante del Palacio de Justicia. Casado con CECILIA CABRERA, tenían una niña recién nacida. Realizó tres semestres de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional y para la época de los hechos se encontraba estudiando derecho en la Universidad Libre. Sus rasgos físicos sobresalientes eran tez blanca, cabello castaño, boca pequeña, ojos color miel, nariz recta, bigote. Del pie izquierdo le habían sido amputados tres dedos por un accidente de moto; tenía un espigo de oro. Contextura 1,70 mts de estatura y 65 kilos de peso. Usaba gafas no permanentes y para el día de la toma vestía pantalón de paño gris medio, buzo gris claro, camisa gris oscura y zapatos botines grises (C.O 6 A Anexo Instrucción Fl 153).

mañana, y eso fue corroborado por JULIA NAVARRETE y WILLINGTON IVÁN PUERTAS CASTRO[194], quien, si bien para la fecha tenía 10 años de edad, recuerda haber visto al administrador del restaurante y a los empleados normales de la cocina cuando subió por las escaleras que del sótano llevaban directamente a la cocina de la cafetería del primer piso.

La razón para que este, entonces niño, estuviera en las instalaciones judiciales aquel día, obedece a estar acompañando a su señora madre, MARÍA DEL CARMEN CASTRO DE PATIÑO, para esa época empleada de servicios generales, y se ocupaba en recoger las sobras de la cafetería para alimentar unos pollos.

Ahora, el señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, padre de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, asegura haber recibido información en cuanto a que su hijo salió con vida del Palacio de Justicia y fue conducido hacia a la Casa del Florero, donde habría sido visto por varias personas.

Igual informa que, según se enteró, CARLOS AUGUSTO fue llevado luego a las instalaciones del Ejército en Usaquén, por órdenes del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, quien habría dado indicaciones para que lo torturaran. Que en esas torturas duró tres días y al tercer día lo asesinaron y su cadáver fue sepultado dentro de los cuarteles, donde funcionaba el polígono.

El señor RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ[195] aseguró que el Dr. CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ, abogado amigo suyo, lo llamó para contarle que en la Casa del Florero "*vio a CARLOS que lo habían subido al segundo piso",* pero posteriormente el Dr. SERRANO le dijo que

[194] C.O. 5 de anexos, folio 14, declaración del 17 de febrero de 2006, ratificada en sesión 42 de audiencia pública ante el Juzgado 51 Penal del Circuito el 25 de febrero de 2010.
[195] C.O. Anexos 12 de la instrucción, folio 74 y ss., declaración del 16 de febrero de 2007.

había recibido amenazas y por lo tanto le pidió no mencionar nada de la información suministrada.

En el mismo sentido CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA aseguró que un abogado ARIEL SERRANO, amigo de su suegro, los llamó y les informó que había visto a un hombre con las características de CARLOS AUGUSTO ingresar a la Casa del Florero, donde fue llevado al segundo piso *"encañonado"*. Igual afirma que el abogado le comentó que también subieron a una muchacha vestida de *"delantal amarillento, abierto a los lados, bluyin (sic) usado, más bien apretado y que parecía que iba herida en un brazo",* características que, se dice, coinciden con la descripción de LUZ MARY PORTELA LEÓN[196].

CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ[197], escuchado en declaración por la Fiscalía instructora, niega enfáticamente haber visto a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA y haberle comentado al señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ sobre supuestas amenazas.

Indica, por el contrario, que cuando el señor RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ se enteró que él había *"salido bien librado"* del Palacio de Justicia le preguntó angustiosa e insistentemente si había visto salir a su hijo, a lo cual, afirma el declarante, le respondió que no. Que del lugar donde él se encontraba como rehén –en la biblioteca– no tenía vista hacia la cafetería del Palacio y *"no había visto a ninguno de la cafetería del Palacio ni en la Casa del Florero, ni dentro del Palacio".* En relación con las afirmaciones del señor RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ considera que está *"completamente equivocado"*.

---

[196] Declaración del 12 de diciembre de 1985 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal. (Folios 186-194. Cuaderno No. 6 Anexo de la Instrucción).
[197] C.O. Anexos 12, folio 254, declaración del 1° de marzo de 2007.

Es significativo que no sólo ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ haga referencia a la información recibida de parte de CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ, y que, a tan sólo poco más de un mes de ocurridos los hechos, ya CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA también diera cuenta de lo mismo, coincidiendo con el padre de su esposo en el hecho de haber sido a través de una llamada como el Dr. SERRANO les hizo esas manifestaciones.

De otro lado, así se quiera mostrar como producto de la angustia, la desesperación y el afán por saber el paradero de su hijo, no hay razones sólidas y lógicas para entender que ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, si como lo asegura SERRANO SÁNCHEZ recibió de su parte un rotundo y razonado no al cuestionarlo respecto a la posibilidad de haber visto a su hijo en desarrollo de los acontecimientos, sostuviera a lo largo de tantos años lo contrario, indicando, además, de manera concreta y enfática la fuente de su conocimiento, cuando esa versión era fácilmente verificable y por consiguiente sabía perfectamente que podría ser desmentido.

Por el contrario, está claro que CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ sí estuvo en el Palacio de Justicia y en la Casa del Florero en desarrollo de los hechos y era amigo del señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, siendo por tanto factible la versión de éste en cuanto a haber recibido esa información de parte de su amigo; es decir, no hay razones para asumir que mintiera sobre el particular.

Igual, las razones por las cuales CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ negaría el hecho no son desechables, habida cuenta que el plenario permite conocer cómo las amenazas e intimidaciones

han sido una constante para tratar de callar a quienes de una u otra forma puedan brindar información o para persuadir a los familiares de los desaparecidos a abandonar sus pesquisas[198].

No obstante, otra cosa es que la información que le habría transmitido CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ a los familiares de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA fuera cierta, pues no concuerda sustancialmente con lo sostenido por otros deponentes, como es el caso de CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA, específicamente en cuanto aquel fijaría la salida de CARLOS en la tarde del 6 de noviembre, al paso que éste hace referencia a hechos sucedidos el 7 al finalizar la operación, y los reconocimientos en video del administrador de la cafetería lo ubican saliendo la tarde del 7 de noviembre.

Por lo tanto, las referencias derivadas de lo que habría comunicado SERRANO SANCHEZ no pueden tenerse como prueba de la supervivencia de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA.

En cuanto a CESAR AUGUSTO SANCHEZ CUESTA, quien para el 6 de noviembre de 1985 era abogado asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá, conocía a todos los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, pues allí almorzaba casi a diario, y culminadas las operaciones militares fue con el Alcalde hasta la edificación judicial. Si bien en declaración rendida ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante el 16 de enero de 1986 y en

[198] Edgar Villamizar Espinel da cuenta de seguimientos y hostigamientos a raíz de su vinculación con la declaración ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema por los hechos del Palacio de Justicia; César Augusto Sánchez Cuestas, quien aseguró haber visto salir con vida a Carlos Augusto Rodríguez Vera, declaró que en el Cantón Norte le hicieron advertencias de lo que podía suceder si seguía con sus indagaciones; Jorge Franco Pineda también da cuenta de amenazas recibidas a raíz de las averiguaciones realizadas sobre la suerte de su hermana, y en general, los familiares de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Héctor Jaime Beltrán Fuentes declararon haber recibido amenazas para que no continuasen su búsqueda.

declaración de fecha 3 de febrero de 1986 no menciona haber visto salir con vida a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA del Palacio de Justicia, en posterior versión rendida ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia aduce ser testigo de la salida con vida del administrador de la cafetería y justifica su inicial silencio sobre el particular por las amenazas que en ese entonces se produjeron en su contra por razón de las averiguaciones adelantadas sobre el paradero de los desaparecidos.

En efecto, en esta última versión rendida el 19 de septiembre de 2007[199] enfáticamente aseguró: *"yo sé y me consta que salió el administrador de la cafetería y lo ingresaron a la Casa del 20 de Julio".*

Cuenta que mientras se desenvolvían los hechos estuvo ubicado cerca de la Casa del Florero y vio "*…. varias personas que sacaban del Palacio de Justicia por la puerta principal y los traían custodiados, tratándolos de proteger, y en una de esas personas yo identifiqué, porque así lo conocía, y recalco que lo conocía porque era el administrador, porque iba a almorzar todos los días allá…. Cuando lo vi y dije el señor RODRÍGUEZ salía y lo ingresaban a la Casa del 20 de Julio…*".

Precisa que CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA sale por la puerta principal, y explica que "*… yo veo a una persona que se me hace conocida a la que viene, en ese momento cuando él sale de allá de la puerta, yo no le puedo decir … con certeza 100% en este momento que está saliendo la persona de que era él, cuando ya lo veo cerca que es la persona que entra a la Casa del 20 de Julio, ahí le puedo decir con toda certeza que la persona que yo vi… era muy fácil identificar las personas que venían en ropa de civil*".

[199] CD marcado con "declaración CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA".

CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA acompañó a la señora CECILIA SATURIA CABRERA al Cantón Norte donde, dice, un militar les advirtió que no buscaran más porque los empleados de la cafetería *"eran guerrilleros"*; y asegura que cuando regresó a la Alcaldía supo de algunas personas que habían estado preguntando por él, y en el sitio de su residencia detectó movimientos sospechosos, siendo informado por uno de los celadores que personal del Ejército lo andaba buscando. Sumado a esto, asegura haber sido objeto de llamadas telefónicas en las que le decían que *"no tratara de averiguar sobre cosas que no le interesaban".*

Precisamente por esa situación justifica SÁNCHEZ CUESTA las omisiones en sus primeras declaraciones, pues sentía que "*las circunstancias que rodeaban en ese momento esa declaración ponían en riesgo mi vida y mi seguridad personal, ya que para el momento de esa declaración ya se me habían hecho las advertencias pertinentes por parte de los militares y había recibido…ciertas visitas a mi lugar de residencia por parte de vehículos sospechosos*". Para el declarante, las advertencias recibidas "*fueron claras, contundentes, precisas, de lo que me podía suceder si seguía indagando por el administrador o por otra persona*".

Como se ve, nuevamente entra en juego una situación de amenazas e intimidaciones para explicar omisiones, negaciones o retractaciones en la versión de personas que de alguna manera tuvieron conocimiento de los hechos o intentaron adelantar averiguaciones sobre la suerte de los desaparecidos.

Amenazas o advertencias intimidantes atribuidas directamente o relacionadas a personal militar, justificando ello que CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ negara haber comentado al señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y a su familia lo que estos aseguran les informó; que BERNARDO GARZÓN GARZON se

retractara de lo sostenido por él ante la Procuraduría sobre lo ocurrido con IRMA FRANCO; que EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL hiciera lo propio respecto de lo declarado ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y que CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA omitiera narrar en sus primeras declaraciones lo que sabía sobre la salida con vida del Palacio de Justicia de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA.

Un denominador común que, se reitera, se dio también respecto de familiares de los desaparecidos para obligarlos a cejar en su empeño por averiguar la suerte sufrida por sus seres queridos.

Así, es creíble la versión suministrada por CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia respecto a su seguridad de haber visto a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA salir con vida del Palacio de Justicia custodiado por personal militar, coincidiendo sustancialmente en ello con lo que otros deponentes han asegurado sobre el particular y lo desprendido de los reconocimientos efectuados en videos; al margen de no corresponder con lo que el señor ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA aseguran haber sabido por boca de CARLOS ARIEL SERRANO SÁNCHEZ, que, como se dijo, no puede ser tenido como prueba de supervivencia de CARLOS RODRIGUEZ.

Ahora, CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA afirma enfática y categóricamente haber visto a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA con vida custodiado por personal militar saliendo de Palacio; RICARDO GAMEZ MAZUERA se refiere a él como a quien el Coronel PLAZAS VEGA ordenó conducir a las instalaciones de la ESCAB para “*trabajarlo*”, y EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL da cuenta

de las torturas infligidas en las caballerizas de la ESCAB a un hombre que decía ser de la cafetería, de características similares a las de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, quien, por demás, al ser trabajador de la cafetería restaurante del Palacio de Justicia, era para inteligencia militar sospechoso de pertenecer o ser auxiliador del M-19.

Si bien esta evidencia por sí misma no es concluyente en la medida en la que cotejadas cada una de las versiones aisladamente muestran algunas inconsistencias, como que se cuestionaría la versión de SANCHEZ CUESTA por cuanto, si estaba seguro de haber visto salir con vida al administrador de la cafetería, no lo informara inmediatamente a la familia y en cambio procediera a entrar con ellos a buscarlo en las ruinas del edificio y después los acompañara a algunos cuarteles militares a averiguar sobre su paradero, lo que le restaría credibilidad; tampoco se puede desechar de plano, cuando otros elementos de juicio, como la versión de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, que para este Despacho contiene datos fiables, hablan de la conducción de un hombre con características similares a las de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ a las instalaciones de la ESCAB, donde habría sido torturado y a consecuencia de lo cual habría muerto.

Relato que, como ya se dijo en este proveído, corrobora que personas sospechosas de ser guerrilleros fueron llevadas del Palacio a la guarnición militar (donde funcionaba un área reservada a cargo del B-2 para realizar interrogatorios), fueron torturadas y muertas; siendo significativo que la persona descrita por este testigo estuviera relacionada con la cafetería del Palacio de Justicia y sus características se acomoden a las de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA.

Ahora, que no haya una evidencia concreta y clara en cuanto a que el administrador de la cafetería hubiera sido visto en la Casa del Florero, no descarta su salida vivo del Palacio de Justicia, si se tiene en cuenta que no todos los rescatados llegaron al Museo. Algunos en el trayecto fueron introducidos en diferentes vehículos, incluso vehículos militares, como se desprende de la declaración del Cabo TIRSO SÁENZ[200], a quien ya hemos hecho referencia.

Adicional a lo dicho, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA ha sido reconocido en varios videos saliendo del Palacio de Justicia conducido por un miembro del ejército; reconocimientos que el Tribunal Superior de Bogotá en sentencias de segunda instancia, tanto en el caso del Coronel PLAZAS VEGA como en el del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, ha avalado como prueba de la supervivencia del administrador de la cafetería.

Desde noviembre de 1985 ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ sostuvo que vio en la televisión salir del Palacio de Justicia a su hijo, aproximadamente a la una de la tarde del 7 de noviembre, cuando era trasladado por la Plaza de Bolívar hacia la Casa del Florero.

Si bien es cierto en diligencia de reconocimiento sobre unas películas o video casetes realizada el 11 de abril de 1.986 ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ, al interrogársele acerca de si la persona que aparece en el proyector puede ser en realidad su hijo, responde "*No, hoy puedo afirmar que la persona que aparece en el VIDEO, NO es mi hijo CARLOS, ….. inicialmente tuvimos la convicción de que esa IMAGEN correspondía a mi hijo CARLOS. Hicimos venir a su esposa que vive*

[200] TIRSO SAENZ cuenta que al terminar la operación de retoma, sentado en la escotilla de su vehículo le pareció ver el ingreso de civiles en el vehículo Urutú conducido por el Cabo Primero CASTAÑEDA. Que cuando llegaron a la Escuela de Caballería del Urutú descendieron cinco o seis civiles, entre ellos una mujer.

en Pasto y con su colaboración y presencia hemos visto numerosos VIDEOS y FOTOGRAFIAS en Agencias de Prensa y Revistas y el martes de la presente semana 8 de Abril, vimos un Video que tiene TV-HOY …., cuyas tomas corresponden a esta misma salida del PALACIO DE JUSTICIA y en El (sic) pudimos constatar que la persona que habíamos creído que era mi hijo, CARLOS; no es y corresponde a otra persona"; el perito-fotógrafo que participó en la diligencia dejó la siguiente constancia: "*Por cuanto se trata de una filmación y tomas de la misma bastante retirado del sitio de los hechos y no se hicieron en estas tomas más cerca que identificaran plenamente a las personas desaparecidas y que son o que forman parte de esta diligencia, es casi imposible en las graficas que imprimí dar más nitidez a estas tomas por lo que se van a notar menos nítidas en la FOTOGRAFIA, que viéndolas directamente del VIDEO […]*"[201].

Constancia que permitiría advertir la deficiencia de las imágenes sobre las que se llevó a cabo el reconocimiento, por la lejanía de la toma y la falta de nitidez, razón por la cual el testigo, en una muestra de absoluta sinceridad que habla bien de la fiabilidad de sus diferentes dichos, no pudo reconocer a su hijo.

Confirma lo anterior lo señalado por CÉSAR ENRIQUE RODRÍGUEZ VERA, quien al ser indagado respecto a si pudo obtener alguna prueba o indicio que le permitiera establecer que su hermano salió con vida del Palacio de Justicia, manifestó que *"…. hubo algunos videos en lo que parecía verse saliendo del Palacio de Justicia, hacia la Casa del Florero, pero desafortunadamente la calidad de las imágenes no permitieron obtener certeza…* (sic)*"*[202].

No obstante, en diligencia de reconocimiento realizada sobre un DVD suministrado por Televisión Española TVE-Corresponsalía, ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ señala a su hijo

[201] C.O 7 Anexo Instrucción Fl 214
[202] Fl. 3, c.o. 6.

"en el punto 00:10:20, escoltado por un miembro del Ejército, de buzo azul y pantalón gris", ante lo cual la Fiscalía hace constar que *"en el centro de la pantalla el señor Enrique Rodríguez manifiesta que no podría asegurarlo pero la persona que allí aparece se parece mucho a su hijo. La imagen se pasa tres veces desde el punto 00:10:18 hasta el punto 00:10:37 y el declarante insiste en que el parecido es real y que 'cada vez que lo veo más convicción tengo de que puede ser mi hijo'. El parecido también lo pone de presente el Señor Héctor Beltrán."*[203]

En el mismo sentido, al ponerle de presente un DVD *"aportado por TVE"* a CÉSAR ENRIQUE RODRÍGUEZ VERA, se destaca que *"En otro punto de 1:03:50 hasta 1:04:00 sale una persona tomada del brazo por un miembro del Ejército, que el declarante sostiene puede ser su hermano, vestida de pantalón gris y camisa y buso azul, y el Despacho deja constancia que es la misma toma a la que se refirieron el señor Enrique Rodríguez y Héctor Beltrán en la diligencia de reconocimiento realizada en las instalaciones de TVE en donde el primero dijo que podía ser su hijo* (sic)"[204].

CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, en diligencia de reconocimiento sobre el mismo video suministrado por TVE, señala que en el punto 01:03:50 al 01:04:00 el hombre de buzo azul *"podría tratarse de su esposo, por el cabello y la fisonomía de la cara, la estatura, el cuerpo, por la forma de correr (…)"*[205] y en testimonio rendido ante el Juzgado 51 Penal del Circuito el 27 de abril de 2009 asevera que *"en el video que la Fiscalía me hizo reconocer en el 2007 es cien por ciento que CARLOS es quien sale del palacio de Justicia..."*.

Por su parte RENÉ GUARÍN CORTÉS manifiesta reconocer a CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA en el DVD de Patrimonio Fílmico Colombiano en el punto 01:03:52, señalándolo como el

[203] C.O. Anexos 5 folio 156.
[204] Fl. 4, c.o.6.
[205] C.O. Anexos 5, folio 300.

hombre con buzo azul y pantalón gris que es tomado del brazo por un militar saliendo de la portada principal del Palacio de Justicia[206].

Textualmente expresa que "*Esta persona se parece muchísimo a Carlos Rodríguez Vera, por el pelo, el bigote, la forma de caminar, la contextura y la estatura en comparación con quien lo toma del brazo y por lo que se alcanza a apreciar del rostro*". Luego de observar varias veces el video en ese punto manifiesta: "*Para mí, este es Carlos Rodríguez Vera, no se qué dirá la familia, pero para mí es Carlos Rodríguez. Antes no había visto este video, ese video para mí es nuevo* (sic)"[207].

En similar sentido se refiere en reconocimiento llevado a cabo el 16 de enero de 2007 sobre un video obtenido en inspección en la residencia del Coronel PLAZAS VEGA; un video entregado por la señora ANA MARÍA BIDEGAIN DE URÁN y un casete identificado como *"N° 1 de BETA obtenido en inspección a la Procuraduría General de la Nación"*[208].

Sobre el mismo video obtenido en inspección en la residencia del Coronel PLAZAS VEGA[209] también fue reconocido CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA por su esposa, CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, y por LUÍS CARLOS OSPINA ARIAS.

Los reconocimientos han sido fuertemente criticados por la defensa que les resta mérito probatorio, especialmente en aquellos eventos en los que, sobre las mismas imágenes, hay quienes se reconocen a sí mismas o a otras personas.

---

[206] C.O. Anexos 6, folio 25.
[207] Fl. 25, c.o. 6.
[208] Fl. 46 y 49 c.o. 20.
[209] Fl. 53, c.o. 20.

La falta de nitidez, lejanía y rapidez de las tomas, ciertamente dificultan el reconocimiento certero de la identidad de las personas enfocadas por los videos, por lo que no es dable asumir que por sí y en sí mismas esas imágenes constituyan prueba suficiente de la salida con vida de las personas desaparecidas, como tampoco, por las mismas razones, puede admitirse apodíctico que se trate de quienes refutan los reconocimientos asegurando tratarse de ellos o de otros, como lo pretende la bancada de la defensa.

No obstante, para el caso de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA no ha habido absolutamente nadie, sobreviviente a los hechos del Palacio de Justicia, que se identifique en las imágenes en las que se reconoce al administrador de la cafetería por diferentes familiares y conocidos.

Los reconocimientos se han hecho sobre diferentes videos y se refieren sin contradicción alguna a la misma persona, cuyas características, pese a lo argüido por los censores, se ajustan en términos generales a la descripción de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA en cuanto a talla, contextura, morfología, apariencia y particularidades.

Las prendas de vestir mostradas en las imágenes proyectadas no se apartan ostensiblemente de las usadas por el administrador de la cafetería la fecha de los hechos, según la descripción entregada por su cónyuge.

Y aun cuando en un comienzo ENRIQUE ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ sembró una duda respecto al reconocimiento de su hijo, esa situación se comprende, como se dijo, por las deficiencias

de las imágenes que con seguridad han podido mejorarse con el paso del tiempo por la incorporación de nueva tecnología.

Ciertamente obra dentro del plenario un estudio técnico de morfología según el cual no fue posible identificar en los videos a los rehenes liberados, en razón a la mala calidad de las imágenes que no permiten una comparación técnico científica confiable. Sin embargo, esto no descarta la fiabilidad de los reconocimientos realizados por familiares y conocidos.

En punto a esto, vale traer a colación lo precisado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia de segunda instancia en contra del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, en tanto, tratándose de los mismos hechos y sobre la base genérica de la misma prueba, representa un hito importante de cara al valor de la prueba, sin perjuicio de la independencia del juez al abordar su propio estudio del acervo probatorio.

"*…., el conocimiento técnico-científico se rige por principios, métodos y procedimientos objetivos que buscan representar la realidad externa mediante medición y descripción minuciosa de los fenómenos observados. Pero además del conocimiento científico existe el conocimiento común. Este conocimiento común no es técnico-científico sino basado en las reglas de experiencia, y para la jurisdicción es creíble dentro de las prácticas sociales aceptadas, aun cuando no haya podido ser reducido a leyes y protocolos preestablecidos.*

Los instintos, las emociones, los sentimientos, las virtudes, por ejemplo, no son descriptibles mediante estudios de peso y medida, pero continuamente son tenidos en cuenta para las decisiones diarias de las personas y de la justicia. Esa misma ausencia de técnicas exactas para manifestar experiencias tan importantes en la vida como los sentimientos y la emociones, se demuestra en la realidad diaria en la capacidad de reconocimiento de toda persona con sus

familiares y conocidos, porque se basa en la fijación de detalles e impresiones más allá de leyes científicas preestablecidas.

…….

Las personas estamos en capacidad de reconocer a nuestros familiares y conocidos aunque la morfología humana no haya logrado aún reducir esa capacidad a leyes tecno-científicas.

No podremos reducir a datos técnicos los milímetros de separación de los ojos o de la base de la nariz, el volumen de los pómulos, el ángulo de caída de las mejillas, la proporción de la frente con respecto al total del rostro, la curvatura de las cejas, o la tipología de los ademanes y la forma de caminar, pero no dudamos al afirmar, incluso a la distancia, si la persona que vemos es nuestro padre, hijo, amigo o cercano conocido. Todos sabemos que los bebés reconocen prontamente a la mamá, al papá y luego a otros allegados, y que todos los padres y hermanos ya adultos nos reconocemos con una facilidad difícil de justificar científicamente. Esos son campos donde el peritaje, o su ausencia, aporta muy poco a la decisión judicial, y donde el conocimiento vivencial e intuitivo debe ser valorado positivamente dentro de los límites de la razonabilidad común según estas reglas de experiencia".

En ese orden de ideas, a pesar de sus deficiencias, aun cuando por sí solos no son suficientes para acreditar, con certeza, la salida con vida de las personas reconocidas, esos reconocimientos constituyen un elemento de juicio importante, que, en cuanto se ven respaldados por otros elementos o indicios, conducen a esa conclusión.

Así, todo lo dicho, visto y analizado conjuntamente con el acervo indiciario pergeñado, acredita al margen de duda razonable la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, en la medida en la que está suficientemente demostrado que salió con vida de la edificación judicial luego de ser retomada por las fuerzas de

seguridad del Estado; quedó bajo custodia de las fuerzas armadas y desde entonces no se volvió a saber nada de él.

Sobre la desaparición forzada de **BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ**[210], su señora madre, MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ DE BELTRÁN, en declaración del 6 de diciembre de 1985 cuenta que su hijo ingresó a trabajar a la Cafetería del Palacio de Justicia como mesero el 30 de agosto de ese año, y que para el día 6 de noviembre salió de su casa a las ocho y media de la mañana a cumplir sus labores.

En ampliación de declaración ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal el 18 de diciembre siguiente asegura que el 6 de noviembre recibió una llamada de un abogado de apellido *"MELÉNDEZ",* quien le manifestó conocer a su hijo y haberlo visto salir con vida de la edificación.

Sobre esa llamada también declara FANNY BELTRÁN HERNÁNDEZ, hermana de BERNARDO, el 23 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante, señalando que "*… yo recibí una llamada el miércoles por la tarde a la casa, de un señor, un amigo de mi hermano y pregunto por él, y yo le dije que no había llegado y que no sabíamos nada de él y él dijo que no nos preocupáramos, que él tarde o temprano llegaba, porque él lo había visto salir, era un doctor de apellido MELENDEZ, pero yo no lo conozco, tengo entendido que mi hermano lo conocía por cuestiones de trabajo …*"[211].

[210] Hijo de Bernardo Beltrán Monroy y María de Jesús Hernández de Beltrán. Identificado con c. de c. 79.120.331 de Bogotá, había nacido el 10 de Julio de 1961, tenía 24 años de edad cuando el asalto al Palacio de Justicia. Había estudiado mesa, bar y restaurante en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se desempeñaba como mesero en la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia.
De tez morena claro, cejón, fornido, ojos oscuros, cabello negro liso, de 1.68 mts. Llevaba pantalón beige de pana, camisa azul clara con rayas no visibles, manga corta, sweater verde manzana de lana, zapatos negro mocasín, medias blancas, el uniforme constaba de blusa caqui, pantalón y chaleco negro (cuaderno original 6 Anexo de Instrucción, Folio 163).
[211] C.O. 6A Anexo Instrucción Fl 139 (declaración incompleta)

Por su parte, BERNARDO BELTRÁN MUÑOZ, padre de BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, declaró el 18 de diciembre de 1985 y posteriormente ante la Fiscalía el 29 de agosto de 2001,[212] reiterando que su esposa recibió una llamada de un hombre que le dijo que *"no se preocupara que él había visto a BERNARDO cuando lo sacaban del Palacio y se lo habían llevado para la Casa del Florero"*. No obstante, cuenta, posteriormente esa persona llamó a retractarse argumentando que *"seguramente se había equivocado, que estaba muy lejos y que seguro era otra persona"*.

Llamada igualmente relacionada por SANDRA BELTRÁN[213], quien refirió a *"un doctor de apellido Meléndez del fondo rotatorio*", quien dijo que "*…. él estaba en frente del Palacio que lo vio salir, que no demoraba en llegar …*".

Finalmente, en el mismo sentido, OMAIRA BELTRÁN, tía de BERNARDO, aseguró haber visto salir a su sobrino del Palacio en imágenes de un noticiero el 6 de noviembre de 1985[214].

Esas afirmaciones, si bien son creíbles en punto al hecho de haber recibido información de un hombre que identifican como de apellido "MELENDEZ" que trató de tranquilizarlos diciéndoles haber visto a BERNARDO salir con vida de la sede del poder judicial, no son concordantes con manifestaciones posteriores que lo reconocen en videos saliendo del Palacio en la tarde del 7 de noviembre.

Esa inconsistencia, sin embargo, se explica cuando JULIO EFRAÍN MENESES FRANCO, quien entregó a CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ y a su esposa la administración de la cafetería, reconoció que sí habló con los padres de BERNARDO y les dio

[212] C.O. Anexos 1, folio 155.
[213] C.O. Anexos 6, folio 203.
[214] C.O 6 Instrucción Fl 214 y Audiencia Pública sesión 25 del 11 de mayo de 2009.

esperanzas de que hubiera salido vivo. Si bien no confirmó haber visto a BERNARDO BELTRAN salir vivo del Palacio de Justicia, tampoco desmiente haber realizado una manifestación en ese sentido o de alguna manera haber dicho algo que llevó a los familiares de aquel a creer que así había sido, pues manifiesta que él vio desde lejos salir a varias personas, que seguramente se había equivocado, que estaba muy lejos y que seguro era otra persona, siendo por ello seguramente que los familiares de BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ entendieron que éste había salido el 6 de noviembre[215].

No obstante esas inconsistencias, en diligencia realizada el 16 de agosto de 2007, RENÉ GUARÍN CORTÉS reconoce en un video a BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ saliendo del Palacio de Justicia la tarde del 7 de noviembre.

Igual SANDRA BELTRÁN, al observar el video reconoce que *"Ese es Bernardo, Bernardo. Se le ven los pantalones a BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ en el segmento 00:35:38 … digo que veo a una persona de la contextura física de mi hermano y que al ver la toma del tronco hacia arriba por la forma de su pelo, la 'carrera' es decir como se peinaba, las entradas, lo lleva un soldado, lo lleva tomado por el brazo derecho …"*[216].

En la misma imagen CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA también reconoce a BERNARDO BELTRÁN[217], precisando que "*lo veo con un pantalón oscuro, una camisa de cuello para corbata, me parece que llevara un buso de cuello redondo, no podría identificar fácilmente si es un buso o una corbata …".*

[215] F. 264 a 267, cuaderno 7 anexo de instrucción.
[216] C.O. Anexos 20, folio 41.
[217] Ibídem, folio 99.

Al igual que en el caso de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, este reconocimiento no ha sido desvirtuado por persona alguna que asegure con algún grado de probabilidad y sustento que no se trate de BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ quien aparece en esas imágenes o reconozca en ellas a cualquier otra persona.

Por el contrario, el reconocimiento realizado por su hermana SANDRA BELTRÁN, por RENÉ GUARÍN y por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, encierra un buen grado de fiabilidad, dada la familiaridad y el conocimiento que tenían respecto de la persona a quien se refieren, pudiendo captar en conjunto sus características morfológicas y su apariencia, incluso detalles como la forma de su pelo y la forma de peinarlo.

Repárese en cómo CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA dice reconocer a BERNARDO BELTRÁN por su forma de peinarse, la forma de la cara, las cejas, la estatura, la manera de correr; complementando lo dicho por SANDRA que lo reconoce por su contextura, la forma de su pelo, la carrera, es decir como se peinaba, las entradas.

Además, a quien señalan como BERNARDO viste, según lo describe CABRERA GUERRA, pantalón oscuro, camisa de corbata, al parecer buzo de cuello redondo de manga larga o camisa como gris o café, y según lo ve SANDRA BELTRAN, pantalón negro y camisa blanca que se ve como grisácea, y recordemos que el uniforme de los meseros del restaurante cafetería era camisa o blusa caqui o beige, pantalón y chaleco negros, prendas que, salvo el chaleco que no porta la persona del video, se corresponden en alto grado.

En la medida en la que ese reconocimiento no está desvirtuado y se refuerza con los elementos indiciarios señalados a lo largo de este proveído, especial y particularmente con que no hay razón alguna para asumir que BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ no se encontrara en su puesto de trabajo para cuando se inició la toma y por lo tanto permaneció con el grupo de trabajadores de la cafetería, respecto de quienes no hay evidencia concreta, clara y contundente de haber sido conducidos al cuarto piso de la edificación; siendo considerados sospechosos por inteligencia militar de hacer parte o ser colaboradores del grupo insurgente, más aún cuando llevaba poco tiempo vinculado a la cafetería del Palacio; debe concluirse que en efecto salió vivo del edificio judicial, quedó a disposición de las fuerzas militares, como lo muestra el video, y fue desaparecido, pues desde entonces no se volvió a saber nada de su suerte ni de su paradero.

Respecto de la situación de **DAVID SUSPES CELIS**[218], quien se desempeñaba como chef de la cafetería del Palacio de Justicia, no hay discusión en cuanto a que el 6 de noviembre se encontraba en su puesto de trabajo.

Sobre el particular la verdad no se cuenta con mucha prueba de corroboración. Sin embargo, dado el cargo que desempeñaba y la cercanía a la hora del almuerzo, es admisible que en efecto DAVID SUSPES CELIS estuviera al interior de la cafetería al momento de iniciarse la operación subversiva.

---

[218] Hijo de Antonio Suspes y Maria del Carmen Celis de Suspes. Identificado con cc 19.407.779 de Bogotá, nació en febrero de 1959, tenía 26 años de edad cuando el asalto del Palacio de Justicia por el M-19. Casado con Luz Dary Samper Bedoya con quien tenía 1 hija. Era el chef de la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia. Trabajaba hacía poco menos de un año y medio en el mencionado lugar.
El uniforme en el Restaurante- cafetería constaba de pantalón blanco, gorro blanco, chaqueta verde botella. Llevaba vestido de pantalón de paño, mocasines negros, camisa blanca, rayas azules y saco de paño, de 1.66 mts de estatura (Cuaderno original 6 Anexo de Instrucción. Folio 280).

Adicional a esto, vale resaltar que en diligencia de reconocimiento de objetos, llevada a cabo el 12 de enero de 1988 ante el Juzgado 30 Instrucción Criminal Ambulante[219], la señora LUZ DARY SAMPER, esposa de DAVID, reconoció unas tarjetas, algunas fotografías y documentos de identificación a nombre de su cónyuge, señalando que *"Esto hace parte de una billetera que incluso yo se la regalé y las hojitas son las que vienen dentro de los bolsillos plásticos de la billetera con la réplica de la tarjeta Diners. Las fotografías…son, tres corresponden a él, dos corresponden a la hija LUDI ESMERALDA, la otra de la mamá, las de un niño y niña son sobrinos y la foto más viejita es la del papá. Todo esto lo cargaba él dentro de la billetera en los bolsillos plásticos de portar documentos".*

La señora LUZ DARY SAMPER deja *"… constancia de que los anteriores documentos o papeles se encuentran en perfecto estado, sin una mancha"* y que "*estos documentos se encontraban en la billetera que portaba en sus prendas de vestir ordinariamente y las cuales se quitaba para ponerse el uniforme de la cafetería como Chef y por tanto presum(o) que al momento de los hechos estos no los tenía en su poder.*".

Frente a esto el Juez 30 de Instrucción Criminal Ambulante dejó constancia de que las señoras CARMEN CELIS DE SUSPES y MYRIAM SUSPES estuvieron de acuerdo con el reconocimiento hecho por la señora LUZ DARY, precisando *"que los documentos anteriores aparecen anexados al cuaderno original número 1 como folio 0070 escrito a mano el número del folio y no hay ninguna constancia de las razones por las cuales fue anexado, el sitio donde fue encontrado, por cuanto se observó la totalidad del acta de inspección judicial practicada por el Juzgado 2º Especializado y allí no se indica en que sitio del Palacio de Justicia se encontraron estos documentos…"*.

Lo anterior ratifica que DAVID SUSPES CELIS se encontraba en la sede judicial durante los hechos, y refrendaría eventualmente que

[219] C.O 5 Procuraduría Fl 205.

no estuvo en el cuarto piso, pues los documentos se encontraron en perfecto estado, sin una mancha, según lo dejó consignado LUZ DARY SAMPER, aun cuando esto tampoco es concluyente, por cuanto igual fueron encontrados documentos de otros empleados en la cafetería.

Sin embargo llama la atención que fueran puestos de presente a la familia dentro de objetos encontrados en los cadáveres y en los restos de cuerpos que fueron extraídos del Palacio de Justicia, sin existir constancia alguna de las razones por las cuales se anexaron, ni del sitio donde se encontraron, y que tampoco haya referencia de la billetera donde los portaba DAVID SUSPES CELIS.

Eso indicaría que alguien debió extraerlos de la billetera de SUSPES CELIS y colocarlos luego dentro de los objetos encontrados en los cadáveres, y ese alguien muy probablemente tuvo contacto con su dueño, pues si simplemente los hubiera encontrado en la cafetería, dentro de las prendas dejadas allí por el chef al cambiarse de ropa para vestir el uniforme de trabajo, no hay razón lógica ni atendible para que los hubiera dejado con los objetos encontrados en los cadáveres y en los restos de cuerpos sacados de Palacio, sin relación con acta de levantamiento alguna.

De cualquier manera, si en efecto se encontraron esos documentos entre los cadáveres o restos de cuerpos del Palacio, no es prueba, ni siquiera indicio, de la presunta muerte de DAVID SUSPES CELIS en desarrollo de los hechos, pues, primero, no hay razón para que, de ser así, los documentos no estuvieran dentro de la billetera en la que se les cargaba; segundo, si correspondían a un cuerpo incinerado, no se explica que no mostraran rastros del voraz fuego que habría consumido a su portador, y tercero, de corresponder a un cuerpo no calcinado, como sería al no mostrar los papeles señas

del fuego, a más de subsistir la duda por la ausencia de la billetera, es evidente que el cuerpo hubiera sido perfectamente reconocible y es claro que eso no se dio, como tampoco se justificaría la ausencia de un acta de levantamiento que los relacione.

Lo que denota el encontrar esos documentos entre los objetos relacionados con restos y cadáveres del Palacio, es una posible intensión de crear confusión en punto a la suerte corrida por DAVID SUSPES CELIS, tratando de sembrar la idea de que en efecto murió al interior de la edificación.

En ese contexto, así se estime que no es evidencia concluyente, no puede ignorarse que LUZ DARY SAMPER dio a conocer que el 15 de noviembre de 1985 la señora MARIA DEL CARMEN CELIS, madre de DAVID, recibió una llamada en la que una persona que aseguró ser del F-2 le manifestó que unos soldados habían sacado a los de la cafetería hacia la Casa del Florero y finalmente los habían llevado a la Escuela de Caballería en Usaquén, donde habían sido torturados.

Llamada que igual recibió MARÍA DEL PILAR NAVARRETE URREA, esposa de HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, corroborando lo comunicado por el informante anónimo y mostrando cómo, apenas unos pocos días después de sucedidos los hechos, cuando las familias comenzaban a tratar de obtener algún dato sobre sus seres queridos, ya circulaba el “rumor” sobre las torturas a las que se estaría sometiendo a los empleados de la cafetería, coincidiendo, significativamente, con el hecho de pesar sobre ellos efectivamente la sospecha, desde un comienzo, de ser auxiliadores del grupo de asaltantes y la “casualidad” de no aparecer, ni siquiera dentro de los muertos reconocibles, ninguno de ellos.

Una vez más se ve cómo, tan sólo pocos días después de culminada la retoma del Palacio de Justicia, familiares de los desaparecidos reciben información, incluso sin solicitarla, sobre el traslado a sedes militares y las torturas a las que se estaría sometiendo a sus seres queridos. Traslados a la ESCAB y a otras instalaciones militares y de policía y torturas que está plenamente probado dentro del expediente efectivamente se sucedieron respecto de personas consideradas sospechosas de pertenecer o auxiliar al M-19, y, volvemos a recordar, esa condición la tenían de antemano los miembros de la cafetería del Palacio.

Ahora, la señora CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA reconoció a DAVID SUSPES CELIS durante la exhibición de un video obtenido en inspección en la residencia del Coronel PLAZAS VEGA, así como en el entregado por la señora ANA MARÍA BIDEGAIN DE URÁN. Al observar las imágenes, la testigo señala que *"Hay otra persona que se me hace parecida pero no he podido ubicarla bien, que viene después de CARLOS en el punto 00:36:01. Este se me parece un poco a David Suspez Celis, mientras que frente a los demás no tengo duda, lo veo que lleva camisa de color camel y pantalón color camel, lleva corbata café, lleva un reloj en la muñeca izquierda, me parece que sale fuertemente vigilado por los soldados, con los dos brazos en alto y parece ser que lo suben a un vehículo como rojo, porque abren la puerta en ese momento… David Suspez era el chef, se caracterizaba porque siempre vestía elegante, y también sale en el mismo grupo de rehenes* (sic)"[220].

Ese reconocimiento, al que en al menos tres decisiones judiciales de primer y de segunda instancia se le ha dado fiabilidad, corroboraría definitivamente la salida vivo de SUSPES CELIS del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.

[220] Fl. 53 y 54, cuaderno original 20.

No obstante, en declaración ante este Despacho, surtida en sesión de audiencia pública del 24 de enero de 2012, HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, citador de la Sala Constitucional de la Corte para la época de los hechos y para cuando rindió declaración en audiencia Juez de la República, se reconoció en esa misma imagen saliendo del Palacio de Justicia escoltado por dos soldados.

Analizada la secuencia fílmica, se muestra más razonable que un trabajador de oficina use corbata en su jornada laboral, como la observada en la imagen, que el chef de un restaurante, por más costumbre que tenga de vestir elegante.

A más de esto, recordemos que la esposa de DAVID SUSPES refirió que él se cambiaba sus prendas de vestir ordinariamente para ponerse el uniforme de la cafetería como chef y ese uniforme constaba de pantalón blanco, gorro blanco y chaqueta verde botella, según constancias procesales.

Así las cosas, si el personal de la cafetería fue sorprendido por el asalto guerrillero en plena faena diaria, es de presumir que el chef del restaurante vistiera su uniforme al salir del edificio, aun cuando esto tampoco es una verdad absoluta, pues bien pudo cambiarse a lo largo de la jornada.

CORREA TAMAYO desde su declaración ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal el 10 de diciembre de 1985 narró cómo, al salir del edificio judicial, un soldado le dijo a otro “*este es uno de ellos*”, por lo que lo encañonaron y empezaron a empujarlo, tratarlo mal de palabra y le pegaron una patada, y encañonado lo llevaron a la

Casa del Florero[221]; escena que encaja en lo mostrado por el video en el aparte relacionado.

Las manifestaciones de HECTOR DARIO CORREA TAMAYO y el análisis de las imágenes donde se reconoce a sí mismo saliendo del edificio de la justicia, no solo ponen en duda si no que descartan casi con seguridad que sea DAVID SUSPES CELIS quien aparece y es reconocido por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA en el video.

En esas condiciones, la no fiabilidad del reconocimiento realizado por CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA respecto de DAVID SUSPES CELIS y, por el contrario, la refutación que de ello realiza HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, demerita la convicción de su salida vivo del Palacio de Justicia.

No obstante, subsisten esos otros elementos de juicio que, aun cuando no son concluyentes, tampoco permiten aseverar su deceso en los hechos ocurridos al interior del Palacio de Justicia, menos cuando se les examina asociados con la demostración al margen de toda duda de la efectiva ocurrencia de desapariciones forzadas, incluidas las de IRMA FRANCO y de personal de la cafetería como CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRÁN; la sospecha que pesaba sobre los empleados de la cafetería como presuntos auxiliadores de la guerrilla; la existencia de órdenes perentorias y determinantes con relación al personal "*especial*"; el demostrado tratamiento aplicado a los señalados como "s" o sospechosos; la demostrada práctica de torturas a personal sacado del Palacio de Justicia; la muy reducida posibilidad de haber muerto en el cuarto piso de la edificación y de que su cuerpo hubiera sido entregado equivocadamente, y el descarte en un 97.7% de

[221] Folio 118 Anexo 56 de Instrucción.

encontrar su cuerpo dentro de los exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur.

Ciertamente en casos como el estudiado difícilmente se va a contar con prueba directa, clara y contundente de la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado y de su posterior desaparición, menos en hechos tan complejos y rodeados de tantas arbitrariedades e irregularidades como los sucedidos en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985; por lo que, en principio, no se puede esperar ni exigir, para dar por acreditada la desaparición forzada de las personas a las que se refiere este asunto, que todas ellas aparezcan y sean reconocidas en los videos existentes.

Aquí son muchas coincidencias o casualidades a la vez para ser ignoradas: los de la cafetería eran considerados sospechosos; ninguno fue visto durante el desarrollo de los hechos; todos habrían muerto al interior del Palacio de Justicia; todos habrían quedado calcinados; ninguno pudo ser reconocido al menos con un grado de probabilidad; ninguno apareció dentro de los restos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur y todos corresponderían a malas o equivocadas entregas.

Sin embargo, todo ello abre un margen de probabilidad que, aun siendo importante, no es suficiente para predicar la certeza requerida cuando de estudiar responsabilidades penales individuales se trata, pues para ello se exige partir de la demostración, al margen de toda duda, de la existencia del hecho imputado, no de la altamente probable existencia del comportamiento punible.

En ese orden de cosas, considera el Despacho que, a pesar de concurrir elementos de juicio significativos indicando la probabilidad de que DAVID SUSPES CELIS efectivamente haya podido sobrevivir a los hechos, no hay base probatoria objetiva para inferir al margen de toda duda que en efecto salió con vida de la edificación quedando bajo el control del Ejército y que fue desaparecido forzadamente.

HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES[222] era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia desde hacía un año y ocho meses aproximadamente y el 6 de noviembre de 1985 salió hacia su sitio de trabajo a eso de las 6 de la mañana, como acostumbraba hacerlo, pues residía en Soacha.

En declaración rendida el 29 de agosto de 2001 MARÍA DEL PILAR NAVARRETE URREA, esposa de JAIME BELTRÁN FUENTES[223], aseguró que pasados los hechos habló con una persona que trabajaba en una cafetería auxiliar del Palacio de Justicia atendiendo a los magistrados, quien le contó que el 6 vio a su esposo *"como a las once y diez de la mañana en la Cafetería del Palacio de Justicia…".*

Esta misma testigo, el 3 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante, dio a conocer que "*el viernes 15 de noviembre, me llamaron a las siete de la noche un hombre, dijo que él pertenecía al B-2 y que como podía comprender no me podía suministrar el*

---

[222] Hijo de Héctor Jaime Beltran y Clara Isabel Fuentes de Beltran. Identificado con c. de c. 19.329.037 de Bogotá, nació el 18 de septiembre de 1957 en Sahagun-Cordoba, tenía 28 años de edad cuando el asalto al Palacio de Justicia. Casado con Maria del Pilar Navarrete con quien tenía 4 hijas, se desempeñaba como mesero en la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia.
De tez morena, delgado, ojos cafés, lunar grande en el brazo derecho y tatuaje de un indio en ese mismo brazo, dientes superiores picados, cabello castaño oscuro crespo. Vestía chaqueta azul y blanco gamuza impermeable, pantalón paño color azul oscuro, zapatos negros, medias azules oscuras, camisa blanca. El uniforme de trabajo constaba de blusa caqui, pantalón y chaleco negro (folios 37 y 113 Cuaderno Original 6 A Anexos de Instrucción).
[223] C.O. Anexos 1, folio 162.

nombre, pero que en el Cantón Norte se encontraban detenidos los de la cafetería, me dijo los nombres de los de la cafetería, que no estaban todos, faltaban dos mujeres, una que estaba embarazada, ROSITA y GLORIA y me dijo que ellos habían hablado con él que tenían grabadas las voces y que ese casete lo tenía JUAN GUILLERMO RIOS que se lo pidiera a él", cuenta que "*la misma llamada se la hicieron a doña CECILIA la esposa del administrador y a LUZ DARY la esposa del chef*,….".

Cuenta que LUZ DARY la llamó esa misma noche para comentarle lo de la llamada y aunque fueron al Noticiero de JUAN GUILLERMO RIOS éste no tenía el anunciado casete. Resalta que de la comunicación le llamó la atención que el interlocutor "*…. dijo HECTOR JAIME BELTRAN JIMY, a él todos le dicen JIMY, pero en la prensa nunca ha salido así, dijo JIMY, dijo dos veces …*"[224]. Versión que reiteró en su exposición de agosto 29 de 2001.

CLARA ISABEL FUENTES DE BELTRÁN[225], madre de HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, señala que durante los días de la toma no recibieron información sobre su hijo. Que el 8 de noviembre su otro hijo, MARIO DAVID, para ese entonces miembro del DAS, ingresó a la cafetería del Palacio de Justicia y encontró en el baño la cédula de su hermano. Asegura que ella vio en los noticieros cuando *"salían unos de la cafetería uniforme de pantalón negro, camisa blanca y chaleco negro"*, y, según dice, esas mismas imágenes las volvió a ver en unos videos que le exhibieron en los Juzgados de Paloquemao.

Por su parte, HÉCTOR JAIME BELTRÁN, padre[226], aseguró haber recibido varias llamadas anónimas informándole que su hijo *"había sido llevado a las Caballerizas del Cantón Norte donde los torturaron para*

[224] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 35
[225] C.O. Anexos 5, folio 116.
[226] C.O. Anexos 1, folio 157.

hacerles confesar cosas que ellos no tenían la menor idea …", y cuenta que incluso después de un año de sucedidos los hechos lo llamaban y le "*….. pegaban unas insultadas de padre y señor mío. Que dejara de joder, que sabían donde estudiaban mis hijas, que ellos ya estaban fritos, voces anónimas que yo no podría identificar"*.

Según este testigo, su esposa CLARA ISABEL FUENTES DE BELTRÁN *"reconoció a su hijo en un video que poseía el abogado Eduardo Umaña, y así lo declaró bajo la gravedad del juramento pero que el mismo desapareció y era de propiedad del periodista Jorge Enrique Pulido …".*

En este caso subsisten elementos de juicio importantes para, analizados a la luz del compendio indiciario, dar por sentada la desaparición forzada de HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, tal como se precisó respecto de DAVID SUSPES, fundamentalmente con base en las llamadas recibidas por sus familiares, tanto para referirles la suerte que estaban sufriendo como para intimidarlos y hacerlos desistir de sus esfuerzos por saber algo de él.

Sin embargo, a más que los reconocimientos supuestamente realizados por la señora madre no han podido ser corroborados, pues las imágenes relacionadas no se han localizado en los videos examinados dentro de este expediente y el del Dr. UMAÑA no pasó de ser una referencia, hay un hecho importante de necesaria consideración de cara a obtener certidumbre sobre la sobrevivencia de HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES.

Su hermano MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, el 20 de enero de 1986, declaró ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante, y señaló: "*El día 6, siendo aproximadamente las doce y media a una de la tarde, me hice presente en la Casa del Florero con el fin de saber si en el transcurso del tiempo transcurrido desde la Toma del Palacio hasta cuando yo*

llegue, habían evacuado personal de la cafetería, la cual obtuve respuesta negativa por lo que me quede hasta el día siguiente jueves 7 de noviembre, siendo aproximadamente las cuatro y media de la tarde […] me entrevisté con el que estaba dirigiendo la evacuación del personal y tomando los diferentes datos biográficos de los que ya estaban en la Casa del Florero, que era personal del F-2, del DAS y del Ejercito. Estuve hablando con personal del aseo y de las diferentes oficinas del primero y segundo piso del Palacio. Con el Coronel Sánchez del Ejercito […]"[227].

Versión ratificada el 10 de abril de 2006 ante la Fiscalía[228], donde agrega que abandonó sus pesquisas debido a *"llamadas anónimas amenazantes y seguimientos y para evitarle otra desaparición a mi madre, dejé el asunto tal como está ahora, en nada."*

MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, siendo para noviembre de 1985 miembro del DAS, estuvo desde aproximadamente la una y treinta de la tarde del 6 en el lugar de los hechos, específicamente en la Casa del Florero, pendiente de su hermano, indagando con el personal del F-2, del DAS y del Ejército e incluso con el Coronel SANCHEZ, según dice, y permaneció allí hasta las cuatro de la tarde del siguiente día, pese a lo cual no vio nunca a HÉCTOR JAIME ni supo nada de él.

Esto indicaría, o que su hermano no salió del Palacio de Justicia o que, a diferencia de lo ocurrido con otros empleados de la cafetería como CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ y BERNARDO BELTRAN, no fue sacado por la puerta principal del edificio y conducido hacia el Mueso del 20 de Julio; situación que no encuentra a primera mano una explicación razonable si, como se ha sostenido, se presume que todos los empleados de la cafetería en principio estarían reunidos y por lo tanto es de esperarse que salieran juntos, a no ser

[227] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 115
[228] C.O. Anexos 5, folio 122.

que por algún motivo se dispersaran al interior de la edificación durante el desarrollo de los acontecimientos; posibilidad no descartada en el plenario con la suficiente certeza probatoria, impidiendo optar por alguna de las dos alternativas con el suficiente grado de seguridad que supere una duda razonable.

Es que, si no existiera evidencia objetiva, razonablemente solida, mostrando la salida de algunos de los del personal de la cafetería del edificio judicial la tarde del 7 de noviembre, como el caso de RODRIGUEZ VERA y BELTRAN HERNANDEZ, la cadena indiciaria cobraría una inusitada fortaleza para brindar conocimiento sobre la suerte corrida por todos ellos, en la medida en la que el hecho indicador se mantendría inalterado en sus características circunstanciales y aplicando idéntica inferencia lógica o regla de experiencia conduciría a un mismo hecho indicado. Pero al encontrar esa clase de prueba, como algunas imágenes de video a las cuales se les puede asignar un considerable grado de fiabilidad, las circunstancias que caracterizan al hecho indicador varían y con ello la inferencia razonable derivada del hecho indicador se debilita en el grado de probabilidad, al abrir un abanico de posibilidades situacionales, cuando no todos los casos comparten identidad circunstancial total.

Es decir, si no todos, o mejor, si algunos de los empleados de la cafetería salieron la tarde del 7 de noviembre por la puerta principal del edificio, es porque probablemente no estuvieron todos concentrados en un mismo lugar durante el desenvolvimiento de los hechos o, estándolo, no todos sobrevivieron a los mismos y por lo tanto no puede deducirse que todos necesariamente corrieron la misma suerte.

Esa indefinición no permite asegurar, con base en los elementos de juicio suministrados por el expediente, que HECTOR JAIME BELTRÁN FUENTES salió vivo del Palacio, pero tampoco dar por hecho su muerte al interior de la edificación, por lo cual no es dable declararlo como desaparecido forzadamente.

Sobre **LUZ MARY PORTELA LEÓN**[229], su señora madre, ROSALBINA LEÓN[230], contó que la reemplazaba desde octubre de 1985 en su oficio de lava platos en la cafetería y el 6 salió como de costumbre a trabajar y ese día llevaba puesto un vestido de fondo azul y rayas negras, un saco rojo en lana y medias veladas, un bolso negro grande y otro pequeño.

Al igual que de sus compañeros de labores, de LUZ MARY PORTELA LEÓN es factible asegurar su presencia en el lugar de trabajo para cuando comenzaron las hostilidades, dada precisamente la tarea desempeñada al interior de la cafetería y la cercanía de la hora de atender los almuerzos.

Igual es de aceptarse que por su ocupación en el servicio de aseo de los utensilios de cocina no vistiera las prendas de calle y en cambio utilizara el uniforme propio de esas tareas. Ha de resaltarse, así mismo, que LUZ MARY PORTELA era una de las empleadas de la cafetería menos reconocidas por personas externas, ajenas a la planta de personal del restaurante, no sólo por cuanto llevaba poco tiempo reemplazando a su señora madre, sino por no ejercer su labor a la vista del público; circunstancias que ciertamente dificultan encontrar prueba directa sobre su situación en el desarrollo de los acontecimientos.

---

[229] Hija de Rosalbina León (Fallecida) y Eriberto Portela Casalimas. Identificada con cc 20.885.606 de San Bernardo (Cundinamarca), nació en diciembre de 1958, tenía 27 años de edad cuando el asalto al Palacio de Justicia. Reemplazaba a la señora Rosalbina León en el lavado de platos en la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia.
Delgada, de tez blanca, de 1,50 mts. de estatura, cabello castaño claro recién cortado estilo hombre, ojos claros, lunar pómulo derecho cerca de la oreja, solo contaba con tres molares superiores el resto era postizo. Llevaba vestido azul con rayas negras, saco rojo lana, medias veladas, bolso negro (Cuaderno Original 6 Anexo Instrucción. Folio 195).
[230] Fl. 195 – 198 c. anexo 6.

No obstante, ese hecho de llevar muy poco tiempo al servicio de la cafetería se constituye de por sí en un indicador importante para tratar de esclarecer la suerte corrida por ella, pues la coloca, de cara a inteligencia militar, en un alto grado de sospecha de ser integrante o auxiliadora del M-19; rótulo de por sí colgado de antemano al personal de la cafetería por parte de las fuerzas armadas y que se hacía más relevante por circunstancias especiales como una vinculación relativamente reciente.

Dentro del expediente no hay evidencia directa que señale, con nombre propio, a LUZ MARY PORTELA LEÓN saliendo con vida de la sede de los Altos Tribunales. Lo más próximo a una prueba de su salida viva de los hechos se encuentra en la declaración vertida por la periodista JULIA ALBA NAVARRETE MOSQUERA[231], para ese entonces reportera judicial de la cadena radial Caracol, específicamente del Noticiero “Alerta Bogotá”.

Señala esta testigo que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 cubrió la noticia y específicamente el miércoles 6, como a la una o dos de la tarde[232], cuando salió el primer grupo de rehenes del Palacio de Justicia, se *“coló”* en la fila de liberados e ingresó a la Casa del Florero, y afirma que en ese grupo de personas vio a una “*niña de la cafetería de delantal amarillo que estaba como herida en un brazo, a ella también la llevaban para el segundo piso*”[233] y al ser concretada sobre la razón por la cual afirma que esa persona era empleada de la cafetería del Palacio de Justicia aseguró reconocerla “*por el uniforme que llevaba puesto, el delantal amarillo que usaban ellas*”[234]*.*

En su declaración ante la Fiscalía en julio de 2006 dijo que en la fila de liberados venía un hombre alto, negro, haciendo la señal de la victoria, y una o dos personas atrás iba la mujer con el uniforme de

[231] Declaración del 13 de enero de 1986 ante la Comisión Especial de la Procuraduría, vista a folio 92 al 110 del cuaderno 49 Anexo de Instrucción, ratificada el 5 de julio de 2006 ante la Fiscalía General de la Nación, a folio 209 y siguientes del cuaderno 5 de Instrucción.
[232] Folio 217 cuaderno 5 de instrucción.
[233] Folio 93 al 94 cuaderno 49 anexo de instrucción.
[234] Folio 100 ibídem.

la cafetería, a quien describió como delgadita, de estatura regular, vistiendo delantal amarillo, herida en un brazo.

Manifiesta saber que esa mujer era de la cafetería porque todos los días iba a ese lugar y trataba con la gente de allí, pero no la podría reconocer pues no la vio "*tan de frente*", sólo de "*reojo*", pero, aun cuando no puede asegurar que trabajara en la cocina, "*el uniforme es de los que llevan las personas en las cafeterías en la cocina*"[235].

Asegura JULIA NAVARRETE que a esa mujer la subieron al segundo piso de la Casa Museo luego de examinar unos álbumes con los que se cotejaba al personal liberado del Palacio de Justicia.

A partir de la declaración de JULIA ALBA NAVARRETE ciertamente se puede asumir que en efecto la persona a la que se refiere correspondería a LUZ MARY PORTELA LEÓN, si se tiene en cuenta que, a más de ella, el personal femenino de la cafetería principal del Palacio de Justicia estaba compuesto por ANA ROSA CASTIBLANCO, ayudante del chef, GLORIA ESTELLA LIZARAZO, encargada del autoservicio, y CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTES, cajera en reemplazo de CECILIA CABRERA.

JULIA ALBA NAVARRETE conocía bastante bien a la mayoría de empleados de la Cafetería del Palacio de Justicia por cuanto casi todos los días almorzaba en ese lugar y el 6 de noviembre vio al Administrador de la Cafetería cumpliendo con sus labores, así como también a la cajera que "*era una niña joven de pelo cortico más bien gordita, estudiante de sociología de la Nacional…*"[236].

De manera, la empleada de la cafetería descrita por JULIA ALBA NAVARRETE difícilmente podía ser GLORIA ESTELLA LIZARAZO,

[235] Folio 216 cuaderno 5 de Instrucción.
[236] Folio 99 cuaderno 49 anexo de instrucción.

pues atendía el autoservicio y por tanto es factible que la hubiese identificado en concreto al verla en la fila de rescatados del edificio. Tampoco se trató de CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, dado que ese mismo día la había visto en la mañana atendiendo su puesto de cajera, de modo que fácil le habría quedado reconocerla de manera específica, a más que no hay evidencia en cuanto a que, como cajera, la señora GUARIN CORTES utilizara uniforme en sus tareas cuotidianas y menos uno similar al usado por las empleadas de la cocina, y, definitivamente, no era ANA ROSA CASTIBLANCO, pues de conformidad con la evidencia procesal murió calcinada en el cuarto piso de la edificación.

Ciertamente la referencia hecha por JULIA ALBA NAVARRETE no es concluyente ni asertiva en sí misma, por cuanto no conocía a LUZ MARY PORTELA LEÓN al ser una trabajadora de adentro, de la cocina, no expuesta a la vista del público, con poco tiempo de vinculación, y, como ella misma lo reconoce, además, no la vio muy bien. Sólo de reojo.

De otro lado, no se puede tener como corroboración de identificación lo sostenido por otros deponentes como TULIO CHIROLLA ESCAÑO, CARLOS ARIEL SERRANO y ORLANDO ARRECHEA OCORO, en tanto, si bien coinciden en haber visto también a un hombre joven, alto y de color, y los dos primeros en que al parecer la mujer estaba herida, ninguno siquiera asegura haber visto ni describe a una mujer con características que eventualmente la relacionaran como trabajadora de la cafetería, ni expresa ni tácitamente, e incluso se llegan a apartar sustancialmente de la descripción vertida por NAVARRETE MOSQUERA.

CARLOS ARIEL SERRANO, en declaración del 27 de enero de 1986, dijo haber visto cuando la Policía subió al segundo piso a una mujer herida y a un moreno alto, señalando que ella iba vestida de bluejean o pantalón oscuro y con blusa o atuendo de color amarillo quemado, sin poder precisar concretamente la clase de atuendo. Descripción que a primera vista no encaja con la vestimenta de una trabajadora de la cocina de una cafetería.

Nótese cómo JULIA ALBA NAVARRETE, quien vio a la mujer tanto en la fila de rescatados como en el Museo del 20 de Julio, no refiere pantalón alguno en las prendas de vestir descritas sino de "*… uniforme … de los que llevan las personas en las cafeterías en la cocina*", siendo bien diferente un delantal a una blusa o a un chaleco largo, como describe el uniforme CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA al tratar de acomodar la descripción hecha por ARIEL SERRANO a la que podría ser la vestimenta de LUZ MARY PORTELA LEÓN.

Por su parte, ROSALBINA LEÓN DE PORTELA, mamá de LUZ MARY, el 25 de noviembre de 1985 señaló que el uniforme que usaban en el trabajo era un delantal de color habano, hasta la cintura y amarrado por detrás con un cordón, controvirtiendo a CECILIA CABRERA en cuanto a que la prenda de trabajo fuera como un chaleco largo que eventualmente pudiera confundirse con una blusa, como al parecer le habría ocurrido a CARLOS ARIEL SERRANO.

Ahora, la descripción que realizó CARLOS ARIEL SERRANO, asumiendo que JULIA ALBA NAVARRETE omitió hacer referencia al pantalón que vestía la mujer que relacionó como de la cafetería y que ambos se refieren a la misma persona, podría constituirse fundamental para identificar al margen de duda a LUZ MARY PORTELA LEÓN, atendiendo que el 30 de enero de 1986 su señora

madre, interrogada respecto a si, además del delantal, su hija usaba otra ropa para trabajar, contestó: "*Sí señora, esa semana ella se trajo un bluyín en mitad de uso, de manga entubada, la camisa si no me puedo acordar cuál sería, y ella o ahí a uno le daban un zapato escotado como un tenis para trabajar*". Sin embargo, recordemos que la misma señora ROSALBINA LEÓN DE PORTELA inicialmente había contado que ese día su hija llevaba puesto un vestido de fondo azul y rayas negras, un saco rojo en lana y medias veladas; prendas por completo diferentes a las vistas por el Dr. SERRANO en la mujer herida que observó en la casa Museo junto al hombre joven, alto, de piel negra.

Así, no puede tomarse la versión de CARLOS ARIEL SERRANO como prueba de identificación de LUZ MARY PORTELA LEÓN, o al menos se abre una duda importante, cuando la misma señora madre de la desaparecida no es precisa en cuanto a la forma de vestir de su hija al salir de su casa el día 6 de noviembre.

Tampoco el dicho del Dr. TULIO CHIROLLA ESCAÑO sirve de fundamento de individualización de LUZ MARY PORTELA LEÓN, pues este testigo, rescatado hacia las tres de la tarde del primer día, asegura haber visto cuando personal de civil y uniformado sube a dos o tres personas al segundo piso de la Casa del Florero, "*… eran dos o tres sospechosos entre ellos una mujer que si mal no recuerdo iba como herida en un brazo, no le pude apreciar la cara, la llevaban cogida del pelo y rodeada por cuatro miembros de las fuerzas militares que impedían apreciarla bien, además la llevaban a toda carrera, era joven, más bien bajita. Otra de las personas que vi que subieron al segundo piso de este grupo de tres, se trataba de un muchacho joven, alto, de piel morena, que también lo pasaron a las carreras…*".

Aparentemente el Dr. CHIROLLA se estaría refiriendo a las mismas personas, al hacer mención a la mujer bajita, al parecer herida en un

brazo, y al joven alto de piel morena; aun cuando hacia las tres de la tarde, cuando él fue rescatado, superpuestamente ese episodio ya habría pasado, si atendemos que JULIA ALBA NAVARRETE MOSQUERA refiere que ella se infiltró en la fila del primer grupo de liberados entre la una y las dos de la tarde.

De cualquier manera, esa versión no suministra elemento de juicio alguno que permita ratificar que en efecto la mujer vista por el deponente corresponda a LUZ MARY PORTELA LEÓN, cuando ni siquiera aporta una descripción aproximada de su forma de vestir y, por supuesto, menos la relaciona con personal de la cafetería.

Esta versión sí recuerda que, como está probado dentro del expediente, en la tarde del 6 de noviembre, a eso de las cuatro, efectivos de las fuerzas de seguridad, vestidos de civil y uniformados, condujeron al segundo piso de la Casa Museo a un grupo de tres personas consideradas sospechosas: una mujer y dos hombres. La mujer, joven, era llevada cogida del pelo y estaba descalza y uno de los hombres era de origen costeño. Se trataba de YOLANDA ERNESTINA SANTODOMINGO ALBERICCI, EDUARDO ARTURO MATSON OSPINO y JULIO ROBERTO CEPEDA, redactor de LEGIS[237].

Sin poder asegurar categóricamente que sea a estas tres personas a las que hace referencia el testigo, sí es significativa la similitud de la escena y la correspondencia de tiempo; permitiendo advertir el alto grado de probabilidad de ser ese episodio el percibido por el testigo y por ORLANDO ARRECHEA, quien declara haber visto a un joven alto negrito y a la muchacha bajita sin zapatos.

[237] Anexo 3 caja 4, IP 071 folio 469 a 472. Folios 123 a 127 cuaderno 2 cofac anexo. Este testigo narra cómo lo confundieron con un guerrillero y el trato que le dieron al igual que a dos muchachos que decían estudiar en la Universidad Libre.

No dudamos que la periodista JULIA NAVARRETE haya visto en la fila de rescatados del Palacio de Justicia a una mujer vistiendo uniforme como el usado en las cocinas de cafetería; pero la inferencia razonable sobre exclusión de posibilidades de confusión con alguna otra empleada de la cafetería no es suficiente, a juicio de este Despacho, para dar por demostrada la salida viva de LUZ MARY PORTELA LEÓN y su subsecuente desaparición forzada, en la medida en la que no hay ningún otro elemento de convicción objetivo, claro y concreto para refrendar esa inferencia de identificación.

Menos sólida es esa inferencia cuando nuevamente se rompe la premisa según la cual, en principio, todos los empleados de la cafetería deberían estar congregados en un mismo grupo y como tal era de esperarse siguieran un mismo curso de acontecimientos, y no habría entonces una explicación clara para entender que LUZ MARY PORTELA LEÓN, a diferencia de sus compañeros de labor, saliera a primeras horas de la tarde del 6 mientras los otros al parecer permanecieron hasta la tarde del día siguiente.

De otro lado, la descripción realizada por JULIA ALBA NAVARRETE MOSQUERA es marcadamente general, no individualiza en modo alguno a la persona y no se intentó despejar la posibilidad de confusión con alguna de las señoras que, desde una pequeña cafetería ubicada en el sótano, servían tintos a las oficinas de los Magistrados y que por su uniforme podían eventualmente confundirse con trabajadoras de la cafetería, como se evidencia, a modo de ejemplo, en la versión de HEMAN LOPEZ LOPEZ, para ese entonces cabo segundo de la Policía Nacional, miembro del grupo GOES que asaltó la edificación por la terraza, y cuenta cómo "*hubo un momento, cuando yo me encontraba en la terraza, sacaron a la*

terraza dos señoras, me parece que era las que atendían la cafetería, … no las ví bien, ellas decían que eran del aseo o de la cafetería"[238].

En esas condiciones, para este Despacho no es posible asegurar, al margen de toda duda razonable, que LUZ MARY PORTELA LEÓN salió viva del Palacio de Justicia bajo el control del Ejército y está desaparecida forzadamente.

De **CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS**[239] se sabe que era licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y estaba haciendo el reemplazo de CECILIA CABRERA en la caja de la cafetería por licencia de maternidad de ésta, llevando poco más de un mes en el cargo. Según lo cuenta su señora madre, ELSA MARÍA OSORIO DE ACOSTA[240], para el día 6 de noviembre de 1985 su hija tenía 35 días laborando en la Cafetería del Palacio de Justicia.

Esa triple condición de ser una profesional licenciada en Ciencias Sociales, recientemente vinculada a la cafetería, en el cargo de cajera, hacía de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN un sujeto especial para la inteligencia militar.

Así quedó patente en la declaración rendida por su hermano CARLOS LEOPOLDO GUARÍN CORTES el 18 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante, donde

---

[238] Folio 219 Original Anexos de Instrucción N° 56.

[239] Hija de José Guarín y Elsa María Osorio de Acosta (Fallecidos). Identificada con c.c 51.599.887 de Bogotá, tenía 26 años cuando el asalto al Palacio de Justicia por el M-19. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. Estaba haciendo un reemplazo como cajera de la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia. Llevaba poco más de un mes en el cargo.
De tez trigueña, tenía cabello corto castaño oscuro y rayitos, robusta, ojos grandes, mancha en forma de mapa mano izquierda, prótesis dental. Vestía falda escocesa café oscura líneas horizontales beige, blusa rosada suave (o habano) encaje claro medias beige cartera beige (Cuaderno original 1 anexo de instrucción folio 182; Cuaderno original 6 A anexo de instrucción folios 40 y 106)

[240] C.O. Anexos 1, folio 152.

manifestó: "*hablé personalmente con el Coronel … SANCHEZ quien había tenido a cargo los civiles en la Toma del Palacio, éste Coronel me informó que no había nadie detenido allí y miró unas listas donde estaba la relación de las personas que habían sido llevadas a la Brigada de Institutos Militares, pero no aparecía el nombre de mi hermana, me comentó que para ellos era un enigma las personas de la cafetería, pues no aparecían por ningún lado y que además le parecía raro que el Administrador, pues, un estudiante de derecho y la cajera mi hermana una licenciada en Ciencias Social, y estuvieran en ese trabajo …*"[241].

Como todos los demás miembros del equipo de trabajadores de la cafetería principal del Palacio de Justicia, CRISTINA DEL PILAR GUARÍN estaba presente en su puesto el 6 de noviembre, donde fue vista poco antes de iniciarse la acción subversiva por JULIA ALBA NAVARRETE MOSQUERA, el Dr. RAMIRO BORJA ÁVILA y por JOSELIN SANCHEZ ALVARADO.

Después de esto, no se volvió a saber nada de ella y su cuerpo no apareció dentro de los restos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur y procesalmente no se conoce evidencia alguna que la relacione con los cuerpos incinerados correspondientes a eventuales entregas equivocadas.

El señor defensor del Coronel SANCHEZ RUBIANO hace referencia a una declaración rendida por JOSE ANTONIO SANCHEZ BORDA, obrero del Cementerio del Sur, con quien, en su sentir, se demuestra que CRISTINA DEL PILAR GUARIN falleció en el Palacio de Justicia y fue enterrada en la fosa común, por cuanto entre los cuerpos llevados para ser inhumados dice haber visto el de dos mujeres, asegurando reconocer en uno de ellos, por una foto, al que sería el de CRISTINA DEL PILAR GUARIN.

[241] C.O 6A Anexo Instrucción 102

Este argumento no resiste la menor crítica racional, pues, de ser cierto, el cuerpo se encontraba completo, no calcinado, de manera que su identificación no comportaba problema alguno mediante la toma de necrodactilia al momento de su levantamiento o a través de las pruebas de ADN practicadas a los restos exhumados de la fosa común, y sobra advertir que nada de esto se dio.

Sobre la posible supervivencia de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN y su salida del Palacio de Justicia bajo control de las fuerzas del Estado se tiene, fundamentalmente, los reconocimientos en video que ha hecho su hermano RENÉ GUARÍN CORTÉS[242] y CECILIA CABRERA[243].

Para el día de los hechos, según lo refiere RENE GUARÍN, su hermana vestía *"… falda a cuadros rojos y azules, escocesa, una blusa rosada y su aspecto, era una mujer de 1.55 o 1.58 de estatura, robusta, ojos cafés, cejas gruesas, labios finos, tenía una mancha en la mano izquierda, como un mapa de Sudamérica …".*

Agrega que aproximadamente un año y medio después de ocurridos los hechos *"un anónimo informó sobre un casete que fue dejado en el baño de hombres de un restaurante que quedaba frente al teatro Teusaquillo en la 34"*, el cual fue recuperado por *"un abogado de apellido Guana de la Procuraduría",* quien manifestó que en dicha grabación *"unos supuestos agentes de inteligencia"* comentaban que habían tenido a los desaparecidos del Palacio de Justicia en la Escuela de Caballería, en donde fueron torturados, asesinados y luego sus restos sumergidos en canecas de ácido de batería *"por orden del Coronel Luís Alfonso Plazas Vega"*.

---

[242] C.O. Anexos 6, folio 22
[243] C.O 20 Instrucción Fl 41 y ss.

En la misma diligencia, sobre la proyección del DVD de TVE, el declarante inicialmente, en el punto 01:01:32, señala que una mujer que aparece caminando, de vestido oscuro y blusa rosada, entre un militar y una persona de la cruz roja, parece ser su hermana. Sin embargo, en el punto 01:03:16, al centro, *"un poco debajo de la pantalla, alzada en hombros por un militar, descalza, de falda escocesa y blusa rosada o roja …"* podía ser su hermana.

En el DVD 1 de Patrimonio Fílmico Colombiano, en el record 00:47:57, a la izquierda de la pantalla, nuevamente identifica a la mujer llevada en hombros por un militar, la misma que refirió al observar la escena proyectada en el DVD de TVE.

El 5 de septiembre de 2006 la Fiscal 4ª Delegada ante la Corte le pone de presente a RENÉ GUARÍN documentos fotográficos e información periodística obtenidos en inspección judicial en las instalaciones del periódico El Colombiano[244], imágenes sobre las que el deponente, en la toma que se relaciona como *"Palacio de J6 y Palacio de J9",* expresa que "*esta es la persona que siempre hemos dicho con mi papá, que es mi hermana CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS"*[245], refiriéndose a la mujer de cabello corto, sin zapatos, que lleva una falda a cuadros, sacada del Palacio de Justicia en hombros por un soldado.

Igual, en diligencia de reconocimiento practicada el 16 de agosto de 2007, sobre un video hallado en la residencia del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, GUARÍN CORTÉS reconoce a su hermana en el punto 00:35:17 a 00:35:33, manifestando que *"Esa es mi hermana CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, esa es la falda que llevaba ese día, la falda es la roja escocesa, la blusa es la blusa roja de moño, tiene una especie de corbata y la tiene en una posición que le cae. Veo a mi*

[244] C.O. Anexos 7, folio 25.
[245] Ibídem, folio 29

hermana perfectamente como estaba para la época, pelo corto, está la forma de su cuerpo, era una persona de cadera ancha, de cola grande … su vestimenta es impajaritablemente la que llevaba el día del holocausto, esa es la ropa que llevaba el día en que fue a trabajar al Palacio y lo más importante es que ésta es ella. Le veo la planta de los pies algo como tiznados (…)"[246]*.*

Reconocimiento que se repite en otro video aportado por la señora ANA MARÍA BIDEGAÍN DE URÁN, en el punto 00:01:51.

En los mismos videos CECILIA CABRERA GUERRA reconoce a CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, en el punto 00:35:24 del obtenido en la residencia del Coronel PLAZAS VEGA, y la describe como la mujer que *"tiene una falda a cuadros escocesa y una blusa roja, va cargada por un soldado, va en medias y descalza, cabello corto, pelo negro, va en un estado físico aceptable, le veo la cabeza levantada, como mirando hacia donde la llevan, va alzada en el hombro derecho, la lleva con los dos brazos, como cogida de las rodillas*", y en el record 01:50 en el video del Noticiero 24 Horas aportado por ANA MARÍA BIDEGAIN.

Reconocimientos igualmente realizados por los padres de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN sobre diferentes videos ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante en enero de 1988[247].

Sin embargo, a diferencia de los casos de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN, ese reconocimiento de CRISTINA DEL PILAR GUARIN no es pacífico, en la medida en la que, respecto de la misma imagen, MARÍA NELFI DÍAZ DE VALENCIA[248], para esa época auxiliar de servicios generales del

[246] C.O. Anexos 20, folio 41.
[247] Folios 205 al 223 Cuaderno 82 Anexo de Instrucción.
[248] María Nelfy Díaz declaró en diferentes oportunidades, el 5 de diciembre de 1985 ante la Procuraduría (Anexo 3 A parte 2 Procuraduría, folio 42); el 6 de diciembre de 1985 (folio 49 ibídem); el 13 de diciembre de 1985 ante el Juzgado de Instrucción Criminal Ambulante (folio 31 Copias Anexo de Instrucción 55); el 6 de marzo de 1986 ante la Procuraduría (folio 7 Anexo Procuraduría N° 2); el 12 de febrero de 1988 ante el Juzgado 30 de IC (folio 110 Anexos Instrucción 82 A); el 24 de septiembre de 2007 ante la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte (folio

Ministerio de Justicia, quien en el Palacio de Justicia se desempeñaba como ascensorista, sostiene que esa persona es ella, y que para el día de marras llevaba una *"falda escocesa, una blusa roja de rayitas blancas. De cuadros cafés y cuadros habanitos, la falda. Llevaba una blusa roja de rayitas blancas, transparente, de saco yo no me acuerdo, saco era como beige"* y al reproducirle el material fílmico la deponente afirma que la persona que sale en hombros del soldado es ella, anotando que se reconoce porque *"me parezco, ahí estoy pintada, esa soy yo".*

Repetidamente MARIA NELFI DIAZ se ha reconocido sin dubitación en la misma toma y así lo ratificó en audiencia pública ante este Despacho en sesión del 1° de diciembre de 2011 al exhibirle el video obtenido en la residencia del Coronel PLAZAS VEGA, a partir del punto 00:35:19 al 00:35:34, cuando enfáticamente asegura "*esa soy yo*".

Desde mucho antes de realizar cualquier reconocimiento en video, la señora DÍAZ recordó bajo la gravedad del juramento la forma como, el 7 de noviembre, al salir del baño donde era mantenido el grupo de rehenes por ANDRES ALMARALES, un soldado la "*echó a la espalda*" y la cargó pasándola por todo el cuarto piso desde el costado norte hasta bajar por las escaleras del lado sur, llevándola así hasta la Casa del Florero.

Examinadas las imágenes no se puede descartar con fundamento que la mujer allí reflejada corresponda en realidad a MARIA NELFI DIAZ. Por el contrario, las prendas de vestir se corresponden significativamente con las que asegura portar ese día y la fisonomía general no se aparta de las características físicas de la para entonces ascensorista del edificio judicial, siendo del caso tener en

---

170 Original Instrucción 21), y ante este Despacho en audiencia pública el 1° de diciembre de 2011.

cuenta un hecho que, por obvio, no es menos importante y es que esta señora efectivamente estuvo retenida en el baño de donde al final de la operación de recuperación del edificio salió el grueso de los últimos liberados y, aun cuando resulte de Perogrullo mencionarlo, es incontrovertible que sobrevivió a los acontecimientos, por lo que no resulta absurdo, ni ilógico, ni descabellado y mucho menos improbable que en realidad sea ella la mujer capturada en esas imágenes.

MARIA NELFI DIAZ nunca relató de manera diferente cómo salió del Palacio de Justicia y no se percibe en ella interés alguno para narrar sucesos de manera diferente a como los vivió, o para beneficiar o perjudicar a alguien desfigurando los hechos o sembrando dudas en la investigación.

Adicionalmente, en diligencia del 5 de febrero de 1988 ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante[249], se llevó a cabo la reproducción de los casetes numerados con el 2, 11 y 15, y respecto a la secuencia de imágenes en la cual los familiares de CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS afirmaron reconocerla, JULIO CÉSAR y HUMBERTO VALENCIA DÍAZ, hijos de MARIA NELFI DÍAZ, dicen recocer a su mamá, y así mismo ocurre con YINED REYES DE PÉREZ y CONSUELO GUZMAN DE OSPINA, quienes reconocen a MARIA NELFI en esas mismas imágenes.

En esas condiciones, aun cuando igual subsisten elementos de juicio importantes para pensar que CRISTINA DEL PILAR GUARÍN pudo salir viva del Palacio de Justicia, la evidencia no es suficiente para superar la duda razonable y declarar su desaparición forzada.

[249] Folio 77 al 79 Cuaderno 82 A Anexo de Instrucción.

Respecto a la posible salida con vida del Palacio de Justicia y la eventual desaparición forzada de **GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA**[250], de quien igual se descarta que para el 6 de noviembre se encontraba en su puesto de trabajo en la cafetería restaurante, en diligencia de reconocimiento de material fílmico en las instalaciones de Televisión Española, llevada a cabo el 11 de abril de 1986 por el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante[251], sus familiares CONSUELO CASARINAS DE SUSA y DEYANIRA LIZARAZO dicen reconocerla en una de las imágenes proyectadas, afirmando que "*en cuanto a las piernas, se parece mucho a GLORIA STELLA LIZARAZO, por el pelo corto y negro y por la falda que ella usaba una falda verde*".

El 10 de diciembre de 2007 LUIS CARLOS OSPINA ARIAS, quien hacía vida marital con GLORIA ESTELA LIZARAZO, señaló que para el mes de noviembre de 1985 no se encontraba en esta ciudad y se enteró por su suegra que la guerrilla se había tomado el Palacio de Justicia, donde trabajaba su compañera, quien, dice, se desempeñaba como ayudante del chef de la cafetería principal.

Afirma que en una diligencia de reconocimiento les exhibieron un video de *"Noticias Uno"*, en el que pudo apreciar la salida con vida de su compañera, de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ y de la señora ROSA, resaltando que en el video se aprecia cómo *"a la señora ROSA y a la señora mía las sacan al hombro …".*

---

[250] Hija de Lira Rosa Lizarazo. Identificada con cc 35.487.869 de Tunjuelito, tenía 31 años de edad cuando el asalto al Palacio de Justicia por el M-19. Tenía relación marital de hecho con LUIS CARLOS OSPINA ARIAS, tenía 4 hijos. Se desempeñaba como la encargada del Autoservicio en la Cafetería – Restaurante del Palacio de Justicia, era la trabajadora más antigua.
De tez blanca, ojos negros, pecosa, cabello negro corto, lunar pómulo derecho, de 1,60 mts, tenía puente maxilar superior, le faltaba un canino superior. Llevaba vestido beige, manga alta, chaleco manga corta rayas. En el trabajo usaba tenis y blusa blanca y gorro blanco, reloj y anillo mano izquierda (Cuaderno Original 6 Anexo de Instrucción, folio 184, declaración de su señora madre LIRA ROSA LIZARAZO).
[251] Folios 214 al 217 del cuaderno 7 anexo de la instrucción.

Ese mismo reconocimiento lo hizo en principio CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA, quien da cuenta de la salida de GLORIA ESTELA LIZARAZO describiéndola *"con una camiseta negra de manga corta, falda color verde o gris, falda hasta las rodillas, cabello negro, tez blanca, cabello corto, gorda y gorda de piernas, descalza y me parece que lleva medias veladas …".* Sin embargo, cuando observa el siguiente video se retracta de su primer reconocimiento, manifestando que si lo hubiera visto primero no habría afirmado que esa era GLORIA[252].

De esta manera, la misma CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA pone en duda que la persona reconocida en esa toma corresponda a GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, resaltándose así la precariedad de la individualización hecha por los familiares de la desaparecida, quienes fundamentalmente se apoyan en el parecido de las piernas, el pelo corto y negro y "*la falda que ella usaba una falda verde*"; características poco fiables para sustentar la identificación de la señora LIZARAZO saliendo con vida del Palacio de Justicia, máxime cuando en el expediente hay información suministrada por LIRA ROSA LIZARAZO DE LAGOS, madre de GLORIA STELLA LIZARAZO, según la cual su hija llevaba vestido beige, manga alta, chaleco manga corta a rayas y en el trabajo usaba tenis y blusa blanca y gorro blanco[253].

En esas condiciones, las referencias utilizadas por quienes aventuran un reconocimiento de GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA en esa imagen no sólo resultan insuficientes para soportar su identificación, sino aparecen desmentidas en cuanto las prendas de vestir de la persona mostrada en el video no concuerdan ni aproximadamente con las que se dice portaba GLORIA para

[252] Cuaderno 20 anexo instrucción, folio 48.
[253] Cuaderno Original 6 Anexo de Instrucción, folio 184

cuando salió de su casa a trabajar ni con las que usaba en sus tareas diarias en el autoservicio de la cafetería.

Tan inseguro es el reconocimiento de GLORIA LIZARAZO que luego de ver la proyección suministrada por TVE el 11 de abril de 1986, al interrogar a las mismas testigos si bajo la gravedad del juramento podían asegurar que la persona vista en el video en efecto correspondía a GLORIA STELLA LIZARAZO, no se atrevieron a afirmarlo, manifestando que "*NO ASEGURAMOS PERO SÍ SE NOS HACE MUY PARECIDA…*".

Adicional a esto, el Despacho resalta las consideraciones plasmadas por el Tribunal Superior de Bogotá al tratar el mismo punto en su sentencia de segunda instancia en contra del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, cuando, remitiéndose a su vez a la sentencia de segundo grado dictada por la misma Corporación en contra del Coronel PLAZAS VEGA, precisó cómo MARIA NELFI DÍAZ en la misma imagen, al ser cuestionada sobre si la persona sacada enseguida de ella puede ser GLORIA LIZARAZO, responde que le parece que es MAGALYS ARÉVALO; indicando el Tribunal que MAGALYS en efecto fue rescatada de esa manera, con lo cual corrobora que CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA se equivocó cuando en un principio reconoció en esa escena a GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA.

Igual el Tribunal destaca, haciendo eco de la sentencia 2008-025 proferida contra el Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS, cómo el compañero marital de GLORIA LIZARAZO incurrió en serias contradicciones, pues a pesar de que en 1986 había señalado que de los compañeros de GLORIA sólo conocía a ANA ROSA CASTIBLANCO y a "*JIMMY*" (HÉCTOR JAIME BELTRÁN), en 2007 aseguró conocer a CARLOS RODRÍGUEZ y a *"Guarín o Marín"* y

reconoce en video a ANA ROSA CASTIBLANCO como la mujer que es sacada *"en hombros"* adelante de quien dice es GLORIA LIZARAZO, persona que otros declarantes han identificado como CRISTINA DEL PILAR GUARÍN, estando demostrado, por demás, que el cadáver de ANA ROSA CASTIBLANCO es uno de los encontrados calcinados en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Así, el reconocimiento en imágenes de video de GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA se cae por el peso de la evidencia, sosteniéndose la inferencia sobre su posible salida con vida de la sede de las Altas Cortes exclusivamente en el caudal indiciario común reseñado, el cual, no obstante su importancia, en este estadio procesal no es suficiente para respaldar una declaración de existencia del comportamiento punible investigado; declaración que, conforme a las reglas adjetivas orientadoras de esta actuación, debe sustentarse en certeza.

Grado de conocimiento que, para el caso, se agrieta cuando MARÍA DEL PILAR NAVARRETE URREA, esposa de JAIME BELTRÁN FUENTES[254], al dar a conocer el 3 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante la llamada recibida de quien dijo pertenecer al B-2, cuenta que su interlocutor le manifestó "*…. que en el Cantón Norte se encontraban detenidos los de la cafetería, me dijo los nombres de los de la cafetería, que no estaban todos, faltaban dos mujeres, una que estaba embarazada, ROSITA y GLORIA ….*" (subrayamos); personas que no pueden ser otras que ANA ROSA CASTIBLANCO y GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA.

Como quiera de ANA ROSA CASTIBLANCO hay prueba de haber sido encontrado su cuerpo calcinado en el cuarto piso de la edificación judicial, el hecho, según la información recibida por

[254] C.O. Anexos 1, folio 162.

MARIA DEL PILAR NAVARRETE, de ser GLORIA STELLA LIZARAZO la otra apersona que no estaba junto con los demás trabajadores de la cafetería detenidos en el Cantón Norte y la falta de evidencia objetiva, concreta, sobre su salida con vida, abre un margen de duda importante en punto a lo realmente ocurrido con ella.

De manera, no es posible predicar al margen de toda duda que GLORIA STELLA LIZARAZO haya salido viva y a disposición de los organismos de seguridad del Estado y, por lo mismo, sostener su declaración de desaparecida forzadamente.

LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS era hija de RAFAEL MARÍA OVIEDO ACEVEDO y ANA MARÍA BONILLA DE OVIEDO (fallecidos). Se identificaba con c. de c. 35.054.876, era oriunda de Chaparral (Tolima), donde nació el 15 de Febrero de 1962, estaba casada con JAIRO ARIAS MENDEZ y tenía 2 hijos: uno de 6 años y otro de 20 meses.

Era una mujer trigueña, de contextura gruesa, cabello castaño hasta los hombros, medía 1,65 mts., aproximadamente, pesaba 60 kls. y al parecer vestía sastre color habano con blusa roja, pues nadie la vio antes de salir de la casa[255].

Como se dijo, LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS no comparte las mismas circunstancias predicables de los empleados de la cafetería por cuanto es una persona de las que se ha dado en calificar como visitante ocasional de la sede judicial.

[255] C.O 6 Anexo Instrucción Fl 256 y C.O 7 Anexo Instrucción Fl 181

Desde esa perspectiva, su presencia en el lugar para cuando se dieron los hechos no surge necesaria por razón de sus actividades cuotidianas.

Su eventual presencia al interior del Palacio de Justicia se poya fundamentalmente en la presunción manifestada por sus familiares de haberse dirigido al lugar en busca de la secretaria del Dr. ALFONSO REYES ECHANDÍA, la señora HERMINDA NARVAEZ, de quien al parecer esperaba su colaboración para obtener una recomendación laboral del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, en carta fechada el 2 de diciembre de 1985, dirigida a los Magistrados JAIME RUEDA y CARLOS UPEGUI ZAPATA, del Tribunal Especial de Instrucción Criminal, los señores RAFAEL MARÍA OVIEDO ACEVEDO y ANA MARÍA BONILLA DE OVIEDO señalan que el 5 de noviembre su hija LUCY AMPARO les comentó que al día siguiente iría al Tribunal Superior de Bogotá a entrevistarse con el Magistrado RAÚL TRUJILLO, encuentro al que efectivamente acudió en horas de la mañana, sin que desde entonces se conozca su paradero, motivo por el que presumen que luego de esa entrevista se dirigió al Palacio de Justicia en busca de la señora HERMINDA NARVÁEZ, secretaria del doctor ALFONSO REYES ECHANDÍA, con el fin de obtener una recomendación laboral.

En declaración del 2 de abril de 1986 ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante[256] la señora ANA MARÍA BONILLA DE OVIEDO ratificó que el día 6 de noviembre de 1985 su hija LUCY AMPARO salió en horas de la mañana para una entrevista con el doctor RAÚL TRUJILLO para un posible empleo y que muy

[256] Folios 186 al 189 cuaderno 7 Anexo de Instrucción.

posiblemente, una vez terminada la entrevista con el doctor TRUJILLO, salió para el Palacio de Justicia a la oficina del doctor REYES ECHANDÍA para hablar con la Secretaria HERMINDA NARVÁEZ, para que a través de ella el Dr. REYES le diera una recomendación para obtener trabajo. Por eso, su hija muy posiblemente se encontraba en el Palacio de Justicia durante la toma guerrillera.

DAMARIS OVIEDO BONILLA, hermana de LUCY AMPARO, en declaración del 25 de julio de 2006[257], ratifica que su hermana para el 6 de noviembre estaba en una entrevista en los Tribunales y piensan que estaba en el Palacio de Justicia por cuanto en esos días estuvo hablando con la secretaria del Dr. REYES ECHANDIA y por eso creen que, al estar cerca, luego de la entrevista, a eso de las 10:45 de la mañana, se dirigió allí. Sin embargo, cuenta, hablaron con la señora HERMINDA NARVAEZ, quien les dijo que no se habían encontrado, pues poco antes de los hechos ella salió por el sótano a hacerle unas vueltas al Dr. REYES y posiblemente LUCY subió por las escaleras por donde accedían los visitantes, a esperarla en el cuarto piso.

El Dr. RAÚL TRUJILLO CORTÉS, para la época de 1985 a 1986 Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en certificación jurada del 24 de enero de 1986, dirigida al Juez Noveno de Instrucción Criminal, confirma que LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, el día 6 de noviembre de 1985, acudió a entrevistarse con él[258].

Como se aprecia, la presencia de LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS en las instalaciones del Palacio de Justicia para el 6 de

[257] Cuaderno 6 Copias de Instrucción, folio 14 y siguientes.
[258] Folios 194-196. Cuaderno 6A Anexo de la Instrucción

noviembre de 1985 se apoya en la suposición de haberse dirigido a ese lugar una vez se entrevistó con el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá RAÚL TRUJILLO CORTÉS, sin existir prueba alguna que de manera directa, concreta y objetiva la ubique en el sitio, pues ni siquiera la señora HERMINDA NARVAEZ, a quien se presume iba a buscar, puede dar fe de su presencia, por cuanto para cuando se dieron los acontecimientos ella había abandonado la edificación para cumplir unos encargos de su jefe, el Dr. REYES ECHANDIA.

Sin embargo, como quiera a lo largo de treinta años no se ha planteado ninguna otra hipótesis atendible, lógica y razonable de los motivos por los cuales LUCY AMPARO OVIEDO no regresó a su casa después de cumplir la entrevista en el Tribunal, cuando en el hogar la esperaba su familia y en especial sus dos pequeños hijos de apenas 6 años, uno, y 20 meses, el otro; es dable aceptar, con un muy alto grado de probabilidad, su presencia en el lugar para cuando se iniciaron las acciones violentas de la toma de la sede del Poder Judicial.

No obstante, esas mismas circunstancias que permiten colegir la presencia de LUCY AMPARO OVIEDO al interior del edificio durante el desarrollo de los hechos, conducen a otra deducción no menos sustancial: es bastante probable su muerte en el cuarto piso del edificio.

Si su llegada al Palacio de Justicia tenía como finalidad encontrarse con la señora HERMINDA NARVAEZ, debió dirigirse a su oficina y como ella no se encontraba en el momento, como se lo comentó ésta a DAMARIS OVIEDO, seguramente ascendió por las escaleras principales a esperarla en el cuarto piso, en la oficina del Dr. REYES, donde trabajaba su amiga. Siendo un hecho que el Dr.

ALFONSO REYES ECHANDIA quedó atrapado en el cuarto piso desde cuando comenzaron las hostilidades, es de presumir que junto a él fueron retenidas las personas que se encontraban cerca, especial y particularmente quienes estaban en su oficina.

En ese orden de cosas, LUCY AMPARO OVIEDO debió quedar retenida junto con el señor Presidente de la Corte Suprema y es de presumir que corrió la misma suerte y, entonces, no se descarta su muerte en ese nivel de la edificación y la calcinación de su cuerpo.

Por su puesto, esto es una conjetura no comprobada procesalmente, por cuanto sus restos, hasta donde el expediente lo muestra, no han sido identificados y tampoco hay evidencia específica que de alguna forma la relacione de manera particular con alguna de las entregas equivocadas; pero esa considerable factibilidad exige, para poder considerarla víctima del delito de desaparición forzada, contar con prueba sólida de su salida con vida de la sede judicial.

Dentro del expediente obran diligencias de exhibición de videos en donde familiares de LUCY AMPARO dicen reconocerla saliendo viva del Palacio de Justicia custodiada por miembros del Ejército; los cuales, sin embargo, no se muestran para nada sólidos por la evidente inseguridad manifestada por los mismos deponentes.

DAMARIS OVIEDO BONILLA en declaración rendida ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal el 19 de diciembre de 1985 y en ampliación ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal el 7 de abril del año siguiente[259], afirma que en unos videos vistos en compañía de su madre y de otros familiares en el Noticiero PROMEC

[259] Folios 266-268. Cuaderno 6 Anexo de la Instrucción y Folios 191-192. Cuaderno 7 Anexo de la Instrucción, respectivamente.

reconoció a su hermana saliendo con vida, señalando que la imagen es *"muy semejante a ella, en cuanto a la figura total, forma de la cara, características de agarrar las cosas, estructura del cuerpo y forma de las piernas, lo único que no coincide es la ropa que llevaba puesta ese día".*

ANA MARÍA BONILLA DE OVIEDO, el 2 de abril de 1986 ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante[260], asegura que vio a su hija salir del Palacio de Justicia en un video proyectado en el Juzgado Noveno de Instrucción, y aun cuando no puede asegurarlo, por cuanto la toma es muy lejana, señala que la mujer que sale en una de las imágenes es muy parecida a su hija. Afirma igualmente haber ido al Noticiero PROMEC a ver unos videos en los cuales también reconoció a LUCY AMPARO en la misma imagen, saliendo del Palacio de Justicia y un soldado la *"traía abrazada".*

Por su parte el señor RAFAEL MARÍA OVIEDO ACEVEDO, padre de LUCY AMPARO OVIEDO, en declaración del 31 de marzo de 1986 ante el Juzgado 27 de Instrucción Criminal[261], afirma que reconoció a su hoja saliendo con vida del Palacio de Justicia, tomada del brazo por un soldado, y que el mismo reconocimiento lo hizo su esposa ANA MÁRÍA BONILLA. Sin embargo dejó constancia en cuanto a que los *"… confunde que el atuendo o vestimenta o vestido que ella (LUCY AMPARO) llevaba ese día de los sucesos, no corresponda con el que aparece en la proyección, su manera de andar, su silueta, toda es idéntica a nuestra hija, pero no podemos jurar exactamente que sea, por lo anteriormente descrito".*

En diligencia de exhibición de material audiovisual llevada a cabo el 14 de enero de 1988 por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante[262] se procede a reproducir la cinta marcada con el *"N*°

[260] Folios 186 a 189 Anexo 7 de Instrucción.
[261] Folios 180 a 182 del cuaderno 7 anexo de instrucción.
[262] Folios 220 a 221 cuaderno 82 anexo de instrucción.

11" que presenta imágenes de personas saliendo por la puerta principal del Palacio de Justicia, frente a la cual los padres de LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA nuevamente dicen reconocerla saliendo junto con dos soldados, quienes la toman por cada brazo, y en diligencia del 15 de enero siguiente ante el mismo Juzgado se proyecta otra vez la secuencia de imágines en donde los padres afirmaron reconocerla, frente a lo cual se mantienen en su dicho, aun cuando aclaran que *"esas no eran las prendas que para esa fecha vestía su hija"* pero que físicamente si corresponde[263].

Frente al reconocimiento inconsistente que hacen los familiares de LUCY AMPARO OVIEDO se tiene la declaración rendida por NUBIA STELLA HURTADO TORRES, una de las sobrevivientes rescatada del Palacio de Justicia, quien el 12 de febrero de 1988 ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante[264] inicialmente describe que el día 6 de noviembre de 1985 vestía *"Una falda azul, una blusa blanca, un chaleco vino tinto y un saco azul, tenía zapatos seis y medio que no son muy altos de color uva y la cartera del mismo color de los zapatos",* y luego, al proyectarle los casetes numerados con el 11 y el 15, en la secuencia en la que los familiares de LUCY AMPARO aseguran reconocerla, manifiesta que se reconoce a sí misma porque *"corresponde la ropa, los zapatos los reconozco y la cartera y la forma como lo llevo, yo me acuerdo que salí así"* y aclara *"allí aparezco más gordita porque he rebajado 14 kilos desde el año pasado, para esa época pesaba 64 kilos y ahora peso 50".*

Mientras tanto, en diligencia del 5 de febrero de 1988 ante el mismo Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante[265], se proyectaron los casetes numerados con el 2, 11 y 15, ante los cuales las señoras MARÍA CRISTINA DE QUINTERO y CONSUELO GUZMAN DE

[263] Folios 222 y 223 ibídem.
[264] Folios 116 y 117 anexo 82 A de la Instrucción.
[265] Folio 77 a 79 ibídem.

OSPINA reconocen saliendo del Palacio de Justicia en medio de dos soldados, tomada por los brazos, a la señora NUBIA STELLA HURTADO TORRES, refiriéndose a la misma secuencia de imágenes en las que fue reconocida LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA por sus familiares.

Así las cosas, mientras sus familiares hacen reconocimiento en forma bastante dubitativa de LUCY saliendo viva, como lo deja de presente su padre RAFAEL OVIEDO al reconocer que "*…, lo mismo que le ha sucedido a mi esposa, yo trato de reconocer a mi hija también; por su estatura, sus movimientos, pero he sido muy explícito al declarar que mientras no haya una ampliación no puedo jurar exactamente que es ella, puesto que es muy posible que uno tenga su doble en cualquier parte…*", NUBIA STELLA HURTADO TORRES se reconoce enfáticamente en la misma secuencia fílmica, coincidiendo las ropas que vestía ese día, mientras los familiares de LUCY ni siquiera pueden ser afirmativos sobre las prendas llevadas por su hija, y ese reconocimiento es respaldado por MARÍA CRISTINA DE QUINTERO y CONSUELO GUZMAN DE OSPINA.

En esas condiciones es más fiable y merece credibilidad la manifestación de reconocimiento de sí misma vertida por NUBIA STELLA HURTADO TORRES, respaldada por MARÍA CRISTINA DE QUINTERO y CONSUELO GUZMAN DE OSPINA, que la insegura y poco consistente realizada por los familiares de LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS.

Ahora, RAFAEL MARÍA OVIEDO ACEVEDO y ANA MARÍA BONILLA DE OVIEDO aseguran que a eso de las cuatro de la tarde del día 6 de noviembre pudieron comunicarse con la Casa del Florero para indagar si su hija estaba allí y quien contestó el teléfono

les confirmó "*SI AQUÍ ESTA*"[266]. Episodio al que igual se refiere DAMARIS OVIEDO en versión rendida el 25 de julio de 2006[267], indicando que el primer día no se pudieron comunicar con la Casa del Florero, pero al otro día alguien les contestó y al preguntar por LUCY esa persona lo repitió en voz alta para luego responderle: *"Se encuentra acá y por la tarde la entregan en la casa".*

También informa DAMARIS OVIEDO que el 7 de noviembre se fueron para la Plaza de Bolívar donde le pidieron a un conductor del Ejército averiguar si su hermana se encontraba en la Casa del Florero, recibiendo en horas de la tarde, en su residencia, un mensaje telefónico del uniformado, quien les comunicó que efectivamente *"estaba allá en la Casa del Florero y que por la tarde la entregaban"*.

Aparte de la inconsistencia entre las versiones de los padres y de la hermana de LUCY AMPARO, pues, mientras los primeros, la llamada a la Casa del Florero se habría producido el 6 de noviembre hacia las cuatro de la tarde, mientras la hermana asegura que ese primer día no se pudieron comunicar con el Museo y por lo tanto la información la obtuvieron el día 7 supuestamente en horas de la mañana, pues les habrían asegurado que en la tarde la entregarían; no hay forma de corroborar esa información, y como no se conocen datos de identificación de quienes la habrían suministrado, no fue posible verificar la exactitud de las respuestas.

Aun cuando, la información que aseguran haber recibido es importante, al no poder corroborarla con otros elementos de juicio no es suficiente para concluir que LUCY AMPARO OVIEDO salió con vida del Palacio de Justicia, menos si se supone que

[266] C.O 1 Anexo Instrucción Fl 170 yss.
[267] Cuaderno original 6 de anexos, folio 14.

eventualmente estaría en la Casa del Florero como especial, “s” o sospechosa, pues de no ser así no se explicaría que luego de ser llevada hasta el museo no apareciera, y entonces tampoco se entiende que los mismos agentes de seguridad del Estado le informaran a sus familiares sobre la presencia en el lugar de una persona sospechosa de hacer parte del grupo de asaltantes y menos que les aseguraran que en la tarde la entregarían en su casa.

Otro aspecto inquietante en relación con la suerte corrida por LUCY AMPARO OVIEDO es que el día 12 de noviembre de 1985 la familia recibió una llamada del señor RODRIGO ALBA quien les dijo haber sabido por conducto de otro vecino de nombre EMILIANO, quien trabajaba en el Ministerio de Defensa, que LUCY AMPARO estaba bien, en la Brigada de Usaquén, recomendándoles que trataran *“… de llevarle ropa porque está muy sucia”* [268]. Sin embargo, cuando fueron a dicho lugar, los militares negaron la existencia de retenidos, agregando que se entrevistaron *“con el Comandante del B-2 del Ejército Coronel SÁNCHEZ, quien nos manifestó lo de siempre: NO TENEMOS PRESOS y para su conocimiento les informo que los nueve empleados de la cafetería todos son del M-19, se fueron, cogieron el monte y ahora dicen que nosotros los tenemos.”*.

Lo anterior lo corrobora JAIRO ARIAS MÉNDEZ, esposo de LUCY AMPARO, quien refirió que un vecino de nombre EMILIANO SÁNCHEZ ZULUAGA le informó haber visto a su cónyuge en estado de abandono y desaseo en la Brigada del Ejército,

ARMIDA OVIEDO, en declaración del 30 de diciembre de 1985 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante, manifestó que acompañó a su cuñado JAIRO ARIAS a la casa del señor

[268] C.O 1 Anexo Instrucción Fl 170 yss.

EMILIANO SÁNCHEZ ZULUAGA, quien trabajaba en el Ministerio de Defensa, y allí le preguntó a los esposos EMILIANO y FANNY HUERTAS DE SÁNCHEZ que si estaban seguros que LUCY AMPARO OVIEDO estuviera viva, puesto que la mamá se encontraba muy ilusionada con la información que ellos le brindaban a JAIRO, a lo que la señora FANNY le dijo: "*como se le ocurre a ud. que si uno no estuviera seguro, sería más pecado*"[269], además señala que el señor EMILIANO se refería a LUCY como si la conociera y hasta señaló que ella se le parecía a la hermana.

DAMARIS OVIEDO también confirmó que RODRIGO ALBA, vecino de la familia, les dijo que fueran al cantón por LUCY, que le llevaran ropa porque estaba sucia, y que este señor se entero por un señor SÁNCHEZ que trabajaba en el Ejército[270].

Por su parte, RODRIGO ALBA PULIDO, el 8 de enero de 1986, manifestó: "*Pues lo único que sé es que mi esposa LUZMEL GARCIA DE ALBA se encontraba enferma y me dijo que llamara a la esposa de un señor que trabajaba en el Ministerio de Defensa, le pedí el número de teléfono, con el objeto de averiguar si la señora LUCY se encontraba allá detenida o no, el numero que ella me dio, yo llame y me contestó una señora y me dijo que si que ella se encontraba viva que le llevaran ropa, que ella se encontraba en la Brigada de Instituto Militares de Usaquén, y me dijo que llamara al esposo de ella a JAIRO y yo le comuniqué a él, yo no adelanté ninguna otra gestión, lo único fue comunicarme con ella*"[271]

El 26 de diciembre de 1985 se escuchó en declaración a EMILIANO SANCHEZ, quien se limitó a expresar que el señor ARIAS acudió a él para pedirle *"ayuda espiritual"* debido a que su esposa se encontraba desaparecida por los hechos del Palacio de Justicia, argumentando que algunas personas le habían dicho que lo ubicara

[269] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 11
[270] C.O C 3A Fl 53.
[271] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 63

por tratarse de un ex-militar que además trabajaba en el Ministerio de Defensa, por tal motivo, asevera, se entrevistó con JAIRO ARIAS pero para aconsejarle que se dirigiera a la *"Brigada de Institutos Militares"* porque era a ese lugar a donde estaban siendo llevadas las personas detenidas evacuadas del Palacio de justicia.

Agrega SÁNCHEZ ZULUAGA que si en algún momento le dijo al señor ARIAS MÉNDEZ que su esposa se hallaba en el Cantón, en mal estado y sucia, fue por infundirle *"como una voz de aliento"*, pero que en realidad no presenció nada de eso y que ello simplemente lo *"supuso"*.

En diligencia de careo entre JAIRO ARIAS MÉNDEZ y EMILIANO SÁNCHEZ ZULUAGA, y entre ARMIDA EUFEMIA OVIEDO BONILLA y MARÍA FANNY HUERTAS DE SÁNCHEZ, celebrada el 7 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal Ambulante[272], los señores SÁNCHEZ HUERTAS afirmaron que la versión de los familiares de LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA no son ciertas y que todo lo que les dijeron fue como una ayuda espiritual, pero no porque les constara nada al respecto.

En definitiva, EMILIANO SÁNCHEZ, aun cuando no atina a negar categóricamente haber sostenido que LUCY AMPARO estaba en el Cantón Norte, de cierta manera se retractó[273], en versión que ratifica su esposa FANNY HUERTAS[274], al señalar que JAIRO ARIAS confundió la ayuda espiritual que ellos le estaban dando.

Queda claro que EMILIANO SÁNCHEZ y su esposa, FANNY HUERTAS, sí difundieron la información de la supuesta estadía de LUCY AMPARO OVIEDO en las instalaciones del Cantón Norte,

[272] Folios 46 a 57 y 58 a 62, respectivamente. Cuaderno 6 A Anexo de Instrucción.
[273] C.O 6 Anexo instrucción Fl 289
[274] C.O 6 Anexo Instrucción Fl 296

pero, según ellos, como una forma de brindar "*ayuda espiritual*" a sus familiares.

Resulta difícil creer que una especie de esa naturaleza se exprese con la intención de alentar al espíritu sufriente de quien busca angustiosamente conocer la suerte de un ser querido desaparecido, a sabiendas de estar faltando a la verdad y alimentando falsas esperanzas; más aún cuando quien propaga la información y luego se recula es una persona que por sus vínculos con la institución castrense permite considerarla una fuente fiable y de quien ciertamente pueden predicarse motivos serios para retractarse.

Absurda y cruel forma de prestar "*ayuda espiritual*", ajena a cualquier expresión de caridad y más bien se aproxima al cinismo cuando, según lo refiere ARMIDA OVIEDO, al preguntarle sobre si estaban seguros que LUCY AMPARO estuviera viva, pues la mamá se encontraba muy ilusionada con la información que brindaban, FANNY HUERTAS le contesta: "*como se le ocurre a ud. que si uno no estuviera seguro, sería más pecado*".

No obstante, como quiera no hubo verificación de esa información, pues a pesar de acudir a la sede del Cantón Norte los familiares de LUCY no pudieron conseguir datos concretos o pista alguna que permitiera vislumbrar al menos como probable su detención en las instalaciones militares; obteniendo respuestas genéricas como que, según JAIRO ARIAS le dijo un Capitán VASQUEZ, "*a su esposa la habían enterrado en una fosa común, con los cadáveres de los guerrilleros*"[275], o que "… *los nueve empleados de la cafetería todos son del M-19, se fueron, cogieron el monte*", que les habría manifestado el Comandante del B-2 del Ejército, Coronel SÁNCHEZ; no es posible extraer de lo sucedido con EMILIANO SÁNCHEZ y su esposa FANNY HUERTAS

[275] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 49

evidencia suficiente como para asegurar que en efecto LUCY AMPARO OVIEDO DE ARIAS salió con vida del Palacio de Justicia y quedó bajo custodia de las fuerzas militares.

En definitiva, frente a la posibilidad, altamente probable, de haber perecido en el cuarto piso de la edificación, no hay evidencia clara, concreta, objetiva y fiable para afirmar que LUCY AMPARO OVIEDO salió con vida de la sede judicial; por lo que no se puede inferir con seguridad su desaparición forzada.

Finalmente, **GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO**[276], si bien no trabajaba en el Palacio de Justicia, no era una visitante ocasional, pues habitualmente guardaba su carro en el sótano del complejo judicial, en el parqueadero cedido por su tía AYDEE ANZOLA, y de allí se dirigía a su oficina de abogada ubicada en las cercanías en la carrera octava con trece. Por consiguiente, es dable asumir que, como de costumbre, el 6 de noviembre llegó al Palacio de Justicia a dejar su vehículo, siendo sorprendida por la irrupción del grupo subversivo.

Así se desprende, entre otras, de la declaración de su señora madre, MARÍA BIBIANA MORA DE ANZOLA, rendida el 17 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante: "*…. ella entró a guardar el carro como siempre lo hacía, hacia más de dos o como tres años que en el sitio que le correspondía a AIDEE pues*

[276] Hija de RÓMULO ANZOLA LINARES y MARÍA BIBIANA MORA DE ANZOLA (Fallecidos), tenía 31 años de edad y se encontraba con un mes de embarazo cuando los hechos del Palacio de Justicia. Era abogada de la Universidad Santo Tomás. Parqueaba su carro en los garajes del Palacio y trabaja en una oficina a pocos metros de allí. Casada con FRANCISCO JOSÉ LANAO AYARZA con quien tenía un hijo de año y medio.
Delgada, trigueña, de 1,53 o 160 mts de estatura, cabello largo negro, ojos negros, nariz respingada, ausencia de caninos (Cuaderno 6 A Anexo de Instrucción, folio 215 y cuaderno 7 Anexo de Instrucción, folio 51). Llevaba una falda blanca, medias blancas, zapatos rojos, cartera y blusa roja con pintas blancas y moño (Cuaderno 6 A Anexo de Instrucción, folio 31).

ella le había cedido el cupo por gentileza ya que ella no lo usaba por no tener carro particular"[277].

En el mismo sentido su padre, RÓMULO ANZOLA LINARES, el mismo 17 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante, señaló que "*… siendo la hora más o menos ya que no la puedo precisar en forma absoluta, y como acostumbraba a dejar su carro en el garaje del Palacio de Justicia desde hacía unos tres años, por cesión de su tía la doctora AIDEE ANZOLA LINARES, Magistrada en ejercicio del Consejo de Estado. En virtud de tal hecho, el día de la referencia parece que en la ahora que nos venimos refiriendo entró al garaje a dejar como de costumbre su vehículo y a mi entender desgraciadamente coincidió con la cruenta toma del citado edificio por un grupo subversivo …*"[278].

La Dra. AYDEE ANZOLA LINARES, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Consejera de Estado, corrobora que su sobrina hacía uso permanente de su parqueadero[279]

Por su parte, FRANCISCO JOSÉ LANAO AYARZA, esposo de GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, el 18 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante, contó que encontró "*… el carro en el lugar acostumbrado que tenía y que corresponde a la ficha azul número 80, en el primer sótano, ahí encontré el carro bien parqueado, cerrado, inclusive se encontraba en su interior la sillita del niño, sin ningún daño […]*"[280].

Como prueba indirecta de la presencia de GLORIA ANZOLA en las instalaciones del Palacio se cuenta con la declaración de MARÍA DE JESÚS TRIANA SILVA, dueña de la guardería en donde GLORIA ANZOLA DE LANAO dejaba a su hijo todos los días, quien señala

[277] C.O / Anexo Instrucción Fl 41 y ss
[278] C.O 7 Anexo Instrucción Fl. 45 y ss
[279] Declaración rendida mediante certificación jurada el 15 de abril de 1986 y dirigida al Juzgado 27 de Instrucción Criminal Ambulante. Folios 226-227. Cuaderno 7 Anexo de la Instrucción.
[280] C.O 7 Anexo Instrucción Fl 50 y ss

que aproximadamente faltando 10 minutos para las 11 del día 6 de noviembre llegó ésta a dejar a su hijo y le aseguró que a las 4 de la tarde pasaría a recogerlo[281].

A partir de allí no hay pistas concretas del recorrido realizado por GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, pero sí se sabe que durante toda la jornada no se encontró con su tía, pues así lo certificó la Dra. AYDEE ANZOLA, quien precisó que durante los dos días que permaneció como rehén en el interior del Palacio de Justicia no vio a su sobrina en los lugares en los que ella se encontraba; manifestación que, de paso, desvirtúa la hipótesis de la defensa del Coronel SACHEZ, quien pretende ubicar a esta desaparecida en el baño donde ALMARALES mantuvo cautivo un considerable número de rehenes, entre ellos a la Consejera de Estado AYDEE ANZOLA.

De otro lado, de ser cierta la deducción del defensor y GLORIA ANZOLA hubiese muerto al interior de ese baño, su cuerpo no habría sufrido los rigores del incendio, con lo cual, de ser el caso, no sólo las pruebas de ADN realizadas a los cuerpos exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur habrían arrojado resultado positivo de identificación, sino que muy seguramente su hermana MARIA CONSUELO fácilmente la hubiera localizado.

Obsérvese que MARÍA CONSUELO ANZOLA MORA, en declaración del 3 de enero de 1986 ante el Juzgado 9° de Instrucción Criminal, señaló en extenso que "*… el día de los levantamientos de los cadáveres … estuv[o] en el Palacio a las ocho y media de la mañana, no habían movido todavía los cadáveres, y … revis[ó] todos los cadáveres, boca por boca, objetos personales y no … faltó un solo cadáver por revisar y después de revisar los cadáveres del cuarto piso, fu[é] al segundo piso y habían tres cadáveres no estaban tan quemados como los del cuarto y era*

[281] Declaración del 19 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante. Folios 61-65. Cuaderno 7 Anexo de la Instrucción.

fácil conocerlos, el jueves por la mañana estuv[o] en Medicina legal y también revis[ó] todos los cadáveres que salieron y tampoco estaba, el mismo viernes por la tarde volvi[ó] a medicina legal, volvi[ó] a revisar lo que quedaba y no había nada, nosotros estuvimos varias veces en el Palacio, el esposo de mi hermana que se llama FRANCISCO LANAO, mi hermano OSCAR ANZOLA, un médico LUIS FELIPE GONZALEZ y yo revisando si pudiera haber la posibilidad de un cadáver desintegrado, y no había esa posibilidad, revisamos piso por piso, baño por baño y no encontramos nada …"[282]. En ampliación de declaración señalo: "*… el día que estuve en el reconocimiento de cadáveres antes de moverlos, recogí dientes que estaban sueltos al lado de los cadáveres, lo que me da la seguridad de que mi hermana no estaba ahí, ésta diligencia la hice el 8 …*"[283].

OSCAR ENRIQUE ANZOLA MORA, el 3 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante, corroboró lo anterior precisando que "*… CONSUELO ANZOLA, hermana, odontóloga graduada en 1981 de quién GLORIA era paciente, se hace presente en el Palacio de Justicia en compañía del Mayor de la Policía DIEGO ANZOLA pariente nuestro en segundo grado, con quien logra ingresar al interior de los acontecimientos antes de iniciarse las diligencias de levantamiento de cadáveres cuando éstos aún no habían sido movidos con excepción de 28 víctimas que fueron retiradas el día anterior que no estaban calcinadas […] llenó de esperanzas a sus familiares al afirmar enfáticamente que GLORIA no estaba dentro de las víctimas calcinadas […]*"[284]

Igual cuenta que con el médico JORGE GONZALEZ y su hermana MARIA CONSUELO fueron a Medicina Legal para hacer una nueva revisión de los cadáveres y durante más de dos horas estuvieron realizando esa labor de reconocimiento, quedando convencidos que no había rastro de GLORIA. El 10 y el 11 de Noviembre volvieron a Medicina Legal en compañía de FRANCISCO LANAO, esposo de

[282] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 28
[283] C.O 7 Anexo Instrucción Fl 85 y ss
[284] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 212 y ss.

GLORIA, ya que se propagaban rumores que señalaban la presencia de nuevos cadáveres, sin resultados positivos.

Así, la teoría de la defensa se diluye por completo, pues es claro que su cuerpo habría sido fácilmente localizado por los familiares de GLORIA ANZOLA si hubiese muerto en el baño de donde finalmente salió el grueso del último grupo de rehenes.

Ahora, aun cuando es importante que a pesar de las minuciosas pesquisas adelantadas por sus familiares no se encontró rastro alguno de GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO entre los muertos del Palacio de Justicia, incluso después de hacer evaluaciones de su carta dental; esto no es definitivo para afirmar su supervivencia a los hechos, en primer lugar por cuanto, si bien su hermana MARIA CONSUELO era su odontóloga, no se precisa qué experiencia y conocimiento específico tenía esta profesional en identificación forense a través de cartas dentales, cuando apenas tenía cuatro años de graduada, según lo da a conocer su hermano OSCAR ENRIQUE ANZOLA, y por lo tanto no es posible precisar qué tan confiables pueden ser sus conclusiones, más aún cuando se carece de información sobre los métodos y técnicas empleadas, pues su estudio no está documentado ni explicitado.

De otro lado, no se cuenta con elementos de juicio para asegurar que en efecto se realizó estudio sobre la totalidad de personas muertas en la edificación, persistiendo, por el contrario, la posibilidad de existir un significativo número de restos humanos no examinados, pues no se puede soslayar que hay casos en los que se encontraron restos parciales de cuerpos, solo troncos, otros unidos por acción del fuego y difíciles de diferenciar y de despegar, e incluso días después empleados del aseo encontraron restos humanos que arrojaron a la basura.

Tampoco se puede ignorar que, aun cuando MARÍA CONSUELO ANZOLA MORA asegura haber realizado su tarea antes de comenzar el levantamiento de cadáveres y cuando aún no se habían movido los restos, su hermano OSCAR ENRIQUE ANZOLA deja en evidencia que eso no es completamente exacto, pues desde el día anterior ya se habían retirado del sitio al menos 28 víctimas.

En el mismo sentido, el Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS señala que al finalizar las operaciones del *"segundo día de combate"* ingresó al Palacio, en donde *"había cadáveres en el suelo, en los diferentes pisos, incinerados y algunos funcionarios supongo de medicina legal estaban bajando unos cadáveres al primer piso con ayuda de soldados…."*[285], y JORGE ANTONIO TATIS PACHECO, para la época de los hechos jefe de la sección técnica de la DIJIN, cuenta que le correspondió organizar los equipos de trabajo que llevaron a cabo los levantamientos de los cadáveres de personas que habían fallecido en el Palacio de Justicia, levantamientos que se realizaron desde la tarde del día jueves 7 de noviembre y culminaron en la tarde del día siguiente, es decir, el 8 de noviembre de 1985[286].

De manera que para cuando la hermana de GLORIA ANZOLA inició su búsqueda el 8 de noviembre a las ocho y treinta de la mañana, ya se habían movido cuerpos, restos y objetos encontrados en sus proximidades, haciendo más incierto el resultado de sus pesquisas.

Además de eso, la misma MARÍA CONSUELO ANZOLA asegura que estando en el reconocimiento recogió "*dientes que estaban sueltos al lado de los cadáveres*", lo que no sólo muestra una vez más la alteración que se permitió de la escena de los hechos, que ya de por

[285] Folio 178 original 12 de instrucción.
[286] Folios 14. Libro No. 3 Investigación Procuraduría. I.P. 070

sí se daba al dejar a una particular manipular los restos antes de su levantamiento, sino pone en evidencia que no todos los cuerpos y restos estaban en condiciones favorables para eventualmente aproximar su identificación a través de la carta dental.

Así las cosas, incluso asignándole, en gracia de discusión, fiabilidad al cotejo llevado a cabo por la odontóloga MARIA CONSUELO ANZOLA, se demostraría que entre los restos examinados por ella no estaba GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, pero no descarta necesariamente su posible muerte al interior del Palacio de Justicia ni acredita que salió viva, pues subsiste un considerable margen de duda sobre si se cubrió la totalidad de cuerpos.

Persisten, sí, elementos de juicio significativos que no pueden simplemente ignorarse sin mayor fórmula de juicio, como el no contar con evidencia en cuanto a que GLORIA ANZOLA se hubiera desplazado a los pisos superiores de la edificación, por cuenta propia o conducida por los asaltantes; que, por el contrario, dada la hora a la que habría llegado a parquear su vehículo, probablemente la toma la sorprendió entre el sótano y el primer piso, siendo dable presumir que quedó atrapada en esos niveles, y que a pesar de no estar relacionada de ninguna manera con el personal de la cafetería, que eventualmente explicaría que se le considerara de antemano sospechosa y como tal se le asociara a la suerte corrida por ellos, casi apenas terminada la retoma del edificio judicial la familia recibió llamadas anónimas informando que ella se encontraba en instalaciones militares sometida a torturas, tal como aconteció con los familiares de los empleados de la cafetería.

MARIA CONSUELO ANZOLA da cuenta que el día 11 de noviembre de 1985, apenas cuatro días después de terminada la operación del ejército, hubo una llamada preguntando por su papá y le dijeron que

GLORIA ANZOLA estaba retenida en el Cantón norte y la estaban torturando. Que el día 16 siguiente llamó una mujer por la tarde, también preguntó por un familiar y dijo lo mismo, que la estaban torturando, que fueran que allá la tenían.

OSCAR ENRIQUE ANZOLA, a más de comentar sobre una llamada anónima recibida en su oficina en la que se le decía que los familiares de los desaparecidos debían quedarse callados y tranquilos y de esta manera podría presentarse algo bueno con respecto a ellos en las fiestas decembrinas, también hace mención a "*…dos llamadas a casa de mis padres y otra al almacén de mi madre en Chapinero, en ellas la afirmación similar en el sentido de indicar que GLORIA era Auxiliar* [se entiende colaboradora del M-19]*… por eso estaba detenida en el Cantón Norte donde estaba torturada por lo cual se pedía que hiciéramos algo por tratar de salvar su vida …*"[287].

MARÍA BIBIANA MORA DE ANZOLA, por su parte, contó de "*… dos llamadas que hemos recibido, una que recibió mi esposo de un señor que no se identificó, preguntó por ROMULO ANZOLA, habló con él y le dijo que GLORIA estaba en el Cantón, que allá la tenían, dijo que no podía identificarse y colgó. Al siguiente día, no al tercer día volvieron a llamar, hablaron con la empleada del servicio averiguando por si había algún familiar, que necesitaban hablar urgentemente para avisar que GLORIA estaba en el Cantón, ella la empleada le dio el teléfono donde podía encontrarse a la hermana, ESPERANZA, allá llamaron y tampoco se identificó era una voz femenina de una persona joven y que llamó para decir que quería avisar que GLORIA estaba en el Cantón, que allá la tenían, y a la vez se oía la voz de una persona ya de edad que le decía; dígales que vayan que allá la tienen, que nosotros cogimos esto por radio aficionados … [las llamadas se recibieron] el Lunes después de la toma y luego la otra el viernes siguientes, a los ocho días …*"[288].

[287] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 212 y ss.
[288] C.O / Anexo Instrucción Fl 41 y ss

En el mismo sentido ROMULO ANZOLA LINARES refiere que fue "…*sorprendido con dos llamadas anónimas, subrayo la palabra anónima, donde se me informaba que mi hija estaba viva y detenida en el Cantón Norte por orden expresa de las Fuerzas Militares …*"[289].

Y ROSALIA ESPERANZA ANZOLA MORA, el 19 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante, declaró que "*… a la semana siguiente de ocurridos los hechos, acababa yo de llegar al almacén de mi mami que tiene en la Calle 61 con carrera 13, una Boutique, cuando entró una llamada de una mujer joven que me preguntó si había algún familiar de la doctora GLORIA ANZOLA DE LANAO, le contesté que hablaba con la hermana, ESPERANZA, que qué pasaba, inmediatamente me respondió que acababan de informarle que a la doctora GLORIA la tenían en el Cantó Norte, me dijo incluso en un tono suplicante que hiciéramos todo el papeleo y todo para sacarla de allá … inmediatamente sonó la voz de una señora ya de edad que decía: "la doctora GLORIA ANZOLA DE LANAO la tienen en el Cantón Norte y la están torturando, nos avisaron por radioteléfono, hagan algo no se queden quietos" … otra cosa es como averiguaron el número de teléfono de mi casa porque no está ni siquiera en el directorio …*"[290].

Adicional a eso, se tiene lo dicho por JORGE FRANCO PINEDA, quien en su exposición aseveró que un amigo perteneciente a la Policía Nacional le indicó que no insistiera más en lo de IRMA, aduciendo que "*A ellos los tuvieron 8 días en las caballerizas de Usaquén, luego los mataron y los cadáveres de la casi totalidad los llevaron a la fosa común del Cementerio del Sur, pero el de Irma y el de una señora Anzola, por considerar que sus familias tenían cierta capacidad de reacción pública y de otras cosas, los separaron y los llevaron a la fosa común del cementerio de Chapinero".*

Si bien durante la investigación no se pudo corroborar en concreto la información obtenida por los familiares a través de las llamadas

[289] C.O 7 Anexo Instrucción Flñ 45 y ss
[290] .O. 7 Anexo Instrucción Fl 66 y ss

anónimas, no por ello se le debe restar todo grado de probabilidad de verdad a esas afirmaciones, cuando está suficientemente probado que en efecto se trasladó a instalaciones militares y de policía a personas consideradas sospechosas sacadas del Palacio de Justicia; que se sometió a torturas a algunas de esas personas; que en la Escuela de Caballería funcionaba un área reservada a cargo del B-2, destinada a realizar interrogatorios; que específicamente a la Brigada 13, aparte de los seis conductores llevados por miembros de la Cruz Roja a las nueve horas del día 7 de noviembre[291], a las seis y treinta de la tarde de ese mismo día fueron llevados otros cinco detenidos que quedaron a órdenes del B-2[292]; que en el caso de IRMA FRANCO, con quien directamente se asocia la suerte de GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO según la información suministrada a JORGE FRANCO PINEDA, se demostró al margen de toda duda su desaparición forzada.

Para este Despacho, aun cuando no es suficiente para afirmarlo con certeza, esos elementos de juicio mantienen vigente la probabilidad de que GLORIA ANZOLA DE LANAO haya salido viva y fuera desaparecida, pues tampoco puede asegurarse con certeza que murió al interior del Palacio de Justicia.

En esas condiciones, a criterio de este Juzgado a partir del estudio de las pruebas acumuladas en el expediente, con conocimiento más allá de duda razonable puede asegurarse la existencia de la conducta punible de desaparición forzada respecto de IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

---

[291] Al reverso del folio 125 del cuaderno 64 anexo de instrucción (hoja 256 del libro de Comandante de Guardia) se encuentra la anotación correspondiente a las 9:00 horas del día 7-11-85, en la cual se establece que miembros de la Cruz Roja entregan a *"seis conductores que se encontraban como rehenes en el palacio de justicia…".*

[292] A folio 126 del cuaderno 64 anexo de instrucción (hoja 257 del libro de Comandante de Guardia) existe otra anotación correspondiente a las 18:30 horas del 7-11-85 en la que se lee: "El señor CT Díaz S-2 de la ESINF trae cinco detenidos que quedan a órdenes del B-2".

En cuanto a LUZ MARY PORTELA, DAVID SUSPES CELIS, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, LUCY AMPARO OVIEDO y GLORIA ANZOLA DE LANAO no se alcanza el nivel de conocimiento exigido por la ley para dictar una sentencia condenatoria.

Por consiguiente, en relación con estas ocho personas, acogiendo una alternativa similar a la adoptada por el Tribunal Superior en las sentencias de segunda instancia dictadas en contra del Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA y del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, se decretará la nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de instrucción, inclusive, para que la Fiscalía la perfeccione en punto a lo ocurrido con estas presuntas víctimas, pues al no haberse agotado la práctica de pruebas que siendo necesarias estaban disponibles, se vulneró el principio de investigación integral, cuando su contenido es tan determinante que tiene la virtualidad de trascender al fallo. Además, por cuanto dada la naturaleza y clase de delito investigado, los compromisos del Estado con la comunidad Internacional y la obligación de ese mismo Estado frente a las víctimas y sus familiares, es impostergable agotar las acciones necesarias para aclarar definitivamente la suerte corrida por todos los desaparecidos y tratar de dar con su paradero, manteniendo abierta la posibilidad de acceso a los principios de verdad, justicia y reparación.

Así, pues, se tiene probado al margen de toda duda que el 7 de noviembre de 1985 IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ salieron vivos, bajo el control del Ejército Nacional, del Palacio de Justicia recuperado por las fuerzas del Estado; al menos IRMA

FRANCO fue conducida al segundo piso del Museo del 20 de Julio bajo custodia de un soldado, donde fue señalada de pertenecer al grupo subversivo M-19.

A partir de esos momentos lo único cierto es que no se sabe nada de su paradero, pese a que estaban bajo la custodia del Ejército que debía garantizarles su vida e integridad personal y ponerlos a disposición de las autoridades competentes si los consideraba sospechosos de ser parte o auxiliadores del comando insurgente.

Eso implica que IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ fueron privados de su libertad y ocultados desde entonces y siguen siéndolo hasta la fecha, pues no se ha develado la suerte corrida por ellos ni dado a conocer su paradero, manteniéndose la negativa a reconocer la privación de la libertad, sustrayéndolos del ampro legal.

Como se dijo al comienzo de estas consideraciones, sobre estas tres personas, entonces, se estructuró el delito de secuestro simple desde el 7 de noviembre de 1985, pero como continuó ejecutándose el comportamiento punible de carácter permanente hasta después de julio de 2000, y se mantiene a la fecha, a partir de la vigencia de la Ley 589 de 2000 la conducta se adecuó a la descripción típica del delito de desaparición forzada, que por su mayor riqueza descriptiva subsumió la conducta contra la libertad individual, y en esas condiciones está demostrada la existencia del comportamiento punible endilgado.

Esa conducta es antijurídica porque vulnera, sin justa causa, el bien jurídico de la libertad individual, protegido por la Constitución y la ley, y entraña una de las más graves violaciones a los derechos

humanos, dado su carácter pluriofensivo, puesto que no solo afecta los derechos esenciales de la persona humana sino que la coloca en un estado de indefensión tal, ocasionando la limitación total de su ser.

Las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Constituyen un ultraje a la dignidad humana; una violación grave y manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia, desconociendo el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

Ahora, de ese comportamiento típico y antijurídico, la Fiscalía, en el caso, acusa como coautores al Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, al para entonces Capitán OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ y a los Sargentos LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA, ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, por cuanto fueron quienes realizaron el manejo del personal que salió vivo del Palacio de Justicia; son las personas que tenían que asumir con su división de trabajo los aspectos inherentes a la labor de inteligencia; las que necesariamente "*controlaban*" al personal liberado y las que sin discusión recibieron a las personas que fueron objeto de desaparición y de las que no se tiene noticia alguna. Pero además, las que sabían los nombres y conocían las personas que estaban

siendo objeto de investigación y que fueron trasladadas para verificación. Los sindicados, según la Fiscalía, de manera voluntaria y conociendo la antijuridicidad de sus actos, ordenaron, dispusieron y realizaron actividades sobre esas personas, que finalmente llevaron a su desaparición[293].

Sobre el particular, si bien es cierto en las instalaciones del museo Casa del Florero se estableció un puesto de mando avanzado donde, bajo el mando del Comandante del B-2, EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, se acogía al personal evacuado del Palacio de Justicia para su identificación, registro y control, realizándose labores de inteligencia para detectar posibles miembros del grupo subversivo, sospechosos de ser colaboradores y obtener información para generar inteligencia de combate, entre otras cosas, igual es cierto que en esas tareas también participó personal de otros organismos como la Policía, el F-2, el DAS, la DIJIN, la DINTE, de manera que no es acertado afirmar que en exclusiva y necesariamente los miembros del B-2 de la Brigada XIII se encargaron del manejo del personal que salió vivo de la edificación judicial.

Tampoco es correcto asegurar que por tener que asumir con división de trabajo los aspectos inherentes a la labor de inteligencia se esté ante una coautoría criminal, pues eso sería tanto como afirmar que las labores de inteligencia constituyen per se actos criminales, lo cual es evidentemente un despropósito.

Derivar responsabilidad penal individual en contra de una persona, basados en su pertenencia al B-2 de la Brigada XIII y su presencia en el lugar de los hechos, sin examinar en concreto la actividad llevada a cabo por cada quien y sin determinar la prueba objetiva,

[293] C.O. 22A Instrucción Fl 117 y 118. (Resolución de Acusación págs. 356 y 357).

clara, precisa y verificable que lo conecte con los comportamientos punibles endilgados, significa atribuir responsabilidad netamente objetiva, y aparejaría, casi necesariamente, responsabilizar a todo aquel que de una u otra forma participó en la operación de recuperación de la sede del poder judicial, sólo por ese hecho.

Es indispensable, pues, examinar individualmente la prueba respecto a la participación de cada uno en los acontecimientos, para determinar su conexión con el comportamiento punible específico imputado, esto es, la desaparición forzada de las tres personas que en este proveído se han declarado como sujetos pasivos del delito; partiendo del concepto legal de coautoría.

El artículo 29 del Código Penal establece que es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento y son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

Sobre el concepto de coautoría se ha dicho que *"El fenómeno de la coparticipación criminal, entendido como realización conjunta del hecho punible, comprende la intervención de autores, coautores y cómplices…Son coautores aquellos autores materiales o intelectuales que conjuntamente realizan un mismo hecho punible, ya sea porque cada uno de ellos ejecuta simultáneamente con los otros o con inmediata sucesividad idéntica conducta típica …., ora porque realizan una misma y compleja operación delictiva con división de trabajo, de tal manera que cada uno de ellos ejecuta una parte diversa de la empresa común.*

…serán coautores quienes a pesar de haber desempeñado funciones que por sí mismas no configuren el delito, han actuado como copartícipes de una empresa común –comprensiva de uno o varios hechos- que, por lo mismo, a todos pertenece como conjuntamente suya" …..

….., al primer supuesto …. se le denominó "coautoría propia", en tanto que al segundo ….. se le llamó "coautoría impropia", en atención a que cada cual

actúa por su lado, pero todos aportan para el propósito común. Por esta circunstancia se hacía, y se hace, referencia a la "división funcional de trabajo"…

…….

….. los actuales desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales se orientan por reconocer como característica de la denominada coautoría impropia, que cada uno de los sujetos intervinientes en el hecho punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el tipo, pero sí lo hacen prestando contribución objetiva a la consecución del resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del hecho con división de trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito, y previo o concurrente a la comisión del hecho, sin que para la atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada interviniente lleve a cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado y desconectado del plan común, ……."[294]

La coautoría impropia, o por dominio funcional del hecho, implica la existencia de un acuerdo común, la división de tareas, la esencialidad del aporte y la ausencia de jerarquía interna estricta. Es una forma de participación directa, en cuanto cada cual tiene dominio funcional del hecho; cada uno de los coautores ejerce el dominio pleno sobre su propia voluntad para cumplir una parte del plan criminal común y para realizar el aporte personal que ha aceptado para asegurar la obtención del resultado criminal.

Así las cosas, en el caso difícilmente se puede sostener que la participación de todos y cada uno de los acusados responda a la noción de coautoría impropia, en tanto no se ha establecido la existencia de un acuerdo común, previo o concomitante, para la realización del punible; no se evidencia la distribución de tareas específicas direccionadas a la desaparición de personas; no se

[294] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 4 de enero de 2008, M.P. ÁLVARO PÉREZ PINZÓN

puede afirmar que cada quien conservara el dominio funcional del hecho y menos la ausencia de jerarquías internas.

Aquí, según lo muestra el expediente, más que un acuerdo común, lo que existió fue la impartición de órdenes, instrucciones perentorias, emanadas de esferas de mando superiores al interior de un cuerpo jerárquicamente organizado, y la participación de diferentes maneras de varias personas en diferentes niveles de mando, que propiciaron, cohonestaron -violando la posición de garante que ostentaban- y permitieron la ejecución del comportamiento punible por parte de ejecutores indeterminados.

Esto, si bien no se ajusta a la noción tradicional de coautoría impropia, no implica que no se esté ante una forma de coparticipación criminal.

Partiendo de las nociones de autoría (directa o mediata) y de coautoría contempladas por el art. 29 del código penal, y atendiendo las teorías sobre el dominio del hecho[295], se concluye que responde penalmente quien tiene dominio de la acción propia, cuando actúa individual y directamente (autoría directa); quien tiene dominio de la voluntad ajena, cuando actúa individualmente en forma indirecta, por interpuesta persona (autoría mediata), y quien participa del dominio conjunto del hecho conjunto, cuando actúa en un colectivo y aporta al resultado de manera importante (coautoría directa o inmediata).

[295] En las teorías del dominio del hecho el debate se dirige a definir qué se entiende por tener su dominio, para reconocer como autor a quien se le pueda atribuir tenerlo. No es una discusión pacífica ni acabada, pero hoy en día es generalmente utilizada en el que se crea su mejor entendimiento para explicar la motivación de la decisión judicial. Aquí se la acoge en el sentido de que dominar el hecho significa que el autor tiene el poder de decidir si se realiza o no se realiza la conducta ilícita, y lo expresa externamente, mediante acción u omisión.

Igual puede darse el caso que eventualmente varios coautores puedan acordar un plan criminal común y no lo lleven a cabo personalmente sino a través de una o varias personas utilizadas como instrumento. Esto es, quienes participan del dominio conjunto de la voluntad ajena y actúan en un colectivo en forma indirecta por interpuesta persona, utilizando a otro como instrumento, lo que puede catalogarse como coautoría indirecta o mediata.

Así, se puede entender que la expresión "*Son coautores*" del artículo 29 del Código Penal implica siempre un numero plural de autores, independientemente del modo como realicen la conducta, directa o indirectamente, y por tanto es viable establecer la subdivisión de coautoría directa o inmediata y coautoría indirecta o mediata.

No obstante, la noción de coautoría mediata así entendida, tampoco abarca el caso en estudio, en tanto se consienta que la autoría indirecta o mediata, y por ende la coautoría mediata, mediante la utilización de voluntades ajenas como instrumento, hace referencia a la utilización de una persona que no tiene conocimiento o conciencia propia de la realización del tipo delictivo o actúa bajo coacción o miedo insuperables, aunque tenga conocimiento y consciencia de su acto. Se utiliza a una persona como un verdadero objeto, un instrumento ciego, totalmente ignorante del significado y consecuencia de su acción material o que pierde la capacidad de autodeterminación de su conducta que lleva a un resultado objetivamente típico.

En ese caso es autor o coautor mediato quien utiliza al otro como instrumento, de modo que la ideación, los actos preparativos, el dolo, y por lo tanto la responsabilidad, son de su cargo, mientras que los actos ejecutivos esenciales son realizados por el instrumento, sin responsabilidad penal.

No se puede predicar esta clase de coautoría respecto de los aquí encausados, pues definitivamente no se precisa por la Fiscalía, ni se vislumbra, que mancomunadamente hayan utilizado voluntades ajenas inconscientes, coaccionadas o amedrentadas, como instrumentos para la ejecución material de los desaparecimientos, y menos es sostenible razonablemente que los autores materiales o ejecutores físicos del delito permanente -subsistente hasta la fecha- estén exentos de responsabilidad penal.

Como se dijo ya en estas consideraciones, los hechos imputados por la Fiscalía en el presente caso implican la expedición de órdenes, instrucciones perentorias, provenientes de esferas de mando superiores, en una relación de estricta jerarquía vertical descendente, al interior de un cuerpo jerárquicamente organizado, y la participación en distintas modalidades de varias personas en diferentes niveles de mando y de ejecutores materiales indeterminados que actúan con plena consciencia de la ilicitud de su comportamiento.

Esas características resaltan la existencia de una forma de coautoría indirecta o mediata diferente, que abarca la existencia de subordinación estricta entre diferentes niveles de coautores, donde, en lugar de acuerdo común previo o concomitante, los niveles inferiores cumplen órdenes sin participar en el diseño o adopción de la política, plan o designio criminal, ni en la definición de las instrucciones que permitirán llevarlo a la realidad.

En esta clase de coautoría mediata responde penalmente quien tiene el mando dentro de una organización jerárquica, cuando actúa en el colectivo y deja la ejecución del hecho en manos de subalternos (coautoría indirecta o mediata), así como todos y cada

uno de quienes de alguna manera participan dentro de la cadena de mando para hacer efectiva la política, la orden, el plan o el designio criminal.

Vale resaltar que, así como en la autoría individual, es factible que en esta especie de autoría colectiva se realice la participación por acción o por omisión, a través de “instrumentos”, personas no imputables o responsables, o a través de ejecutores responsables.

En el caso en que los autores realizan la conducta a través de otras personas que no son instrumentos ciegos, sino que conservan su conocimiento y voluntad; autores responsables porque actúan con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, compartiendo con el superior el objetivo criminal porque lo aceptan o se adhieren a él, los autores indirectos o mediatos tienen un poder de mando sobre los ejecutores inmediatos.

Esta forma de autoría implica la existencia de una relación interna de estricta jerarquía formal que no se presenta en la coautoría directa, y es la forma como normalmente funcionan los grupos organizados al margen de la ley, pero también se presenta en grupos con origen en organizaciones legítimas, en las que, para determinados objetivos, la organización misma, o grupos internos de ella, deciden actuar por fuera de las normas. Ambos responden a lo conocido como estructuras o aparatos organizados de poder.

CLAUS ROXIN perfecciona la teoría de la autoría mediata, agregando al dominio de la voluntad por miedo o por error, la tesis del dominio de la voluntad a través de un aparato organizado de poder, en cuyo caso el autor no actúa de manera separada sino como parte de un engranaje mecánico, resultándole suficiente controlar los resortes del aparato, ya que en el evento de que alguno

de los ejecutores se rehúse a cumplir su tarea, surge otro que en su lugar la desarrollará, sin que se perjudique la realización del plan total.

En estos casos son los jefes, los dirigentes o los directores, quienes de manera exclusiva detentan el dominio de los acontecimientos mediante la utilización de una estructura organizada de poder, y eso es lo que finalmente determina su condición de autores mediatos de los delitos así cometidos. Caracteriza entonces a esta figura el dominio que posee quien maneja facultativamente el sistema, no dirigido a una voluntad concreta sino a una indeterminada, pues cualquiera que sea el ejecutor material de la orden delictiva, el hecho como tal tendrá existencia.

En la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, se hace necesario el cumplimiento de tres requisitos: el dominio de la organización (autores de escritorio), la fungibilidad del ejecutor y la actuación de estos supuestos al margen de la legalidad; lo que no implica que los actores deban pertenecer a grupos ilegales, sino que las actividades que desplieguen se hallen por fuera del amparo normativo, debiendo quedar claro la fungibilidad del ejecutor, dado que el autor mediato no depende de un ejecutor concreto, como en el caso del inductor.

Dependiendo de la rigidez de la organización y la ubicación en la cadena de mando, es factible que alguno conserve algún dominio de su propia acción y hasta el codominio de la organización en algún grado. Pero la eventual renuencia de alguno de estos eslabones no garantiza que el resultado no se obtendrá.

En esa estructura criminal se presenta, entonces, una situación de coautores mediatos, con variados niveles de jerarquía y de

capacidad de decisión, quienes deben responder porque adoptan un plan criminal, o porque aceptan, tácita o expresamente, un plan criminal ya establecido en niveles superiores.

En la autoría colectiva mediata a través de aparatos organizados de poder la ejecución de una conducta se basa en la aceptación de una orden y no en una decisión conjunta. Puede haber varios niveles de mando hasta llegar al nivel del ejecutor y ese poder de mando se manifiesta siempre en línea vertical descendente, lo cual es determinante para la atribución de autoría mediata a los diferentes eslabones en la cadena de mando del aparato de poder.

En esos casos, como lo precisó la Corte Suprema de Justicia, cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes -gestores, patrocinadores, comandantes- a titulo de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la función encargada -comandantes, jefes de grupo- a titulo de coautores; y a los directos ejecutores o subordinados -soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos, pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos con una posición conceptual que conlleve la impunidad.

En el mismo sentido ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había sostenido que "*La autoría mediata, por dominio de la voluntad, a su turno, puede surgir por coacción, error, empleo de un ejecutor inimputable o menor, o en virtud de estructuras de poder organizadas. Esta forma de autoría mediata puede ser aplicada tanto a delitos cometidos en virtud de un aparato de poder de organización estatal, como también a través de una estructura no estatal, es decir, por la criminalidad organizada. En los casos de organizaciones delictivas con poder, además de los ejecutores materiales, también debe responsabilizarse a los dirigentes, por su influencia, por sus*

órdenes de ejecución, por trazar políticas de actuación, por señalar víctimas, por decir el modus operandi, etc.”.

Así, el dominio de la voluntad también puede obtenerse a través de los llamados aparatos organizados de poder, en los que la preponderante posición que ocupan en ellos uno o varios sujetos los convierte en autores mediatos de la conducta que ejecutan sus subalternos. Su fundamento se encuentra en la fungibilidad de los miembros de la organización que llevan a cabo la ejecución material de las órdenes y que son instrumentos de los que se encuentran en la cúpula del aparato. Según este planteamiento el dominio de la voluntad estaría siempre en el hombre de atrás, puesto que la estructura del aparato garantiza el cumplimiento de la orden independientemente de la individualidad del autor inmediato, pues si este último no accede a desarrollar la disposición de sus superiores, otro lo hace en su lugar, sin que por ello dejara de ejecutarse la conducta delictiva.

Por eso, en criterio de ROXIN “*el factor decisivo para la fundamentación del dominio de la voluntad en este tipo de casos, que deben situarse frente a los de coacción o error, es una tercera forma de autoría mediata, que radicaría en la fungibilidad de los ejecutores*”, lo que para KAI AMBOS significa que el verdadero instrumento no es la persona individual, sino un mecanismo de poder que actúa de modo prácticamente automático y que es *“el aparato”.*

Por consiguiente, es irrelevante, para el dominio del hecho por parte del sujeto de detrás, la individualización o concreción del autor directo, porque desde su posición el agente no se presenta como persona individual, libre y responsable, sino como anónima y sustituible.

De otro lado, la coautoría por cadena de mando también se puede consolidar tratándose de comportamientos punibles consumados por funcionarios de menor o residual grado, quienes, como anillos últimos, hubiesen recibido órdenes de inmediatos superiores constituidos en mandos medios, y éstos a su vez de otras jefaturas ascendentes que administrativamente se hallan articuladas hasta llegar a la cabeza principal[296] que dio la inicial orden. En este seriado descendente del mandato o propósito hasta llegar al ejecutor, todos responden a título de coautores; de tal forma que el autor no es solo el jefe máximo de una organización, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando.

Ahora, dentro de esta clase de coautoría mediata, se puede dar la participación por acción o por omisión en alguno de los eslabones de la cadena, pues, como quiera para el derecho las consecuencias de la acción y la omisión son equivalentes, es posible, respecto de autoridades que ostentan la condición de garantes, edificar la responsabilidad penal a partir de la comisión por omisión, en casos de estructuras o aparatos organizados de poder, como cuando los miembros de la Fuerza Pública, teniendo posición de garantes respecto de los bienes jurídicos de la población civil, aun cuando no se demuestra su participación activa, pero sí el incumplimiento de sus deberes de impedir el resultado, permiten o no evitan que

[296] El dirigente que ocupa dentro de un aparato organizado de poder con actitud global criminógena un determinado rango y da órdenes a un miembro de la organización que ostenta un rango inferior para que cometa un delito, puede contar con que a causa de la actitud criminal del colectivo, ya establecida y del poder de mando y disposición a cumplir órdenes que en aquel existe, muy probablemente su orden será cumplida, lo que le convierte en autor mediato del hecho realizado por el ejecutor material. El subordinado es penalmente responsable, pero quien da la orden también es responsable con base en su poder de mando y en la absorción envolvente del subordinado en la organización que asegura su obediencia (…) El dominio por organización se da cuando el aparato de poder organizado jerárquicamente que asegura la obediencia y es utilizado por el que está detrás, se opone, según el convencimiento general con sus atrocidades basadas en su actitud ideológico-criminal de carácter civil a las concepciones valorativas de las naciones civilizadas y el que utiliza semejante aparato de poder se ha colocado mediante la comisión de atrocidades fuera del amparo civil del principio nulla poena. PATRICIA FARALDO CABANA, Responsabilidad penal del dirigente en estructuras jerárquicas, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2004, página 98.

subalternos atenten contra bienes jurídicamente protegidos, en cumplimiento de políticas, planes, órdenes o instrucciones encaminadas a ello, y entonces procede su responsabilidad penal en la modalidad de comisión por omisión, dentro de la estructura organizada de poder, porque expresa o tácitamente compartieron el designio criminal.

Es de aclarar aquí que no se cuestiona al Ejército Nacional como institución legítima del Estado que según el artículo 217 Constitucional tiene como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, que por su propia naturaleza responde al concepto de estructura o aparato organizado de poder. Pero eso no impide que en su interior eventualmente se inserten células o grupos que, aprovechando precisamente esa organizada estructura de poder y la sólida jerarquización vertical, actúen al margen de la ley, lo que, si bien le hace mucho daño, no necesariamente compromete a toda la institución.

Para el caso, frente a la conducta desarrollada en los hechos por cada uno de los procesados, se tiene que a cargo del puesto de mando avanzado instalado en la Casa Museo del 20 de Julio quedó el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, Comandante del B-2 de la Brigada XIII, quien en términos generales intenta minimizar cualquier clase de responsabilidad y control sobre el manejo de las personas sacadas del Palacio de Justicia y llevadas al museo[297].

Su tarea en la Casa del Florero, impuesta por el General ARIAS CABRALES, dice, consistía en atender solícitamente a los rehenes, prestarles apoyo médico, evacuar con prontitud a los heridos hacia

[297] Indagatoria de EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO. Folios 28 y siguientes original 7 de instrucción.

los puestos de socorro, hospitales y demás; identificarlos hasta donde fuera posible, registrarlos para saber qué personas salieron y facilitarles su desplazamiento a sus residencias.

Asegura que no tenía control ni mando sobre el personal del DAS ni de la DIJIN y niega haber dado alguna orden respecto al manejo de los liberados, porque no le correspondía hacerlo y no sabe a quién le correspondía ese procedimiento. Que él sepa, simplemente salían del Palacio, los desplazaban, los enfermos los embarcaban en las ambulancias y "*… el resto pues si llegaban o no a la Casa del Florero no tengo ni idea, no se*"[298].

Faltando a toda lógica y subestimando su propia condición de comandante de inteligencia, al responder si se pudo establecer la presencia de guerrilleros entre los liberados, aduce que desconociendo a los subversivos le es muy difícil saber quiénes hacían parte del M-19 y que estaban dentro de las personas liberadas; "*como desconocía a las personas pues no tenía ninguna prevención contra ellas, de pronto me asaltaban en la buena fe y había uno que otro, 2 o 3 o 5, no sé cuantos que fueran subversivos y salieron, con nombres falsos, con vestidos diferentes, en una situación de estas es imposible poder uno verificarlo*", y asegura que como oficial de inteligencia de la Brigada no realizó durante la toma ninguna actividad para establecer quiénes eran del grupo subversivo.

Contra toda evidencia, niega conocer lo que sucedía en el segundo piso de la casa museo respecto a la conducción allí de personal considerado como sospechoso; niega que se haya identificado personal perteneciente al M-19 e incluso desconoce las conversaciones sostenidas con el Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK SÁNCHEZ y que aparecen documentadas en el

[298] Folio 34 ibídem.

paginario, indicando que las comunicaciones que tuvo con él fueron para temas como la comida de los soldados, oficiales y suboficiales, comunicación con las casas para informar que se encontraban bien y de pronto para envío de ropa. Respecto a la frase "*Esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco*", simplemente dice que "*hay personas que les gusta hablar con parábolas, dichos o modismos*" y el Coronel SADOVNIK tenía esa costumbre[299].

En resumidas cuentas, el Coronel SANCHEZ RUBIANO, contrariando la lógica y la razón, pretende negar el ejercicio de la función normal y rutinaria para la que precisamente estaba asignado como Comandante del B-2 de la Brigada: generar inteligencia estratégica, táctica y de combate sobre sus tres elementos: enemigo, tiempo y terreno.

De manera bastante evasiva y contrariando lo informado incluso por otros miembros de la institución militar, procura minimizar la labor del B-2, y particularmente la suya, durante los acontecimientos del Palacio de Justicia, cuando, por el contrario, el Coronel PLAZAS VEGA manifiesta que las personas evacuadas de la edificación judicial se direccionaban a la Casa del Florero "*… para que pasaran todos por el filtro de control del Coronel SANCHEZ RUBIANO, B-2 de la Brigada*"[300], "*porque no nos interesaba que de pronto se nos fuera algún guerrillero para otra parte*"[301].

Al comentar el procedimiento del B-2 frente a los rehenes, el Coronel PLAZAS VEGA señala que SANCHEZ RUBIANO tenía unas personas que hacían un breve cuestionario a cada liberado, tenía gente de otras instituciones para ayudar a identificar a los evacuados y tenía contacto telefónico con otras entidades de

[299] Folio 234 cuaderno original 7 de instrucción.
[300] Folio 187 original 4 de instrucción.
[301] Folio 188 ibídem.

seguridad para enterarse de antecedentes, y con fundamento en esa rápida investigación tomaba las decisiones pertinentes[302].

Igual asegura que los rehenes se llevaban a la Casa del Florero y en ese lugar el Coronel EDILBERTO SANCHEZ, B-2 de la Brigada XIII, tenía unos procedimientos que cumplir según órdenes del Comandante de la Brigada. Según las órdenes impartidas, quien estaba dirigiendo, comandando o a cargo del Museo del 20 de Julio y de la "*operación de filtro*" era EDILBERTO SANCHEZ. El Coronel PLAZAS no cree que haya habido otra persona del Ejército o de otra fuerza que tuviera la responsabilidad del manejo de los liberados del Palacio de Justicia porque en cuestiones militares "*siempre*" se tiene en cuenta el principio de "*unidad de mando*" y esa tarea la impartió el General ARIAS CABRALES[303].

Respecto de guerrilleros que pudieran ser sacados del Palacio, asegura el Coronel PLAZAS, necesariamente tuvo que existir instrucciones de parte del Comandante de la Brigada al jefe del B-2, pues eso se hubiera podido presentar y necesariamente SANCHEZ RUBIANO debía tener instrucciones al respecto. La única persona que podía calificar a alguien de sospechoso era quien tenía a cargo la identificación de las personas, tarea de SANCHEZ RUBIANO[304].

En el mismo sentido brinda valiosa información el General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES[305], señalando que a SANCHEZ RUBIANO se le instruyó para que "*con auxilio*" de elementos de la Policía, del DAS y del Batallón de Inteligencia del Ejército, recibiera a los evacuados, con la Cruz Roja y la Defensa Civil prestar auxilio a quien lo requiriera, y fueran identificando a los liberados. Para esta

[302] Folio 189 ibídem.
[303] Folio 110 y siguientes cuaderno 7 de instrucción.
[304] Folio 114 ibídem.
[305] Declaración del 21 de febrero de 2006, folio 48 y siguientes cuaderno original 5 de instrucción.

tarea SANCHEZ organizó su área de trabajo en la Casa del Florero, donde se establecieron los elementos de inteligencia de diferentes instituciones "*a cargo del B-2 de la Brigada*" y el B-3.

Según el General ARIAS CABRALES, el Coronel SANCHEZ RUBIANO estableció su área de trabajo al fondo del museo, dando cabida a elementos del DAS y de la Policía, "*dada su labor que requería mayor verificación y análisis*"[306]. En caso de encontrar personal sospechoso, la orden fue establecer su real identidad por quienes en apoyo del B-2 actuaban por parte de la Policía, el DAS y el Batallón de Inteligencia del Ejército, pues el procedimiento para detectar y manejar a los sospechosos estaba a cargo del B-2 de la Brigada. La responsabilidad directa de los sacados con vida del Palacio la tenía el B-2, a quienes se les encomendó recibirlos, verificar su identidad y definir su liberación[307].

En certificación jurada del 29 de septiembre de 1989 dirigida al Juez 1º de Instrucción Penal Militar, el General JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES señala que *"dadas las circunstancias apremiantes del caso, no se cursaron órdenes escritas, éstas fueron emitidas y transmitidas de manera verbal, en forma directa y personal, por medio de los sistemas de comunicación disponibles (radio, teléfono y mensajeros) y a través de los elementos del Estado Mayor de la Unidad Operativa presentes en el área de conflicto o en el Cuartel General de ella (Cantón Norte)"*[308], y con relación a las actividades desarrolladas en la Casa del Florero, precisa que en ese lugar *"se estableció un puesto de verificación para conocer la real identidad de las personas rescatadas del Palacio, encauzarlas a recibir atención médica cuando fuera necesaria, permitirles su traslado a la residencia <u>o poner bajo retención a sospechosos de ser parte del grupo terrorista</u>*" (subrayado nuestro), tareas éstas que estuvieron a cargo del Jefe de la Sección Segunda de la Brigada (B–2), quien contó con la "*colaboración de personal de*

[306] Folio 58 ibídem.
[307] Folio 75 ibídem.
[308] Folio 162 cuaderno 60 anexo de instrucción.

Inteligencia del Comando del Ejército, de organismos similares de la Policía Nacional (SIJIN), del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de empleados del Palacio de Justicia para ayudar a la identificación de quienes allí laboraban"[309].

Según el Coronel LUIS ENRIQUE CARVAJAL NUÑEZ, entre las funciones que cumplió el B-2 en el operativo se hallaban las de *"establecer quién era el enemigo que había ahí, quienes eran, cuántos eran, que tipos de armas tenían, cuál era el dispositivo que el enemigo había adoptado dentro del edificio y también establecer cuál era el propósito que ellos tenían para haber cometido ese delito"*[310]. Objetivos que explican que una persona sospechosa no fuera puesta a órdenes de la Policía Nacional simplemente con el fin de establecer su identidad, sino sometida a los pertinentes interrogatorios con el fin de obtener información y verificar o descartar su eventual pertenencia al grupo subversivo o su colaboración con la toma, siendo varios de ellos conducidos a las instalaciones de la Brigada XIII o de la ESCAB, donde funcionaban unas dependencias reservadas a cargo del B-2, o a otras instalaciones militares o de Policía, como aconteció no sólo con el grupo de conductores varias veces referido, sino con otras personas específicamente catalogadas como sospechosas, como YOLANDA SATODOMINGO ALVERICCI, EDUARDO MATSON OSPINO, ORLANDO QUIJANO y ARRECHEA OCORO.

Contrario a lo pretendido mostrar por el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, queda claro que las tareas que le correspondió realizar durante el desarrollo de los hechos como comandante del B-2 de la Brigada, de por sí impuestas como función normal y rutinaria propia del área de inteligencia militar, no se limitaron a prestar socorro y apoyo solícito a los evacuados de la

[309] Folio 168 cuaderno 60 anexo de instrucción.
[310] Cuaderno original de anexos 8 de la instrucción, folio 66.

edificación judicial, para lo que se contaba con personal de la Cruz Roja y la Defensa Civil.

En sus manos estaba, a más de generar inteligencia estratégica, táctica y de combate sobre enemigo, tiempo y terreno, establecer un filtro de control para identificar posibles miembros del grupo asaltante y evitar su eventual evasión. Detectar y manejar posibles sospechosos para ponerlos bajo retención y tomar las decisiones pertinentes.

Por eso, en palabras del General JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, "*… su labor … requería mayor verificación y análisis*", y en razón a eso mismo la responsabilidad directa de los sacados con vida del Palacio recaía sobre él como Comandante del B-2, porque se le encomendó recibirlos, verificar su identidad y definir su liberación.

En esas condiciones, tampoco es cierto lo argüido por el sindicado en cuanto niega tener el control y mando sobre los miembros de otros organismos de seguridad presentes en el lugar, pues como lo ponen de manifiesto el Coronel PLAZAS VEGA y el General ARIAS CABRALES, estos actuaron en apoyo y colaboración del B-2, bajo su dirección y control, como el mismo Coronel EDILBERTO SANCHEZ lo reconoció antes de ser vinculado como procesado a esta actuación, cuando en declaración del 17 de enero de 1986 ante el Juzgado Treinta de Instrucción Criminal Ambulante precisó que para el desarrollo de la misión a él encomendada en la Casa del Florero en cuanto a la recepción, registro e identificación de los rehenes rescatados del Palacio de Justicia contó con el apoyo de

personal de la Policía Nacional (Sijin, F–2) y algunos agentes del DAS, quienes, afirma, estuvieron bajo su control y dirección[311].

Control que correspondía al Comandante del B-2 por cuanto, como lo resalta el Coronel PLAZAS, en cuestiones militares "*siempre*" se tiene en cuenta el principio de "*unidad de mando*" y esa tarea la impartió el General ARIAS CABRALES. Jerarquización que se imponía desde el Plan de Defensa y Seguridad Interior Tricolor-83, dentro de cuyos criterios básicos que orientaban la actuación del Ejército se establecía que "*el Ejército cuenta con el "mando operacional" sobre otras fuerzas institucionales y sobre los organismos de seguridad del Estado*"[312].

Directriz que en el caso de los hechos para enfrentar la toma al Palacio de Justicia se cumplió como estaba previsto, tal y como se desprende de lo sostenido por el para entonces Coronel LUIS CARLOS SADOVNICK SANCHEZ, quien da cuenta cómo el General, para ese momento Director de la Policía Nacional, VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO *"… [le] había informado y pedía autorización para desembarcar desde un helicóptero un grupo especial sobre la azotea del Palacio de Justicia …*"[313] (subrayamos).

Control militar que igual reconoce el Brigadier General JOSÉ LUIS VARGAS VILLEGAS, para la época de los hechos Comandante del Departamento de Policía de Bogotá, en declaración juramentada del 15 de abril de 1986 dirigida al Juez 30 de Instrucción Criminal Ambulante[314], donde señala que estuvo supervisando personalmente las operaciones en las cuales participó la Policía Nacional con ocasión de la toma del Palacio de Justicia *"pero siempre*

[311] Folio 34 cuaderno 30 anexo de instrucción.
[312] Folio 179 cuaderno 65 anexo de instrucción.
[313] Cuaderno original 5 de anexos, folio 28.
[314] Folios 101 a 103 cuaderno 59 anexo de instrucción.

en coordinación con el señor Brigadier General ARMANDO ARIAS CABRALES, Comandante de la BR–13 y bajo control operacional de éste".

En punto al tema el Coronel LUIS ENRIQUE CARVAJAL NUÑEZ explica que *"es un hecho notorio que luego de producida la toma del Palacio de Justicia, tanto la sede de esta Corporación como en inmediaciones de la Plaza de Bolívar concurrieron autoridades de Policía, incluso, helicoportadamente …, llegaron a la terraza del Palacio de Justicia. … La coordinación fue hecha directamente entre el señor General Arias y el comandante de la Policía de Bogotá. Una vez coordinada se realizó esa operación. Ahora, el mando operacional de esa operación fue ejercido por el señor General Arias, quiero agregar esto …. Inicialmente la Policía actuó independientemente, como fuerza policial, pero una vez el general Arias Cabrales asumió el mando de la operación, la Policía quedó bajo el mando operacional de la brigada, yo calculo entre las 13 y las 14 horas del día 6 de noviembre de 1985 …*".

De manera, no es cierto lo pretendido mostrar por el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO al ser vinculado formalmente a la investigación, en cuanto a carecer de control sobre la situación en la Casa del Florero y de autoridad respecto al personal de otras fuerzas y entidades presentes en el lugar. Por el contrario, dada la directriz emanada desde el mismo Plan Tricolor, el mando operacional correspondió al Ejército y como tal, el control y manejo de las actividades desarrolladas al interior del Museo estaban a cargo y bajo responsabilidad directa del Comandante del B-2.

Así, resulta falaz la exculpación del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, encaminada a negar su conocimiento y responsabilidad respecto de situaciones anómalas al interior del Museo del 20 de Julio; situaciones advertidas por rehenes evacuados del Palacio de Justicia, trabajadores del Museo e incluso por miembros del mismo Ejército, como EDGAR MORENO, menos por el Comandante de

Inteligencia de la Brigada, quien según su decir no supo lo que sucedía en torno suyo.

Las versiones ofrecidas por SANCHEZ RUBIANO respecto al desconocimiento de las anomalías acaecidas a su alrededor aparecen contradictorias, inverosímiles, infundadas. Peor aún, son refutadas no sólo por los dichos de sus pares, oficiales del Ejército que participaron en el operativo, incluido su Superior, el General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, sino por la prueba recopilada a lo largo de la investigación.

El expediente muestra cómo SANCHEZ RUBIANO no sólo era sabedor de lo acontecido en la Casa del Florero sino conocedor de las órdenes existentes respecto al tratamiento dispuesto para los sospechosos y para los identificados como pertenecientes al grupo subversivo.

Muestra de ello son las comunicaciones sostenidas por él con el Coronel LUIS CARLOS SADOVNICK SANCHEZ[315], que evidentemente iban más allá de tratar temas como la comida de los soldados, oficiales y suboficiales, comunicación con las casas para informar que se encontraban bien y de pronto para envío de ropa.

"***ARCANO 5:*** *Eh, recomendación especial* ***mantener*** *eh los no heridos y los que aun no se han podido identificar plenamente eh aislados,* ***aislados****, eh la DINTE, lo va apoyar con material para su clasificación, cambio.*
ARCANO 2: *Recibido y QSL, creo que eh* ***no hemos podido identificar sino una y ya está plenamente identificada por las personas acá****, cambio.*

[315] Recordemos que el Coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, a folio 198 del cuaderno original 4 de instrucción precisa los indicativos de radio utilizados durante la operación del Palacio de Justicia: ARCANO 6 – Comandante B13 (Jesús Armando Arias Cabrales); ARCANO 5 – Jefe Estado Mayor B13 (Luis Carlos Sadovnik Sánchez); ARCANO 4 – Jefe de Logística B13; ARCANO 3 – Jefe de Operaciones B13; ARCANO 2 – Jefe de Inteligencia (B2) B13 (Edilberto Sánchez Rubiano); ARCANO 1 – Jefe de Personal B13; AZABACHE 6 – Luis Alfonso Plazas Vega, y COLOMBIA 6 – podría ser el Presidente, el Ministro de Defensa o el Comandante General de las Fuerzas Militares.

ARCANO 5: *R, eh ya sabe* ***las instrucciones complementarias a estos son terminantes****, cambio.*

ARCANO 2: *Ah, recibido y QSL, recibido y QSL Arcano Cinco*"[316] (subrayados y resaltados nuestros).

En otro parte LUIS CARLOS SADOVNICK y EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO intercambian los siguientes mensajes:

"***ARCANO 5:*** *Arcano Dos - Arcano Cinco, Otero está con cédula falsa, parece que lo tiene usted allí entre el personal, cambio.*

ARCANO 2: *Un, RPT que no le alcancé a copiar el nombre, cambio.*

ARCANO 5: *Otero, Otero, Otero Cifuentes salió con cédula de un muerto, cambio.*

ARCANO 2: *Estoy QSL.*

ARCANO 5: *Arcano Dos - Arcano Cinco.*

ARCANO 2: *Un conductor que yo le doy el nombre posteriormente, cambio.*

ARCANO 5: *Está QSL. La foto de Luís Francisco Otero Cifuentes está en la primera página de El Tiempo, cambio.*

ARCANO 2: *Recibido y QSL, lo conocen y no está dentro de los que tenemos acá, cambio.*

ARCANO 5: *R, esta QSL ¿y el, el seis uno de los seis de estos sujetos eh?, cambio.*

ARCANO 2: *No, negativo* ***únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto, sobre una sujeto que es abogada y que, ya fue reconocida por todo el per, todo personal****, cambio.*

ARCANO 5: ***Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco****, cambio.*

ARCANO 2: *Recibido y QSL*"[317] (subrayamos y resaltamos)[318].

---

[316] CD Transcripciones Carpeta Jimeno RC5 L-B Pág. 9.
[317] CD Transcripciones Carpeta Jimeno RC5 L-B Pág. 13.
[318] Respecto de estas comunicaciones captadas por radioaficionados, dijo el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de segunda instancia dictada en contra del General ARIAS CABRALES: Se consideraron oficiosamente las inquietudes sobre su autenticidad y credibilidad dadas las diferencias encontradas en las versiones aportadas por los periodistas Herbin Hoyos y Ramón Jimeno, y se encontró que esas diferencias corresponden a la forma de presentación que cada uno escogió, sin que se hayan cambiado o traspuesto los contenidos. Valga anotar que para esta instancia, ni la Defensa ni el Ministerio Público, apelantes, cuestionaron aspecto alguno después de que la Vicefiscalia estudió el punto y concluyó que no hubo ilicitud o ilegalidad en la grabación o aducción de las grabaciones.

A pesar del lenguaje cifrado utilizado, el sentido del contenido de esas comunicaciones es suficientemente claro dentro del contexto de la situación.

El Coronel SADOVNIK le indica al Coronel SANCHEZ RUBIANO que los sospechosos deben mantenerse aislados y le recuerda que sobre esas personas hay instrucciones complementarias terminantes, esto es, que no admiten duda o discusión, son categóricas, concluyentes y tajantes; no dejándole duda en cuanto a que, respecto a la sujeto que ya fue reconocida por todo el personal, se espera que si está la manga no aparezca el chaleco, esto es, que si está ella, no aparezca ella. En otras palabras, que se la oculte, que se la desaparezca; palabras que no son simplemente parábolas, dichos o modismos, como con simpleza trata de explicarlas el sindicado.

EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO sabía, entonces, que las personas no identificadas plenamente, los sospechosos, debía mantenerlos aislados, esto es, incomunicados[319]. Que sobre esas personas había órdenes especiales, complementarias, que no admitían discusión alguna. Sabía perfectamente, pues era su misión como Comandante de Inteligencia de la Brigada, que se estaba filtrando al personal de evacuados para tratar de identificar eventuales miembros o colaboradores del M-19; que para cuando se dio la comunicación ya había por lo menos una mujer identificada, señalada por todo el personal en la Casa del Florero como parte del grupo asaltante, y era consciente que el destino de esa persona debía ser ocultado. Que esa persona debía desaparecer, ante lo cual simplemente acusó el recibido y lo dio por entendido (QSL)[320].

---

[319] ***ARCANO 5:*** *Eh, recomendación especial* ***mantener*** *eh los no heridos y los que aun no se han podido identificar* ***plenamente*** *eh aislados,* ***aislados***

[320] En lenguaje de comunicaciones de radio y militares, normalmente se utilizan los siguientes códigos: QSL: entendido, acuso recibo. QTH: sitio, posición. QTR: hora exacta. QAP: quedo

Pero igualmente sabía, o debía saber, en su condición de alto oficial del Ejército, que derrotar al enemigo no significaba exterminarlo, suprimirlo o desaparecerlo. Que el uso legitimo de la fuerza para reducir o someter a quienes por fuera de la ley ponen en peligro la seguridad del Estado y las instituciones tiene como finalidad legítima el debilitamiento del enemigo hasta su sometimiento, pero no su exterminio; que el Ejército y en general las fuerzas del Estado tienen la obligación de respetar los derechos a la vida, a la personalidad jurídica, y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Como Coronel del Ejército Nacional EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO debía tener perfectamente claro que el Plan Tricolor 83, en cuanto precisaba que "*El Ejército con el mando operacional de otras Fuerzas Institucionales y el control operacional de organismos de seguridad del Estado, conducen operaciones antisubversivas en su jurisdicción para destruir los grupos alzados en armas con el propósito de mantener el orden interno, garantizar la Soberanía Nacional y las instituciones patrias*", debía ser entendido como el objetivo legítimo de poner al enemigo en estado de imposibilidad de seguir la lucha y no como una política de exterminio del enemigo.

En ese contexto, el Coronel SANCHEZ RUBIANO sabía que las órdenes complementarias terminantes y el objetivo de desaparecer personas (si está la maga que no aparezca el chaleco), y en general toda acción de exterminio del enemigo puesto fuera de combate, violaban los principios del Derecho de los Conflictos Armados que imponen el tratamiento humanitario, la distinción[321] entre civiles y

---

atento. QRZ: quien llama. R: recibido. TKS: Gracias. IMPULSAR: enviar. INCLINACION: referencia, información sobre alguien. ORQUESTA: orden.

[321] Uno de los principios fundamentales del DIH es el de la distinción entre quienes participan directamente o activamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen esa participación. Aplicar el principio resulta necesario para determinar las obligaciones y los derechos que corresponden a unos y a otros.
Se debe:

combatientes, y la protección de civiles y combatientes vencidos[322], y como tal era su obligación evitar que esas órdenes se materializaran.

De manera alguna podría el Coronel enjuiciado, Comandante del B-2, escudarse en la obediencia debida por cuanto las órdenes complementarias y terminantes provenían de estamentos superiores, pues si bien se ha considerado indispensable que dentro de las fuerzas militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, se ha rechazado como inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. El principio no absoluto de obediencia debida que se prohíja con apego a la Constitución, no

---

1. Garantizar a la población civil y a las personas civiles el trato humano y la protección general que les otorga los instrumentos de derecho humanitario.
2. Asegurar a quienes se han rendido y a quienes han quedado fuera de combate el trato humano para ellos previsto por el DIH.
3. Hacer efectivas las garantías previstas por el derecho humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto.
4. Evitar ataques contra bienes que no son objetivos militares.
5. Facilitar las actividades emprendidas por las organizaciones humanitarias para atender a las víctimas del conflicto.

[322] Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
Tomado de III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
Artículo 3 - Conflictos no internacionales
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

solamente corresponde a la noción aceptada por la conciencia jurídica universal como fruto de la evolución histórica y filosófica de tal concepto, sino que también coincide con el alcance que la doctrina del derecho penal le concede.

La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible atente contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente obediencia. La orden de agredir a una persona o de infligirle torturas, tratos crueles o inhumanos, o desaparecerla, bajo ninguna circunstancia puede merecer el calificativo de orden del servicio.

La obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta. La legislación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la licitud del contenido de la orden.

La exoneración absoluta de responsabilidad del militar que conscientemente ejecuta órdenes superiores que signifiquen la vulneración de sus reglas y principios no es de recibo y, por el contrario, compromete su responsabilidad individual, máxime si sus actos se apartan de las reglas indiscutibles de las confrontaciones armadas y ofenden el sentimiento general de la humanidad. La obediencia ciega del militar subalterno, lo mismo que su correlativa irresponsabilidad absoluta, son rechazadas por el derecho internacional humanitario, pues de permitirse éste carecería de sentido[323].

[323] Sentencia C-578 de 1995 de la Corte Constitucional.

Resulta notoriamente contraria a la función legítima constitucional de la fuerza pública la comisión de una conducta gravemente atentatoria de los derechos humanos. Al respecto es importante mencionar que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia[324].

En lo que respecta a las actuaciones de los agentes estatales es claro que deben enmarcarse dentro de la constitución y la ley, esto es, dentro del respeto fundamental de los derechos de las personas, pues son a estos a quienes compete la garantía máxima de los derechos humanos, especialmente en un estado democrático y social de derecho. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: "*Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana*"[325].

En esas condiciones, el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, como comandante del B-2 de la Brigada XIII, teniendo la responsabilidad directa de los sacados con vida del Palacio de Justicia, respecto de quienes se le encomendó recibirlos, verificar su identidad y definir su liberación, o detectar posibles miembros del

[324] Sentencia C-358 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[325] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Godínez Cruz Vs. Honduras Sentencia de 20 de enero de 1989 (Fondo), párr. 162.

grupo insurgente y poner bajo retención a sospechosos de ser parte del grupo terrorista[326], asumió la posición de garante y como tal responde por acción o por omisión de los resultados de una descripción típica que no impidió, estando en la posibilidad de hacerlo, y teniendo el deber jurídico de evitarlo.

El art. 25 del código penal establece que "*La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión.*
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encargado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o la ley"[327].

Sobre la posición de garante en relación con la fuerza pública, la Corte Constitucional, en sentencia SU-1184 de 2001, precisó: "*En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los*

[326] Folio 168 anexo 60 de instrucción.
[327] En el código penal de 1980 ya se contemplaba la posibilidad de realización del hecho punible por omisión, al establecer en su artículo 19 que "El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión", y en el artículo 21 que "Nadie podrá ser condenado por un hecho punible, si el resultado del cual depende la existencia de este, no es consecuencia de su acción u omisión.
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo".

tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho" (subrayado ajeno al original).

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 27 de julio de 2006 precisó que "*La posición de garante es la situación en que se halla una persona, por la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.*

En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado lesivo que podía ser impedido. Es el concepto que vincula el fenómeno estudiado con los denominados delitos de comisión por omisión, impropios de omisión o impuros de omisión.

En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo importante es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de lo que se espera de ella, porque defrauda las expectativas sociales sobre su comportamiento.

La legislación penal colombiana sigue este criterio restringido, con fundamento principal en que los artículos 1° y 95-2 de la Constitución Política, que enuncian el principio de solidaridad, y con base en ellos el artículo 25 del Código Penal expresa en cuales casos es predicable la posición de garante, siempre con referencia a la omisión impropia.

El artículo 25 consta de dos partes:

La primera .incisos 1° y 2°, responde al primer paso en la evolución del concepto, a la inicial y más tradicional posición de garante; se relaciona directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de una conducta cuando tiene el deber jurídico de impedir un resultado jurídico y no lo evita, pudiendo hacerlo. Es decir, apunta a los delitos de comisión por omisión.

Esa primera fase quiere decir que la imputación solamente puede ser consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución o por la ley al autor del hecho que está obligado a resguardar específicamente un bien jurídico. Así, cuando se tiene el deber jurídico de obrar y no se actúa, el autor rompe la posición de garante. …..

Para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo (primera hipótesis); y existe posición de garante en los casos en que, frente a esos bienes jurídicos particularmente mencionados, la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio, mantiene una estrecha comunidad de vida con otras, emprende la realización de una actividad riesgosa con otros individuos, o crea con antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente.

El Código Penal actual trae expresamente consagrada la clausula general de equiparación entre acción y omisión, pero quedan totalmente abiertas las posiciones de garante. …..

En la definición adoptada por el Código Penal, fue acogida la definición genérica de la "posición de garante", en cuanto dice que se entiende por tal que el agente tenga a su cargo la protección de un concreto bien jurídico, o la vigilancia de una fuente de riesgo "conforme a la Constitución o a la ley"….". (subrayado ajeno al original).

No está demostrado que el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO haya sido el autor directo o inmediato de las desapariciones forzadas que se le endilgan, por lo que, para imputarle el comportamiento por acción, es necesario tener probado que impartió la instrucción u orden específica de que esas personas fueran desaparecidas, o, en definitiva, que retransmitió las órdenes complementarias y terminantes que le recordó el Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK SÁNCHEZ, o que participó en la elaboración, producción y emisión de esas órdenes.

Aun cuando no hay dentro del expediente ninguna prueba directa, objetiva y concreta, que expresamente señale al Comandante del B-2 impartiendo la orden de secuestro o desaparecimiento de personas; razonablemente es posible inferir que en efecto dio curso a las instrucciones complementarias terminantes para el manejo y tratamiento de los sospechosos y con mayor razón de los identificados como pertenecientes al grupo insurgente; explicándose así que, luego de habérsele recordado por parte de SADOVNIK la existencia de esas órdenes terminantes, no apareciera la abogada que reportó como identificada de ser miembro del M-19.

Dada su condición de Comandante del B-2, a cuyo cargo y responsabilidad directa eran puestas las personas evacuadas del Palacio de Justicia y teniendo en cuenta que hay prueba concreta en punto a que efectivamente él ordenó conducir a las instalaciones de la Brigada XIII a personas sacadas de la edificación judicial, supuestamente para que se estableciera plenamente su identidad y eventuales antecedentes, y que está demostrado que conocía expresamente las instrucciones existentes respecto de los sospechosos de hacer parte del grupo asaltante, se puede inferir que retransmitió al personal a su cargo las órdenes impartidas.

EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO permitió, con su anuencia y complacencia, que esa clase de órdenes se ejecutaran para “desaparecer el chaleco”, pues de lo contrario, sabiéndose responsable directo de las personas evacuadas del Palacio de Justicia y en especial de los sospechosos y retenidos por ser miembros del M-19, y siendo consciente que efectivamente tenía bajo su responsabilidad sospechosos y al manos una mujer reconocida como integrante del grupo asaltante, hubiera hecho algo, tomado alguna precaución, para evitar la consumación de las órdenes irregulares y garantizar la seguridad de esas personas, haciendo honor a su posición de garante.

De otro lado, no es admisible que como COMANDANTE DE INTELIGENCIA de la Brigada, estando in situ, venga a decir que no sabía lo que ocurría a su alrededor y no tuviera control de las personas que le eran puestas a disposición. Menos aceptable es que abandonara el puesto de mando dejando allí, sin precaución alguna, a la guerrillera reconocida, sabiendo de las instrucciones especiales que existían, sin preocuparse por definir su situación, esto es, sin asegurarse de ponerla a disposición de la autoridad competente.

El evidente afán de EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO de eludir la verdad refrenda el convencimiento sobre su responsabilidad, pues sólo miente quien tiene interés en mentir porque la verdad le perjudica, y esa verdad que evita el sindicado no puede ser otra que la que lo relaciona con el comportamiento punible imputado y tiende a mostrarlo penalmente responsable por acción.

De cualquier manera, teniendo en cuenta que, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas, debemos resaltar que de lo que

sí se encuentra evidencia incontestable es de su omisión de realizar acciones positivas para impedir esas desapariciones; acciones que legalmente le correspondían y se esperaban de él en forma de expresión firme, con autoridad y contundencia para que de ninguna manera se fueran a aplicar por parte de sus subalternos esas instrucciones complementarias terminantes conocidas por él, que pudieran generar la vulneración de derechos de los miembros del grupo insurgente o de sospechosos de ser miembros o colaboradores del M-19. Instrucciones de cuya existencia no sólo era conocedor sino que fue receptor directo de parte del Coronel LUIS CARLOS SADOVNICK, cuando éste le recordó de la existencia de las instrucciones complementarias terminantes, es decir, desde antes de la comunicación con Arcano 5 EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO ya sabía cuáles eran las instrucciones complementarias terminantes, sabía que se esperaba que "si está la manga no aparezca el chaleco", y no hizo absolutamente nada para impedir su materialización.

En el caso del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, como en el del General JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, tal como lo definió el Tribunal Superior en la sentencia de segunda instancia dictada en contra de éste, es entonces aplicable el inciso segundo del art. 25 del código penal, en tanto ostentaba la calidad de autoridad del Estado y como tal tenía el deber jurídico de impedir el resultado de secuestro o de desaparición forzada de insurgentes o sospechosos de serlo[328]. Estaba en posibilidad de impedirlo, pues estaba bajo su responsabilidad y mando el manejo de las personas

[328] En vigencia de la Constitución Nacional de 1886, cuando sucedieron los hechos del Palacio de Justicia, en el artículo 19 se establecía: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto reciproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos"
La Constitución Política de 1991, en el inciso segundo del artículo segundo, ordena: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

evacuadas del Palacio de Justicia, y no lo hizo. Por la Constitución y la ley tenia la vigilancia de la fuente de riesgo de secuestro o desaparición forzada que significaban las instrucciones terminantes complementarias y la indicación de que si estaba la manga no apareciera el chaleco.

Todas las personas sometidas al orden jurídico colombiano, incluso los sospechosos y los guerrilleros, en el caso del Palacio de Justicia, tenían derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y los comandantes militares, como autoridades de la República, tenían el deber de protegerlos, por imposición expresa de la Constitución Nacional, y el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, como oficial del Ejército Nacional, sabía que tenía el deber de garante o protector de esos derechos, y en esas circunstancias le era exigible dar una orden o realizar una acción de protección para contrarrestar las instrucciones complementarias terminantes dispuestas para a esas personas, y no lo hizo. Por el contrario, lo permitió.

Así las cosas, aun cuando hay elementos de juicio importantes para inferir que él mismo difundió hacia sus subalternos las instrucciones terminantes complementarias, pero como no hay prueba concreta de ello, pero sí de que las conocía e incluso las compartía, en la medida en que al serle recordadas por el Coronel LUIS CARLOS SADOVNICK se limitó a darse por entendido sin objetar, cuestionar o hacer ningún reparo; y, omitiendo su posición de garante, no hizo nada para impedir el resultado típico y, por el contrario, permitió que finalmente esas órdenes fueran materializadas por otros miembros de la institución castrense o de otros aparatos de seguridad del Estado; órdenes que hacían parte de un designio criminal previo compartido por mandos superiores del Ejército, incluido el procesado; el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO es coautor mediato por omisión, por haber actuado dentro una

estructura organizada de poder, y como tal debe responder por el delito de desaparición forzada, agravado por su condición de autoridad, en concurso homogéneo respecto de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

A pesar de aplicar los mismos razonamientos y concurrir pruebas suficientes para deducir responsabilidad del coronel SANCHEZ RUBIANO en relación con la desaparición forzada de IRMA FRANCO PINEDA, en esta sentencia no es dable declarar esa responsabilidad para derivar consecuencias penales, es decir, no se le puede condenar por la desaparición de esta persona, por cuanto no fue acusado por la Fiscalía por ese hecho en concreto por razón de la decisión de la Justicia Penal Militar que lo exoneró de responsabilidad mediante decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

En casos como este, la Corte Constitucional precisó que "*….. el deber del Estado de investigar los delitos y amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo parece implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo si se trata de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos. … Entre más grave sea un hecho punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por investigarlo y sancionar a los responsables, a fin de lograr la vigencia de un orden justo (CP Preámbulo y art. 2°). … En tales condiciones, la fuerza normativa de los derechos constitucionales de las víctimas y el imperativo que la Carta impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°) implican que en los casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esos atroces comportamientos, entonces pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existen decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada. La razón es que una prohibición absoluta de reiniciar esas investigaciones obstaculiza la realización de un orden justo e implica un sacrificio en extremo oneroso de los derechos de las víctimas. … también en los eventos de violaciones a los*

derechos humanos y violaciones graves a los derechos humanos, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo del proceso, la acción de revisión procede frente a la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento o la sentencia absolutoria, siempre y cuando una decisión judicial interna, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar, en forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. Esa decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión de derechos humanos que constata la omisión del deber estatal de impartir justicia es entonces el elemento que justifica dejar sin efecto la decisión absolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosa juzgada, pues pone en evidencia que la cosa juzgada era en realidad aparente"[329] (subrayados nuestros).

Así las cosas, teniendo en cuenta la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014, dentro del caso RODRIGUEZ VERA, y otros, versus Colombia, las partes están en libertad de adelantar las acciones que estimen pertinentes para dejar sin efecto la decisión de la Justicia Penal Militar que exoneró de responsabilidad al Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO frente a la desaparición forzada de IRMA FRANCO PINEDA, y la Fiscalía deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra del Coronel SANCHEZ por ese hecho en particular, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas frente a la grave violación de derechos humanos que ello significa.

Ahora, en cuanto a OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ[330], para 1985 era orgánico del Batallón Guardia Presidencial, pero se encontraba trabajando como agregado al B–2 de la Decimotercera

[329] Corte Constitucional C-004 de 2003. Expediente D-4041. M.P Eduardo Montealegre Lynett. 20 Enero de 2003. Pág. 16, 21, 25 y 28-29
[330] Fue vinculado mediante indagatoria el 12 de octubre de 2006.

Brigada, en el cargo de analista del blanco FARC y ostentaba el grado de Capitán.

Afirma que el día 6 de noviembre de 1985, por órdenes del Coronel LUIS CARLOS SADOVNIK SÁNCHEZ, se desplazó hacia la Casa del Florero para ponerse a disposición y prestarle colaboración al Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, quien era su jefe directo, y allí permaneció hasta horas de la tarde del día 7 de noviembre. Agrega que el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO le ordenó *"permanecer en la Casa del Florero para ser un apoyo administrativo de nuestras tropas"* y en el momento en que llegaron muchas personas que salieron del Palacio de Justicia tuvo que *"sacar listados de grupos de personas…"*[331] que elaboró a mano preguntando sus nombres y el documento de identidad[332].

Manifiesta que de las personas que él registró a ninguna se le tildó de pertenecer al grupo guerrillero y respecto de los otros grupos, afirma, tampoco se enteró que haya sido registrado alguien como *"subversivo", y asegura* que una vez se elaboraban las listas se le entregaban al "*Sargento NIETO VELANDIA*", quien estaba encargado de armar la carpeta con las listas[333].

En cuanto al personal del B–2 presente al interior de la Casa del Florero asegura que se dedicó a registrar "*los grupos de las oleadas de personas que venían del Palacio de Justicia*", aclarando que además del B–2 también había personal que podría ser de la Dijin, la Sijin o el DAS, pero que con ellos no estableció contacto, ni los coordinó, ni

[331] Folio 30 cuaderno 8 de instrucción.
[332] Folio 31 ibídem.
[333] Folio 32 ídem.

autorizó su ingreso, ni mucho menos llevó a cabo labores de inteligencia[334].

Específicamente, de personal del B–2 en la Casa del Florero durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, recuerda *"claramente"* que se encontraban el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, el Sargento VELANDIA, el Sargento NIETO VELANDIA, analista del blanco M–19, y el Capitán JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ[335].

En ampliación de indagatoria del 13 de febrero de 2007, respecto a las actividades que desarrolló durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, manifiesta que no tuvo contacto con *"retenidos o sospechosos"*, pero sí contribuyó en el registro e identificación de personas liberadas del Palacio de Justicia, a quienes en ningún momento interrogó y por ello *"no tenía elementos de juicio para ir a señalar a alguien y esa no era mi tarea"* porque su *"función fue más de tipo administrativo"*[336].

En cuanto a personas señaladas como *"sospechosas"* en la Casa del Florero sólo se acuerda del caso de los conductores, a quienes el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO ordenó trasladar a las instalaciones de la Brigada XIII, pero no sabe quien los llevó, ni en qué[337], y no tuvo conocimiento quién fue el encargado de manejar a los *"retenidos por sospecha"*, pero explica que *"Cuando había retenidos de cualquier naturaleza, no estoy hablando del Palacio de Justicia, cuando había retenidos de cualquier naturaleza, se llevaban a la Escuela de Caballería, porque allá existían las celdas o calabozos para tener a esos retenidos, en las instalaciones del Cuartel General, no existía ninguna celda, ni calabozos, ni pieza de retenidos, por ejemplo, cuando yo hice una operación que era de mi blanco contra el grupo Ricardo Franco, los detenidos después de los allanamientos se*

[334] Folio 54 del mismo cuaderno.
[335] Folio 232 cuaderno 10 de instrucción.
[336] Folio 42 cuaderno 12 de instrucción.
[337] Folio 49 ibídem.

llevaron a la Escuela de Caballería y como eso sí era de mi blanco, allí estuve yo, dirigiendo los interrogatorios"[338].

En declaración del 4 de febrero de 1986 ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ señaló que en la Casa del Florero no había personas señaladas como guerrilleros, que por parte de los rehenes no hubo ningún tipo de señalamiento en ese sentido, y que no tiene conocimiento que al segundo piso de la mencionada casa hayan sido llevadas personas sospechosas de ser guerrilleras[339].

Se repite en este caso la exculpación de un oficial del Ejército; perteneciente al B-2 de la Brigada XIII; con capacidad de mando; encargado específicamente del control e identificación de las personas evacuadas del Palacio de Justicia; que permaneció durante todo el tiempo en el lugar, específicamente en la casa museo, y que no se percata de cosas evidentes que se dieron abiertamente y fueron presenciadas por liberados, empleados de la Casa del Florero, periodistas y otros miembros de las fuerzas armadas.

En contra de la abundante evidencia que señala cómo esa situación se sucedió de manera franca, de forma tal que era materialmente imposible pasarla inadvertida, menos para quien tenía asignada de manera concreta y específica la tarea de controlar y verificar la identidad de los evacuados, OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ enfáticamente sostiene que en la Casa del Florero no había personas señaladas como guerrilleros, que por parte de los rehenes no hubo ningún tipo de señalamiento en ese sentido y que

[338] Folio 53 ibídem.
[339] Folios 68 y 69 cuaderno 51 de instrucción.

no tiene conocimiento que al segundo piso de la mencionada casa hayan sido llevadas personas sospechosas de ser guerrilleras.

Afirmaciones desmentidas por el abundante caudal testimonial recepcionado a lo largo de la investigación dando a conocer cómo al segundo piso del museo eran conducidas personas consideradas sospechosas de pertenecer o ser auxiliadores del M-19, donde se les mantenía aisladas, contra la pared e incluso se les sometía a malos tratos de palabra y obra.

Igual las comunicaciones cruzadas entre EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y LUIS CARLOS SADOVNIK SÁNCHEZ infirman lo sostenido por el procesado, cuando el Comandante del B-2 da cuenta al segundo al mando que tenían a una mujer que ya estaba reconocida por todo el personal, indicando esto que en la Casa del Florero sí había personas señaladas de ser guerrilleros y que sí hubo señalamientos en ese sentido por las personas reunidas allí; desprendiéndose de esto, además, que la labor de controlar y verificar la identidad de los evacuados obviamente no se restringía a preguntarles por su cédula de ciudadanía y registrarlos en listas elaboradas a mano.

Si OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ no da cuenta de esas situaciones, con toda seguridad no es porque no las haya presenciado sino por querer intencional y voluntariamente callarlas, ocultarlas, evadiendo suministrar explicaciones sobre el particular y en especial sobre la suerte final de esas personas.

Las funciones encomendadas al, para entonces Capitán, OSCAR WILLIAM VASQUEZ, ciertamente iban más allá de limitarse a llenar listas con los nombres de los evacuados de Palacio, y menos, como

lo quiere mostrar el Coronel SANCHEZ RUBIANO, de encargarse del almuerzo, la comida y refrigerio de los soldados y suministrar gaseosa y agua a los mismos liberados[340], pues estas funciones estaban a cargo del, en ese momento Capitán del Ejército, ORLANDO GALINDO CIFUENTES, quien prestó servicio de alimentación y abastecimiento de las tropas que participaron en el operativo del Palacio de Justicia[341], quien informa que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la función que desempeñó fue la de *"suministrar los abastecimientos la alimentación que fue destacada al centro de Bogotá"* y permanecer en la Escuela de Caballería de la Brigada Trece *"como oficial de inspección"*. Señala además que se desplazó hacia los alrededores del Palacio de Justicia *"a controlar el suministro de los abastecimientos a la tropa de la Escuela"*[342], que incluía al personal del B-2, pues existía una dependencia del B–2 de la Brigada que funcionaba "*en la parte de atrás de la clínica de Ganado y herrería eran las únicas tropas que no pertenecían a la escuela y que tenían alguna sede dentro de la Escuela*", a las cuales se les brindaba los apoyos de tipo eminentemente *"logístico"* como la alimentación[343].

Adicional a eso, MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS OBANDO, para la época de los hechos Jefe de la Red de Inteligencia de la Sección Segunda (B-2) de la BR-13, en declaración del 1º de mayo de 1992 ante la Auditoría Auxiliar 20 de Guerra – Oficina de Instrucción Penal Militar, indicó que participó "*en el manejo de la información y enlace con el Jefe del Estado Mayor, el Coronel SADOVNIK, quien se encontraba en las instalaciones de la Brigada, actividad que cumplí hasta las once de la noche del primer día, no sé que fecha era si cinco o seis; al día siguiente, en ausencia del Jefe de la sección segunda y de los demás Oficiales del B-2 atendí aspectos de*

[340] A folio 35 del cuaderno 9 de instrucción, el Coronel SANCHEZ RUBIANO asegura que, como era el único oficial con el que contaba, le encomendó al Capitán VASQUEZ que le ayudara en la parte administrativa, la cual, *"básicamente estaba relacionado con el almuerzo, con la comida, con el refrigerio de los soldados que estaban ahí, la gaseosa, el agua, inclusive para darle agua a los mismos rehenes…".*

[341] Declaración del 29 de junio de 2007, folios 95 al 100 cuaderno 18 de instrucción.

[342] Folios 95-96 cuaderno 18 de instrucción.

[343] Folios 96-97 ibídem.

carácter administrativo como enviar la comida, ropa, etc., a los oficiales que estaban en el centro atendiendo la operación"[344].

Situación que corrobora el Coronel LUIS ENRIQUE CARVAJAL NÚÑEZ[345]; a la sazón B-3 de la Brigada XIII, quien precisa que la función de alimentos fue desarrollada por las unidades de abastecimiento y el B-2 no tuvo nada que ver, así como la vigilancia la ejecutó la Policía Militar no el B-2.

Por manera, como era de esperar, no era lógico que el Comandante del B-2 ocupara "*el único oficial con el que contaba*" en tareas ajenas a la actividad de inteligencia necesarias y urgentes en ese escenario, como tampoco que lo restringiera a relacionar los nombres de los liberados, labor para la que contaba con otro personal de rangos inferiores de su misma sección y de otras entidades como el DAS, el F-2, la Dijin, la SIJIN y la Policía.

La misión del ahora Mayor ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, como lo sostuvo inadvertidamente su superior, el Coronel SANCHEZ RUBIANO[346], era ejercer control de las personas que iban llegando del Palacio de Justicia, labor que, considerando la naturaleza del servicio de inteligencia militar que desempeñaban, necesariamente implicaba no sólo verificar que se llevaran los registros respectivos del personal evacuado sino detectar posibles sospechosos de hacer parte del grupo asaltante, identificar eventuales guerrilleros que salieran mezclados con los rehenes,

[344] Folio 147 cuaderno 64 anexo de instrucción.
[345] C.O 8 Instrucción Fl 66 y ss.
[346] En ampliación de declaración de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO del 17 de enero de 1986 ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal ambulante indicó que el personal que estaba bajo su mando era el que ejercía el control de las personas que iban llegando, cumpliendo dicha función el Capitán OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ, y a folio 43 del cuaderno 30 anexo de instrucción reitera que en cuanto al personal que estuvo a su cargo en la Casa del Florero, colaborándole en la misión de identificación de los rehenes liberados, recuerda al Capitán OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ, quien se encargaba de ejercer el control de las personas que iban llegando y la recolección de los elementos y material de guerra que se incautaba.

separar y aislar a los no identificados plenamente, como eran las instrucciones impartidas a través de Arcano 5, coordinar el manejo de los sospechosos, tratar de obtener información útil para generar inteligencia estratégica y de combate, que era la razón natural y ordinaria de la Sección 2 de la Brigada, así como la que permitiera identificar posibles infiltrados entre los rehenes, y, en fin, llevar a cabo el filtro del que habló el Coronel PLAZAS VEGA para evitar que algún guerrillero lograra evadirse.

Es de asumirse que el oficial cumplió cabalmente su misión y por eso para él no puede ser extraño ni desconocido la conducción al segundo piso de la edificación de personas señaladas de ser sospechosas, ni la identificación positiva obtenida respecto de una mujer, abogada, señalada de ser parte del grupo insurgente. Tampoco puede ignorar el traslado de personal sospechoso a instalaciones militares o de policía a efectos de ser sometidos a otros interrogatorios, pues como él mismo lo dio a conocer, sabía que *"Cuando había retenidos de cualquier naturaleza, no estoy hablando del Palacio de Justicia, cuando había retenidos de cualquier naturaleza, se llevaban a la Escuela de Caballería, porque allá existían las celdas o calabozos para tener a esos retenidos, en las instalaciones del Cuartel General, no existía ninguna celda, ni calabozos, ni pieza de retenidos, por ejemplo, cuando yo hice una operación que era de mi blanco contra el grupo Ricardo Franco, los detenidos después de los allanamientos se llevaron a la Escuela de Caballería y como eso sí era de mi blanco, allí estuve yo, dirigiendo los interrogatorios*".

Por eso las labores de OSCAR WILLIAM VASQUEZ comenzaban antes de las puertas de la Casa Museo, como se desprende de la declaración de JOSÉ JAIME PALACIOS, Magistrado de la Sala Penal, esposo de MARÍA LYDA MONDOL DE PALACIOS, cuando señaló que "*… les manifesté a los colegas que me acompañaran a la Casa del Florero, sitio a donde estaban llegando las personas evacuadas; para llegar*

a ese sitio pues nos tocó identificarnos como Magistrados y tanto la Policía como el Ejército nos prestó esa colaboración, al frente de una Patrulla estaba un Capitán con una lista de los nombres de los evacuados … yo al distinguirlo porque observé que tenía tres estrellas me dirigí a él por el grado, no supe su nombre, … si supe que era un Capitán del Ejército y no de la Policía …"[347] y se extendía más allá de elaborar las listas de evacuados, como lo deja ver JOSÉ DANIEL MARTINEZ QUIJANO, funcionario de la Cruz Roja, el 5 de febrero de 1986 ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal Ambulante, al relatar que "*… allí se llevaba una lista de todo el personal que entraba y salía de la Casa del Florero, esa lista la llevaba un Capitán del Ejército que estaba manejando el operativo dentro de la Casa del Florero …*"[348].

Entender la trascendencia de la labor desarrollada por este sindicado explica que su relación con los evacuados del Palacio de Justicia y, significativamente, con personas que recibieron el tratamiento de sospechosos y fueron sometidos a tortura y manejo "*irregular*" por parte de agentes del Estado, trascendiera las jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985, como se hace patente en el oficio del 14 de noviembre de 1985 dirigido a *"OSCAR VÁSQUEZ RODRÍGUEZ Brigada 13 B-2"*, cuyo asunto reza: *"Entrega documentación"* (cédulas y tarjetas dactilares) de dos personas que responden al nombre de YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON. Oficio suscrito por el ST. CÉSAR AUGUSTO PINZÓN ARANA, quien firma como Jefe encargado de la Sección Técnica de la DIJIN[349].

También explica que se encargara de atender a familiares de los desaparecidos, como ocurrió con el señor JAIRO ARIAS, esposo de LUCY AMPARO OVIEDO, a quien recriminó por insistir en la

[347] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 175 y ss.
[348] C.O. 6 A Anexo Instrucción Fl 239 y 240
[349] C.O 84 Anexo Instrucción Fl 52 y 82.

búsqueda de su ser querido, pues según lo cuenta este testigo en diligencia ante el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal en el mes de enero de 1986, "*me entreviste con un capitán VASQUEZ el cual me dijo "Usted otra vez aquí", yo le dije que sí, que iba en busca de mi esposa, éste señor se disgustó que porque yo insistía, que porque yo creía que ella estaba retenida, … este señor en forma alevosa me gritó … [que a mi] esposa la habían enterrado en una fosa común, con los cadáveres de los guerrilleros*"[350].

Todo lo anterior indica, en criterio de este Despacho, que las actuaciones de OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ en desarrollo de los hechos del Palacio de Justicia no se limitaron a las de un colaborador para llevar los registros de las personas evacuadas y la prestación de asistencia humanitaria, sino que efectivamente tuvo bajo su responsabilidad el control y manejo de esas personas, incluidas aquellas por algún motivo clasificadas sospechosas de auxiliar o pertenecer al grupo insurgente, y poner en práctica el filtro para detectar eventuales guerrilleros entre el grupo de liberados de la edificación judicial para evitar su evasión, y como tal, en su condición de oficial del Ejército Nacional, como se lo imponía la Constitución y las normas del Derecho Internacional Humanitario, asumió la posición de garante con el deber jurídico de impedir la materialización de un resultado típico sobre los derechos de aquellos a quienes debía proteger.

Teniendo posición de mando sobre sus inferiores dentro de la estructura organizada de poder, y por lo tanto estando en posibilidad de hacerlo, el oficial del Ejército no hizo absolutamente nada para impedir la afectación de esos derechos y, por el contrario, permitió que otras personas, hasta ahora indeterminadas, consumaran el comportamiento punible de secuestro y desaparición forzada de personas, particular y concretamente de IRMA FRANCO PINEDA,

[350] C.O 6A Anexo Instrucción Fl 49

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, de quienes, como se ha declarado en este fallo, se sabe salieron con vida del Palacio de Justicia y quedaron bajo control de las fuerzas militares.

OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ no podía desconocer las órdenes especiales y terminantes existentes y provenientes de mandos superiores, pues actuó de cerca, coordinadamente y bajo dirección directa del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, quien era perfecto sabedor de las instrucciones complementarias y terminantes dispuestas respecto de las personas sospechosas de pertenecer al grupo asaltante y la directriz de desaparecimiento trazada y comunicada por LUIS CARLOS SADOVNIK SÁNCHEZ, y su absoluta pasividad para garantizar los derechos de las personas puestas bajo su control es muestra de su adhesión al designio criminal, sin tampoco poder escudarse en la obediencia debida.

Pero aquí, más que sólo omitir su deber jurídico de impedir la materialización de un resultado típico desconociendo su posición de garante, lo que se observa es un acto positivo de permitir que por manos de otros se ejecutaran esas órdenes o instrucciones complementarias terminantes, claras, precisas, concluyentes e indiscutibles, entregando a otros agentes de los organismos de seguridad del Estado a las personas puestas bajo su control, para que se hiciera efectivo ese tratamiento complementario previsto desde esferas superiores de poder.

No olvidemos que por disposición de su inmediato superior, a OSCAR WILLIAM VASQUEZ se le asignó el control de las personas evacuadas del Palacio de Justicia, y como tal era de su resorte establecer el manejo para cada una de ellas según su condición. Ciertamente en el lugar actuaron miembros de otras instituciones

como el DAS, el F-2, la DIJIN y la SIJIN, pero no se puede admitir que lo hayan hecho individual y desarticuladamente para cada quien disponer a su antojo y albedrío de las personas sacadas de la sede del Poder Judicial.

Como se dijo, el mando operacional estaba en cabeza del Ejército, específicamente del Comandante de la Brigada XIII, y en la Casa del Florero las tareas se realizaron bajo el mando, dirección y control del Comandante del B-2, quien expresamente delegó en su oficial el manejo y control directo de las personas rescatadas y la ejecución del filtro para evitar la evasión de eventuales subversivos.

En esas condiciones, dada esa estricta jerarquización vertical propia del aparato organizado de poder, no era posible que inopinadamente cada quien hiciera lo que quisiera y menos dispusiera a su antojo de las personas puestas a disposición del B-2, sin contar con su aquiescencia.

Así, debía existir consentimiento de los mandos del B-2 para direccionar hacia las diferentes entidades, instituciones o lugares a las personas a su disposición, dependiendo de su condición: rehenes verificados, heridos, sospechosos o subversivos identificados.

De manera, es inadmisible que OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ no participara de ese manejo y destinación de personas que estaban bajo su control. Por el contrario, era tal su dominio sobre ese manejo que el 14 de noviembre de 1985 el Jefe Encargado de la sección Técnica de la DIJIN le reporta y hace entrega de documentación relacionada con YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON, personas que, está probado dentro del expediente, fueron catalogadas como

sospechosas de pertenecer al comando subversivo y recibieron ese tratamiento especial, complementario y terminante dispuesto para ellos.

Así, OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ debe responder, más que por sus omisiones a los deberes jurídicos de protección y garantía, por sus acciones que permitieron la afectación ilícita de derechos fundamentales de las personas que debía amparar.

Recordemos que la coautoría por cadena de mando también se consolida tratándose de comportamientos punibles consumados por funcionarios de menor o residual grado, quienes, como anillos últimos, hubiesen recibido órdenes de inmediatos superiores constituidos en mandos medios, y éstos a su vez de otras jefaturas ascendentes que administrativamente se hallan articuladas hasta llegar a la cabeza principal. En esta secuencia descendente del mandato o propósito hasta llegar al ejecutor, todos responden a título de coautores; de tal forma que el autor no es solo el jefe máximo de la estructura organizada de poder, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando o participa efectivamente para la obtención del resultado.

Por consiguiente, no estando demostrado que fuera el autor inmediato del comportamiento punible, pero acreditada su consumación por manos de otros, OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ es coautor mediato por acción, por haber actuado dentro una estructura organizada de poder, y como tal debe responder por el delito de desaparición forzada, agravado por su condición de autoridad, en concurso homogéneo respecto de IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

Aquí, dada la divergencia que se presenta entre la acusación que imputa el comportamiento como coautoría impropia y lo definido en este fallo al concluir que estamos ante una coautoría mediata por haber actuado dentro una estructura organizada de poder, valga citar en extenso lo expuesto por el Tribunal Superior de Bogotá dentro de la sentencia dictada en segunda instancia en contra del general JESUS ARMANDO ARIAS CABRALES, por los mismos hechos, cuyo precedente vertical consultó este Despacho en lo pertinente, cuando al referirse al principio de congruencia preciso:

"*Por esa falta de precisión normativa sobre la autoría, las variaciones y diferencias que se han presentado entre las posiciones de la Fiscalía, la primera instancia y esta sentencia con respecto a cuál título se le atribuye la autoría al acusado, no ponen en peligro alguno la congruencia de la acusación con la sentencia. Este tema ya ha sido definido por la Corte Suprema de Justicia, entre otros en la misma sentencia profusamente citada, 32805, donde dice:*

"La Corte destaca que si bien GARCÍA ROMERO fue acusado como determinador de los delitos de homicidio ocurridos durante la denominada masacre, los elementos ontológicos de la conducta desplegada, resumidos supra, permiten establecer que se trató de una acción desplegada dentro del ámbito de la autoría mediata, situación que podría llevar a que se plantee un debate sobre el principio de consonancia y el apego que debe tener el fallador respecto de los términos de la acusación.

En relación con el principio de congruencia es criterio reiterado que: "… En la sistemática de la Ley 600 de 2000, en cuyo imperio se adelantó el proceso, la Sala ha reiterado que la congruencia como garantía y postulado estructural del proceso, implica que la sentencia debe guardar armonía con la resolución de acusación o el acta de formulación de cargos, en los aspectos personal, fáctico y jurídico. En el primero, debe haber identidad entre los sujetos acusados y los indicados en el fallo; en el segundo, identidad entre los hechos y circunstancias plasmadas en la acusación y los fundamentos de la sentencia; y, en el tercero, correspondencia entre la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación y la consignada en el fallo… La congruencia personal y fáctica es absoluta y la jurídica es relativa porque el juez puede condenar por una conducta punible

diferente a la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando no agrave la situación del procesado con una pena mayor."

En todo caso, la modificación que ahora se hace en relación con la forma de participación en los hechos por parte de GARCÍA ROMERO -de determinador a autor mediato-, no puede ser considerada como violatoria del principio de congruencia porque no se agrava la situación del procesado en tanto la pena que se fija legalmente para tales formas de ejecución de la conducta punible aparejan la misma consecuencia punitiva, cuestión que desde antaño ya ha sido estudiada por la Sala. …"[351].

En el mismo sentido ya la Corte había hecho un pronunciamiento similar:

"*… la Fiscalía profiere resolución de acusación en contra de un mando intermedio de una organización criminal, por la realización de la conducta punible de homicidio agravado a título de lo que en la doctrina nacional se conocía tradicionalmente como autor intelectual. En los alegatos finales, el representante del organismo acusador solicita la condena de esta persona como determinador, aduciendo que tal figura resulta más coherente desde el punto de vista sistemático de la teoría del delito que maneja. El funcionario de primera instancia, por su parte, lo sentencia como coautor del delito imputado, al considerar que participó en la conducta atribuida con dominio del hecho funcional. Por último, después de ser apelada la providencia, el Tribunal la confirma, pero aclara que la participación del procesado fue a título de autor mediato en virtud de su pertenencia a una estructura organizada de poder.*

En ninguno de estos casos se desconocería el principio de congruencia, en la medida en que las consecuencias punitivas para cualquiera de las figuras señaladas (autor intelectual, determinador, coautor y autor mediato) resultarían idénticas a la inicialmente planteada"[352].

Ahora, respecto de los sargentos ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y FERNEY

---

[351] Rad. 32805, M.P. María del Socorro González de Lemos. Posición plasmada con posterioridad en la sentencia del 18 de marzo de 2010, rad. 27032, M.P. María del Socorro González de Lemos.

[352] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de diciembre de 2007, rad. 26513, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

ULMARDIN CAUSAYA PEÑA, se tiene que el primero, en diligencia de indagatoria[353] manifiesta que para el año de 1985 ostentaba el grado de Sargento Segundo y se desempeñaba con analista de inteligencia del blanco EPL en la Sección 2 de la Decimotercera Brigada.

Con relación a los hechos afirma que, aproximadamente a las 11:30 de la mañana del día 6, el Jefe del B–2, Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, reunió al personal y comunicó lo que estaba ocurriendo, y dio la orden de desplazarse hacia la Plaza de Bolívar. Una vez allí, ingresaron a la "*Casa del 20 de julio*", en donde recibió la *"misión de prestar seguridad externa, durante toda la tarde y parte de la noche, de civil y sin armas ni nada, de observar…"*[354].

Al día siguiente fue designado para prestarle seguridad al Comandante de la Brigada "*que iba a hacer la entrada a mirar cómo había quedado el Palacio de Justicia*", y luego se devolvió al museo y posteriormente volvió a la Brigada.

En cuanto a la orden recibida del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, afirma que consistía en prestar una seguridad "*pasiva*" en el exterior de la Casa del Florero, es decir, verificar que no se acercara personal extraño al Ejército o a la Policía o "*de pronto que hayan dejado algún artefacto explosivo por ahí cerca de donde estaba instalado el puesto de mando adelantado de la Brigada*"[355]. Agrega que, en cumplimiento de esa labor, el día 6 se ubicó en la parte de atrás de la Casa del 20 de Julio, a donde ingresó sólo a "*tomar los alimentos y después a descansar*", pero en ningún momento realizó actividades de registro e identificación de personas liberadas[356].

---

[353] Diligencia del 26 de octubre de 2006. Folios 112 a 127 cuaderno 8 de instrucción.
[354] Fol. 115 ibídem.
[355] Fol. 116 ídem.
[356] Folio 118 ibídem.

Respecto al documento oficial suscrito por el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO en el que se relaciona al personal del B–2 que participó en la Casa del Florero en labores de identificación y registro de las personas liberadas del Palacio, afirma que a pesar de figurar su nombre en ese documento él en ningún momento recibió una orden en tal sentido, y por lo tanto no identificó, ni registró a persona alguna que haya salido del Palacio de Justicia[357].

Con relación a la afirmación del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ según la cual él cumplió la misión de identificar, controlar y registrar a las personas que salieran liberadas del Palacio, reitera que "*dentro de todas las funciones que delegó el señor Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, de pronto no recuerda la función que me impartió a mi*"[358].

Por su parte LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA[359] afirma que después del mes de julio de 1985 fue trasladado en comisión de servicios al B–2 de la Decimotercera Brigada como analista de inteligencia del blanco M–19.

El día 6 de noviembre se tuvo noticia de la toma del Palacio de Justicia y en compañía del Jefe del B–2 se desplazaron hacia ese lugar *"inmediatamente",* llevando con sigo *"dos carpetas A–Z, donde estaba el orden de Batalla y la otra no recuerdo y me ubiqué en cercanías de la Casa del Florero"*[360].

Asegura que sus acciones durante el día 6 se concretaron a permanecer en las instalaciones de la Casa del Florero y a realizar recorridos hacia *"la parte oriente del Palacio y occidente de la Casa del*

[357] Diligencia de Indagatoria del 7 de febrero de 2007, folio 289, Cuaderno 10 Instrucción.
[358] Folio 291 cuaderno 10 de instrucción.
[359] Diligencia de indagatoria del 31 de octubre de 2006, folios 143 a 165 del cuaderno 8 de instrucción.
[360] Folio 154 ibídem.

Florero, con el objeto de escuchar versiones de lo que estaba pasando alrededores del Palacio puesto que se suponía, de acuerdo a la proclama escrita de la organización o del Comando terrorista del M–19, que podían haber otros grupos armados a los alrededores de la Plaza de Bolívar con el fin de buscar una insurrección general…"[361].

Manifiesta que a la Casa del Florero entró y salió en varias oportunidades, pero permanecía en ese lugar *"por espacios más bien cortos"*, pues como ese lugar estaba lleno de oficiales con alto rango, no había espacio para un suboficial, y por esa razón consideró que *"podría desempeñar más importante labor alrededor de la Casa del Florero…haciendo inteligencia de las personas que estaban afuera de ese sector, de los civiles expectantes que estaban allí"*[362], pero nunca realizó labores de registro e identificación de las personas rescatadas[363].

En cuanto a las actividades por él desarrolladas durante el día 7 de noviembre de 1985 afirma que no logra recordar qué tipo de labores desempeñó y respecto a si elaboró listas o anotó los nombres de las personas que fueron liberadas del Palacio de Justicia, manifiesta no recordar si recibió la orden de que "*continúe una lista que ya venía haciendo no se quién…"*, pero que no la hizo porque su *"letra es bien remala y no entendible*"[364].

Aclara que cuando llegó al B–2 en comisión de servicios, no asume inmediatamente la dirección o la jefatura del Blanco M–19, eso fue posteriormente y antes de él existían en ese blanco varios oficiales[365] y aclara que en el desempeño de las funciones que demandaba el cargo de analista del blanco M–19 contó con la colaboración de un suboficial de quien no recuerda el nombre.

---

[361] Folio 155 ibídem.
[362] Folio 157 ibídem.
[363] Folio 158 ibídem.
[364] Folio 163 ídem.
[365] Diligencia de Indagatoria del 18 de diciembre de 2006. (Folios 74-86. Cuaderno No. 10 Instrucción).

Con relación a las órdenes impartidas por el Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO a los miembros del B–2 de recibir, registrar e identificar a las personas rescatadas del Palacio de Justicia, afirma no recordar haber recibido instrucciones *"directas"* de registrar e identificar a las personas que *"salían vivas del Palacio de Justicia"*, y agrega que, como existía un gran desorden y había presencia de varias *"fuerzas"* en la Casa del Florero, tomó la decisión de ocuparse directamente de *"estar pendiente…de la salida de personas"*, es decir, observando la fila de soldados y policía que había y el trayecto de las personas rescatadas hacia la Casa del Florero[366], así como estar atento de *"movimientos sospechosos alrededor de la Casa del Florero"*, como por ejemplo el *"posible acercamiento de fuerzas o grupos armados que podrían estar cerca al Palacio y podrían arremeter en cualquier momento en apoyo a los que allí ya se encontraban desarrollando la toma…"*.

Al ponerle de presente apartes de la versión de OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ en donde afirma que *"NIETO VELANDIA y JIMÉNEZ GÓMEZ…estaban cumpliendo, junto conmigo la función de registrar a las personas liberadas del Palacio de Justicia"*[367], afirma que no recuerda *"en ningún momento haber desarrollado, esta actividad que dice mi Capitán"*[368] y agrega que en no recibió por parte de éste ningún tipo de listas. En su opinión, *"el Capitán VÁSQUEZ…está totalmente equivocado y esto no sucedió"*[369].

Se pregunta a NIETO VELANDIA si durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 regresó a las instalaciones de la Brigada XIII en algún momento, frente a lo cual afirma que el 6 en horas de la noche, por orden del Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, quien le dijo

---

[366] Folio 77 ibídem.
[367] Folio 95 cuaderno 9 de instrucción.
[368] Folio 79 cuaderno 10 de instrucción.
[369] Folio 80 ibídem.

que *"el Capitán CÁRDENAS tiene las instrucciones que debe desarrollar"*, las cuales consistían en revisar el archivo del M–19 y averiguar sobre *"las últimas actividades que había desarrollado la organización subversiva…"*, con el propósito de *"ir elaborando un documento pormenorizado sobre la toma del Palacio de Justicia"*; actividad que desarrolló hasta el día 7 en las instalaciones de la Brigada XIII, en las oficinas del B–2. Señala que mientras permaneció realizando esa labor en ningún momento tuvo conocimiento de la llegada de los 6 conductores trasladados desde la Casa del Florero hacia la Brigada, ni se enteró que estas personas hayan sido interrogadas en las oficinas del B–2[370].

FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA[371] señala que en 1985 pertenecía a la Escuela de Infantería pero trabajaba como agregado en la *"Sección Dos"* de la Decimotercera Brigada, en donde se desempeñaba como *"escribiente del ELN"*, que consistía en *"anotar informaciones"* de las actividades realizadas por ese grupo.

Respecto a su actividad relacionada con los hechos del Palacio de Justicia, manifiesta que se dirigió a la Plaza de Bolívar y de allí a la Casa del Florero –no recuerda si el primer o segundo día–, a cumplir la orden de entregarle al Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO *"un sobre de manila con documentos".* Como él se encontraba en las oficinas del B-2, en la Brigada XIII, le correspondió cumplir esa misión[372], y una vez cumplió la entrega de ese sobre no recibió ninguna otra orden, por lo que regresó a la Brigada a seguir con su *"rutina de trabajo"*[373].

Dice que la afirmación del Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO, relativa a que él le colaboró en el procedimiento de

[370] Folios 82 y 83 ibídem.
[371] Diligencia de indagatoria del 14 de diciembre de 2006, folios 23 al 33 cuaderno 10 de instrucción.
[372] Folio 27 ibídem.
[373] Folio 28 ibídem.

identificación y registro de las personas liberadas del Palacio de Justicia, es falsa, por cuanto a él ni siquiera le correspondía analizar el Blanco M–19, y porque la única orden que recibió en relación a los hechos del Palacio de Justicia fue llevar unos documentos, y en cumplimiento de esa orden se *"demoraría por ahí 10 minutos"*[374].

Al preguntarse si tuvo conocimiento que a las instalaciones de la Brigada XIII, y concretamente a las oficinas del B-2, fueron llevadas personas provenientes del Palacio de Justicia, responde que no y agrega que *"en esas instalaciones allá no llevan a nadie…".* Además señala, respecto a los testimonios de las personas rescatadas del Palacio de Justicia que afirman que fueron interrogadas en el B-2, que no le consta nada de eso y que en ningún momento vio a esas personas, ni tuvo contacto con ellas[375].

En diligencia del 15 de diciembre de 2006 se le pone de presente una declaración suya, rendida en el mes de febrero de 1986[376], en la que afirma que se encontraba de *"novelero"* y observó cómo se elaboraban listas en la Casa del Florero de la gente que se iba sacando. En esa declaración igualmente afirmó que se dirigió a la Casa del Florero a entregarle unos radios al Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO y que éste le pidió que le colaborara con el registro de las personas que salían del Palacio. Finalmente se le pone de presente que también, bajo la gravedad del juramento, afirmó que se dedicó a estarse allí hasta las 16:30[377].

Frente a lo anterior responde que utilizó mal la palabra *"novelero"* y que lo que percibió y escuchó en la Casa del Florero lo hizo durante los 10 minutos que permaneció allí. En relación con la solicitud del

---

[374] Folio 29 del mismo cuaderno.
[375] Folio 32 ibídem.
[376] Que obra en el Folio 244 del Anexo No. 75 de la Instrucción.
[377] Folio 46 cuaderno 10 de instrucción.

Coronel SÁNCHEZ RUBIANO de colaborar con el registro de las personas, manifiesta que no sabe por qué hizo esa afirmación. Agrega, frente a la afirmación de haber entregado unos radios al Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, que tal vez cometió una equivocación y reconoce que además del sobre de Manila entregó unos radios, y que su actividad se limitó a realizar todo lo que describió en esa declaración. Además, respecto a esa declaración, afirma que le *"manifestaron de que era un informativo de los que se adelantan, internos en la institución"*, y que nunca asistió a ningún juzgado a rendirla[378].

En relación a la solicitud de su superior para que le *"colaborara"* con el registro e identificación de los rehenes liberados, manifiesta que como se le pidió por parte de su superior una colaboración, más no se le dio una orden, tomó una elección y, al darse cuenta que sobraba en ese lugar, decidió regresar a la Brigada[379].

En diligencia del 9 de febrero de 2007 afirma que durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, permaneció todo el día 6 y parte del día 7 en las instalaciones del B–2, y durante su permanencia en esas instalaciones no fueron remitidas personas retenidas provenientes del Palacio de Justicia[380]. Explica que su permanencia en las instalaciones de la Brigada durante estos días se justifica porque *"tenía que rendir un documento del B–2 semanalmente, se llama el RESIN o actividades de lo que se hace en todo lo que es la Brigada BR-13 y ese documento consta de 30 o 40 hojas y eso tenía plazo de entrega y casi el tiempo mío se invertía era en eso y era fundamental en esos días…hacer ese documento para enviarlo a Comando Ejército"*[381].

---

[378] Folio 46 ibídem.
[379] Folio 47 ibídem.
[380] Folios 243 y 244 cuaderno 11 de instrucción.
[381] Folio 245 ibídem.

Aclara que el motivo por el cual se desplazó desde las oficinas del B–2 hacia la Casa del Florero fue llevar y entregarle al Coronel EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO unos radios de comunicación, y no unos documentos, como había afirmado anteriormente. Señala que en realidad lo que llevó y entregó en la Casa del Florero, el día 7 de noviembre de 1985, fueron unos radios[382].

En declaración ante la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares[383] CAUSAYA PEÑA había advertido, con relación a las actividades que desarrolló durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 con ocasión de los hechos del Palacio de Justicia, que el día 7 de noviembre –no recuerda si en la mañana o en la tarde– se desplazó hacia la Casa del Florero para llevar unos *"radios de comunicación y unas baterías recargables"* y que una vez hizo la entrega regresó a la Brigada. Señala que ingresó a la Casa del Florero, pero sólo hasta el primer piso y su permanencia en ese lugar fue muy corta.

Como se ve, los tres sargentos pertenecían a la sección 2 de la Brigada XIII como analistas de blanco. Incluso LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA era analista del blanco M-19. Los tres reconocen haber estado de una u otra forma en la Casa del Florero y hay referencias de sus superiores de haber participado en la elaboración de listas para el registro de las personas evacuadas del Palacio de Justicia, actividad que todos niegan.

No habría razón para dudar de la veracidad del Coronel SANCHEZ RUBIANO y del entonces Capitán OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ respecto a la participación de sus subalternos en esa tarea, menos cuando resulta lógico pensar que el Comandante de

---

[382] Folio 257 ídem.
[383] Folio 2 cuaderno 3 A Investigación Procuraduría I.P. 070.

Inteligencia dispuso de su personal para adelantar las labores propias que le competían en medio de la operación militar de recuperación de la sede judicial.

No obstante, como se dijo ut supra, el hecho de pertenecer al B-2, haber estado en la Casa del Florero durante el operativo e incluso haber participado en la labor de relacionar los nombres de las personas liberadas, no implica per se prueba de participación y responsabilidad en el comportamiento punible investigado, salvo que se acuda a realizar una imputación meramente objetiva del resultado, pues esas actividades en principio eran perfectamente legítimas.

No se puede responsabilizar y, por supuesto, menos condenar a todo aquel que perteneciendo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidos los Servicios de Inteligencia, haya participado en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, por el sólo supuesto de que por sus funciones alguna relación o contacto debió tener con las personas rescatadas.

Para endilgarles responsabilidad en el comportamiento punible a los tres sargentos es indispensable contar con prueba de otras actividades que hubieren realizado para facilitar, coadyuvar o ejecutar la descripción típica.

Recordemos que estamos frente a un comportamiento punible desarrollado dentro de una estructura organizada de poder, firmemente apoyada en una jerarquía vertical, donde es relevante para establecer responsabilidades la cadena de mando y el puesto, el cargo y las funciones de cada quien en ese orden jerárquico, tal y como se definió en los casos del Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y el Mayor ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ.

A diferencia de los anteriores, en esa cadena, ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA no tenían poder de mando y disposición. Eran subalternos sin capacidad de mando para impartir contra órdenes para anular las provenientes de esferas superiores.

Si bien, como miembros del Ejército Nacional igual les competía la obligación general de proteger a todos los residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, a diferencia de sus superiores, frente a la situación de hecho concreta investigada, no puede afirmarse que estaban en la posibilidad de impedir el resultado típico dispuesto desde planos superiores de autoridad y mando.

Dentro de la estructura organizada de poder, respondiendo a sus características, los sargentos estaban en la posición de eventuales ejecutores fungibles de las directrices, instrucciones u órdenes ilícitas derivadas de un alto nivel, conservando exclusivamente el manejo y dominio de su voluntad para cumplir o no, como ejecutores o autores directos, el designio criminal.

Desde esa perspectiva, a más de las referencias a su eventual participación en la elaboración de listas, no hay prueba alguna que los señale de haber participado en los traslados, interrogatorios y en el manejo concreto de las personas consideradas sospechosas o identificadas como miembros del grupo insurgente.

La participación en la elaboración de listas e incluso el hecho que como integrantes del B-2 dentro de sus funciones habituales estuviera el ser interrogadores, no es concluyente para derivarles participación y responsabilidad criminal, pues la labor fue desarrollada no sólo por los miembros de la Sección 2 de la Brigada,

y en el manejo de los liberados y, particularmente, de los sospechosos participaron unidades de otros estamentos de seguridad como el DAS, el F-2, la DIJIN y la Policía, y hay evidencia en cuanto a que en efecto algunas de estas entidades se ocuparon de “manejar” tildados de sospechosos, como ocurrió en el pluricitado caso de los estudiantes YOLANDA SANTODOMINGO y EDUARDO MATSON, cuyos documentos son luego remitidos al Capitán OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ por parte del Jefe Encargado de la Sección Técnica de la DIJIN.

No hay prueba objetiva, clara, concreta y contundente, que muestre a alguno de los tres sargentos procesados como autores inmediatos del comportamiento punible, o desarrollando una actividad específica encaminada a facilitarlo o consumarlo.

Por el contrario, nótese cómo, BERNARDO GARZÓN GARZÓN y EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, quienes más se acercan a individualizar e identificar a los autores directos del secuestro y desaparición forzada de las personas señaladas, refiriéndose específicamente al caso de IRMA FRANCO y a uno que da a pensar que se trate del de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, para nada mencionan a ninguno de estos tres procesados y sí en cambio dan nombres propios de otros sujetos como los ejecutores materiales directos del delito.

No hay prueba, pues, respecto a que ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA o FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA sean los ejecutores directos del comportamiento punible, ni elementos de juicio suficientemente sólidos para derivarles responsabilidad penal por los hechos por los que se les acusó.

Se les puede cuestionar tal vez por no decir lo que saben sobre el particular. Por honrar un pacto tácito de silencio y no contribuir a esclarecer los hechos, negando el acceso a la verdad y a la justicia a las víctimas y a sus familiares; pero no se les puede atribuir, con conocimiento más allá de cualquier duda razonable, la coparticipación criminal imputada.

Por esas razones, este Despacho absolverá a ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA de los cargos que por el delito de desaparición forzada, agravada, en concurso homogéneo, les formuló la Fiscalía dentro de este proceso, en aplicación del apotegma jurídico del in dubio pro reo.

Así pues, se tiene que la conducta de quienes se ha dicho en esta sentencia deben responder por el comportamiento punible endilgado, es eminentemente dolosa por cuanto tenían pleno conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y conscientes de su ilicitud asumieron voluntariamente su realización.

Como oficiales activos de las Fuerzas Militares, EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ eran conocedores de su obligación constitucional y legal de protección de la integridad y demás derechos de las personas puestas bajo su control y responsabilidad y del deber de garantizar la vida y la seguridad incluso de aquellos que perteneciendo al grupo insurgente habían sido puestos fuera de combate, reducidos y retenidos, no obstante lo cual, con conocimiento y voluntad dirigieron su comportamiento a la vulneración de esos derechos.

Hasta donde se sabe, los implicados son personas de condiciones síquicas normales, no se evidencia en ellos anomalía mental y no

reportan ningún problema de tipo psicológico que los llevara a realizar conductas como las estudiadas, por lo que su actuar resulta culpable a título de dolo, habida cuenta de la intencionalidad y voluntad de incurrir en el ilícito, pues al momento de la ejecución de los hechos contaban con capacidad suficiente para comprender su ilicitud y determinarse de acuerdo con esa comprensión, pero dirigieron su voluntad consciente a su realización y pudiendo y debiendo actuar de manera diferente no lo hicieron, por lo que se hacen merecedores de una sanción.

Aunado a lo anterior, es claro que los comportamientos desplegados denotan la conciencia de la antijuridicidad, en cuanto al conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento jurídico y el carácter lesivo del mismo, que afecta o pone en peligro un bien jurídico tutelado, sin justa causa.

Por lo anterior, se conjugan respecto de EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ los presupuestos procesales exigidos por el art. 232 del código de procedimiento penal para dictar sentencia condenatoria en su contra.

De manera, para dosificar la pena que le corresponde a cada uno de los sentenciados, se parte de que la Fiscalía los llamó a responder en juicio como coautores responsables del delito de desaparición forzada agravada, en concurso, consagrado en los artículos 165 y 166 de la ley 599 de 2000, según los cuales, "*El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de su negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.*

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior" (art. 165 c.p.).

Pena que, conforme al artículo 166 de la misma codificación será de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión, multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años, cuando, entre otras circunstancias, la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción; circunstancia agravante que en el caso no tiene discusión, en tanto los sentenciados, en su condición de militares activos, evidentemente ejercían autoridad.

Es de anotar que aquí tomamos las penas antes del incremento general establecido por la Ley 890 de 2004, por cuanto, como se tiene establecido por la Corte Suprema de Justicia con base en los antecedentes legislativos[384], dicho incremento general de penas

---

[384] En el trámite previo a la aprobación y sanción de la ley 890 de 2004 se dijo que:

i) "Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas …".

ii) "La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la L. 599/2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de 'colaboración' con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan".

iii) "El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (L. 906/2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal ".

iv) "Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio , solicitamos a la plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 Cámara, 01 de 2003 Senado".

v) "El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la República y que fue expedido por esta corporación".

está íntimamente ligado a la vigencia del procedimiento penal contenido en la Ley 906 de 2004, con miras a fomentar el allanamiento, aceptación de cargos y negociaciones dentro del sistema de derecho premial introducido por el nuevo esquema procesal acusatorio y por ello no aplica para asuntos tramitados a la luz de la Ley 600 de 2000, como es el caso; aun cuando, por su naturaleza permanente o continuada, el comportamiento punible haya continuado bajo la nueva legislación; pues, se reitera, dicho incremento se justifica por las opciones de negociación brindadas por el nuevo sistema procesal y que no existen en el marco de la Ley 600 de 2000.

Por consiguiente, si bien se aplica la pena prevista por la Ley 599 de 2000, por cuanto bajo su vigencia se continuó ejecutando el comportamiento punible y por consiguiente no hay lugar a predicar favorabilidad; no se tienen en cuenta los incrementos establecidos por la Ley 890 de 2004 por ser propios del sistema procesal regulado por la Ley 906 de 2004.

Así pues, considerando que no se dedujeron expresamente en la acusación circunstancias de mayor punibilidad, la pena se fijará dentro del cuarto mínimo, esto es, entre treinta (30) y treinta y dos punto cinco (32.5) años de prisión, multa entre 2.000 y 2.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 15 y 16.25 años.

Establecido lo anterior, con base en lo dispuesto por el art. 61 del código penal, atendiendo la extrema gravedad de la conducta desarrollada que se ha extendido en el tiempo, manteniendo por

---

vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación , porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”

espacio de treinta años la afectación de derechos humanos fundamentales y sus efectos sobre las víctimas directas y sus familias, que durante todo ese tiempo subsisten en la zozobra, la incertidumbre y el dolor de desconocer el destino final de sus seres queridos; el daño real causado a familias en las que incluso se privó a una hija de conocer a su padre, a más del daño causado a la imagen y credibilidad de la misma institución a la cual prestaban sus servicios los militares sentenciados, y el hecho de ser precisamente oficiales de alta graduación los responsables del comportamiento punible, lo que demanda mayor severidad en la respuesta judicial, por cuanto no sólo traicionaron la credibilidad y confianza de la colectividad en su Ejército, sino que ofendieron el honor y la dignidad de un uniforme que les exigía ser paradigma de probidad y respeto por los derechos humanos que debían proteger.

Por esas razones, la pena por uno de los comportamientos homogéneos concurrentes se fijará en el máximo del cuarto mínimo correspondiente, esto es, en 32,5 años de prisión; 2.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por espacio de 16,25 años.

Como quiera se trata de un concurso punible homogéneo, lo que implica que los sentenciados quedan sometidos a la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que sea superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, y sin que en ningún caso la pena privativa de la libertad exceda de 40 años, conforme a la legislación vigente antes de la Ley 890 de 2004[385]; por uno de los comportamientos punibles homogéneos

[385] Ley 600 de 2000 *"**Artículo 31**. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias*

concurrentes, que comporta las mismas circunstancias ponderadas para individualizar la sanción base, el incremento que se determina, atendida la limitación legal del máximo de pena de prisión al que se puede llegar, que de cualquier manera no consulta fielmente la proporcionalidad de la sanción para cada una de las desapariciones consumadas, será de siete punto cinco (7.5) años, para un total de cuarenta (40) años de prisión; la multa quedará en cuantía de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en veinte (20) años.

En el caso de OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ concurre un tercer comportamiento que impondría un nuevo incremento de la sanción ya establecida. Sin embargo, dados los topes máximos de pena señalados por el legislador de 2000, a los cuales ya se ha llegado y son legalmente insuperables, la sanción se mantendrá igual a la ya definida y que, en definitiva se impondrá a los dos sentenciados, aun cuando jurídicamente exista una diferencia respecto al número de comportamientos punibles por el que debe responder cada uno de ellos.

En cuanto a la posibilidad de suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, es evidente que no se satisface el primero de los presupuestos exigidos por el art. 63 del código penal, incluso con la modificación introducida por el art. 29 de la Ley 1709 de 2014, razón más que suficiente para declarar improcedente su otorgamiento, sin ser necesarias más consideraciones.

---

veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. ***En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años****. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte".*

Tampoco se dan los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, de conformidad con lo consagrado en el art. 38 B del código penal, adicionado por el art. 23 de la Ley 1709 de 2014.

Como consciencia, los condenados deberán descontar la pena en restricción efectiva de la libertad, en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para lo cual, una vez en firme esta sentencia, se expedirán las respectivas órdenes de captura para ante las autoridades pertinentes.

Frente a la posibilidad de aplazamiento o suspensión de la pena para el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO por razón de su edad, con base en lo dispuesto por los arts. 471 y 362 de la Ley 600 de 2000; o la sustitución de la ejecución de la pena a partir de lo normado por los arts. 461 y 314 de la Ley 906 de 2004, que si bien en principio es una decisión a cargo del Juez de Ejecución de Penas también es viable definir en la sentencia, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, el Despacho lo considera improcedente por cuanto en ambos casos la opción está fundada en que el sindicado sea mayor de 65 años y la naturaleza y modalidad de la conducta punible o del delito hagan aconsejable la medida, y en este caso es evidente que, a más de la gravedad, la naturaleza y modalidad del delito y la conducta imputada no muestran aconsejable una determinación en ese sentido y, por el contrario, exigen la efectiva aplicación de la pena.

La desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de carácter inderogable, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la vida, la libertad, la

dignidad inherente al ser humano, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, lo cual de por sí hace de esa conducta que sea de extrema gravedad, tanto así que el delito de desaparición forzada es calificado como aquellos de lesa humanidad que afrenta la conciencia social tanto de la comunidad nacional como internacional.

Adicional a eso, para el caso en concreto ha de valorarse que la actividad delictiva continúa ejecutándose, pese al transcurso de más de 30 años, durante los cuales no se ha logrado establecer el paradero de las víctimas y sus ejecutores persisten en guardar silencio sobre la suerte corrida por las personas que bajo su control y responsabilidad desaparecieron.

Esas circunstancias, a juicio del Despacho, no tornan aconsejable adoptar una medida de aplazamiento, suspensión o sustitución de la pena y sí, a cambio, indican la necesidad de hacerla efectiva.

Ahora, en cuanto a la indemnización de perjuicios, el artículo 56 de la Ley 600 de 2000 impone que en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes de la conducta investigada, el funcionario condenará al responsable al pago de los daños ocasionados con el delito.

En el caso, no se allegó al plenario prueba alguna demostrativa de los perjuicios materiales o morales derivados del comportamiento punible, lo que se explica por cuanto quienes ostentan el carácter de víctimas legalmente reconocidas dentro del proceso han propendido dentro de esta actuación, más que por la reclamación pecuniaria y la indemnización económica, por lograr los valores de justicia y verdad.

El propósito declarado por las representaciones de la parte civil es el de contribuir en el curso de la investigación y del juicio para que los autores materiales e intelectuales de los hechos sean sancionados ejemplarmente conforme a las disposiciones penales.

Lo que se persigue por ellos es el establecimiento de la verdad y la justicia en aras de desvanecer la impunidad que sobre los hechos del holocausto del Palacio de Justicia se ha mantenido a lo largo de tantos años y de esta manera reivindicar la memoria de los desaparecidos, dignificar sus nombres, el repudio al olvido y la reafirmación de la verdad.

Así las cosas, teniendo en cuenta que, adicionalmente, ya se ha reparado a algunos de los familiares de los desparecidos dentro de procesos administrativos[386], el Juzgado se abstendrá de condenar en perjuicios a los sentenciados.

Respecto a otras peticiones expresas formuladas por los apoderados de la parte civil en cuanto a que: **(I)** sean compulsadas copias para que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales que de manera sistemática se llevaron a cabo durante la retoma del Palacio de Justicia, especialmente las ejecutadas en las personas de RENE FRANCISCO ACUÑA, trabajador de Valher, DIOGENES BENAVIDES MARTINELLI, ciudadano Panameño, FABIO BECERRA CORREA, ARIEL SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO RUEDA, FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO CARVAJAL y HÉCTOR ARTURO LOZANO; el Despacho se

[386] Condenas en perjuicios a favor de: Jorge Eliécer Franco Pineda, mediante sentencia del Consejo de Estado, de fecha 11 de Septiembre de 1997; y Cecilia Saturia Cabrera Guerra y Maria Alejandra Rodríguez Guerra, mediante sentencia del Consejo de Estado, de fecha 17 de agosto de 1995; en ambos casos, se trató de acciones de reparación directa -Falla del servicio-, procesos en los que se declaró la responsabilidad, y en consecuencia, se condenó a la Nación -Ministerio de Defensa- por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, en los que desaparecieron Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, respectivamente.

abstendrá de hacerlo, pues a la fecha se tiene conocimiento que la Fiscalía ha decidido reorientar y continuar la investigación de los hechos para esclarecer la posible consumación de otros delitos en desarrollo de la toma y retoma de la sede judicial, entre ellos los relacionados por la parte civil.

(II) Sean compulsadas copias para que se investigue a los responsables en la Procuraduría General de la Nación de los actos y acciones de obstrucción a la Administración de Justicia y de falta de cumplimiento del deber de representar a la sociedad en el presente proceso, al haber afirmado en otros juicios penales por los mismos hechos la responsabilidad de los integrantes del B-2 y llegar a este proceso a guardar silencio; el Despacho no accederá a lo pedido, por cuanto en la actuación de la Procuraduría dentro de este proceso no evidencia temeridad o mala fe, y el hecho de no haber intervenido con alegaciones finales en la audiencia de juzgamiento no implica un acto de obstrucción a la Administración de Justicia o falta de cumplimiento a su deber de representación de la sociedad, estando explicada la falta de alegato final del Representante del Ministerio Público en el cambio realizado en las postrimerías de la actuación, por renuncia del funcionario que venía actuando, lo que impidió que el nuevo Procurador Delegado tuviera conocimiento del extenso contenido del expediente.

(III) Se ordene como reparación medidas de satisfacción a favor de las víctimas y la sociedad, ello en el marco del Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Reparación, así como la ley de víctimas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el particular, ha de decirse que esta sentencia por si misma constituye una medida de reparación en cuanto satisface el derecho a la verdad y a la justicia en el ámbito específicamente delimitado.

Por lo demás, en firme la presente decisión, se enviarán las comunicaciones a las autoridades que dispone la Ley y se remitirá lo pertinente al Juzgado de Ejecución de Penas (Reparto) para lo de su cargo.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO CINCUENTA Y DOS PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la nulidad parcial de lo actuado a partir de la resolución de cierre de instrucción, inclusive, única y exclusivamente respecto de las desapariciones de LUZ MARY PORTELA, DAVID SUSPES CELIS, CRISTINA DEL PILAR GUARIN, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, LUCY AMPARO OVIEDO y GLORIA ANZOLA DE LANAO, para que la Fiscalía la perfeccione en punto a lo ocurrido con estas presuntas víctimas, por las razones aducidas en las anteriores consideraciones.

SEGUNDO: Declarar infundada la objeción formulada por el Agente del Ministerio Público contra el dictamen pericial grafológico DG-672741 de fecha 10 de abril de 2012, en tanto no se acreditó la existencia de error grave en su elaboración ni en sus conclusiones.

TERCERO: Condenar al Coronel ® EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, de condiciones civiles y personales conocidas en autos,

a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión; multa en cuantía de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años, como coautor mediato del delito de desaparición forzada, agravada, cometido en concurso homogéneo y sucesivo respecto de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

CUARTO: Condenar al Mayor ® OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión; multa en cuantía de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años, como coautor mediato del delito de desaparición forzada, agravada, cometido en concurso homogéneo y sucesivo respecto de IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

QUINTO: Abstenerse de condenar a los sentenciados al pago de perjuicios materiales y morales derivados del comportamiento punible, de conformidad con lo expuesta en la parte motiva del presente proveído.

SEXTO: Negar a EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y a OSCAR WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y la prisión domiciliaria, por las razones señaladas en la anterior parte motiva.

Como consciencia, los condenados deberán descontar la pena en restricción efectiva de la libertad, en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para lo cual, una vez en firme esta sentencia, se

expedirán las respectivas órdenes de captura para hacer efectiva la sanción principal impuesta.

SEPTIMO: Absolver a ANTONIO RUBAY JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA de los cargos que por el delito de desaparición forzada, agravada, en concurso homogéneo, les formuló la Fiscalía dentro de este proceso, en aplicación del apotegma jurídico del in dubio pro reo, respecto de IRMA FRANCO PINEDA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA y BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ.

OCTAVO: Teniendo en cuenta la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014, dentro del caso RODRIGUEZ VERA, y otros, versus Colombia, las partes están en libertad de adelantar las acciones que estimen pertinentes para dejar sin efecto la decisión de la Justicia Penal Militar que exoneró de responsabilidad al Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO frente a la desaparición forzada de IRMA FRANCO PINEDA, y la Fiscalía deberá estudiar la posibilidad de reiniciar la investigación en contra del Coronel SANCHEZ por ese hecho en particular, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas frente a la grave violación de derechos humanos que ello significa.

NOVENO: No acceder a la compulsa de copias solicitada por la representación de la Parte Civil, por las razones aducidas en la parte pertinente de las anteriores consideraciones.

DECIMO: Declarar que esta sentencia por si misma constituye una medida de reparación en cuanto satisface el derecho a la verdad y a la justicia en el ámbito específicamente delimitado.

DECIMO PRIMERO: En firme la presente decisión, envíense las comunicaciones a las autoridades que dispone la Ley y remítase lo pertinente al Juzgado de Ejecución de Penas (Reparto) para lo de su cargo y competencia.

DECIMO SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación conforme lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez, **CARLOS ENRIQUE TORRES MELENDEZ**

Cet.